

EL COSTO DEL SILENCIO

Violencia doméstica en las Américas

**Andrew R. Morrison
y María Loreto Biehl**
Editores

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

© Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados.
Visite nuestro sitio Web para obtener más información: www.iadb.org/pub

Página en blanco a propósito

EL COSTO DEL SILENCIO

Violencia doméstica en las Américas

Andrew R. Morrison y María Loreto Biehl
Editores

Banco Interamericano de Desarrollo

1999

Primera edición en inglés: 1999
Primera edición en español: 1999
Título original: *Too Close to Home: Domestic Violence in the Americas*

©1999 Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, DC 20577

Producido por la Sección de Publicaciones del BID. Los puntos de vista expresados en esta publicación corresponden a los autores y no reflejan necesariamente los del Banco Interamericano de Desarrollo.

Para encargar este libro, diríjase a:

Librería del BID
Tel.: (202) 623-1753
Fax: (202) 623-1709
Correo electrónico: idb-books@iadb.org
www.iadb.org/pub

**Cataloging-in-Publication data provided by the
Inter-American Development Bank
Felipe Herrera Library**

El costo del silencio : violencia doméstica en las Américas / Andrew R. Morrison
y María Loreto Biehl, editores.
p. cm.

Includes bibliographical references.

ISBN:1886938555

1. Family violence—Latin America—Congresses. 2. Family violence—Law and legislation—Latin America—Congresses. 3. Family violence—Latin America—Prevention—Congresses. 4. Family violence—Latin America—Social aspects—Congresses. 5. Family violence—Latin America—Economic aspects—Congresses. 6. Abused women—Services for—Latin America—Congresses. 7. I. Morrison, Andrew R. II. Biehl, María Loreto. III. Inter-American Development Bank. IV. Conference «Domestic Violence in Latin America and the Caribbean: costs, policies and programs» (1997 : Washington, DC)
362.8292 T77—dc21

Indice

Prólogo	v
Nota de agradecimiento	ix
Introducción	xi

Parte I. El contexto y los costos de la violencia doméstica

Capítulo 1. La violencia en las Américas: marco de acción	3
<i>Mayra Buvinić, Andrew R. Morrison y Michael Shifter</i>	
Capítulo 2. ¿Es la pobreza una causa de violencia doméstica? Respuestas de Lima	35
<i>Efraín Gonzales de Olarte y Pilar Gavilano Llosa</i>	
Capítulo 3. El impacto socioeconómico de la violencia doméstica: Chile y Nicaragua	49
<i>Andrew R. Morrison y María Beatriz Orlando</i>	
Capítulo 4. Efectos de la violencia doméstica en la salud: Ciudad de México	81
<i>Rafael Lozano Ascencio</i>	

Parte II. Buenas prácticas: servicios, respuesta jurídico-judicial y educación

Capítulo 5. Dos décadas de acción para frenar la violencia doméstica	105
<i>Soledad Larraín</i>	
Capítulo 6. La creación de una red para ayudar a las víctimas en Monterrey, México	133
<i>Marcela Granados Shiroma</i>	
Capítulo 7. Los servicios telefónicos de urgencia para abordar la violencia doméstica: El Salvador	141
<i>Enrique Valdez</i>	
Capítulo 8. Cómo ayudar a los hombres a superar el comportamiento violento con las mujeres	145
<i>Francisco Cervantes Islas</i>	

Capítulo 9. Cómo encarar los delitos contra las mujeres: el caso de Brasil	151
<i>Martha Mesquita da Rocha</i>	
Capítulo 10. Reforma legislativa y judicial sobre violencia doméstica: Costa Rica	155
<i>Zarela Villanueva</i>	
Capítulo 11. Programa escolar contra la violencia: Canadá	161
<i>Peter Jaffe, Marlies Suderman y Elaine Schieck</i>	
Capítulo 12. Programa de educación informal para prevenir la violencia doméstica: Jamaica	171
<i>Margarette May Macauley</i>	
Parte III. El papel de los medios de comunicación	
Capítulo 13. La comunicación como instrumento para el cambio social	177
<i>Elena M. Suárez y Charo Quesada</i>	
Capítulo 14. Uso de los medios de comunicación para prevenir la violencia doméstica	185
<i>Patricia Poppe</i>	
Capítulo 15. La televisión como medio para reducir la violencia	195
<i>Jacquin Strouss de Samper</i>	
Lista de autores	205

Prólogo

El problema de la violencia doméstica en las Américas no apareció de la noche a la mañana, y no desaparecerá de repente. Más de veinte años de acción con gran esfuerzo, dedicación y compromiso no han bastado para eliminar este flagelo. Sin embargo, los grupos femeninos de la región han logrado sacarlo del ámbito de lo privado, de lo que no se habla fuera de casa, y plantearlo como motivo de grave preocupación en la esfera de la política pública. Es evidente que nadie —ni el Estado, ni las organizaciones no gubernamentales, ni las instituciones multilaterales de financiamiento— está en condiciones de abordar este problema por sí solo. Se necesita un esfuerzo sostenido y coordinado para controlar y prevenir la violencia.

En varios capítulos de este libro se ponen de relieve los grandes costos que la violencia doméstica acarrea para las mujeres maltratadas y para la sociedad en conjunto. Estos cálculos escalofriantes no deben llevar a la parálisis o a la inacción; más bien, deben fortalecer nuestra determinación de tomar medidas concretas a fin de abordar el problema. Los autores de este libro proporcionan orientación para comenzar esta tarea, describiendo estrategias eficaces para reducir la violencia doméstica y ofrecer servicios a las mujeres maltratadas. Además, señalan las lagunas del conocimiento que debemos llenar para avanzar hacia la erradicación de la violencia.

Todavía queda mucho por hacer. Entre las tareas inmediatas que tenemos por delante se encuentran brindar servicios a las víctimas, proteger a las generaciones futuras y mejorar la investigación en este campo.

Servicios de buena calidad para mujeres, hombres y niños afectados por el problema de la violencia doméstica. La calidad tiene muchas dimensiones. Significa que, como mínimo, una mujer maltratada no debe sufrir un maltrato secundario a manos de los encargados de ayudarla. Significa servicios coordinados, a fin de que no sea necesario deambular por laberintos burocráticos para buscar un servicio. Significa, por supuesto, que los servicios sean útiles para quienes los reciban y que consistan no sólo en tratamiento para las víctimas, sino también en soluciones para evitar el maltrato en el futuro.

Protección de las generaciones futuras del flagelo de la violencia doméstica. Para proteger a las generaciones futuras, debemos apoyar las medidas preventivas. Los programas de prevención dirigidos a los niños pueden mitigar ciertos factores que, de lo contrario, podrían llevar a un riesgo mayor de comportamiento violento y disfunción desde la infancia. La existencia de opciones educacionales y laborales para las jóvenes puede ayudar a cambiar la desigualdad en las relaciones de género. Cambiar los valores culturales que condonan la violencia tal vez sea la tarea más difícil, pero es absolutamente indispensable. Con este fin, debemos promover la participación de los medios de comunicación: la televisión, la radio y la prensa. La televisión y la radio pueden ser

eficaces para enseñar actitudes prosociales y podrían efectuar una importante contribución a la reducción de la violencia. La prensa puede contribuir denunciando casos de agresión de forma responsable. Sin embargo, en última instancia la violencia no se aprende tanto de la sociedad en general, sino de los familiares más cercanos que son modelos de conducta. Las ONG y los gobiernos, por medio de programas de crianza de los hijos, deben ayudar a los padres a mejorar su trabajo: formar a sus hijos para que se conviertan en ciudadanos no violentos, éticos y productivos. Por último, se deben instituir programas para identificar a los niños que son maltratados en el hogar, a fin de que se puedan tomar medidas apropiadas. En resumen, el propósito de nuestros esfuerzos debe ser dar a hombres, mujeres y niños los instrumentos que necesitan para vivir una vida sin violencia.

Mejorar la investigación. Los investigadores que trabajan el tema de la violencia doméstica provienen de distintas disciplinas que utilizan términos y perspectivas diversas. Se necesita una mayor comunicación entre las distintas disciplinas. Los sociólogos deben comunicarse con los estudiosos del feminismo; los economistas deben intercambiar información con especialistas en salud pública. Más importante aún es que los que se dedican al estudio de la violencia doméstica se comuniquen con los expertos en violencia social, ya que ambas formas de violencia están relacionadas, lo mismo que sus soluciones. Dos prioridades de la investigación merecen atención. Primero, es indispensable obtener información confiable y comparable en cada país de la región sobre la prevalencia de la violencia doméstica a nivel nacional y local. Hay que incluir el tema en los sistemas de estadísticas de los países y recopilar información a nivel nacional y regional. Segundo, los investigadores deben buscar métodos exitosos de prevención y tratamiento. En estos análisis se deben indicar las limitaciones y alcances de los distintos tipos de programas e incluir información sobre su costo. Por último, se deben divulgar esos estudios a fin de que los legisladores y autores de programas de un país puedan beneficiarse de las enseñanzas adquiridas en otros lugares.

La complejidad del problema es intimidante, pero hay buenas razones para ser optimistas. La primera es que hay una gran variedad de personas, disciplinas y organizaciones comprometidas a combatir la violencia doméstica. La segunda es que algunos programas novedosos están obteniendo resultados positivos, ayudando a hombres y mujeres a romper el ciclo de la violencia. Por último, está surgiendo un consenso social en torno a la idea de que la violencia doméstica es problema de todos. Las mujeres de la región ya no están solas. Los gobiernos, las ONG y las instituciones financieras multilaterales reconocen que la violencia doméstica no es un problema privado, sino público.

El BID tiene la intención de usar todos los recursos que sea posible para colaborar en esta lucha por sociedades menos violentas, más sanas y productivas en la

región. Este compromiso abarca el mantenimiento del diálogo con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el campo de la violencia doméstica, iniciado en la conferencia que inspiró este libro. Tenemos la intención de trabajar con organizaciones colaboradoras en la formulación de programas de comunicación estratégica que reduzcan la violencia doméstica en la región. Junto con gobiernos y ONG, llevaremos a cabo proyectos piloto contra la violencia doméstica. Por último, debemos incorporar el tema de la violencia doméstica en proyectos pertinentes del BID. Los proyectos en los sectores de la salud y la educación, por ejemplo, deben incluir regularmente actividades para prevenir la violencia doméstica u ofrecer tratamiento a mujeres y niños maltratados.

Las mujeres representan poco más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe, y es una triste verdad que gran parte de estas mujeres son maltratadas en el hogar. Algo eminentemente claro es que la violencia doméstica no es un problema de las mujeres solamente, sino que nos afecta a todos. Debemos trabajar juntos para erradicarla de nuestros países.

Enrique V. Iglesias

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo

Página en blanco a propósito

Nota de agradecimiento

Esta compilación de lecturas se originó en la conferencia titulada “Violencia doméstica en América Latina y el Caribe: costos, políticas y programas”, que se realizó en octubre de 1997. El Banco Interamericano de Desarrollo organizó esta conferencia en colaboración con el Instituto de la Sociedad Civil, ISIS International, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud. Nuestros copatrocinadores orientaron al Banco en esta nueva área de compromiso: combatir la violencia doméstica y así mejorar la vida de las mujeres en las Américas.

Asistieron a la conferencia más de 400 personas. Entre otros distinguidos participantes cabe destacar la primera dama de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton; la Ministra de Asuntos de Igualdad de Suecia, Ulrica Messing; la Primera Ministra Adjunta de Barbados, Billie Millet; la primera dama de Colombia, Jacquín Strouss de Samper; la ex diputada estadounidense Patricia Schroeder; y Brigitte Camdessus, quien preparó un documento de información para la conferencia.

La conferencia fue organizada por la Unidad de la Mujer en el Desarrollo, del Departamento de Desarrollo Sostenible del BID, con la valiosísima colaboración de funcionarios de las secciones de Relaciones Externas, Interpretación, Protocolo, Integración, Publicaciones, Viajes y Embarques, y Conferencias. La Sección de Gráficas merece un agradecimiento especial por sus largas horas de trabajo.

Nancy Morrison ayudó a convertir los documentos de la conferencia en un libro ameno y pulido. Agradecemos a la Sección de Publicaciones del BID su contribución en la traducción, edición, diseño y producción de este libro.

Las organizaciones de mujeres de las Américas han logrado movilizar el tema de la violencia doméstica al ámbito de la política pública y han impulsado al BID y a otras instituciones regionales a abordarlo. A estas instituciones nuestro más sincero agradecimiento por su labor pionera.

Mayra Buvinić

Jefa de la División de Desarrollo Social
Banco Interamericano de Desarrollo

Página en blanco a propósito

Introducción

*El lugar más peligroso para una mujer en América Latina y el Caribe
podría ser su propio hogar.*

Ulrica Messing, Ministra de Asuntos de Igualdad de Suecia

Una de las regiones más violentas del mundo, tanto en el hogar como en la calle, es América Latina. La tasa de homicidios (casi 30 por 100.000 habitantes) es más del doble que el promedio mundial. La violencia doméstica también es generalizada. Según las encuestas realizadas en la región, casi la mitad de las mujeres sufren abuso psicológico, mientras que una o dos mujeres de cada cinco son víctimas de abuso físico¹.

La violencia doméstica y la violencia social están estrechamente relacionadas: los niños que sufren o presencian abuso son más propensos a conducirse violentamente en la edad adulta, tanto dentro como fuera del hogar. La violencia tiene un costo muy alto: sus múltiples efectos en la economía incluyen la pérdida de productividad o de salarios para las víctimas de la violencia. En varios países, la violencia ha desmotivado las inversiones extranjeras y reducido el ahorro, disminuyendo las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

La violencia doméstica también afecta las posibilidades de crecimiento de la región. Las mujeres que son víctimas de violencia doméstica tienen menores ingresos que aquellas que no lo son, lo cual representa una pérdida regional de salarios del 1,6 al 2,0% del PIB. Los niños que presencian el abuso que sufre su madre tienen un rendimiento escolar deficiente, que limita tanto sus posibilidades futuras en el mercado laboral como su capacidad para contribuir al desarrollo socioeconómico de la región.

Aunque los problemas de la violencia doméstica y social son difíciles de resolver, hay políticas y programas que pueden reducir su incidencia. La primera decisión que hay que tomar es si conviene dirigir los programas a determinados factores de riesgo (como el alcoholismo) o realizar intervenciones de carácter más integral en el hogar y en la comunidad. La decisión siguiente consiste en definir entre programas de prevención o de tratamiento. Los programas de prevención generalmente son más eficaces y rentables. Pueden reducir el riesgo de violencia, ofrecer mayor protección y abordar diversos factores determinantes de la delincuencia y la violencia. Algunas medidas de bajo costo y gran efectividad son programas para prevenir el abuso contra los niños y entre la pareja, programas de prevención de la violencia en escuelas primarias y secundarias, programas de prevención del abuso del alcohol y las drogas, y medidas

¹Estos términos se definen en el recuadro 2.1 de la página 36.

para propiciar un ambiente más seguro, como programas de control de la posesión de armas de fuego, alumbrado público, vigilancia de lugares públicos con televisión de circuito cerrado e iniciativas de vigilancia vecinal. Por último, los medios de comunicación pueden desempeñar un papel decisivo para frenar la violencia doméstica y social. Una campaña bien diseñada en los medios de comunicación puede ayudar a las personas a modificar actitudes y comportamientos y puede contribuir a una disminución general de la violencia.

Este libro se centra en la violencia doméstica dirigida hacia la mujer y en sus vínculos con otras formas de violencia. En la primera parte se analiza la prevalencia de la violencia doméstica contra la mujer en la región, sus consecuencias socioeconómicas (para la salud y el trabajo de la mujer) y las relaciones causales entre la violencia dentro y fuera del hogar. Aunque las pérdidas personales ocasionadas por esta forma de violencia son elevadas, su costo trasciende a las mujeres afectadas y sus familias. El impacto socioeconómico abarca los gastos del sistema judicial penal, refugios, atención médica y servicios sociales tales como orientación, educación y prevención, capacitación de personal policial, judicial y médico, pérdidas de productividad, ausentismo y aumento de la mortalidad y morbilidad. El impacto en el producto interno bruto de la disminución de los ingresos de la mujer se sitúa entre el 1,6 y el 2,0%, según cálculos correspondientes a Chile y Nicaragua (capítulo 3). Rafael Lozano Ascencio ha calculado la carga de morbilidad para las mujeres de la Ciudad de México, usando un indicador denominado años de vida saludables (AVISA) (capítulo 4). La violencia doméstica ocupa el tercer lugar entre las causas más importantes de la pérdida de AVISA: viene después de la diabetes y los problemas del parto, pero antes de los accidentes de tráfico y las anomalías congénitas.

El flagelo de la violencia se transmite de una generación a otra, y la violencia doméstica contra la mujer tiene efectos muy perjudiciales en los niños. En estudios recientes se comprobó que el maltrato en la infancia aumenta considerablemente las probabilidades de delincuencia y comportamiento violento en la edad adulta. En otro estudio se señala que ni siquiera es necesario que un niño sea víctima directa de violencia: solo presenciar el maltrato crónico que sufre la mujer aumenta las probabilidades de que se comporte violentamente en la adultez. Por lo tanto, la violencia social y la violencia doméstica están estrechamente relacionadas. La violencia es, en gran medida, un comportamiento aprendido, y si los niños están expuestos a un comportamiento violento en el hogar, tenderán a imitarlo. En los capítulos 1 y 3 se presenta un breve análisis de las relaciones causales entre violencia doméstica y violencia social.

Un aspecto importante es definir si la pobreza es una causa de violencia doméstica. En el capítulo 2, Efraín Gonzales de Olarte y Pilar Gavilano Llosa afirman que

hay otros factores más importantes, entre ellos la edad y la situación laboral del hombre, si la pareja está casada y la duración de su relación. La pobreza podría ser un factor desencadenante o amplificador de conflictos en una pareja. Algunos investigadores señalan que la violencia doméstica parece más prevaleciente en las familias de bajos ingresos porque las víctimas tienden más a denunciar el problema a la policía o al personal médico de la sala de urgencia, a quienes acuden en busca de ayuda. En cambio, las víctimas de clase media y alta pueden ocultar mejor los indicios del abuso o tienden menos a denunciarlos debido a normas sociales. De hecho, la violencia doméstica se encuentra en todos los niveles de la sociedad. No obstante, la violencia física prevalece más entre los pobres, mientras que las mujeres más acomodadas parecen estar más expuestas a la violencia psicológica.

En todos los casos, la violencia doméstica obstaculiza el desarrollo humano y económico. Los alcances de una mejor comprensión del problema se reflejan en la amplia gama de respuestas que se encuentran a nivel local, nacional e internacional. En la segunda parte de este libro se presentan varias estrategias muy prometedoras.

En Monterrey (México) hay una red de servicios que ofrece asistencia rápida y económica a víctimas de la violencia doméstica. También en México, los hombres se reúnen en grupos para aprender a superar sentimientos y comportamientos violentos contra las mujeres. En El Salvador se ha establecido un servicio de consultas telefónicas de urgencia para ayudar al país a hacer frente a una ola de violencia. En Brasil se han creado unidades policiales especiales que reciben capacitación para comprender mejor a las mujeres que son víctimas de actos de violencia. En Costa Rica, la Corte Suprema está a la vanguardia de una tarea de sensibilización del poder judicial con respecto a la violencia relacionada con problemas de género. En London, ciudad de la provincia canadiense de Ontario, las escuelas públicas sirven de foro para un programa de educación formal orientado a prevenir la violencia. En Jamaica, una compañía teatral pone en escena situaciones de violencia doméstica a fin de ayudar a hombres y mujeres a encarar el problema y trabaja con grupos sin fines de lucro para informar a las mujeres sobre sus derechos y sobre los recursos de que disponen si son maltratadas.

En la tercera parte se examina el papel de los medios de comunicación, los cuales con su capacidad para llegar a un público muy amplio pueden reforzar el comportamiento violento o promover cambios positivos. Los medios de comunicación pueden alertar a las comunidades sobre el problema de la violencia doméstica, ofrecer modelos positivos de conducta, cambiar las actitudes intrafamiliares con respecto a la mujer y difundir estrategias para abordar el problema. Elena M. Suárez y Charo Quesada examinan estas posibilidades en el capítulo 13. En el capítulo 14, Patricia Poppe describe las ventajas de la comunicación estratégica como enfoque coherente e integral para

informar y educar a la sociedad sobre las formas de combatir la violencia. Jacquin Strouss de Samper, ex primera dama de Colombia, resume una encuesta de la actitud del público con respecto a la televisión y la violencia en Colombia. Afirma que los televidentes quieren que la televisión desempeñe un papel más positivo en el fortalecimiento de la familia y la lucha contra la violencia, incluida la violencia doméstica (capítulo 15).

En última instancia, no basta con disminuir la violencia doméstica: hay que eliminarla. En palabras de Hillary Rodham Clinton, "No creemos que la violencia doméstica sea 'simplemente cultural'. Creemos que es simplemente criminal". Este libro presenta reflexiones y estrategias que pueden ayudar a las naciones y los pueblos a avanzar hacia la eliminación de la violencia doméstica.

La conferencia sobre violencia doméstica

Este libro se basa en la conferencia titulada “Violencia doméstica en América Latina y el Caribe: costos, políticas y programas”, que se realizó en octubre de 1997 en la sede del BID, en Washington, D.C., a la cual asistieron alrededor de 400 personas de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. En el primer día de la conferencia se realizó un análisis de los costos socioeconómicos de la violencia doméstica y se presentaron programas probadamente eficaces para abordar el problema. Ese día, más de una docena de locutores de radio transmitieron en vivo desde la sede del BID programas sobre la violencia doméstica contra la mujer que llegaron a 25 millones de oyentes de Estados Unidos y México. El segundo día se discutió el papel de los medios de comunicación como factor que contribuye al problema y como posible partícipe en su solución.

Varios expertos, legisladores, representantes de instituciones financieras internacionales y líderes de organizaciones de la sociedad civil presentaron los resultados de su experiencia en la lucha contra la violencia doméstica. Entre los oradores se encontraban las primeras damas Hillary Rodham Clinton, de Estados Unidos, y Jacquin Strauss de Samper, de Colombia; la Primera Ministra Adjunta de Barbados, Billie Miller; la Ministra de Asuntos de Igualdad de Suecia, Ulrica Messing; y la ex diputada estadounidense Pat Schroeder.

Cuatro organizaciones desempeñaron un papel decisivo en esta conferencia y la copatrocinaron:

El *Instituto para la Sociedad Civil*, fundación privada y centro de estudios sin fines de lucro con sede en Boston (Massachusetts), se dedica a la búsqueda de enfoques innovadores para abordar problemas fundamentales de la sociedad civil, como problemas institucionales, tradiciones culturales y valores. El Instituto desempeñó un importante papel en la organización del segundo día de la conferencia, dedicado a los medios de comunicación.

ISIS International, con sede en Santiago (Chile), es una organización no gubernamental que promueve la participación de la mujer en el desarrollo. ISIS ofrece canales de comunicación y servicios a las mujeres de países en desarrollo en los campos de la salud, el liderazgo, la obtención de conocimientos técnicos y la violencia doméstica.

La *Comisión Interamericana de Mujeres* (CIM), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es una de las instituciones más antiguas dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer. Fue fundada en 1928 con el propósito de velar por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres en las Américas. Por medio de sus delegadas en América Latina y el Caribe, la CIM ha reconocido y apoyado organizaciones de mujeres que trabajan con gobiernos y con organizaciones no gubernamentales y comunitarias.

La *Organización Panamericana de la Salud* (OPS) es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. Fue la primera organización internacional en movilizar considerables recursos humanos y financieros para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer en las Américas. En los últimos tres años, la OPS ha invertido más de siete millones de dólares en 16 países de la región para crear redes de prevención y tratamiento de la violencia doméstica.

La conferencia proporcionó un foro para el intercambio de ideas entre gobiernos, instituciones financieras multilaterales y organizaciones no gubernamentales sobre métodos prometedores para eliminar la violencia doméstica contra la mujer en las Américas.

Página en blanco a propósito

PARTE I

EL CONTEXTO Y LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA DOMESTICA

Página en blanco a propósito

La violencia en las Américas: marco de acción

Mayra Buvinić, Andrew R. Morrison y Michael Shifter

Panorama general

Basta leer los titulares de los periódicos y escuchar las conversaciones que ocurren a diario en América Latina y el Caribe para darse cuenta de que el tema de la violencia es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Pocas personas en la región han escapado a los efectos de lo que se reconoce como un problema multidimensional y polifacético: casi todos tienen una historia que contar, muchas veces de manera bastante gráfica. Encuesta tras encuesta se confirma la gravedad y la prevalencia de este problema.

Los datos disponibles, a pesar de ser parciales y fragmentados, confirman estas percepciones del público e indican que la región está entre las más violentas del mundo (Banco Mundial 1997). La media anual de homicidios para 1990 en América Latina y el Caribe era de casi 23 por 100.000 habitantes, es decir más del doble que el promedio mundial (Murray y López 1996) (véanse en el cuadro 1.1 las tasas de homicidios por país). Además, en el curso de la última década, la tasa de homicidios ha venido aumentando, especialmente en muchos de los centros urbanos de la región.

El grado de violencia doméstica también es alto en la región. Según la mayoría de los estudios, cada año entre 30 y 50% de las mujeres adultas con pareja son víctimas de actos de violencia psicológica, mientras que entre 10 y 35% sufren maltrato físico. Estos resultados son bastante uniformes en los distintos países de la región (véanse en el cuadro 1.2 las tasas de prevalencia de la violencia doméstica).

La violencia doméstica y social está adquiriendo posiciones prioritarias en la agenda normativa de los gobiernos de la región, ONG e instituciones financieras multilaterales. Eso se debe en parte a su gran magnitud y tendencia creciente y en parte a que es un problema que preocupa a diversos grupos: organizaciones de derechos humanos, asociaciones de mujeres, promotores de la salud pública e instituciones de desarrollo.

Tanto la violencia social como la doméstica son problemas de derechos huma-

Cuadro 1.1 Tasas de homicidios en América Latina y el Caribe*(Por 100.000 habitantes)*

País	Fines de los años setenta y principios de los ochenta	Fines de los años ochenta y principios de los noventa
Guatemala	—	150
El Salvador	—	150
Colombia	20,5	89,5
Jamaica	—	35,0 ⁽¹⁾
Brasil	11,5	19,7
Nicaragua	—	18,3 ⁽⁴⁾
México	8,2	17,8
Venezuela	11,7	15,2
Trinidad y Tobago	2,1	12,6
República Dominicana	—	11,9 ⁽⁴⁾
Perú	2,4	11,5
Panamá	2,1	10,9
Ecuador	6,4	10,3
Estados Unidos	10,7	10,1
Honduras	—	9,4 ⁽⁴⁾
Argentina	3,9	4,8
Costa Rica	5,7	5,6 ⁽³⁾
Uruguay	2,6	4,4
Paraguay	5,1	4,0
Chile	2,6	3,0

Fuente: PAHO, Health Situation Analysis Program 1997, citado por el Banco Mundial (1997).

(1) Comisario de policía Francis Forbes, 1997 (basado en datos de 1996).

(2) Ministerio de Seguridad 1997 (datos de 1995).

(3) Britannica World Date 1996.

nos. La posibilidad de vivir sin temor a la violencia es un derecho humano básico¹. La violencia doméstica y la violencia social constituyen una grave amenaza para la salud pública, tal como ha enfatizado la Organización Panamericana de la Salud, ya que conducen a un aumento de la morbilidad y mortalidad.

Por último, la violencia doméstica y la violencia social constituyen grandes obstáculos para el desarrollo económico. Se ha comprobado que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica son menos productivas en el trabajo. Su menor productividad representa una pérdida directa para la producción nacional y tiene importantes efectos multiplicadores: las mujeres menos productivas generalmente ganan menos, y esta disminución de los ingresos, a su vez, implica una disminución del consumo y, por consiguiente, de la demanda global (véase en el capítulo 3 un análisis de los costos económicos y sociales de la violencia doméstica).

Cuadro 1.2 Prevalencia de la violencia doméstica contra la mujer en las Américas

País/Autor del estudio	Tipo de muestra	Muestra	Resultados
Chile Larraín Heiremans, 1994	Muestra representativa de Santiago	1.000 mujeres de 22 a 55 años en pareja desde hacía por lo menos dos años	33,9% psicológica 10,7% física (violencia severa) 15,5% física (menos severa)
Colombia (1990)	Muestra aleatoria nacional	3.272 mujeres urbanas 2.118 mujeres rurales	33,9% psicológica 20% física 10% sexual
Costa Rica Quirós y Barrantes, 1994	Muestra representativa de la zona metropolitana de San José	1.312 mujeres	75% psicológica, 10% física, 6% han sido encerradas en la casa
Ecuador (1992)	Muestra intencional de un barrio de Quito	200 mujeres de bajos ingresos	60% física
Guatemala (1990)	Muestra aleatoria de Sacatepequez	1.000 mujeres	49% maltratadas 74% de ellas por un compañero sexual
Haití CHREPROF, 1996*	Muestra representativa nacional	1.705 mujeres	70% maltratadas, 36% de ellas por un compañero sexual
Paraguay CEDEP, CDC, USAID, 1996	Muestra representativa nacional		9,4% física 31,1% psicológica
México Granados Shiroma, 1995	Muestra representativa de nueve distritos de Monterrey	1.086 mujeres	45,2% maltratadas 17,5% física y sexual 15,6% física y psicológica
Canadá (1993) Estados Unidos (1986)	Muestra repr. nacional Probabilidad nacional	12.300 mujeres >18 años 2.143 parejas	25% física 28% física

Fuente: Heise, Ptianguy y Germain (1994), salvo en los casos en que se indica otra fuente.

*Centro Haitiano de Estudios y Acción para la Promoción de la Mujer.

La violencia social también obstaculiza el desarrollo económico. A nivel microeconómico, la violencia social reduce la formación de capital humano dado que algunas personas invierten en su formación como delincuentes y no en su educación. También puede desmotivar el estudio nocturno por temor a los delitos violentos. A nivel macroeconómico, desincentiva las inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo cual al disminuir el capital de los trabajadores va en detrimento de la producción. La violencia puede también reducir el ahorro interno al aumentar la desconfianza de la población en las perspectivas de crecimiento del país. Si los ahorros no permanecen en el país, sino que se invierten en el exterior, la disponibilidad de fondos para que los empresarios nacionales financien inversiones de capital se ve disminuida. Aunado a esto, ambos tipos de violencia llevan a una mayor utilización de los escasos recursos de la sociedad, entre ellos los gastos en policía, sistemas judiciales y servicios sociales, que de lo contrario podrían destinarse a otros fines.

¿Qué desencadena la violencia en América Latina y el Caribe? ¿Qué se puede hacer para detener la violencia, tanto dentro como fuera del hogar? ¿Qué se puede aprender de la experiencia de la región en violencia? A fin de responder a estas preguntas, en este capítulo se clasifican los tipos de violencia, se indican los principales factores de riesgo que contribuyen a la violencia y se presentan algunos de los principales costos socioeconómicos resultantes de la violencia. También se procura relacionar las medidas recomendadas para reducir la violencia con los factores que la generan. Con este enfoque epidemiológico se ha logrado reducir la violencia en varias ciudades de América Latina y el Caribe, y podría ser aplicado a otras ciudades y países. Por último, en este capítulo se señalan los campos prioritarios de acción necesarios para reducir la violencia en la región.

Tipos de violencia y relación entre ellos

El fenómeno de la violencia es altamente complejo y multifacético. Una de las tareas más desafiantes es desglosar las diferentes formas de violencia para comprender mejor sus características, causas y consecuencias. La violencia se puede categorizar según distintas variables: los individuos que sufren la violencia (por ejemplo, mujeres, niños, ancianos y discapacitados), la naturaleza de la agresión (psicológica, física o sexual), el motivo (violencia política, racial, instrumental, emocional) y la relación entre la víctima y la persona que comete el acto de violencia (familiares, amigos, conocidos o desconocidos).

En este capítulo se examina la violencia que se produce entre personas relacionadas por consanguinidad o matrimonio o en unión libre² (denominada violencia doméstica) y la violencia entre personas que no tienen una relación de ese tipo (violencia social). La primera se produce en el ámbito del hogar, mientras que la segunda generalmente se produce en la calle o en lugares públicos y, por consiguiente, es más visible.

La violencia doméstica se describe comúnmente según el tipo de violencia y la identidad de la víctima o las víctimas. La violencia doméstica puede ser física, psicológica o sexual. La violencia física, la forma más obvia de violencia doméstica, consiste en cachetadas, empujones, estrangulamiento, patadas, golpes, torceduras de brazos, quemaduras intencionales, retención de una persona contra su voluntad o ataque con un cuchillo u otros objetos. En el contexto de la violencia doméstica contra la mujer, la violencia psicológica es más común que la violencia física. Se produce cuando una persona recibe frecuentes insultos o amenazas, cuando le destruyen sus efectos personales o la someten a amenazas o gritos como medio predominante para solucionar conflictos. Hay violencia sexual cuando un hombre de la familia (generalmente el compañero) obliga a una mujer a tener relaciones sexuales contra su voluntad o abusa sexualmente de una menor.

La violencia doméstica también puede ser caracterizada según la persona que sufre la violencia. Aunque en algunas ocasiones los hombres son víctimas de actos de violencia doméstica, las víctimas más comunes son las mujeres y los niños. Este libro se concentra en la violencia doméstica contra la mujer.

Las definiciones de violencia social a menudo se limitan a la fuerza física. El Centro para el Control de Enfermedades, por ejemplo, define violencia como “el uso de fuerza física o la amenaza de usarla con la intención de causar daño a otros o a uno mismo” (Centers for Disease Control 1989). Aunque la violencia física es la manifestación más importante de la violencia social, el maltrato psicológico (por ejemplo, la intimidación) es también importante por sí solo y con frecuencia antecede a la violencia física.

La violencia social puede clasificarse según su localización geográfica (violencia urbana o rural), su motivo (político o no político) o el código jurídico vigente (tipificación como delito o no). Esta última categorización, por la que se inclinan los que trabajan en el ámbito policial o judicial, es poco práctica cuando se trata de diseñar políticas para controlar la violencia social. En primer lugar, el mismo acto violento podría ser ilegal en algunos países y legal en otros; la violencia doméstica es un ejemplo especialmente importante. En segundo lugar, a menudo existen vínculos causales entre la violencia no delictiva y la violencia delictiva. Los niños, por ejemplo, pueden empezar a exhibir tendencias violentas al maltratar o torturar animales. A pesar de no ser ilegal en muchos países, este comportamiento es un antecedente de peso para el desarrollo de la violencia interpersonal, de modo que debe abordarse de inmediato con terapia y otras medidas apropiadas.

Hay una distinción que es útil para definir la pertinencia de tomar medidas preventivas o punitivas para hacer frente a la violencia: la distinción entre violencia instrumental y emocional. La violencia instrumental es aquella ejercida para obtener una meta diferente a la violencia misma. La violencia política y la relacionada con las

El movimiento de mujeres y el problema de la violencia contra la mujer

Soledad Larraín

La tarea de dar visibilidad a la violencia de género en la región ha sido difícil. Las dos últimas décadas han sido testigos de una acción ininterrumpida del movimiento y las organizaciones de mujeres para trasladar del mundo privado a la esfera de lo público un problema que afecta a millones de mujeres. Por medio de diversas organizaciones, el movimiento de mujeres ha desempeñado un papel trascendental para poner el problema de la violencia doméstica en la agenda política.

A fines de la década del setenta y comienzos del ochenta, se constituyeron diversos grupos en la región dedicados a trabajar en este tema, mientras que varios grupos ya existentes lo incorporaron en sus programas. Podemos señalar a modo de ejemplo la Casa de la Mujer en Colombia, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), la Fundación María Guare de Guayaquil, el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en Perú, AVESA en Venezuela, La morada en Chile, Lugar de Mujer en Argentina, CEPIA en Rio de Janeiro, y el Frente Nacional por los Derechos de las Mujeres (FENALIDM) y el Colectivo de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres (COVAC) en México.

En 1981, las participantes en el Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, realizado en Bogotá, denunciaron la violencia sexual contra la mujer y declararon el 25 de noviembre como el Día internacional para terminar con toda forma de violencia contra la mujer. Las participantes en este encuentro decidieron que, al regresar a sus países, comenzarían a organizar actos públicos para conmemorar la fecha. Su determinación se convirtió en movilizaciones y marchas que posteriormente fueron retomadas por el movimiento amplio de mujeres y que se continuaban realizando.

En el Segundo Encuentro Feminista de América Latina (Perú, 1983) se planteó la necesidad de establecer casas de ayuda a las mujeres maltratadas y la importancia de realizar investigaciones en el tema. En el Tercer Encuentro, realizado en Brasil en 1995, se decidió integrar la red contra la violencia con Isis-Salud, ONG con sede en Chile, para examinar el problema del racismo en las denuncias y realizar investigaciones.

El 25 de noviembre de 1989 se constituyó en Buenos Aires la Red del Cono Sur en contra de la violencia. En 1990, en el Quinto Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, nació una red latinoamericana en contra de la violencia doméstica y sexual. La red, con los grupos de cada país, ha contribuido a poner el tema de la violencia en la agenda política y ha influido en la promulgación de leyes, ha impulsado la creación de centros de atención y ha tenido un impacto importante en los medios de comunicación.

drogas son ejemplos clásicos de violencia instrumental. La meta al utilizar la violencia es, entre otras cosas, intimidar o exigir obediencia³. En el caso de la violencia emocional, en cambio, la respuesta agresiva es la meta misma. La violencia doméstica y la violencia social pueden ser de tipo instrumental o emocional.

La distinción entre ambos tipos de violencia es importante porque los modelos de comportamiento delictivo violento correspondientes al delincuente racional, modelo muy favorecido por los economistas que estudian el problema de la delincuencia, no explican por completo la violencia emocional. Según estos modelos, los delincuentes potenciales examinan los beneficios y costos previsibles del delito y deciden emprender actividades delictivas sólo si los beneficios previstos exceden el costo previsto. Las personas que cometen actos de violencia emocional, en cambio, no calculan cuidadosamente y por anticipado los posibles costos y beneficios del comportamiento violento. En consecuencia, las medidas punitivas comunes contra la delincuencia, como reforzar la presencia policial a fin de aumentar las probabilidades de que los delincuentes sean detenidos, mejorar el trabajo de los detectives e imprimir mayor eficiencia al sistema judicial con el propósito de aumentar las probabilidades de que un delincuente sea declarado culpable si es detenido o imponer sanciones más severas a las personas culpables de delitos violentos, no son totalmente eficaces como desincentivo para las personas que cometen actos de violencia emocional. Si la meta es reducir la violencia emocional, en la cual hay variables psicosociales y culturales que tienden a prevalecer sobre las variables racionales, se debe priorizar la prevención, más que el arresto y el castigo. De hecho, en este capítulo se afirma que la prevención es la estrategia más eficiente para hacer frente a la mayoría de los tipos de violencia.

Relación entre la violencia doméstica y la violencia social

Décadas de estudio del comportamiento humano han mostrado que la violencia doméstica y social son parte de un todo cuyos componentes están estrechamente relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente. Ya que la violencia es un fenómeno mayormente aprendido, la primera oportunidad para aprender a comportarse violentamente se da en el hogar, con el ejemplo de los padres, los hermanos y otros modelos. Los premios que dan los padres al comportamiento agresivo, así como el maltrato a los hijos y el ejemplo violento, son algunos de los mecanismos por los cuales los niños aprenden la violencia desde la temprana infancia (Bandura 1973; Berkowitz 1993).

Los niños que son abusados y aquellos que observan abusos crónicos son más propensos a comportarse violentamente dentro y fuera del hogar que los niños que no están expuestos a estas situaciones. En numerosos estudios se ha observado que sufrir o presenciar comportamientos violentos crónicos en el hogar podría ser el inicio de la utilización de patrones violentos en la vida para ejercer control social sobre los demás y manejar los conflictos en las relaciones humanas. Cuanto mayor sea el grado de violencia en la familia de origen, mayores serán las probabilidades de que un niño se comporte de manera abusiva o violenta (American Psychological Association 1993). Aunque los niños afectados por la violencia no repiten necesariamente los abusos sufridos cuando

llegan a la edad adulta, se ha documentado una fuerte relación entre la victimización durante la infancia y alguna forma de violencia interpersonal en etapas posteriores. Algunos autores creen que el principal factor que permite predecir el riesgo de que una persona cometa actos de violencia es los antecedentes de comportamiento agresivo en la niñez (Eron y Slaby 1994). Una vez que un niño ha mostrado tendencias violentas, ese comportamiento tiende a persistir e incluso a transmitirse de una generación a otra (Huesmann et al. 1984; en relación con América Latina, véase Larraín 1994). Así, el nexo entre la violencia doméstica y la violencia social es directo, aunque no inmediato.

La transmisión de la violencia de una generación a otra y del hogar a la calle son razones indiscutibles para adoptar medidas orientadas a reducir la violencia doméstica, incluso cuando la meta última es reducir la violencia social. También es necesario disminuir las brechas conceptuales y programáticas que existen entre la violencia doméstica y la violencia social, o sea integrar las esferas, hasta ahora separadas, de aquellos (en su mayoría hombres) que estudian y tratan la violencia social y aquellas (en su mayoría mujeres) que combaten la violencia doméstica.

La relación causal entre el aumento de la violencia social y el aumento subsiguiente de la violencia doméstica no se ha comprobado empíricamente. Sin embargo, es razonable pensar que el aumento de la violencia social genera más violencia doméstica ya que reduce las inhibiciones del uso de la violencia, ofrece modelos de comportamiento violento y expone a los individuos a estrés adicional, situación que desencadena el comportamiento violento.

Factores que contribuyen a la violencia

No existe un solo factor que de cuenta debidamente de los altos niveles de violencia en América Latina y el Caribe. Al discutir los factores que contribuyen al comportamiento violento o lo inhiben, es útil distinguir entre los factores que operan a nivel individual, familiar y comunitario o social. También es útil tener en cuenta los factores sociales y situaciones que constituyen antecedentes de violencia, o sea las características del medio social y físico que fomentan o desincentivan el comportamiento violento.

Factores individuales

La evidencia sugiere que un conjunto de factores individuales inciden en los patrones de violencia social y doméstica. Estos factores son: sexo, edad, otros factores biológicos y fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de educación, uso de alcohol o drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. Cada factor de riesgo tiene su propio impacto marginal en la probabilidad de que una persona se comporte violentamente. Los hombres jóvenes, las personas de nivel socioeconómico relati-

vamente bajo, los desempleados y subempleados, las personas con un nivel de educación bajo y las que consumen alcohol o drogas son más propensos a la violencia. El riesgo de comportamiento violento es aun mayor si la persona tiene anomalías cerebrales o una disfunción neurológica, lo que aumenta el riesgo de respuestas agresivas. Asimismo, hay amplias pruebas de que, tanto para la violencia social como para la doméstica, las personas que fueron crónicamente maltratadas durante la niñez o que presenciaron abuso tienden más a cometer abusos cuando llegan a la edad adulta (Huesmann et al. 1984; en relación con América Latina, véase Larraín 1994). La combinación de traumas neurológicos y experiencias tempranas de maltrato y abandono son fuertes predictores del comportamiento delictivo en la edad adulta.

Factores familiares

Los factores relacionados con el hogar que contribuyen a la violencia son igualmente importantes para un análisis exhaustivo de la violencia social y doméstica. Los factores principales son el hacinamiento, el ingreso per cápita de la familia, y la dinámica y las normas familiares (especialmente en los casos en que las normas prevalentes son más autoritarias que igualitarias o democráticas). Un estudio transcultural de 90 sociedades mostró que las familias con un alto grado de violencia doméstica tenían normas autoritarias en el hogar: donde había dominación masculina y aceptación social de la violencia física (Levinson 1989). Los grupos feministas destacan la desigualdad en las relaciones de género como factor central para explicar la violencia doméstica contra la mujer. En una encuesta nacional sobre violencia familiar realizada en Estados Unidos en 1975, por ejemplo, se observó que la violencia contra la pareja era más probable en los casos en que esta dependía económica y psicológicamente de un marido dominante (Berkowitz 1993).

Gonzales y Gavilano, en el capítulo 2, señalan que la pobreza familiar aumenta la probabilidad de que se produzcan situaciones de violencia psicológica, así como el nivel de violencia en general, pero no la violencia física y sexual. La conclusión de que la violencia doméstica contra la mujer es más probable en familias más pobres (si los demás factores permanecen constantes) tiene dos explicaciones posibles. La primera es que la pobreza en sí exacerba la violencia. La segunda es que la pobreza (o nivel socioeconómico bajo) no es en sí una causa directa del comportamiento violento, sino que está asociada a un mayor estrés debido a la incertidumbre, la situación económica precaria y el hacinamiento. El estrés, a su vez, tiende más a llevar a la violencia a las personas con una predisposición al comportamiento agresivo (debido a su temperamento o a la crianza) que a las personas que no tienen tal predisposición. En otras palabras, la frustración y el estrés son situaciones que desencadenan la violencia (Berkowitz 1993).

Factores comunitarios y sociales

En un plano más amplio, los factores comunitarios y sociales interaccionan con las características individuales y la dinámica del hogar. Entre los factores sociales se destacan la desigualdad de ingresos, la violencia en los medios de comunicación, los efectos de la posguerra, los controles institucionales débiles (especialmente la debilidad de los sistemas policiales y judiciales) y las normas culturales⁴. En un conocido estudio sobre índices de criminalidad en las 125 zonas metropolitanas más grandes de Estados Unidos se observó que la delincuencia tiene más relación con la desigualdad de ingresos que con el porcentaje de gente pobre en los vecindarios (Blau y Blau 1982). En años recientes, a pesar de que la pobreza absoluta ha disminuido en varios países de América Latina y el Caribe, en general persiste una gran desigualdad. Un reciente estudio transregional realizado por el Banco Mundial confirma la existencia de una fuerte relación entre la pronunciada desigualdad de ingresos y el comportamiento violento (Fajnzylber 1997). Más claro aún que en el caso de la pobreza, la desigualdad de ingresos aumenta los sentimientos de privación y frustración, que pueden ser poderosos antecedentes del comportamiento violento.

La desigualdad subyacente en la región puede convertirse en un factor aun más importante que contribuye a la violencia social y doméstica debido al impacto de los medios de comunicación. En la última década, la explosión y difusión de diversas tecnologías de comunicación, especialmente la televisión, en todo el continente han intensificado el sentido de carencia y distribución desigual de los ingresos.

Los medios de comunicación también influyen en el nivel de violencia dado que los programas a menudo refuerzan modelos de comportamiento violento que los televidentes aprenden e imitan. Estos modelos de comportamiento, a su vez, tienden a simular e impulsar el comportamiento agresivo. La exposición reiterada a programas donde la violencia es premiada se ha relacionado sistemáticamente con un aumento de la incidencia de la agresión, especialmente en los niños (Huesmann y Eron 1986). La violencia en los medios de comunicación es un desencadenante situacional del comportamiento agresivo. Otros desencadenantes situacionales son el fácil acceso a armas y condiciones ambientales que facilitan el crimen, como la falta de privacidad en el hogar y la falta de alumbrado en las calles.

Las sociedades que han vivido recientemente conflictos civiles son más vulnerables a brotes persistentes de violencia. En El Salvador y la Guatemala de posguerra, por ejemplo, la amplia disponibilidad de armas y la disminución de las inhibiciones que frenan el uso de la violencia tienden a exacerbar otros factores poderosos que contribuyen a la violencia social y doméstica, como la desigualdad, el papel negativo de los medios de comunicación y el alto grado de pobreza.

Además, a pesar de que es difícil presentar un panorama preciso del desempe-

no institucional, es evidente que la eficacia de los sistemas policiales y judiciales puede estar especialmente comprometida en las sociedades que han emergido recientemente de conflictos, lo cual, a su vez, influye en los incentivos y los costos previstos de la participación en actos de violencia. (Este tema se aborda en el capítulo sobre el uso de un servicio de atención telefónica de urgencia en El Salvador para hacer frente al problema de la violencia doméstica.)

La cultura también es un factor determinante del comportamiento. La violencia se entreteje en el tapiz cultural de muchas sociedades y se convierte en parte de las normas que forman el comportamiento y la identidad de los grupos. Por ejemplo, golpear a los niños suele ser culturalmente aceptado y con frecuencia inculca en esos niños la creencia de que la violencia es una forma aceptable de resolver conflictos. Los estereotipos de género refuerzan la idea del “derecho” del esposo a controlar el comportamiento de su pareja y de que ese control puede ejercerse por medio de la violencia doméstica. La existencia de determinantes culturales de la violencia tiene importantes repercusiones en los programas de prevención e intervención. En particular, las iniciativas de prevención que no contemplan las normas culturales corren mayor riesgo de no alcanzar sus objetivos

La existencia de factores de riesgo en distintos niveles de agregación no implica la ausencia de interacción entre ellos. Por ejemplo, a nivel individual, factores tales como disfunciones biológicas y fisiológicas y haber sido maltratado físicamente generan cierta predisposición para que un individuo cometa actos de violencia social o doméstica. Los hogares y vecindarios de bajos ingresos y alta densidad tienen mayores probabilidades de agravar esta predisposición a la violencia debido al aumento de la frustración y el estrés. En cambio, los ingresos altos y la baja densidad del hogar y vecindario tienden a disminuir la probabilidad de que la predisposición individual lleve al comportamiento violento. Frecuentemente, ciertos estímulos situacionales desencadenan la violencia social o doméstica, activando factores individuales tales como experiencias anteriores de abuso físicos.

Otro antecedente situacional de importancia es el índice general de criminalidad. El aumento de los delitos violentos reduce las inhibiciones de la conducta violenta (Fajnzylber 1997) tanto por medio del efecto de demostración (los delincuentes ofrecen un modelo para las personas inclinadas a seguir su ejemplo) como por la erosión de normas sociales que regulan las relaciones humanas.

Costos y consecuencias

Con fines analíticos y de ilustración, los costos de la violencia doméstica y social pueden dividirse en cuatro categorías: 1) costos directos, que consisten en el valor de los bienes y servicios utilizados para tratar o prevenir la violencia; 2) efectos no moneta-

Cuadro 1.3 Tipología de los costos socioeconómicos de la violencia

Costos directos: valor de los bienes y servicios utilizados para tratar o prevenir la violencia	<ul style="list-style-type: none"> • Atención médica • Policía • Sistema de justicia penal • Vivienda • Servicios sociales
Costos no monetarios: dolor y sufrimiento*	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de la morbilidad • Aumento de la mortalidad por homicidios y suicidios • Abuso de alcohol y drogas • Trastornos depresivos
Efectos multiplicadores económicos: impacto macroeconómico, en el mercado laboral y en la productividad intergeneracional	<ul style="list-style-type: none"> • Menor participación en el mercado laboral • Menor productividad en el trabajo • Ingresos más bajos • Mayor ausentismo • Impacto en la productividad intergeneracional que se manifiesta en la repetición de grados y un rendimiento escolar más bajo de los niños • Disminución de las inversiones y el ahorro • Fuga de capitales
Efectos multiplicadores sociales: impacto en las relaciones sociales y en la calidad de la vida	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisión intergeneracional de la violencia • Deterioro de la calidad de la vida • Erosión del capital social • Menor participación en el proceso democrático

*Algunos de estos efectos se reflejan parcialmente en los gastos médicos, pero en el caso de las personas que no acuden al médico para recibir tratamiento, el efecto en la salud se incluye en esta categoría.

rios, que incluyen el dolor y el sufrimiento; 3) efectos multiplicadores económicos, que reflejan el impacto en la participación en el mercado laboral y en la productividad de los trabajadores; y 4) efectos multiplicadores sociales, que captan el impacto de las relaciones interpersonales y la calidad de la vida (véase en el cuadro 1.3 un esquema de este marco).

Costos de la violencia doméstica

1) Los costos directos consisten en el valor de los bienes y servicios utilizados para tratar o prevenir la violencia doméstica. Incluyen gastos en tratamiento médico (atención de urgencia, hospitalización, atención en clínicas o consultorios, atención odontológica y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual), terapia psicológica, servicios policiales (tiempo que la policía dedica a los arrestos y a responder a las llamadas), actividades del sistema de justicia penal (costos de la detención y el encarcelamiento, además de los costos del juicio y otros trámites judiciales), vivienda (refugios y viviendas transitorias para mujeres maltratadas y sus hijos) y servicios sociales (prevención de la violencia doméstica, educación en este campo, formación laboral, programas de promoción, y capacitación de la policía, los médicos y otros)⁵.

Desafortunadamente, no se han hecho cálculos de estos tipos de costos en países de América Latina o el Caribe, pero se dispone de cálculos para Canadá. Según Greaves (1995), la violencia contra la mujer (categoría más amplia que la violencia doméstica contra la mujer, puesto que incluye la violencia contra la mujer fuera del hogar) representa un costo anual de Can\$684 millones para el sistema de justicia penal y Can\$187 millones para la policía. El costo de la terapia y la capacitación para responder a la violencia contra la mujer es de aproximadamente Can\$294 millones por año. Por consiguiente, el total de costos directos supera los Can\$1.000 millones por año.

2) Los costos no monetarios consisten en aquellos impactos a la salud que no genera necesariamente una demanda de servicios médicos. Abarcan el aumento de la morbilidad y la mortalidad por homicidio y suicidio, el alcoholismo, la drogadicción y trastornos depresivos⁶. Si se calcula el impacto de la violencia doméstica en el deterioro de la salud, los resultados son serios: según los cálculos del Banco Mundial, las violaciones y la violencia doméstica llevan a la pérdida de nueve millones de años de vida saludables (AVISA) perdidos por año en el mundo, más que el total de la pérdida ocasionada por todos los tipos de cáncer que afectan a la mujer y más del doble del total de AVISA perdidos por mujeres en accidentes de vehículos de motor (Banco Mundial 1993).

En el capítulo 4, Lozano calcula la carga de morbilidad para las mujeres de la Ciudad de México, donde la violencia doméstica ocupa el tercer lugar entre las principales causas de AVISA perdidos, después de la diabetes y las complicaciones del parto. Entre las causas de AVISA perdidos, la violencia doméstica es más importante que los accidentes de tráfico, las anomalías congénitas, la artritis reumatoide, la osteoartritis, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares y la neumonía.

3) Los efectos multiplicadores económicos de la violencia doméstica implican una menor participación de la mujer en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, mayor ausentismo, menores ingresos y un impacto en la productividad intergeneracional. Desafortunadamente, no se dispone de pruebas directas de los tres

primeros impactos correspondientes a América Latina y el Caribe, aunque hay pruebas convincentes de ello en relación con Estados Unidos y Canadá. En lo que atañe a Estados Unidos, Stanley (1992) informa que 30% de las mujeres maltratadas perdieron el trabajo como consecuencia directa del abuso. Según el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, 94% de las mujeres maltratadas perdieron por lo menos un día de trabajo al año como consecuencia del maltrato y 50% de las mujeres maltratadas perdieron hasta tres días por mes (Stanley 1992). En Canadá, 34% de las mujeres golpeadas y 11% de las víctimas de agresiones sexuales señalaron que no pudieron ir a trabajar el día siguiente al ataque. Se calcula que las pérdidas de ingresos ascienden a CanS\$7 millones al año (Greaves 1995).

Con respecto al impacto de la violencia doméstica en la capacidad de las mujeres para obtener ingresos, se observa una gran diferencia en los ingresos laborales de las mujeres afectadas por actos de violencia física severa y las que no han tenido este problema (véase el capítulo 3). En Santiago de Chile, las mujeres que no son víctimas de actos de violencia física severa ganan en promedio US\$385 mensuales, mientras que las mujeres que se enfrentan con situaciones de violencia física severa en el hogar ganan solamente US\$150, menos de la mitad de lo que ganan las mujeres que no son maltratadas. En Managua, las mujeres que no son víctimas de actos de violencia física severa ganan en promedio US\$51 mensuales, mientras que las mujeres maltratadas ganan solamente US\$29, lo cual representa una diferencia del 75%.

Debido en gran medida a su efecto en los ingresos de las mujeres, la violencia doméstica tiene un impacto macroeconómico importante. En Chile, las pérdidas de ingresos correspondientes a todas las mujeres ascienden a más de US\$1.500 millones, más del 2% del PIB de Chile en 1996. En Nicaragua, las pérdidas ascienden a US\$29,5 millones, alrededor del 1,6% del PIB de 1996. Cabe destacar que estas pérdidas incluyen solamente el impacto en los ingresos de las mujeres y no incluyen los efectos en la participación en la fuerza laboral o en el ausentismo.

El último tipo de efecto multiplicador económico es el impacto intergeneracional de la violencia doméstica en el futuro económico de los hijos. Los niños que son testigos de violencia en el hogar tienden más a tener problemas de disciplina en la escuela y podrían tener mayores probabilidades de repetir grados (véase el capítulo 3). Por supuesto, eso tiene un impacto directo en el capital humano de estos niños y su capacidad futura para conseguir un trabajo adecuado con un salario decente.

4) Los efectos multiplicadores sociales incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia de padres a hijos, la erosión del capital social, el deterioro de la calidad de la vida y una menor participación en los procesos democráticos. Hay fuertes indicios que documentan el nexo entre ser testigo o víctima de violencia en la niñez y el comportamiento violento con la esposa en la edad adulta. Strauss et al. (1980) comprobaron que la tasa de agresiones conyugales era mucho mayor en los hombres que ha-

bían sido testigos de actos de violencia doméstica en la niñez, en comparación con los hombres que no habían presenciado tales actos de violencia. Desde un punto de vista más general, Jaffe, Wilson y Wolfe (1989) observaron que los niños expuestos a la violencia doméstica tienen percepciones inapropiadas de la aceptabilidad y utilidad de la violencia como medio para solucionar conflictos. En América Latina y el Caribe, todavía no se han realizado estudios empíricos que permitan establecer la relación entre la violencia doméstica, el desempeño inapropiado de los padres y el futuro comportamiento violento fuera del hogar, pero sería sorprendente que no se encontrara un vínculo de ese tipo.

Los efectos de la violencia en los niños no se limitan a la reproducción del comportamiento violento en la edad adulta. Los niños que sufren o presencian agresiones tienden a tener más problemas de comportamiento durante la niñez. En un estudio en el cual se compararon 102 niños que vivían en refugios para mujeres golpeadas con 96 niños de un grupo de control, los niños de los refugios presentaban una probabilidad dos veces y media mayor de tener graves problemas de comportamiento y adaptación. En el mismo estudio, el grado de violencia física en una familia, medido con la escala táctica de resolución de conflictos, resultó ser un factor importante para predecir tanto la competencia social del niño como problemas conductuales (Wolfe et al. 1985).

Reviste especial importancia la erosión del capital social como consecuencia del aislamiento de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. En muchos casos, la violencia doméstica es de naturaleza instrumental, o sea que el hombre usa la violencia doméstica como medio para obtener un fin: en este caso, el control de la mujer y sus contactos con el mundo exterior. Eso reduce simultáneamente la calidad de la vida de la mujer y sus posibilidades de participar en actividades fuera del hogar, incluidas las actividades que contribuyen a la consolidación de la democracia en la región.

Los costos de la violencia social

Para analizar la violencia social se puede aplicar el mismo marco utilizado en la determinación de los costos socioeconómicos de la violencia doméstica: haciendo la distinción entre costos directos, costos no monetarios y efectos multiplicadores económicos y sociales. Con el propósito de facilitar la cuantificación del impacto de la violencia social, el Banco Interamericano de Desarrollo comisionó estudios en seis países de la región (Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela). A continuación se describen algunos de los costos socioeconómicos de la violencia social en esos países.

1) Costos directos. En Colombia, el gasto público en seguridad y justicia penal ascendió al 5% del PIB en 1996, en tanto que el gasto privado en seguridad representó el 1,4% del PIB (CEDE-Uniandes 1997:23-5)⁷. En El Salvador, los gastos de instituciones gubernamentales, los gastos judiciales, las lesiones personales y las actividades de pre-

vención llegaron a más del 6% del PIB de 1995 (Cruz y Romano 1997:32). En Venezuela, el gasto público en seguridad fue de alrededor del 2,6% del PIB de 1995 (IESA 1997:25-7). Los datos de México y Perú no son estrictamente comparables, ya que se refieren sólo a la Ciudad de México y a Lima respectivamente y no a cada país en conjunto. En la Ciudad de México, los gastos públicos y privados en medidas de seguridad ascendieron a US\$181 millones en 1995 (Fundación Mexicana para la Salud 1997), en tanto que la administración de justicia y las cárceles representaron otros US\$128 millones y US\$690 millones, respectivamente. El gasto público del gobierno nacional en policía, tribunales y cárceles en Lima fue alrededor del 1% del producto regional de la zona metropolitana de Lima en 1997, mientras que el gasto privado en medidas de seguridad representó otro 0,41% del producto regional (Instituto Apoyo 1997:26-8).

2) Costos no monetarios. En cinco de los estudios de casos se calcularon los años de vida saludables (AVISA) perdidos debido a la violencia. En El Salvador se perdieron 178.000 AVISA en 1995 por muertes violentas (Cruz y Romano 1997:30). La cifra fue 60.792 para todo Perú (Instituto Apoyo 1997:16), 163.136 en Rio de Janeiro (ISER 1998:42) y 57.673 en la Ciudad de México (Fundación Mexicana para la Salud 1997:14). El cálculo para Caracas no incluye la discapacidad (solamente la muerte), y aun así se perdieron 56.032 años potenciales de vida en 1995 por homicidios (IESA 1997:31). Para que se puedan comparar estas cifras entre países, se podría calcular el valor monetario de cada año de vida perdida, pero debido a la falta de precisión de estos cálculos decidimos no hacerlo en este caso. A fin de obtener un denominador común más razonable se podrían comparar los AVISA perdidos a causa de la violencia con los AVISA perdidos por otras causas comunes. Desafortunadamente, no es fácil calcular los AVISA perdidos por enfermedades comunes para todos los países. No obstante, en Colombia esta comparación es reveladora: entre 18 y 27% de todos los AVISA perdidos entre 1989 y 1995 se debieron a homicidios, cifra muy superior al promedio mundial, que llega sólo al 1,4%. En Colombia, los AVISA perdidos por homicidios son el triple de los que se pierden por enfermedades infecciosas y el doble de los perdidos por enfermedades cardiovasculares (CEDE-Uniandes 1997:12-16).

3) Efectos multiplicadores económicos. Los efectos multiplicadores económicos de la violencia social son muchos, pero también son difíciles de medir empíricamente. Los más importantes se observan en la acumulación individual de capital humano, en las posibilidades de trabajar y en el total de ahorros e inversiones.

En los estudios patrocinados por el BID, los costos económicos de la violencia se desglosaron en cuatro categorías: efectos en la salud (gastos en atención médica como consecuencia de la violencia), pérdidas materiales (gastos privados y públicos en policía, sistemas de seguridad y servicios judiciales), costos intangibles (lo que la gente estaría dispuesta a pagar para vivir sin violencia) y transferencias (valor de los bienes perdidos en robos, rescates pagados a secuestradores y sobornos pagados a

Cuadro 1.4 Costos económicos de la violencia social en seis países de América Latina

(Como porcentaje del PIB de 1997)

Costos	Brasil	Colombia	El Salvador	México	Perú	Venezuela
Pérdidas de salud	1,9	5,0	4,3	1,3	1,5	0,3
Pérdidas materiales	3,6	8,4	5,1	4,9	2,0	9,0
Intangibles	3,4	6,9	11,5	3,3	1,0	2,2
Transferencias	1,6	4,4	4,0	2,8	0,6	0,3
Total	10,5	24,7	24,9	12,3	5,1	11,8

Fuente: Juan Luis Londoño (1996), Epidemiología económica de la violencia urbana.

extorsionistas). Los costos calculados de este modo se expresaron como porcentaje del producto interno bruto de 1997. Los resultados van de un mínimo de 5,1% en Perú a un máximo de 24,9% en El Salvador, con un promedio de 14,2% para los seis países. En el cuadro 1.4 se presenta un desglose detallado de las estimaciones de estos costos.

Los estudios realizados en los seis países también arrojaron información importante sobre el impacto de la violencia en la formación de capital humano y en la oferta de mano de obra. En Colombia, 25% de las personas que antes trabajaban de noche dejaron de hacerlo por preocupaciones por su seguridad personal (Cuellar 1997). En Venezuela, un porcentaje idéntico ha limitado sus horas de trabajo debido a la violencia. Se calcula que las pérdidas económicas causadas por la reducción de las horas de trabajo ascienden a US\$207 millones (IESA 1997:28-9). En la Ciudad de México, las 34.000 víctimas de violencia en 1995 perdieron aproximadamente un millón de días de trabajo productivo como consecuencia de su estadía en el hospital y el tiempo que tardaron en recuperarse (Fundación Mexicana para la Salud 1997). En Colombia, 13% de los estudiantes que estudiaban de noche abandonaron sus estudios por miedo a la falta de seguridad, lo cual tendrá efectos duraderos en la masa de capital humano de Colombia.

En estudios de distintos países (Colombia y El Salvador) se afirma que la violencia ha conducido a una considerable disminución de las inversiones y el ahorro, pero es difícil cuantificar este impacto. Sin embargo, la relación de causa es clara: la violencia aumenta la incertidumbre económica. Ya que la rentabilidad de los proyectos de inversión desaparece al cabo de cierto período, los particulares y los empresarios no tienen seguridad del rendimiento. Ciertos sectores podrían verse fuertemente afectados por la violencia. Como se observó en un estudio del Banco Mundial (1997), el estancamiento del turismo en algunos países (se cita a Jamaica con frecuencia) se atribuye en parte a la falta de inversiones nuevas en hoteles y demás componentes de la infraestructura del turismo como consecuencia de la delincuencia y la violencia crecientes.

La violencia puede llevar a la destrucción física del capital de inversión, a una

disminución de la confianza de los consumidores y, a un cambio en la demanda, puede también modificar la demanda hacia productos relacionados con la seguridad⁸. Ante la falta de oportunidades interesantes para ahorros e inversiones en el país, la violencia puede estimular la fuga de capitales.

Sólo en el estudio de Colombia se intenta estimar el impacto de la violencia en las tasas de crecimiento. Se observó que la tasa de homicidios, que es extraordinariamente alta en el país, llevó a una disminución del PIB de alrededor del 2% anual (CEDE-Uniandes 1997).

4) Efectos multiplicadores sociales. Los estudios de país auspiciados por el BID arrojaron poca evidencia sobre los efectos multiplicadores sociales de la violencia social. De hecho, sólo en el estudio de Colombia se documenta esta preocupación, cuando se cita la privatización de las funciones de seguridad, la pérdida del monopolio estatal en el uso de la coerción como en el caso de los guerrilleros y los grupos paramilitares que imponen sus propios códigos de justicia, y el problema de las pandillas juveniles que se hacen cargo de la seguridad en muchos vecindarios urbanos pobres (CEDE-Uniandes 1997:23).

En otros estudios se han documentado los efectos multiplicadores sociales de la violencia. Moser y Holland (1997) observaron cómo la violencia comunitaria a menudo se traduce en miedo generalizado y en la falta de normas fundamentales de cooperación y comunicación. Dicha violencia puede tener efectos devastadores en el capital social.

Los efectos de mayor alcance de la violencia social no se prestan a cuantificación. Uno de los efectos cruciales es la transmisión intergeneracional de la violencia. Si los niños y jóvenes son enseñados por los adultos, los medios de comunicación y la sociedad que la violencia es un medio para acumular riqueza rápidamente, no es sorprendente que los jóvenes, especialmente los hombres, adopten un comportamiento violento⁹.

Para las organizaciones de derechos humanos de la región, el fenómeno está convirtiéndose en la amenaza más importante para las libertades fundamentales, la supremacía del derecho y la consolidación de la democracia (Fruhling 1995; Instituto de Defensa Legal 1996; Gregori 1997). Las instituciones democráticas se enfrentan con nuevas exigencias y desafíos creados por la inseguridad colectiva que no sólo afectan al desarrollo económico, sino que también suscitan serias dudas sobre su capacidad para combatir eficazmente la delincuencia. En algunos casos, las instituciones democráticas han sido infiltradas por organizaciones delictivas. En consecuencia, el impacto político de la violencia social es mucho mayor en un contexto regional caracterizado por una cultura democrática débil (Fruhling 1995). La violencia estructural, en la cual las fuerzas policiales o grupos paramilitares se convierten en agentes de violencia contra ciertos grupos, especialmente los niños de la calle, perjudica a la democracia y genera más violencia.

En la mayoría de los países de la región, los disidentes políticos ahora pueden

expresarse abiertamente y sin temor, aunque la gran mayoría de los ciudadanos, especialmente los pobres y desfavorecidos, con demasiada frecuencia están desprovistos de protección contra amenazas a su bienestar esencial. Sin embargo, todos los sectores de la sociedad, incluidos la clase media y el sector empresarial, están profundamente afectados por la violencia social y sufren sus consecuencias.

Políticas para contrarrestar la violencia

Los políticos y funcionarios públicos que están conscientes tanto de los costos socioeconómicos generados por la violencia y el incremento de la violencia doméstica y social, como del incremento de la violencia a través del tiempo, quieren actuar de inmediato para reducir los niveles de violencia. Las acciones deberán estar orientadas a los diversos factores que contribuyen al problema. Precisamente porque el fenómeno de la violencia se debe a múltiples causas, generalmente se necesita una combinación de medidas en los niveles individual, familiar y comunitario para combatirla. Eso no excluye la posibilidad de que las medidas para contrarrestar la violencia dirigidas a factores de riesgo determinados (como los programas de canje de armas o las campañas contra el alcoholismo) sean eficaces por sí solos, además de que son mucho más fáciles de implementar. Los gobiernos deben ponderar cuidadosamente los costos y beneficios de los programas integrales frente a los programas focalizados. Desafortunadamente, hay poca información sobre los costos de los programas, incluso desde el punto de vista meramente contable, a fin de evaluar las opciones. Las ventajas de los distintos tipos de programas tampoco está documentada.

Además de la distinción entre programas integrales y focalizados, las medidas pueden clasificarse en preventivas y lo que podría llamarse terapéuticas o correctivas. Los expertos concuerdan en que las estrategias preventivas generalmente son más costo-efectivas que las estrategias terapéuticas, especialmente en situaciones de mucha violencia como las que existen actualmente en gran parte de América Latina y el Caribe (Ratinoff 1997). Asimismo, como se ha comprobado que el comportamiento violento depende en gran medida de las características biológicas y el aprendizaje social en los años de formación, es mejor orientar las actividades de prevención a grupos jóvenes (véase en el cuadro 1.5 una lista sistemática de tipos de violencia, factores que contribuyen a la violencia, medidas para contrarrestarla e instituciones que desempeñan un papel protagónico).

Es importante reconocer que la prevención y el tratamiento no son excluyentes, sino que forman parte de un continuo de políticas necesarias para erradicar la violencia. En el extremo terapéutico del continuo se encuentran medidas de tratamiento más convencionales, que generalmente abarcan la policía, los tribunales y el sistema penitenciario. La meta específica de estas medidas es controlar la conducta de las personas

Cuadro 1.5 Tipos de violencia, factores que contribuyen a la violencia, medidas para contrarrestarla e instituciones protagonistas

Tipos de violencia	Factores que contribuyen a la violencia	Medidas para contrarrestar la violencia	Instituciones protagonistas
Violencia doméstica	<p><i>Individuales</i></p> <p>Sexo</p> <p>Factores biológicos/fisiológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sufrir o presenciar malos tratos físicos • Nivel de educación • Situación laboral • Consumo de alcohol o drogas <p><i>Familiares</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivel de ingresos per cápita • Estructura y composición (densidad) • Dinámica y normas (democráticas/autoritarias) 	<p><i>Preventivas</i></p> <p>Programas de empleo</p> <p>Servicios integrados comunitarios</p> <p>Educación y comunicación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sector de la enseñanza oficial • Actividades comunitarias populares • Campañas de educación • Medios de comunicación positivos <p>Infraestructura y servicios</p> <p>Control de la disponibilidad de drogas y alcohol</p> <p>Reforma policial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación • Patrullas vecinales <p>Reforma judicial</p> <p>Medidas legislativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control de la portación de armas • Mayor accesibilidad del sector salud 	<p>Gobierno municipal</p> <p>Gobierno nacional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerios de salud, justicia, educación y trabajo <p>Organizaciones no gubernamentales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos de desarrollo social • Grupos de defensa de los derechos humanos • Grupos de mujeres • Instituciones eclesásticas <p>Asociaciones y entidades vecinales</p> <p>Sector profesional y empresarial</p> <p>Universidades</p> <p>Medios de comunicación</p> <p>Hospitales</p>
Violencia social	<p><i>Comunitarios y sociales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobreza • Desigualdad • Índice de criminalidad • Valores culturales • Violencia en los medios de comunicación • Controles institucionales • Sistema policial y judicial • Alcohol y drogas • Capital social (normas y apoyo) • Densidad demográfica • Efectos de la posguerra (disponibilidad de armas) 	<p><i>Tratamiento y paliación</i></p> <p>Sanciones de la justicia penal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penas de cárcel más largas • Sentencias más severas <p>Terapia psicológica</p> <p>Terapia física</p>	<p>Policía</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisarías de mujeres • Patrullas vecinales <p>Tribunales</p> <p>Organizaciones multilaterales</p>

violentas (Fruhling 1997). En el centro del continuo se sitúan las medidas de prevención secundarias dirigidas especialmente a grupos de alto riesgo, como hombres jóvenes que han presenciado o sufrido actos de violencia. Estas medidas procuran modificar la conducta que hace que estas personas corran el riesgo de cometer o sufrir actos de violencia.

Al otro extremo del continuo están las políticas de prevención primaria que intentan modificar actitudes, normas y comportamientos sociales de la población general. Dichas políticas, a menudo apuntan a más de un factor de riesgo y procuran influir en el comportamiento de grupos de una edad determinada u otros tipos de individuos, como padres y niños pequeños.

En el lado de la prevención del continuo tratamiento-prevención es útil hacer una distinción entre la prevención orientada a antecedentes de situaciones de comportamiento violento y la prevención orientada a los factores sociales determinantes de la violencia. La primera está dirigida a las posibles víctimas y procura reducir la probabilidad de que se produzca el comportamiento violento (haciendo que los delitos violentos sean más difíciles, más arriesgados o menos provechosos), mientras que la segunda está dirigida a los posibles agresores y procura reducir la probabilidad de formar personas violentas (poniendo de relieve intervenciones sociales positivas con los niños pequeños o subgrupos que corren un alto riesgo de comportarse de forma violenta).

A fin de ilustrar las formas más efectivas de hacer frente a la violencia, es conveniente examinar en detalle cuatro factores contribuyentes y explorar qué intervenciones para contrarrestar la violencia tienen más sentido. Se han seleccionado estos cuatro factores porque son bastante representativos y prominentes en la región, además de que ponen de relieve la influencia que distintos conjuntos de medidas pueden tener en diferentes factores que contribuyen a la violencia. Estos factores son el aprendizaje de la agresión, el consumo de alcohol y drogas, la pobreza y la desigualdad, y la disponibilidad de armas.

El aprendizaje de la agresión

Existen factores en distintos niveles que promueven el aprendizaje de la agresión. A nivel individual, abarcan la violencia física o la exposición a maltrato y modelos agresivos, así como el bajo nivel de educación. A nivel de la sociedad, consisten en el papel a menudo negativo de los medios de comunicación y valores culturales que condonan o promueven la violencia.

Ya que es más fácil prevenir el aprendizaje de la agresión antes que promover su “desaprendizaje”, los pasos preferidos a seguir incluyen el desarrollo social de los niños pequeños y grupos de alto riesgo, así como la prevención de la violencia doméstica. El sistema de educación tiene la posibilidad de modificar valores culturales que

promueven la utilización de la violencia. La reforma de los programas de enseñanza a fin de eliminar los estereotipos de género en las escuelas (con la enseñanza de las contribuciones de la mujer en las clases de historia, la eliminación de los estereotipos sobre el papel del hombre y la mujer en los libros de texto y la promoción de la participación de las niñas en los deportes) es un paso importante para alcanzar la igualdad de género, reducir la violencia y fomentar valores cívicos.

El uso de medios didácticos para enseñar la no agresión en las escuelas puede ser muy eficaz, especialmente en vecindarios de alto riesgo. Algunos programas educativos innovadores que enseñan a los niños a resolver conflictos pacíficamente (como el programa de las escuelas primarias y secundarias de London, Canadá, que se describe en otro capítulo de este libro) han dado resultado. Las escuelas son también un vehículo idóneo para identificar niños y familias de alto riesgo para la violencia que podrían beneficiarse de los servicios disponibles. Las inversiones complementarias incluyen programas de crianza para que los padres refuercen en el hogar las enseñanzas de la escuela y programas para la primera infancia que den a los niños pequeños la crianza y los modelos positivos que necesitan para un desarrollo saludable.

También son apropiadas las actividades comunitarias de educación popular para enseñar a los ciudadanos las sanciones legales contra la violencia, las estrategias efectivas de prevención comunitarias y los servicios sociales disponibles para las víctimas de violencia. Las organizaciones no gubernamentales son importantes para esta tarea, igual que las asociaciones vecinales de diversos tipos. Los grupos de mujeres pueden ser muy instrumentales en la implementación de actividades de educación informal para abordar el problema de la violencia doméstica (véase el capítulo 12). Además, se pueden dirigir actividades similares, con buenos resultados, a los hombres, ya que son los agresores más probables, en circunstancias de ese tipo, como ocurrió en los años noventa en Argentina, Chile, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago, y México (véase en el capítulo 8 una descripción del programa llevado a cabo en México). Estos programas tienen un componente correctivo, que enseña a los hombres a controlar su comportamiento violento, y uno preventivo, que ayuda a desvincular los conceptos de masculinidad y violencia.

Las campañas educativas en los medios de comunicación constituyen una respuesta que podría ser eficaz al ofrecer modelos de conducta no violenta y reforzar respuestas no violentas. En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con gobiernos y grupos de mujeres de toda América Latina y el Caribe, desarrollo y difundió un video educativo para que el público tome conciencia del problema de la violencia doméstica. Las actividades educativas pueden abarcar también los medios de comunicación comerciales, impulsándolos a producir y difundir imágenes más positivas de la interacción interpersonal (entre hombres y mujeres, así como entre adultos y niños). Puede ser muy positivo mostrar la resolución pacífica de conflictos, especial-

mente en programas de entretenimiento tales como telenovelas. Los resultados de varios estudios realizados en Estados Unidos señalan la importancia de presentar a la mujer de forma más positiva y mostrar la solución no violenta de conflictos para reducir tanto la violencia doméstica como la violencia social (PAHO 1996; Shifter 1997). La participación de los medios de comunicación, incluidos los que operan con fines comerciales, en las campañas de prevención de la violencia puede contrarrestar el efecto negativo de los medios de comunicación comerciales en la enseñanza de la agresión. (En la tercera parte del libro se examina el papel de los medios de comunicación.)

El consumo de alcohol y drogas

El consumo de alcohol y drogas es un factor de riesgo ampliamente reconocido de violencia social y doméstica a nivel individual, comunitario y social. Desde el punto de vista preventivo, hay toda una gama de opciones. La combinación de medidas implementadas como parte del programa Desepez (Desarrollo, Seguridad y Paz) en Cali (Colombia) parece ser especialmente prometedora. El programa utilizó un enfoque epidemiológico, mediante el cual documentaron en detalle incidentes violentos, incluyendo información sobre niveles de alcohol en los agresores y el lugar preciso de los incidentes. Esta información le permitió a la administración, municipal desarrollar medidas concretas para combatir el comportamiento violento. Estas medidas incluyen la mejora del alumbrado de la vía pública, una serie de medidas para entablar el diálogo con jefes de pandillas y la limitación de la disponibilidad de alcohol, prohibiendo su venta durante ciertas horas. La tasa de homicidios de Cali bajó considerablemente tras la aplicación de estas medidas, lo cual demuestra que los gobiernos municipales tienen a su disposición instrumentos para reducir la violencia social (Guerrero 1997). Además, las campañas bien pensadas y de amplio alcance en los medios de comunicación dirigidas a los jóvenes y a otros grupos pueden poner de relieve los riesgos y reducir el interés en el consumo de alcohol y drogas.

A fin de mejorar la prevención, se necesitan medidas concretas para abordar (si bien indirectamente) las condiciones que llevan al consumo de alcohol y drogas. Entre las opciones se encuentran programas de empleo orientados a los sectores en riesgo (Banco Mundial 1997), servicios comunitarios integrados (como la mejora de barrios pobres, lugares de esparcimiento o centros para adolescentes) orientados a renovar el capital social, promover el cumplimiento de normas y ofrecer apoyo, especialmente para los jóvenes (Moser y Holland 1997), y otras medidas para evitar el aprendizaje del comportamiento agresivo ya descrito. La idea es ofrecer a los hombres jóvenes en riesgo alternativas que sean incompatibles con el consumo de drogas o alcohol y con el comportamiento violento, entre ellas trabajo remunerado y deportes. Además de los organismos municipales y nacionales pertinentes, el sector empresarial y las organiza-

ciones multilaterales pueden ser útiles en esta tarea, brindando apoyo a programas de empleo focalizados.

Por último, a fin de prevenir y hacer frente con visión de futuro a la propagación del uso y la distribución de drogas en todo el continente, es importante fortalecer la capacidad de instituciones tales como los sistemas policial y judicial a fin de que puedan desempeñar sus papeles y funciones profesionales. Muchos gobiernos nacionales de América Latina y el Caribe, por medio de sus ministerios de justicia, ya han puesto la reforma judicial y policial a la cabeza de su agenda. El BID, por su parte, está financiando varios programas de reforma institucional de los sistemas policiales y judiciales de la región (Jarquín y Carrillo 1997), mientras que el Banco Mundial se concentra en la reforma judicial. Las medidas legislativas nacionales, junto con el trabajo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos y la Convención de Viena de las Naciones Unidas, pueden facilitar el establecimiento de normas regionales e internacionales que promuevan una mayor cooperación para enfrentar colectivamente el problema de las drogas.

Pobreza y desigualdad

La pobreza y desigualdad agudas se encuentran entre los problemas más persistentes e insolubles que contribuyen de forma directa o indirecta a la violencia social y doméstica en América Latina y el Caribe. Las medidas para contrarrestarla son principalmente preventivas y a largo plazo.

Sin embargo, los datos muestran que se ha progresado un poco en la región, por lo menos en lo que atañe al alivio de la pobreza en varios países (Lustig 1995). En este sentido, las medidas macroeconómicas acertadas, sumadas a la política de los sectores público y privado, pueden ser útiles para generar empleo. Tener un trabajo bueno y estable puede reducir considerablemente la probabilidad de que una persona cometa actos de violencia social o doméstica, especialmente ante la falta de sistemas de bienestar eficaces. La disponibilidad de empleo para la mujer, en particular, puede cambiar el equilibrio de poder en las relaciones familiares, tal vez sirviendo como protección contra la violencia en el hogar o por lo menos ofreciendo a las mujeres cierto grado de autonomía económica si necesitan salir de una relación peligrosa.

Además, los fondos de inversión social, como el que se instituyó en Jamaica y en muchos otros países, pueden ayudar a reponer el capital social agotado de una localidad. Los programas podrían incluir recursos para el equipamiento y la rehabilitación de centros deportivos, para adolescentes y de capacitación, así como actividades orientadas a la solución de conflictos (Moser 1996).

Los estudios preliminares revelan que, especialmente con respecto al grado de desigualdad, un mayor acceso a la educación y a los servicios de salud podría ser una

solución sumamente eficaz a largo plazo (Birdsall y Sabot 1994). En estudios recientes realizados por el Banco Mundial se observó que la educación tiende a tener un efecto retardado en la reducción de la delincuencia: el efecto no se nota durante la etapa de formación de los jóvenes, sino cuando se convierten en adultos (Fajnzylber 1997). Las autoridades que estén preocupadas por el problema de la violencia y que busquen soluciones a largo plazo podrían considerar la posibilidad de llevar a cabo varias reformas institucionales, entre ellas la asignación de más recursos a la enseñanza primaria, mejores maestros con sueldos más altos y mayor autonomía de las escuelas en el manejo de sus asuntos (Puryear y Bruner 1995). El propósito de estas reformas institucionales debe ser eliminar los estereotipos de género en la enseñanza y, en términos más generales, garantizar la equidad de género en el acceso a una enseñanza de buena calidad.

Asimismo, frente al alto grado de desigualdad, que tiende a crear resentimientos y falta de comunicación entre comunidades y representantes del sector público, se podría considerar la posibilidad de recurrir a las patrullas vecinales. Un ejemplo interesante es el de Viva Rio, en Rio de Janeiro, donde se ha adoptado una estrategia preventiva basada en relaciones más productivas entre las fuerzas policiales de la ciudad y los habitantes del vecindario (Sussenkind 1997; Fernandes 1997). Aunque los resultados son preliminares y difíciles de confirmar, en varios lugares de la ciudad el programa parece estar teniendo el resultado esperado, o sea reducir la delincuencia. Las patrullas vecinales constituyen una opción prometedora que, al fortalecer la confianza y ofrecer a los vecinos una protección mayor y más eficaz, de ciertas formas puede reducir las marcadas desigualdades en los servicios y abordar sus consecuencias.

Disponibilidad de armas

Evidentemente, uno de los principales factores de riesgo, en particular para la violencia social, es la disponibilidad de armas. Las armas incitan a la violencia y agravan los episodios violentos. En muchos casos, su disponibilidad es producto directo de muchos años de guerra y conflictos internos. El problema tal vez sea más agudo y difundido en América Central, especialmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países que están saliendo de conflictos internos. En estos países se han llevado a cabo programas especiales, con distintos grados de éxito, para controlar la disponibilidad de armas, generalmente en el marco de acuerdos políticos de paz entre ex combatientes, pero es importante continuar esta tarea fuera el ámbito del proceso de paz y ofrecer incentivos para que la gente entregue las armas (Cruz y Romano 1997).

En ese sentido, un programa prometedor es el iniciado en Bogotá por el gobierno municipal para comprar armas a la población, pagándole en efectivo. Este programa muestra la utilidad de la colaboración entre el sector público y la sociedad civil (en este caso, la Iglesia) en la ejecución de una campaña fructífera, así como la impor-

tancia de mensajes simbólicos para cambiar una cultura de violencia, como fundir armas de fuego y fabricar cucharitas para bebés.

La legislación nacional, junto con los convenios e instrumentos internacionales relacionados con el control de las armas pequeñas, como el propuesto por México y aprobado en la Asamblea General de la OEA en junio de 1997, también puede facilitar el establecimiento de normas nacionales y regionales para reducir su disponibilidad. Una acción más eficaz y responsable para velar por el cumplimiento de las leyes, con una fuerza policial reformada y más profesional, también podría reducir la disponibilidad de armas.

Los próximos pasos

La agenda contra la violencia en la región enfrenta desafíos prácticos y de investigación. Como se ha documentado en este trabajo, se ha dedicado mucho tiempo al estudio de la violencia desde la óptica de diversas disciplinas. Los estudios sobre la violencia que se realicen en la región deben ser puntuales y prácticos. Se pueden sintetizar, transferir y aprovechar los conocimientos generados en los últimos cuarenta o cincuenta años en los países industrializados y llevar a cabo investigaciones sobre las causas de la violencia para llenar las principales lagunas conceptuales, como la relación entre la violencia en la calle y la violencia doméstica, o entre pobreza, desigualdad y distintas formas de violencia. Se necesitan más estudios sobre tres temas que contribuyen de forma directa a la formulación de intervenciones: la magnitud, el costo y la evaluación de intervenciones piloto y de "buenas prácticas".

El subregistro y la falta de denuncia de la violencia son problemas serios, especialmente en el caso de la violencia doméstica. Necesitamos estadísticas mucho más confiables y comparables sobre la incidencia y prevalencia de la violencia. Asimismo, es necesario ampliar la gama de indicadores para determinar la magnitud de la violencia.

Los estudios en curso de los costos y las consecuencias de la violencia, combinados con mejores datos sobre la magnitud del problema, pueden servir para justificar intervenciones y señalar los campos prioritarios. Sin embargo, el componente decisivo, difícil y hasta ahora en gran medida ausente de las intervenciones eficaces es el conocimiento práctico de lo que da resultado. Se necesita con urgencia investigar y documentar buenas prácticas, evaluar proyectos piloto en ejecución y poner en marcha iniciativas piloto con sólidos componentes de evaluación en diversos sectores.

El principal desafío surge en la esfera de la prevención. En la región se ha insistido en combatir la violencia con medidas punitivas por medio de la policía y los tribunales, y se ofrecen algunos servicios de tratamiento a las víctimas de la violencia. Las medidas preventivas, que tienen un costo comparativamente bajo y podrían tener un rendimiento alto, han estado ausentes. Son pocos los programas de prevención, la

mayoría de ellos en Colombia, que han tomado la delantera en la acción contra la violencia

Las medidas preventivas pueden reducir los factores de riesgo que llevan a la violencia, reforzar los factores de protección y abordar otros determinantes situacionales o sociales de la delincuencia y la violencia. Las medidas situacionales pueden aumentar el riesgo y reducir los beneficios del comportamiento violento y reducir al mínimo los estímulos del medio que llevan a la agresión. La prevención puede estar orientada a la población en general (prevención primaria) o a grupos de alto riesgo, como los niños maltratados, los jóvenes desocupados o las familias monoparentales (prevención secundaria). Al tomar medidas preventivas hay que tener en cuenta los nexos conceptuales entre la violencia doméstica y la violencia social e intervenir cuanto antes a nivel individual.

Por encima de todo, es necesario evitar las falsas dicotomías: para prevenir el delito, no es necesario elegir entre el alivio de la pobreza y el refuerzo de la policía y las cárceles. Ambos enfoques tienen algo de verdad, y los gobiernos deben tomar medidas enérgicas para combatir la pobreza y reformar y modernizar los sistemas judicial y policial. Sin embargo, ambos enfoques son complejos, a largo plazo y costosos. Los programas de prevención del maltrato infantil en las escuelas primarias y secundarias se encuentran entre las intervenciones a menor escala que redundan en grandes dividendos en cuanto a la prevención del delito. Otras intervenciones muy productivas y de bajo costo son los programas de prevención de la violencia en las escuelas primarias y secundarias, los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas, y las medidas situacionales de prevención del delito, como programas que controlan el portar armas o de canje de armas, alumbrado de la vía pública y otras medidas de seguridad, y restricción de la venta de bebidas alcohólicas durante ciertos períodos de alto riesgo. Las campañas bien pensadas y focalizadas en los medios de comunicación, incluidos los programas que se difunden en medios comerciales, pueden ayudar mucho a reforzar los valores cívicos, modificar las ideas prevalecientes del comportamiento aceptable entre personas de ambos sexos y facilitar la prevención de la violencia doméstica y social. Las inversiones en el desarrollo en la primera infancia y en oportunidades económicas para los pobres, tanto mujeres como hombres jóvenes, son estrategias decisivas a largo plazo para prevenir la violencia y promover el crecimiento económico en la región. Las múltiples ventajas de la prevención de la violencia para el bienestar y los derechos humanos, así como su impacto positivo en el crecimiento económico, hacen que las inversiones en estos programas encajen perfectamente en la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo.

Notas

¹ La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desempeñó un papel decisivo al recalcar la dimensión de la violencia doméstica relacionada con los derechos humanos. La Convención de Belem, que obliga a los gobiernos signatarios a trabajar en pos de la eliminación de la violencia doméstica, emanó de los esfuerzos de la OEA y muchos activistas de la región.

² La violencia entre ex integrantes de una familia, como entre ex esposos o ex compañeros, también se clasifica como violencia doméstica.

³ Al mismo tiempo, el uso sostenido de la violencia instrumental puede llevar a una mayor violencia emocional, a medida que la gente se acostumbra a recurrir a la violencia para solucionar problemas.

⁴ Otros tres factores sociales (el índice de criminalidad general, la cantidad de capital social y los valores culturales relativos al uso de la violencia) probablemente sean importantes, pero es muy difícil cuantificar su impacto.

⁵ Algunas de estas categorías han sido tomadas de Laurence y Spalter-Roth (1996).

⁶ Aquí hay que tener cuidado para evitar la doble contabilidad. Si un episodio de morbilidad genera una demanda de atención médica, ya no se considera como un costo no monetario y debe incluirse en la categoría de “costos directos”.

⁷ Contar todos los gastos en fuerzas policiales y sistemas de justicia penal como “costos directos de la violencia” llevaría a una sobrestimación de los verdaderos costos directos, ya que algunos de estos gastos se realizarían incluso si no existiera violencia. Además, la mera existencia de la policía y la justicia penal puede prevenir ciertos tipos de violencia (como la instrumental).

⁸ En el estudio de la zona metropolitana de Lima, este efecto era obvio: más de 800.000 habitantes iban de compras con menos frecuencia como consecuencia directa de la violencia.

⁹ En Colombia se preguntó a jóvenes de 18 a 24 años en una encuesta: ¿A quién cree Ud. que le va bien en Colombia? Las respuestas (que no se excluyen mutuamente) fueron las siguientes: los políticos (41%), los ricos (25%), los vivos (18%), la gente deshonesto (17%), los que tienen conexiones (15%), los que tienen suerte (14%), los que trabajan (13%) y los que estudian (13%). Con el estudio y el trabajo en último lugar, no causa sorpresa que los jóvenes colombianos a menudo recurran a la violencia para alcanzar sus metas (véanse en Cuéllar de Martínez (1997) los resultados completos de esta encuesta).

Referencias

- American Psychological Association (APA). 1993. *Violence and Youth I*. New York: APA.
- Banco Mundial. 1997. Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean. Reunión sobre "El desafío de la violencia criminal urbana". Estado de Rio de Janeiro/BID. Rio de Janeiro, Brasil, 2-4 de marzo.
- . 1993. *Informe sobre el desarrollo Mundial*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Bandura, A. 1973. *Aggression: A Social Learning Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Berkowitz, Leonard. 1993. *Aggression: Its Causes, Consequences and Control*. New York: McGraw Hill, Inc.
- Birdsall, Nancy, y Richard Sabot. 1994. Inequality, Exports and Human Capital in East Asia: Lessons for Latin America. En *Redefining the State in Latin America*, ed. Colin Bradford, Jr. Paris: OECD Development Centre and IDB.
- Blau, J. R. y P. M. Blau. 1982. The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime. *American Sociological Review* 47:114-129.
- CEDE-UNIANDES. 1997. *Violencia en Colombia: Dimensionamiento y Políticas de Control*. Bogotá: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.
- Centers for Disease Control. 1989. *Injury Prevention: Meeting the Challenge. A Report of the National Committee for Injury Prevention and Control*. New York: Oxford University Press.
- Centro Paraguayo de Estudios de Población, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y USAID. 1996. *Encuesta Nacional de Demografía y Salud Reproductiva, 1995-96*. Asunción: CEDEP.
- Cuéllar de Martínez, María Mercedes. 1997. *Valores y capital social en Colombia*. Bogotá: Fundación Porvenir y Universidad Externado de Colombia (investigación en curso).
- Cruz, José Miguel y Luis Ernesto Romano. *La Violencia en El Salvador en los noventa: magnitud, costos y factores posibilitadores*. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana José Simeón Calas.
- Eron, Leonard y Ronald Slaby. 1994. Introduction. En: L. Eron (ed.), *Reason to Hope: A Psycho-Social Perspective on Violence and Youth*. Washington, DC: American Psychological Association.

Fajnzylber, Pablo. 1997. *What Causes Crime and Violence?* Washington DC: The World Bank, Office of the Chief Economist for Latin America and the Caribbean (26 de septiembre).

Fernandes, Rubem César. *Viva Rio: processos de integração cívica da cidade. La ciudad latinoamericana y del Caribe en el Nuevo Siglo, Taller 8*. BID. Barcelona, España, 13-15 de marzo.

Frühling E., Hugo. La violencia delictual en América Latina y el Caribe: diagnóstico, propuestas y recomendaciones. New York: PNUD.

———. 1997. *La prevención del crimen: notas sobre la justicia penal y la reducción de oportunidades para la delincuencia*. Reunión sobre "El desafío de la violencia criminal urbana". Estado de Rio de Janeiro/Banco Interamericano de Desarrollo. Rio de Janeiro, Brasil, 2-4 de marzo.

———. 1995. Judicial Reform and Democratization in Latin America. Preparado para la conferencia sobre "Fault Lines of Democratic Governance in the Americas". North-South Center, University of Miami, Florida, May 4-6.

Fundación Mexicana para la Salud, Centro de Economía y Salud. 1997. La violencia en la Ciudad de México: análisis de la magnitud y su repercusión económica. México: Fundación Mexicana para la Salud (agosto).

Granados Shiroma, M. 1995. La violencia contra la mujer. En: Foro Estatal para el Programa Nacional de la Mujer: Memoria. Monterrey: FNUAP.

Greaves, Lorraine. 1995. Selected Estimates of the Costs of Violence against Women. London, Ontario: Centre for Research on Violence against Women and Children.

Guerrero, Rodrigo. 1997. Prevención de la violencia a través del control de sus factores de riesgo. Reunión sobre "El desafío de la violencia criminal urbana". Estado de Rio de Janeiro/BID. Rio de Janeiro, Brasil, 2-4 de marzo.

Heise, Lori L. Violence Against Women: An Integrated, Ecological Model. Takoma Park, MD: The Health and Development Policy Project.

Heise, Lori, Jacqueline Pitangui y Adrienne Germain. 1994. Violence Against Women: The Hidden Health Burden. World Bank Discussion Paper No. 255. Washington, DC: World Bank.

Huesmann, L.R., et al. 1984. The stability of aggression over time and generations. *Developmental Psychology* 20:1120-1134.

Huesmann, L.R., y L. D. Eron, eds. 1986. *Television and the aggressive child: A cross-national comparison*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

- IESA, LACSO. 1997. La violencia en Venezuela: dimensionamiento y políticas de control. Informe final. Caracas, Venezuela: IESA y LACSO (julio).
- Instituto APOYO. 1997. *La violencia intencional en Lima metropolitana; magnitud, impacto económico y evaluación de políticas de control, 1985-1995*. Perú: Instituto APOYO (agosto).
- ISER. 1998. Magnitude, custos econômicos e políticas de controle da violencia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Religião.
- Jaffe, Peter G., S.K. Wilson y D. Wolfe. 1989. Specific Assessment and Intervention Strategies for Children Exposed to Wife Battering: Preliminary Empirical Investigation. *Canadian Journal of Community Mental Health* 7:157-63.
- Jarquín, Edmundo y Fernando Carrillo (eds.). 1997. *La economía política de la reforma judicial*. Washington, DC: BID.
- Larraín Heiremans, Soledad. 1994. *Violencia puertas adentro: la mujer golpeada*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Laurence, Louise y Roberta Spalter-Roth. 1996. Measuring the Costs of Domestic Violence Against Women and the Cost-Effectiveness of Interventions: An Initial Assessment and Proposals for Further Research Washington, DC: Institute for Womens Policy Research.
- Levinson, D. 1989. *Violence in Cross-Cultural Perspective*. Newbury Park: Sage Publishers.
- Londoño, Juan Luis. 1996. Violencia... y capital social: notas sobre América Latina y Colombia. Documento de trabajo presentado en la II Conferencia Latinoamericana sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes, Bogotá.
- Lustig, Nora (ed.). 1995. *Coping with Austerity: Poverty and Inequality in Latin America*. Washington, DO The Brookings Institution.
- Moser, Caroline. 1996. Urban Poverty and Violence: Consolidation or Erosion of Social Capital? Informe para la Segunda Conferencia Anual del Banco Mundial sobre el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Bogotá, Colombia, 30 de junio-2 de julio.
- Moser, Caroline, y Jeremy Holland. 1997. Urban Poverty and Violence in Jamaica. Monografía encargada por el Banco Mundial. Washington, DC (febrero).
- Murray, C. y A. López. 1996. The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Boston: Harvard University Press.
- Pan American Health Organization y World Health Organization. 1996. Violence and the Media. Washington, DC: PAHO y WHO (septiembre).

- Prothrow-Stith, Deborah. 1998. Public-Private Partnerships for Violence Prevention. Monografía presentada en el seminario "Violence in Latin America: Policy Implications from Studies on the Attitudes and Costs of Violence". Boston: Harvard University, David Rockefeller Center for Latin American Studies.
- Puryear, Jeffrey y José Joaquín Brunner (eds.). 1995. Educación, Equidad y Competitividad Económica en las Américas. Washington, DC: OEA.
- Quiroz, E. y Barrantes, O. 1994. ¿Y vivieron felices para siempre? San José, Costa Rica: Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia.
- Ratinoff, Luis. 1997. Urbanización y crimen. Reunión sobre "El desafío de la violencia criminal urbana". Estado de Rio de Janeiro/BID. Rio de Janeiro, Brasil, 2-4 de marzo.
- Shifter, Michael. 1997. Violencia y los medios: agenda democrática. Informe preparado por la conferencia "Crimen urbano". BID, Rio de Janeiro, Brasil, 2-4 de marzo.
- Stanley, Connie. 1992. Domestic Violence: An Occupational Impact Study. Tulsa, OK Domestic Violence Intervention Services, Inc. (fotocopia).
- Strauss, M.A., R.J. Gelles y S. Steinmetz. 1980. *Behind Closed Doors*. New York: Doubleday.
- Sussenkind, Elizabeth. 1997. Brasil - Violencia, juventud e ciudadanía. Reunión sobre "El desafío de la violencia criminal urbana". Estado de Rio de Janeiro/BID. Rio de Janeiro, Brasil, 2-4 de marzo.
- Wolfe, D.A., P. Jaffe, S. Wilson y L. Sluszarzck. 1985. Children of Battered Women: The Relation of Child Behavior to Family Violence and Maternal Stress. *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 53:657-65.

¿Es la pobreza una causa de violencia doméstica?

Respuestas de Lima

Efraín Gonzales de Olarte y Pilar Gavilano Llosa¹

La violencia doméstica contra la mujer es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores. La pobreza parece ser un factor importante, pero es difícil determinar en qué medida lo es. Muchos estudios indican una correlación entre la violencia doméstica y el grado de pobreza de la población, mientras que otros análisis muestran que el fenómeno atraviesa las líneas divisorias entre clases sociales y las afecta a todas sin distinción. Algunos afirman que la incidencia aparentemente mayor de la violencia entre los pobres se debe a un sesgo en los métodos de recopilación de datos: los grupos de mayores ingresos pueden mantener mejor la intimidad que los sectores pobres. Según esta opinión, la violencia doméstica no prevalece más entre los pobres, sino que es más obvia.

Esperamos contribuir a dilucidar este problema con nuestro estudio de la zona metropolitana de Lima (a la cual nos referiremos como Lima metropolitana). Nuestro estudio se propone descubrir si hay una correlación entre el grado de pobreza y el grado de violencia doméstica en sectores de bajos y medianos ingresos de Lima metropolitana. Examinamos tres tipos de violencia doméstica: física, psicológica y sexual (véanse las definiciones en el recuadro 2.1). Específicamente, decidimos buscar correlaciones entre el grado y los tipos de violencia sufridos por las mujeres y las siguientes variables: ingresos, educación, edad, estado civil, situación laboral, desempleo, número de hijos, embarazo y acceso a servicios básicos.

Además, exploramos la posible influencia de otras variables que operan en el entorno social, fuera de la familia, y que podrían tener cierta influencia en el comportamiento violento de un hombre hacia su pareja. Consideramos las siguientes variables: el acceso de la mujer a redes de apoyo de parientes, amigos o vecinos, participación en actividades comunales, presencia de organizaciones religiosas en la comunidad y participación de la familia en sus actividades, niveles de delincuencia en el barrio, y proximidad de servicios estatales, como agentes de policía o guardias municipales.

Recuadro 2.1 Definiciones de la violencia doméstica contra la mujer

A efectos del presente estudio, la violencia doméstica abarca la violencia física, psicológica y sexual. Si una mujer sufre por lo menos una de ellas, y si la agresión viene de su pareja, dicha mujer es víctima de violencia doméstica. Aunque hacemos una distinción entre estos tres tipos, no siempre se pueden separar. Un mismo acto (como una violación) puede implicar los tres tipos de violencia.

La *violencia física* es toda acción destinada a causar daño físico o dolor a otra persona. El agresor puede infligir este daño con su propio cuerpo o con un objeto. Empujones, tirones de cabello, pellizcos, apretones, torceduras, cachetadas, puñetazos, puntapiés, golpes con objetos, golpes contra la pared, quemaduras y ataques con objetos contundentes, punzantes y cortantes o con armas de fuego son formas de violencia física, y obviamente algunas son más dañinas que otras.

La *violencia psicológica* comprende toda acción u omisión destinada a producir daño psicológico o dolor moral a otra persona, como sentimientos de ansiedad, inseguridad, invalidez, desamparo, culpabilidad, frustración o fracaso, miedo, humillación, falta de libertad o autonomía y pérdida de la autoestima. Este comportamiento puede tomar la forma de críticas destructivas, insultos, chantaje emocional, burla o ridiculización, amenazas de abandono o de maltrato, prohibición de salir a trabajar o de tener contacto con otras personas, encierro en la casa, vigilancia, persecución constante o frecuente, limitación irrazonable del acceso a los bienes comunes y de su manejo, privación de alimentos o descanso, amenazas de quitar la custodia de los hijos o de infligirles daños, destrucción de objetos que pertenecen a la persona, o no proporcionar lo necesario para el sustento de la familia, pudiendo hacerlo.

La *violencia o coerción sexual* comprende todo acto en el cual una persona que está en una posición de poder obliga a otra a realizar actos sexuales contra su voluntad, por medio de amenazas, chantaje o fuerza física. Incluye tanto el coito como las relaciones sexuales orales y anales. Se puede considerar también como violencia sexual la exhibición sexual frente a alguien que no lo desea, tocar o manosear a alguien contra su voluntad, y obligar a alguien a ver material pornográfico, a tocar los genitales o a tener contacto sexual con terceros. La violencia sexual puede incluir también impedir que una mujer use anticonceptivos, obligándola a quedar embarazada, exigirle que aborte o exponerla a sabiendas a una enfermedad de transmisión sexual.

Pobreza y violencia

La pobreza puede analizarse como un concepto absoluto o relativo. La pobreza absoluta es una situación en la cual el individuo o la familia no tiene los ingresos o recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas. La pobreza relativa se define en comparación con un grupo de referencia apropiado y revela la existencia de desigualdades socioeconómicas. El indicador pertinente de la pobreza relativa consiste en la comparación del nivel de vida de la familia con la forma de vida de la comunidad, o sea el nivel social promedio del entorno en que vive la familia.

Ambos tipos de pobreza pueden contribuir a la violencia, pero se considera que la pobreza absoluta es la base fundamental de la violencia familiar y contra la mujer en el hogar. La pobreza relativa, sin embargo, puede constituir un elemento complementario en la generación de violencia en el hogar, porque las familias en esta categoría no pueden alcanzar los “estándares de consumo”, aparte de los alimentos, que la sociedad considera necesarios, lo cual puede causar frustración.

¿Existe una relación positiva entre la pobreza y la tendencia al conflicto y la violencia? La creencia común es que sí, basándose en la idea de que la pobreza produce frustraciones que desencadenan comportamientos violentos. Las malas condiciones de vida, como el hacinamiento, la carencia de servicios básicos, la falta de oportunidades de recreación, el elevado consumo de alcohol, la falta de educación, la falta de trabajo y de oportunidades para mejorar el nivel de vida, y la carga que representa una familia numerosa, son factores agravantes que podrían predisponer a la conducta violenta de los integrantes de familias pobres y marginadas. Una de las formas más comunes de violencia doméstica se da entre el marido, considerado como el proveedor de la familia, y la esposa, considerada como la administradora del hogar. En el caso del hombre, la causa del conflicto podría ser un déficit en el sustento material de la familia, y en el caso de la mujer, una administración ineficiente de lo poco que tienen, que “no alcanza”. Desde esta óptica, la violencia doméstica tiene un origen económico.

El contexto socioeconómico de Lima

Recurrimos a Lima para comprobar la validez de esta teoría. Lima metropolitana es la ciudad más grande de Perú, con 7 millones de habitantes. Las mujeres representan el 51% de la población y poco más de un tercio de la población económicamente activa. Lima es la región económica más importante de Perú: concentra el 45% del producto interno bruto y el 55% del ingreso nacional, aunque sólo tiene el 29% de la población nacional. También es la región que presentó el mayor crecimiento económico a mediados de los años noventa. Esta concentración económica genera dos problemas. Por un lado, la población de la ciudad está creciendo a una tasa del 3% al año, en parte porque la economía pujante atrae a migrantes del resto del país, y por otro, existe una concentración del ingreso en un pequeño sector de la población, paralelamente a un alto grado de pobreza y violencia en el resto.

La pobreza

El porcentaje de la población de Lima que vive por debajo de la línea de pobreza se triplicó entre 1986 y 1991; para 1991, casi la mitad de la población de la ciudad vivía en situación de pobreza. Para mediados de los años noventa, la situación había mejorado

como consecuencia del crecimiento económico, pero la pobreza seguía siendo elevada. Casi el 40% de la población de Lima metropolitana vivía por debajo de la línea de pobreza en 1996, y casi el 5% lo hacía en condiciones de extrema pobreza.

Asimismo, la distribución de ingresos era muy desigual. El gasto total del 10% más rico de la población y el de los cuatro deciles más pobres era muy similar: 21% y 23%, respectivamente. Evidentemente, la pobreza y la desigualdad de ingresos constituyen un grave problema en la ciudad, y probablemente contribuyan a situaciones de conflicto y violencia.

La violencia

Además de la pobreza generalizada, Perú también pasó por un período de violencia sociopolítica que llegó a su apogeo en 1992. Durante gran parte de ese período, el accionar de los grupos subversivos terroristas se concentró en Lima metropolitana. Aunque la violencia sociopolítica ha disminuido desde 1992, la violencia común ha aumentado. En 1995, 53% de todos los delitos del país se cometieron en Lima, cifra que representa casi 13 delitos por cada 1.000 habitantes, más del doble que el promedio del resto del país.

En consecuencia, la gente de la ciudad se ha acostumbrado a la violencia y parece aceptarla como parte de la vida cotidiana. Lo que no se sabe es si este clima de violencia ha cambiado los niveles de violencia doméstica preexistentes.

La violencia contra la mujer

Si bien la información es limitada, se puede decir que las denuncias de violencia doméstica han venido aumentando en Lima. Eso podría significar un aumento real del maltrato o simplemente que más mujeres están formulando denuncias, ahora que se han creado delegaciones de la policía de mujeres, en gran medida para abordar el problema de la violencia contra la mujer (véase el capítulo 9 sobre policía de mujeres en Brasil).

Hasta aquí la información a nivel de distrito sobre mujeres maltratadas que han denunciado el hecho a la policía de mujeres muestra que hay diferencias entre distritos. Los malos tratos son más comunes en algunos distritos que en otros. Aunque la cantidad de mujeres maltratadas en cada distrito está relacionada con el nivel económico, parece que son menos en los distritos de nivel económico más alto². Sin embargo, la incidencia de malos tratos también es menor en algunos distritos pobres, como Villa el Salvador y Villa María del Triunfo, lo cual indica que otros factores, además de la pobreza, podrían explicar mejor el fenómeno de la violencia doméstica.

Marco del estudio

En este contexto, formulamos las seis hipótesis siguientes:

1) Los malos tratos en la pareja dependen de diversas variables y situaciones, de las cuales la pobreza es una, pero no necesariamente la más importante.

2) Las causas básicas de la agresividad y la violencia en una pareja no son económicas, aunque hay factores económicos que podrían agravar las tensiones de la vida cotidiana y aumentar las probabilidades de reacciones violentas. Entre las causas económicas podrían encontrarse carencias, como la insatisfacción de necesidades básicas, el desempleo o la inestabilidad en el empleo y los bajos niveles de ingreso.

3) Otros factores que podrían contribuir a los malos tratos en la pareja son la edad del hombre y de la mujer, el nivel de educación de ambos, el número de hijos que tienen, si la mujer está o no embarazada, y el estado civil de la pareja.

4) El entorno social próximo (parientes y amigos) es un factor de represión o control social que puede inhibir o desencadenar comportamientos violentos.

5) El medio ambiente social en el cual transcurre la vida familiar, especialmente el status social del barrio, es un factor de estandarización social que puede transformar el comportamiento de la pareja o sus apariencias.

6) La violencia doméstica se produce cuando se da una combinación perversa de todos estos factores y cuando el control y la estandarización sociales son débiles o permisivos con respecto a la violencia.

Características demográficas de la muestra

A fin de verificar estas hipótesis, hicimos una encuesta sobre la índole de la violencia doméstica en una submuestra de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de Perú de 1996³. La submuestra abarcó 359 mujeres de Lima metropolitana. Se utilizaron las escalas de tácticas de conflicto revisadas (CTS2) de Strauss et al. (1996), que contienen 78 ítems o preguntas acerca del manejo de los conflictos en la pareja, medidos en cuanto a su frecuencia. Los indicadores de frecuencia son 1) una vez en el año anterior, 2) dos veces en el año anterior, 3) de 3 a 5 veces en el año anterior, 4) de 6 a 10 veces en el año anterior, 5) de 11 a 20 veces en el año anterior, 6) no sucedió en el año anterior pero sí anteriormente, y 7) nunca ha ocurrido. Sobre la base de estas preguntas se crean cinco escalas: negociación (acción dirigida a arreglar un desacuerdo mediante la conversación), agresión psicológica (actos u omisiones para producir un daño psicológico o dolor moral), violencia física, coerción sexual (conducta destinada a forzar a la pareja a realizar actos sexuales no deseados) y daño físico (manifestado en daños en los huesos o en los tejidos, necesidad de atención médica o dolor que dura un día o más).

Combinamos los datos sobre violencia doméstica de nuestra encuesta con da-

tos socioeconómicos de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida a fin de obtener un conjunto completo de datos. Además, usamos información secundaria para describir y analizar el contexto del problema en estudio. Las mujeres de la muestra habían estado en una pareja estable (casadas, en unión consensual o separadas) por lo menos durante tres meses en el momento de la encuesta. Se tomó a mujeres de estratos medios y bajos. Las mujeres de los cinco deciles de ingresos más bajos fueron colocadas en el estrato bajo y representaban dos tercios de la muestra; las mujeres de los cuatro deciles de ingresos siguientes fueron colocadas en el estrato medio y representaban el tercio restante de la muestra.

La mayoría de las mujeres y su pareja tenían entre 25 y 54 años de edad. Casi la mitad había cursado estudios secundarios. Setenta y cinco por ciento de las parejas estaban casadas, casi 24% estaban en unión consensual y menos de 1% estaban separadas. Las parejas de estrato bajo tendían más a estar en unión consensual que las parejas de estrato medio. Casi la mitad de las mujeres estaban en una relación que había durado por lo menos 21 años. Casi todas las mujeres (97,5%) dijeron que no tenían relaciones con otra pareja y casi 92% dijeron que su pareja no tenía relaciones con otra mujer.

Casi todas las mujeres tenían hijos: 40% tenían uno o dos hijos con su pareja actual, 35% tenían tres o cuatro hijos y 21% tenían más de cuatro. Cuarenta por ciento de las mujeres del estrato bajo tenían entre cinco y siete hijos, en comparación con 6,4% del estrato medio. Solamente 7,8% de las mujeres estaban embarazadas en el momento de la encuesta o lo habían estado en los 12 meses precedentes. En el cuadro 2.1 se presentan características más detalladas de la muestra.

Dos quintos de las mujeres no trabajaban en el momento de la entrevista. Solamente un tercio de los compañeros tenían trabajo en el momento de la entrevista, aunque 86% habían estado empleados el año anterior. En el 85% de los casos, la mayor parte de los ingresos familiares provenía del compañero de la mujer entrevistada; 12% de las mujeres dijeron que ganaban más que su pareja.

Resultados empíricos del estudio

La encuesta de la muestra mostró que el porcentaje de mujeres de estrato bajo que habían sufrido algún tipo de violencia doméstica era mayor que el porcentaje de mujeres de estrato medio: 85% de las mujeres pobres dijeron que habían sufrido agresión psicológica el año anterior; 34%, violencia física; 15%, daño físico como consecuencia del maltrato; y 53%, coerción sexual. La incidencia de la violencia en las mujeres de clase media, aunque alta, fue más baja que en las mujeres pobres: 81% dijeron que habían sufrido agresión psicológica el año anterior; 21%, maltrato físico; 13%, daño físico como consecuencia del maltrato; y 38%, coerción sexual. En el cuadro 2.2 se presentan los resultados de la encuesta.

Cuadro 2.1 Distribución de las características de la muestra encuestada
(Porcentajes)

Nivel de análisis	Mujer	Hombre	Familia
A. Nivel individual			
Violencia doméstica (de cualquier tipo) contra la mujer			88,0
Violencia psicológica			84,4
Violencia física			30,9
Coerción sexual			48,5
Daño físico			13,1
Edad 17-25	10,3	5,6	
Edad 26-35	23,7	19,8	
Edad 36-45	19,5	22,6	
Edad 46-55	19,8	28,1	
Edad > 55	26,7	24,0	
Sin educación	3,9	0,6	
Educación primaria	34,0	25,3	
Educación secundaria	46,0	52,9	
Educación superior	16,1	21,2	
Casadas	75,5		
Sin hijos	3,9		
1-2 hijos	40,4		
3-4 hijos	35,1		
Más de 4 hijos	20,6		
Con empleo	42,3	33,3	
B. Nivel familiar			
Gasto mensual familiar			
< 400 soles			1,1
401-800 soles			23,4
801-1200 soles			26,5
1201-2000 soles			36,5
> 2001 soles			12,5
Debajo de la línea de pobreza			67,7
Casa propia			64,6
Tienen agua potable			81,9
Tienen desagüe			86,1
Tienen televisor a color			66,9
Apoyo de parientes	7,8		
Apoyo de vecinos	6,1		
Apoyo de instituciones (policía, iglesia)	1,5		
C. Nivel comunal			
Integración en la comunidad	17,1	12,2	
Percepción de la seguridad del barrio			
Tranquilo	38,7		
Poco seguro	42,9		
Peligroso	15,6		
Muy peligroso	2,8		

Cuadro 2.2 Ingresos familiares y violencia doméstica contra la mujer
(Porcentaje)

Tipo de violencia	Pobres	No pobres	Diferencia	Total
Negociación de conflictos	100	100	0	100
Violencia psicológica				
Menor	83,8	79,4	4,4	83,3
Severa	63,4	50,0	13,4	60,7
Ambas	85,2	80,9	4,3	84,4
Violencia física				
Menor	33,3	19,1	14,2	30,4
Severa	13,0	7,4	5,6	11,7
Ambas	33,8	20,6	13,2	30,9
Coerción sexual				
Menor	51,4	36,8	14,6	47,4
Severa	13,4	4,4	9,0	11,1
Ambas	52,8	38,2	14,6	48,5
Daño físico				
Menor	14,4	7,4	7,0	12,8
Severo	5,1	1,5	3,6	4,7
Ambos	14,8	7,4	7,4	13,1
Violencia global	88,0	85,3	2,7	88,0

En resumen, la prevalencia de la violencia de todo tipo es menor en las mujeres de clase media que en las mujeres pobres. La pobreza parece ser un factor agravante de la violencia de todo tipo, especialmente la violencia física y la coerción sexual.

Otros factores

Para verificar nuestra hipótesis general de que son muchos los factores que llevan a la violencia doméstica, realizamos un análisis multinivel que incluye *factores individuales*, como edad, educación, nivel de ingresos, estado civil, empleo, número de hijos y embarazo; *factores familiares*, como la relación con parientes y amigos y los ingresos familiares; y *factores comunales*, como el grado de seguridad del barrio.

Realizamos el análisis econométrico en dos etapas. En la primera señalamos las variables más útiles para explicar la violencia. En esta etapa usamos la regresión de mínimos cuadrados ordinarios y el método *step-wise*. Una vez seleccionadas estas variables, usamos regresiones logísticas para tratar de explicar la presencia o ausencia de violencia en las parejas de la muestra. (En otras palabras, la variable dependiente en una regresión logística toma el valor de cero o uno; uno indica la presencia de violencia

Cuadro 2.3 Factores determinantes de la violencia doméstica contra la mujer
(Regresión logística)

Variable independiente	Violencia psicológica	Violencia física	Violencia sexual	Violencia global
Nivel individual				
Edad de la mujer	0,01 (0,02)	-0,01 (0,02)	0,01 (0,02)	0,01 (0,03)
Edad del hombre	-0,01 (0,03)	-0,02 (0,02)	- 0,03* (0,02)	-0,01 (0,02)
Casada	0,54 (0,41)	-0,55* (0,31)	-0,18 (0,31)	0,42 (0,46)
Número de hijos	-0,002 (0,09)	-0,06 (0,08)	-0,09 (0,08)	-0,07 (0,09)
Educación primaria (mujer)	-0,08 (0,36)	0,24 (0,32)	-0,08 (0,29)	0,31 (0,41)
Educación universitaria (mujer)	0,27 (0,66)	0,65 (0,53)	-0,34 (0,49)	0,26 (0,81)
Educación universitaria (hombre)	-0,16 (0,48)	-0,56 (0,47)	0,26 (0,40)	0,49 (0,57)
Educación superior no universitaria (hombre)	0,89 (0,8)	0,39 (0,51)	0,71 (0,50)	1,56 (1,07)
Hombre empleado	1,40* (0,77)	1,06** (0,43)	0,51 (0,41)	1,97* (1,05)
Embarazo	7,64 (18,06)	-0,38 (0,47)	-0,99* (0,04)	7,33 (17,6)
Nivel familiar				
Pobreza	0,56* (0,29)	0,20 (0,27)	0,61** (0,24)	0,55* (0,32)
La mujer cuenta sus problemas a un pariente o amigo	1,42** (0,31)	1,32** (0,28)	1,35** (0,23)	1,82** (0,37)
La mujer pide ayuda a un pariente o amigo	1,65** (0,75)	0,53* (0,34)	0,54 (0,34)	1,29* (0,76)
Nivel comunal				
Barrio tranquilo	0,04 (0,31)	-0,51* (0,27)	-0,34 (0,24)	0,06 (0,35)
Chi ²	217,00	133,79	71,73	262,2

* Significativo al 10%.

** Significativo al 3%.

Nota: Los números del cuadro son coeficientes de regresión; los números entre paréntesis son la desviación estándar de los cálculos de coeficientes. Los efectos marginales no se pueden interpretar directamente a partir de los coeficientes de regresión en las regresiones logísticas.

doméstica.) Usamos ecuaciones de regresiones logísticas separadas para explicar la violencia psicológica, física y sexual. En el cuadro 2.3 se presentan los resultados econométricos.

Para la *violencia psicológica*, varias variables son factores determinantes estadísticamente significativos de violencia: situación laboral del compañero, si la familia vive en la pobreza, si la mujer puede contar sus problemas a parientes o amigos y si puede pedirles ayuda. Los hombres con empleo cometen actos de violencia psicológica con más frecuencia que los hombres desempleados. Las mujeres de familias pobres tienden más a ser víctimas de violencia psicológica. Por último, las mujeres que pueden contar sus problemas a parientes o amigos o pedirles ayuda tienden más a ser víctimas de violencia psicológica. Eso tal vez se deba a que la violencia misma las impulsa a confiar en otros o a que el contacto fuera del núcleo familiar encolerice al compañero, desencadenando la violencia. No se puede determinar únicamente sobre la base de estos resultados la dirección de causalidad entre la red de apoyo social de la mujer y las probabilidades de que sea maltratada.

Para la *violencia física*, las mismas variables son estadísticamente significativas, con tres excepciones importantes. Primero, la pobreza familiar no es un factor determinante estadísticamente significativo de violencia física. Segundo, las mujeres casadas tienden menos a sufrir violencia física que las mujeres convivientes o separadas. Tercero, el barrio influye: cuanto más tranquilo sea, menores probabilidades habrá de violencia doméstica en una familia.

Los factores determinantes de la *violencia sexual* son un poco diferentes de los determinantes de la violencia psicológica o física. Los hombres de mayor edad tienden menos a agredir sexualmente, y las mujeres embarazadas tienden menos a ser víctimas de agresión sexual, factores que no influyeron en las probabilidades de malos tratos psicológicos o físicos. Las mujeres que cuentan sus problemas a amigos continúan sufriendo más violencia. Por último, las mujeres de familias pobres corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual.

Concluimos con una regresión logística separada para explicar la presencia de violencia de cualquier tipo contra la mujer, sea psicológica, física o sexual. Los factores determinantes estadísticamente significativos de la violencia global son la situación laboral del hombre, el grado de pobreza familiar, contar los problemas a amigos o parientes, o pedirles ayuda.

Cabe destacar que la edad de la mujer, el número de hijos de la pareja, y el grado de educación de la mujer y del hombre no parecen ser factores determinantes estadísticamente significativos de violencia de cualquier tipo en estas regresiones logísticas⁴.

Conclusiones

En conjunto, nuestros análisis muestran que la existencia de relaciones violentas está estrechamente relacionada con tres factores: pobreza, desempleo y falta de una red de apoyo social.

La pobreza familiar. La pobreza parece ser un factor detonante o amplificador de conflictos en la pareja, y aumenta las probabilidades de que se dé violencia tanto psicológica como sexual. No parece influir en el caso de la violencia física⁵. Nuestras observaciones en macroescala corroboran este resultado: el grado de violencia doméstica en los distritos más acomodados de Lima es mucho menor que el promedio de la ciudad, aunque la subnotificación podría ser muy grande en estos distritos. En ciertos distritos pobres, el nivel de violencia es incluso más bajo que en los barrios más ricos de Lima, lo cual indica la presencia de otros factores, además de la pobreza.

La situación laboral del hombre. Los hombres que trabajan se comportan con más violencia física y psicológica frente a su pareja que los hombres desempleados. Una explicación es que los hombres desempleados dependen más de los ingresos de la mujer y, por consiguiente, están menos dispuestos a correr el riesgo de alienar o incluso perder a su pareja como consecuencia de actos de violencia psicológica o física.

Las redes de apoyo social. Las mujeres que pueden contar sus problemas a parientes o amigos y pedirles apoyo tienden a sufrir más actos de violencia de todos los tipos. Como ya se dijo, es difícil interpretar esta observación, ya que no resulta claro si las redes de apoyo social se usan debido a la violencia o si la violencia se debe a la existencia de estas redes. Se necesitan más estudios en este campo para abordar la causalidad.

Para determinados tipos de violencia también parece haber varios factores importantes. La *edad del hombre* influye en las probabilidades de que se dé violencia sexual, pero no parece ser un factor determinante importante de otros tipos de violencia. Las *mujeres casadas* tienden menos a sufrir violencia física que las mujeres convivientes o separadas, y las *embarazadas* tienden menos a ser víctimas de violencia sexual. Un *barrio tranquilo* reduce las probabilidades de violencia física, pero no influye en otros tipos de violencia.

Los resultados de nuestro estudio muestran que la pobreza es un factor importante que contribuye a la violencia, pero dista mucho de ser el único. Las relaciones violentas parecen ser el producto de un conjunto de factores que, si se combinan de cierta forma, precipitan la aparición del comportamiento violento.

Notas

¹ Los autores desean agradecer al Instituto Cuanto S. A. el uso de su encuesta sobre violencia doméstica en Lima metropolitana y la información sobre los niveles de vida de Lima, y a Pedro Llontop su colaboración y asistencia.

² La subnotificación posiblemente sea mayor también en los distritos ricos.

³ Entrevistamos al 60,4% de las mujeres entrevistadas en Lima como parte de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida.

⁴ Se hicieron otras regresiones logísticas con factores individuales solamente, y con factores individuales y familiares solamente (excluyendo los efectos del barrio). Sobre los resultados de estas regresiones se informa en el documento de trabajo titulado "Pobreza y violencia doméstica contra la mujer en Lima metropolitana", que puede obtenerse del Instituto de Estudios Peruanos de Lima. En general, los resultados de estas regresiones son compatibles con los resultados precedentes. Una diferencia es que, en las regresiones con variables individuales solamente, los hombres con mayor nivel de educación tienden más a cometer actos de violencia psicológica.

⁵ En una regresión con factores individuales solamente y pobreza familiar, las mujeres de familias pobres tendían más a ser víctimas de violencia física también.

Referencias

- Atkinson, A. B. 1991. Poverty. En *The World of Economics*, compilado por John Eastwell et al. New York: Macmillan.
- Baker Fleming, Jennifer. 1970. *Stopping Wife Abuse*. Garden City, N.Y.: Anchor Press/Doubleday.
- Banco Central de Reserva del Perú. 1984. La línea del mapa de la pobreza. Identificación de las diferencias interdistritales en Lima metropolitana. Gerencia de Investigación Económica.
- Barranco, Isabel. 1990. Síntesis de textos del Colectivo de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres y del Centro de Apoyo a Mujeres Violadas. En CENDOC: Violencia Doméstica, Paquete Informativo. Lima.
- Barrig, Mauja, 3982. *Convivir: La pareja en la pobreza*. Lima: Mosca Azul.
- Burgos, Hernando. 1990. Volencia contra la mujer. El sonido del silencio. En CENDOC: Paquete Informativo sobre Violencia Doméstica. Lima.
- Centro de Documentación sobre la Mujer (CENDOC). 1990. Violencia Doméstica. Paquete Informativo. Lima.
- Chapman, Jane Roberts. 1978. *The Economics of Victimization*. Sage Yearbooks in Women's Policy Studies, vol. 3. Beverly Hills: Sage.
- Chapman, Jane Roberts y Margaret Gates. 1978. The Victimization of Women. Sage Yearbooks in Womens Policy Studies, vol. 3. Beverly Hills: Sage.
- Del, Martin. 1976. *Battered Wives*. New York: Pocket Books.
- Gonzales de Olarte, Efraín. 1992. *La economía regional de Lima. Crecimiento, urbanización y clases populares*. Consorcio de Investigación Económica-Instituto de Estudios Peruanos, serie Análisis Económicos 15, Lima.
- . 1991. Una economía bajo violencia. Perú, 1980-1990. Documento de Trabajo 40. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Health and Development Policy Project. 1995. Measuring Violence Against Women Cross-Culturally. Apuntes de una reunión realizada en Takoma Park, Maryland, el 29 de junio.
- Instituto Cuanto. 1994. *Retrato de la familia peruana*. Niveles de Vida, 1994. Lima: UNICEF.

- O'Campo, Patricia, Andrea C. Gielen, Ruth R. Faden, Xiaonan Xue, Nancy Kass y Mei-Cheng Wang. 1995. Violence by Male Partners Against Women During the Childbearing Years: A Contextual Analysis. *American Journal of Public Health* 85(8).
- Pimental, Carmen. 1988. *Familia y violencia en la barriada*. Lima: Gráfica Bellido.
- Pizzey, Erin. 1974. *Scream Quietly or the Neighbors Will Hear*. London: If Books.
- Shrader, Elizabeth y Lori Heise. 1997. Violence Against Women in Resource-Poor Settings: Practical Guide to Conducting Research. Artículo inédito.
- Strauss, Murray, et al. 1996. The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2): Development and Preliminary Psychometric Data. *Journal of Family Issues* 17(3).
- Tironi, Eugenio. 1989. Pobreza = Frustración = Violencia? Crítica empírica a un mito recurrente. Working Paper 123. The Helen Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, Notre Dame, Ind.
- Uribe, Martha Lucía y Olga Sánchez. 1990. Violencia intrafamiliar. Una mirada desde lo cotidiano, lo político y lo social. En CENDOC: Paquete informativo sobre violencia doméstica, Lima.

El impacto socioeconómico de la violencia doméstica: Chile y Nicaragua

Andrew R. Morrison y María Beatriz Orlando¹

La violencia doméstica acarrea muchos costos, tanto para las mujeres maltratadas como para la sociedad. Primero, las consecuencias de la violencia doméstica para la salud de las mujeres maltratadas pueden ser devastadoras. Además de la angustia, las mujeres maltratadas podrían sufrir graves lesiones físicas, trastornos mentales y una mayor incidencia de suicidios y homicidios.² Los *costos económicos* de la violencia doméstica para la sociedad también son enormes. Abarcan tanto el valor de los bienes y servicios utilizados para tratar o prevenir la violencia doméstica como el valor de los bienes y servicios no producidos cuando el maltrato lleva a un aumento del ausentismo, a una menor productividad en el trabajo y a la pérdida del empleo.

En Estados Unidos, el costo anual de la atención médica y la disminución de la productividad laboral se sitúa entre US\$5.000 millones y US\$10.000 millones (Gelles, citado en Meyer 1992).³ Esta cifra no incluye los gastos asociados al mayor uso del sistema de justicia penal, la proliferación de personas sin vivienda, la mayor necesidad de familias sustitutas y el aumento del consumo de alcohol y drogas.⁴ En Canadá, el costo para las mujeres maltratadas, otras personas, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales superó los US\$3.200 millones en 1993 (Greaves, Hankivsky y Kingston-Riechers 1995).

En estos estudios posiblemente se subestime el costo social de la violencia doméstica porque no refleja su *impacto en los hijos* de las mujeres maltratadas. Hay indicios de que la violencia doméstica afecta a los niños por lo menos en tres áreas importantes: la salud, el rendimiento escolar y la conducta violenta en sus propias relaciones. Hasta los recién nacidos y los niños que aún no han nacido pueden ser afectados por la violencia doméstica. En México, por ejemplo, las mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica durante el embarazo presentaban el triple de complicaciones durante el parto y tenían bebés que pesaban más de medio kilo menos que los de mujeres que no

habían sido maltratadas (Valdez y Sanín 1996). Valladares (1996) también observa una relación entre el maltrato a la mujer embarazada y el bajo peso al nacer en Nicaragua.

Una de las consecuencias más insidiosas de la violencia doméstica es que perpetúa la *violencia en la sociedad*, tanto dentro como fuera del hogar (véase la definición de violencia doméstica en el recuadro 3.1). Se ha comprobado que la violencia es, por lo menos en gran medida, una conducta aprendida (Huesmann 1987). Los niños que crecen presenciando situaciones de violencia doméstica contra las mujeres tienden más a ser violentos cuando llegan a la edad adulta, mientras que las niñas que presencian incidentes de violencia doméstica suelen ser víctimas más adelante. Presenciar situaciones de violencia doméstica enseña a los niños que la violencia es una forma apropiada de resolver conflictos, lo cual tiende a producir comportamientos violentos también fuera del hogar.

En resumen, en los países en desarrollo se han encontrado pruebas contundentes de que las mujeres maltratadas tienen condiciones menos favorables en cuanto a salud y situación económica, que aquellas que no sufren abuso. Aunque en los países en desarrollo hay menos datos cuantitativos, los datos de centros de atención en situaciones de crisis, reportes policiales y estudios etnográficos muestran que la violencia doméstica es una causa importante de lesiones y problemas de salud (Heise, Pintanguy y Germain 1994:18).

Sin embargo, es poco lo que se ha hecho hasta la fecha en los países en desarrollo a fin de asignar un valor pecuniario a los costos económicos y sociales de la violencia doméstica. En este capítulo se intenta hacerlo en relación con dos países de América Latina: Chile y Nicaragua. El trabajo se centra en tres campos en los cuales la violencia doméstica parece tener efectos enormes: la participación de la mujer en el mercado laboral y sus ingresos, la utilización de servicios de salud y el rendimiento escolar de los niños.

Se seleccionaron estos países en parte debido a su gran disimilitud. El ingreso per cápita de Chile, que se situaba en los US\$3.440 en 1996, es casi el séptuplo del ingreso per cápita de Nicaragua, de sólo US\$481. Dos tercios de los niños chilenos en edad de asistir a la escuela secundaria lo hicieron a mediados de los años noventa, en tanto que menos de 40% de los niños nicaragüenses cursaron estudios secundarios (IDB 1997). Se podrían compilar muchas más estadísticas para demostrar lo obvio: Chile y Nicaragua se encuentran en etapas muy diferentes de desarrollo económico.

Realizamos encuestas en Chile y Nicaragua a fin de obtener datos sobre el impacto de la violencia doméstica en el empleo, los salarios, el uso de servicios de salud y el rendimiento escolar de los niños. Tanto en Managua como en Santiago se seleccionó una muestra aleatoria estratificada de la población de la ciudad. Debido a limitaciones de tiempo y de presupuesto, el tamaño de las muestras era pequeño: 378 mujeres en Managua y 310 en Santiago. La encuesta, que se hizo solamente a mujeres de 15 a 49

Recuadro 3.1 Definiciones de violencia doméstica

Violencia física

Los investigadores generalmente dividen la violencia física en dos categorías: moderada y severa. La violencia física moderada se produce cuando el compañero abofetea a la mujer, le tuerce el brazo, la retiene contra su voluntad o le da empujones. Estos actos deben haberse producido menos de cinco veces en el año precedente, puesto que, si son más frecuentes, corresponden a la categoría siguiente.

Se considera que hay violencia física severa si una mujer es víctima de más de cinco actos de violencia física moderada en un año, si su compañero la ha pateado, la ha golpeado con la mano o con un objeto, la ha quemado intencionalmente, la ha cortado con un cuchillo o le ha oprimido el cuello, o si el comportamiento violento le ocasiona lesiones tales como dolores corporales, fracturas, pérdida del conocimiento u otro tipo de lesión que requiera atención médica.

Estas dos definiciones no son mutuamente excluyentes. Una mujer puede ser víctima de violencia física tanto moderada como severa. Casi todas las mujeres que sufren violencia física severa también sufren violencia física moderada. Eso se observó, por ejemplo, en el 88% de las mujeres de la muestra de Managua que fueron víctimas de violencia física.

Violencia psicológica

Una mujer sufre violencia psicológica cuando su pareja la insulta con frecuencia, la amenaza o usa gritos y amenazas como medio principal para resolver conflictos con ella o le destruye sus pertenencias personales. Los insultos y las amenazas deben haberse producido más de cinco veces en un año para ser clasificados como maltrato psicológico.

Violencia sexual

La violencia sexual es cualquier tipo de coerción para obligar a una mujer a tener relaciones sexuales. Los métodos de coerción pueden ser amenazas, chantaje y el uso de violencia física. Existe chantaje si el compañero amenaza a la mujer con tener relaciones sexuales con otra mujer si ella no le proporciona satisfacción sexual.

años que convivían con un compañero o lo habían hecho durante los 12 meses precedentes a la encuesta, contenía preguntas pormenorizadas sobre la mujer, su pareja, los hijos y otros integrantes del núcleo familiar.⁵ La encuesta, realizada en junio y julio de 1997, llevó entre 15 y 60 minutos por persona.

La encuesta reveló que un gran porcentaje de mujeres de ambas muestras habían sido maltratadas por su pareja. El año precedente, 41% de las mujeres de Santiago y 53% de las mujeres de Managua habían sufrido agresiones psicológicas, físicas o sexuales.

Recuadro 3.2 Modelos económicos de la relación entre participación laboral, ingresos y violencia doméstica

Modelos de participación

¿Qué factores determinan la decisión de trabajar? Según el modelo económico tradicional, una persona decide trabajar si el salario del mercado supera el monto mínimo que está dispuesta a aceptar, que los economistas denominan "salario de reserva". El segundo modelo se basa en teorías sobre la negociación entre los integrantes de la familia sobre la distribución de los recursos.

Modelo tradicional. La violencia doméstica afecta a la participación de la mujer en la fuerza laboral sólo si influye en el salario de mercado que puede obtener o en su salario de reserva. De hecho, es probable que la violencia afecte a ambos, pero en direcciones opuestas. Por un lado, ciertos estudios han revelado que la violencia doméstica reduce la productividad de la mujer en el trabajo, debido al aumento del ausentismo y al acoso del hombre agresor en el trabajo.⁶ Debido a su menor eficacia, las mujeres maltratadas tienden a percibir un salario más bajo y, por lo tanto, es menos probable que participen en el mercado laboral. Por otro lado, la violencia doméstica puede deteriorar gravemente la autoestima de la mujer, lo cual, a su vez, puede reducir el salario de reserva y las condiciones de trabajo que está dispuesta a aceptar, lo cual hace más probable su participación en la fuerza laboral.⁷ Por consiguiente, en estos modelos tradicionales de participación, el efecto de la violencia doméstica en la participación de la mujer en el mercado laboral no resulta claro.

Modelos de negociación. El segundo modelo analiza la distribución de los recursos familiares. Según este modelo, los recursos se dividen entre los miembros de la familia sobre la base de su poder de negociación en la familia. Por lo menos un autor afirma que el valor asignado por el esposo al aporte de la mujer al bienestar de la familia está directamente relacionado con el

En Managua, 28% de las mujeres habían sido víctimas de violencia física severa y 30% habían sufrido episodios menos severos. Las cifras correspondientes a Santiago fueron 12% y 22%. La forma más común de violencia doméstica contra la mujer fueron las agresiones psicológicas, que afectaron al 46% de las mujeres en Managua y al 33% en Santiago. Dieciocho por ciento de las mujeres de Managua y 10% de las mujeres de Santiago fueron agredidas sexualmente.

En nuestro análisis tratamos de determinar si la violencia doméstica influía en la decisión de las mujeres maltratadas de trabajar fuera de casa, su nivel de ingresos, su utilización de servicios de salud y el rendimiento escolar de sus hijos, y en qué medida.

Repercusiones de la violencia doméstica en el trabajo

La teoría económica presenta opiniones diversas sobre la probabilidad de que la violencia doméstica reduzca la participación de las mujeres en la fuerza laboral (véase un análisis en el recuadro 3.2). Nuestros resultados no lograron eliminar la ambigüedad.

trabajo de la mujer fuera de casa.⁸ El trabajo remunerado fuera de casa determina un mayor aporte percibido; el trabajo doméstico se subvalora sistemáticamente. Cuanto mayor sea el aporte percibido de una mujer, más fuerte será su poder de negociación en la distribución de recursos en el hogar. En el poder de negociación influye también la capacidad de la mujer para sobrevivir económicamente si deja la relación.

Los modelos de negociación muestran un vínculo claro entre la violencia doméstica y la participación. Para ejercer el máximo control posible sobre los recursos, el hombre puede recurrir a la violencia doméstica a fin de restringir el trabajo de su esposa fuera de casa y reducir su poder de negociación en la distribución de recursos.⁹

En resumen, los modelos tradicionales no pueden predecir si una mujer que sufre violencia doméstica tendrá tasas de participación en la fuerza laboral mayores o menores que las mujeres que no son víctimas de violencia doméstica. Los modelos de negociación, en cambio, llevan a una predicción inequívoca: las mujeres maltratadas tienen tasas de participación mucho más bajas que las mujeres que no son maltratadas. En vista de esta falta de consenso entre ambos modelos, sólo con análisis empíricos se podrá aclarar la relación entre la violencia doméstica y la participación de la mujer en el mercado laboral.

El modelo de remuneraciones

El modelo teórico para determinar si la violencia doméstica influye en los ingresos de las mujeres que trabajan fuera de casa es sencillo. Como los salarios premian la productividad y las aptitudes, la violencia doméstica reducirá los ingresos de una mujer si menoscaba su productividad en el trabajo. Algunos ejemplos son el aumento del ausentismo debido a lesiones físicas o trastornos mentales, el acoso por su compañero en el trabajo, la pérdida de autoestima, la falta de concentración, la depresión y el estrés, con la consiguiente reducción de la capacidad para trabajar eficazmente.¹⁰

En Chile, las mujeres maltratadas generalmente tienden menos a trabajar fuera de casa que las mujeres que no son maltratadas, mientras que en Nicaragua ocurre lo contrario.

Participación en la fuerza laboral: datos de Santiago

En Santiago, las mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica de cualquier tipo dentro de los 12 meses precedentes tendían menos a trabajar fuera de casa y tener ingresos (cuadro 3.1). Sólo 32,4% de las mujeres que sufrían agresiones físicas severas trabajaban fuera de casa, en comparación con 36,8% de las mujeres que no recibían maltrato físico severo. La mayor diferencia en las tasas de participación (6,7%) se observa entre las mujeres psicológicamente maltratadas y las que no lo son.

Partiendo de algunos supuestos simples y usando datos del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade) y de nuestra encuesta, se pueden calcular los ingresos perdidos por las mujeres chilenas que habrían trabajado si no hubieran sido vícti-

Cuadro 3.1 La violencia doméstica y el trabajo fuera de casa, 1997*(Porcentaje de mujeres que trabajan)*

Tipo de violencia	Santiago		Managua	
	<i>Maltratadas</i>	<i>No maltratadas</i>	<i>Maltratadas</i>	<i>No maltratadas</i>
Física severa	32	37	31	31
Física moderada	33	37	35	29
Psicológica	32	38	38*	24*
Sexual	31	37	33*	30*
Cualquier tipo	33	39	37*	25*

*Indica una diferencia en los valores promedios que es significativa (al nivel del 5%) entre las mujeres maltratadas y las mujeres que no son maltratadas en un país.

Fuente: Cálculos de los autores basados en los resultados de la encuesta en Nicaragua y Chile.

mas de actos de violencia doméstica. Supongamos que el efecto de la violencia doméstica en la situación laboral de las mujeres es el mismo a nivel nacional que en Santiago. En 1995 había 3,77 millones de mujeres de 15 a 49 años en Chile (Celade 1997:58). Si ninguna hubiera sufrido algún tipo de violencia doméstica, 38,8% habrían optado por trabajar fuera de casa. Sin embargo, solamente 32,8% de las mujeres maltratadas trabajaron fuera de casa. La diferencia representa más de 226.000 mujeres. Si suponemos que estas 226.000 mujeres habrían tenido los mismos ingresos mensuales que recibían en promedio las mujeres que no eran víctimas de violencia doméstica (187.876 pesos), los ingresos perdidos ascenderían a 510.300 millones de pesos al año, aproximadamente US\$1.200 millones al tipo de cambio actual.¹¹

Sin embargo, los datos presentados en el cuadro 3.1 son sólo indicativos debido al tamaño pequeño de la muestra a la cual corresponden estos valores promedios. Las pruebas estadísticas formales no nos permiten rechazar la posibilidad de que el porcentaje de mujeres que trabajan sea igual para las mujeres maltratadas y las que no son maltratadas.¹² Sin embargo, el hecho de que los tipos de violencia sufrida durante los 12 meses precedentes esté asociado a índices más bajos de trabajo remunerado fuera de casa es sumamente sugestivo.

Otra forma de examinar la relación entre la violencia doméstica y la participación de la mujer consiste en utilizar modelos formales de la decisión de trabajar fuera de casa. Estos modelos se describen con más detalles en el apéndice 3A; aquí nos limitamos a señalar que usamos ecuaciones de participación. El propósito de las ecuaciones de participación es explicar los factores que los economistas creen que influyen en la decisión de las mujeres de trabajar, y determinar si la presencia de violencia doméstica tiene un efecto adicional. La variable dependiente en estas ecuaciones de regresión indica si una mujer tiene un trabajo remunerado fuera de casa. Las variables explicativas son edad, nivel de educación, número de hijos propios menores de 10 años que viven

en la casa, si el compañero trabaja por cuenta propia y la presencia o ausencia de violencia doméstica contra la mujer.

Los resultados confirman en gran medida los efectos previstos: las mujeres de mayor edad y las que tienen más hijos propios que viven en la casa tienden menos a trabajar, en tanto que las que tienen algunos estudios secundarios o universitarios y las que están casadas con hombres que trabajan por cuenta propia tienden más a trabajar (aunque este último efecto es menos cierto).¹³ Lo sorprendente es que las mujeres con una formación técnica tienden menos a trabajar, tal vez debido a la dificultad para conseguir trabajo en ocupaciones de las cuales las mujeres tradicionalmente han estado excluidas. Por último, aunque la presencia de violencia doméstica tiende a reducir la probabilidad de que una mujer trabaje, el efecto no es estadísticamente significativo, lo cual confirma los resultados de la comparación de los valores promedios señalados anteriormente.

Participación en la fuerza laboral: datos de Managua

Para algunos de los tipos de violencia doméstica contra la mujer en Managua, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el porcentaje de mujeres maltratadas que trabajan fuera de casa y el porcentaje de mujeres que no son maltratadas y que trabajan fuera de casa. Sin embargo, en el caso de la agresión psicológica las mujeres maltratadas tienden mucho más a trabajar fuera de casa; 38% de las mujeres agredidas psicológicamente trabajan fuera de casa, mientras que sólo 24% de las mujeres que no son agredidas psicológicamente lo hacen (véase el cuadro 3.1).

Como en el caso de Santiago, recurrimos a un modelo formal de la decisión de trabajar fuera de casa. Los únicos factores importantes que permiten predecir la situación laboral en Managua son la edad y los años de escolaridad de las mujeres: las mujeres más jóvenes y más instruidas tienden más a trabajar fuera de casa. Una vez más, la violencia doméstica no parece influir en la decisión de las mujeres de buscar un trabajo remunerado.

Los ingresos: observaciones de Santiago

Los datos sobre la relación entre la violencia doméstica y la participación femenina en el mercado laboral tal vez sean ambiguos, pero los datos sobre la violencia doméstica y los ingresos de las mujeres no lo son. Las mujeres que son víctimas de violencia doméstica tienen ingresos mucho más bajos que las mujeres que no son maltratadas. El cuadro 3.2 muestra los ingresos mensuales de las mujeres en Santiago. Las mujeres que son agredidas sexualmente ganan, en promedio, menos de la mitad que las mujeres que no sufren violencia sexual. Las víctimas de actos de violencia física severa ganan menos

Cuadro 3.2 Ingresos mensuales de las mujeres en relación con el tipo de violencia doméstica, 1997

Tipo de violencia	Santiago (en pesos)		Managua (en córdobas)	
	Maltratadas	No maltratadas	Maltratadas	No maltratadas
Física severa	62.684*	160.455*	263*	459*
Física moderada	103.176	161.207	331	452
Psicológica	89.846*	178.328*	416	417
Sexual	50.357*	158.188*	241*	529*
Cualquier tipo	91.579*	187.876*	377	459

* Una prueba Z confirma una diferencia estadísticamente significativa (al nivel del 5%) entre los ingresos de las mujeres maltratadas y los de las mujeres no maltratadas de un país.

Nota: El tipo de cambio utilizado, 416,8 pesos por dólar y 9,05 córdobas por dólar, era el que estaba vigente cuando se realizaron las encuestas (julio de 1997).

Fuente: Cálculos de los autores basados en los resultados de la encuesta en Nicaragua y Chile.

del 40% de lo que ganan las mujeres que no son maltratadas, mientras que las víctimas de violencia psicológica ganan la mitad de lo que ganan las mujeres que no sufren agresiones de este tipo. Las mujeres que son víctimas de actos menos severos de violencia física son las que más se aproximan a las mujeres que no son maltratadas, pero aun así ganan solamente el 64% de lo que ganan las mujeres que no son maltratadas¹⁴.

Utilizando estos resultados y datos de otras fuentes, calculamos que, a causa de la violencia doméstica, las mujeres empleadas en Chile ganaron 650.100 millones de pesos menos de lo que habrían ganado si no hubieran sido víctimas de actos de violencia¹⁵. Eso representa alrededor de US\$1.560 millones, o sea poco más del 2% del producto interno bruto (PIB) de Chile de 1996, lo cual constituye una pérdida enorme¹⁶. La pérdida real para el PIB chileno es mucho mayor, por supuesto, porque con los efectos multiplicadores un dólar de ingresos genera mucho más que un dólar de PIB.

Otra forma de examinar la relación entre ingresos y violencia doméstica consiste en hacer tabulaciones cruzadas de categorías de ingresos y presencia de violencia doméstica (cuadro 3.3). Dividimos a las mujeres arbitrariamente en dos categorías de ingresos: altos y bajos. Consideramos como un ingreso alto 100.000 pesos o más por mes (alrededor de US\$240). En el cuadro 3.3, las cifras entre paréntesis son las mujeres que cabría encontrar en una casilla si la violencia doméstica y la categoría de ingresos fuesen independientes. De esta forma, cabría esperar 130 mujeres no maltratadas en la categoría de bajos ingresos y 53 en la de ingresos altos. De hecho, un número menor (120) tienen bajos ingresos, mientras que un número mayor que el previsto (63) tiene ingresos altos. En cambio, entre las mujeres maltratadas, una cantidad superior a la prevista tiene bajos ingresos, y menos tienen ingresos altos. Una prueba estadística formal rechaza la independencia de ambas variables.¹⁷

Se repitió este análisis para distintos tipos de violencia doméstica (física seve-

Cuadro 3.3 Tabulaciones cruzadas de la situación de la mujer con respecto a la violencia doméstica y sus ingresos

Categoría de ingresos (mensuales)	Sin violencia	Con violencia
<i>Santiago</i>		
Bajos (< 100.000 pesos)	120 (130)	101 (91)
Altos (≥ 100.000 pesos)	63 (53)	26 (36)
<i>Managua</i>		
Bajos (< 1.000 córdobas)	157 (160)	181 (178)
Altos (≥ 1.000 córdobas)	22 (19)	18 (21)

Fuente: Cálculos de los autores. Véase la explicación en el texto.

ra, física menos severa, psicológica y sexual), y los resultados fueron sorprendentes. En todos los casos, la categoría de ingresos y la presencia de violencia doméstica no eran independientes. Las mujeres que no eran maltratadas estaban sobrerrepresentadas en la categoría de ingresos altos, mientras que las mujeres maltratadas estaban sobrerrepresentadas en la categoría de ingresos bajos¹⁸.

Un último método para examinar la relación entre la violencia doméstica y los ingresos consiste en ecuaciones de regresión en las cuales se utilizan los ingresos (más precisamente el logaritmo de los ingresos) como variable dependiente y las variables demográficas y de capital humano como variables explicativas. Estas variables son el nivel de educación, las horas de trabajo mensuales, la capacitación recibida del empleador, la existencia de un contrato formal que regule las condiciones de trabajo y la remuneración, la ubicación del lugar de trabajo (dentro o fuera de casa) y si la mujer trabaja por cuenta propia. Simplemente agregamos variables que captan la presencia de distintos tipos de violencia doméstica como variables explicativas.¹⁹

En el apéndice 3B se presentan los resultados pormenorizados del análisis de regresión; aquí examinamos únicamente las conclusiones principales. En gran medida, las variables explicativas en las ecuaciones de ingresos tienen los efectos previstos. Los estudios, tanto secundarios como universitarios, conducen a ingresos más altos, igual que el mayor número de horas de trabajadas mensualmente (aunque este último efecto es pequeño: por cada cinco horas adicionales, los ingresos mensuales aumentan solamente el 2%). La capacitación en el trabajo lleva a un aumento del 47% en los ingresos, mientras que la remuneración del trabajo en la casa es 54% más baja. Es un tanto sorprendente que las mujeres que trabajan por cuenta propia o sin contrato tengan ingresos más elevados (35% y 77%, respectivamente) que aquellas que trabajan para una empresa o tienen un contrato. Este último resultado sin duda refleja la heterogeneidad de las condiciones de trabajo en el sector informal.

La violencia doméstica también es importante como factor determinante de los ingresos de las mujeres. En Santiago, las mujeres maltratadas ganan un tercio menos que las mujeres que no son maltratadas. Este efecto es menor que el observado en las comparaciones de los valores promedio señalados anteriormente, lo cual confirma que los demás factores, además de la violencia doméstica, son importantes como determinantes del nivel de ingresos. Sin embargo, la magnitud del impacto estimado de la violencia doméstica en los ingresos, incluso después de controlar el efecto de otros factores determinantes importantes de los ingresos, sigue siendo muy grande.

La ecuación de ingresos parte del supuesto de que la violencia doméstica afecta a los ingresos pero que los ingresos no influyen en la violencia doméstica, lo cual podría ser problemático. Si la violencia doméstica es el resultado de luchas por el poder y el control, una mayor capacidad para obtener ingresos podría proteger a la mujer de las agresiones de su compañero, en cuyo caso la violencia doméstica dejaría de ser un factor determinante exógeno de los ingresos. Por el contrario, la violencia doméstica afectaría a los ingresos y éstos, a su vez, influirían en la violencia doméstica. Esta simultaneidad puede incorporarse en un modelo empírico de determinación de salarios utilizando el método de mínimos cuadrados en dos etapas para calcular dos relaciones claves: una ecuación que identifique los determinantes de los ingresos (con una forma idéntica a la ecuación de ingresos anterior) y una ecuación que identifique los determinantes de la violencia doméstica (apéndice 3C).

Los factores que incrementan el riesgo de que una mujer sea víctima de violencia doméstica son muy conocidos: edad, ingresos y nivel de educación de la familia, uso de alcohol o drogas por el compañero, definición rígida de los papeles de género en la familia, aislamiento social de la mujer, la familia o ambas, agresiones conyugales en la familia del marido o de la mujer cuando eran niños, y control masculino de la riqueza familiar (Heise 1997; Strauss et al. 1996). Utilizando datos de la encuesta, calculamos una ecuación probit de los determinantes de la violencia doméstica contra la mujer en Santiago (véase el apéndice 3C). Aunque la ecuación logró predecir si una mujer sufriría violencia doméstica en el 71% de los casos, muy pocas variables explicativas, individualmente, fueron estadísticamente significativas como determinantes de la violencia doméstica. En particular, los ingresos de la mujer, el grado en que las conflictos se resuelven por negociación, el nivel de ingresos de la familia y el hecho de que la mujer haya sido físicamente maltratada de niña no resultaron ser determinantes de la violencia doméstica. El número de veces por mes que el marido llega a casa ebrio aumenta la probabilidad de las agresiones, igual que la proporción de los ingresos familiares que está en manos del hombre, pero ambos efectos son significativos solamente con un nivel de confianza del 15%. El único factor que surge como determinante categórico de la violencia doméstica es que el padre de la mujer haya maltratado a la madre de ella.

Los resultados de la ecuación de ingresos son muy similares a los menciona-

dos anteriormente, de modo que no los analizaremos aquí.²⁰ El punto clave que cabe destacar es el siguiente: las pruebas reunidas llevan a pensar que la violencia doméstica es un determinante importante de los ingresos de la mujer, pero los ingresos laborales de la mujer no son un determinante importante de la probabilidad de que una mujer sea maltratada.²¹

Los ingresos: observaciones de Managua

Las conclusiones de Managua confirman en gran medida los resultados de Santiago: las mujeres que son víctimas de violencia doméstica ganan mucho menos que las mujeres que no son maltratadas (véase el cuadro 3.2). Las víctimas de violencia física severa ganan sólo el 57% de lo que ganan las mujeres que no son agredidas físicamente. La situación de las víctimas de violencia sexual es mucho peor: ganan sólo el 46% de lo que ganan las mujeres que no sufren agresiones de este tipo. Las mujeres que sufren violencia física moderada o violencia psicológica también ganan menos que las mujeres que no son maltratadas, pero la diferencia entre ambos grupos no es estadísticamente significativa.²²

Utilizando la misma técnica aplicada antes para Chile, calculamos que, en 1997, las mujeres empleadas en Nicaragua ganaron alrededor de 267 millones de córdobas menos debido a la violencia doméstica. Esto equivale aproximadamente a US\$29,5 millones, o sea el 1,6% del PIB del país en 1996, cifra que representa una pérdida considerable²³.

Por medio de tabulaciones cruzadas comparamos la relación entre la categoría de ingresos y la violencia doméstica (véase el cuadro 3.3). Si estas dos variables no estuvieran relacionadas, cabría esperar que 160 mujeres de bajos ingresos de la muestra no sufrieran violencia doméstica. De hecho, sólo 157 mujeres de bajos ingresos lo estaban. Por el contrario, cabría esperar que 19 mujeres de ingresos altos estuvieran exentas de violencia, pero en realidad fueron 22. Estos resultados son similares a los de Chile en el sentido de que las mujeres de bajos ingresos están sobrerrepresentadas entre las víctimas de violencia doméstica, mientras que las mujeres de ingresos elevados están subrepresentadas. Aunque estos resultados son sugestivos, hay una diferencia importante entre los resultados de Nicaragua y los de Chile: en el caso de Nicaragua, una prueba formal no permite rechazar la hipótesis de que la categoría de ingresos y la presencia de violencia doméstica no estén relacionadas.²⁴

Por último, estimamos ecuaciones de ingresos para las mujeres de la muestra de Managua a fin de aislar el impacto de la violencia doméstica del efecto de otros posibles factores de confusión. Los resultados son muy similares a los de Santiago. Un hecho que no resulta sorprendente es que las mujeres que han recibido mayor educación tienen ingresos más altos: por cada año de educación adicional, los ingresos au-

mentan el 12%²⁵. Un año adicional de experiencia en una empresa incrementa los ingresos entre el 2% y el 3%, mientras que trabajar más horas por mes aumenta los ingresos ligeramente. La violencia doméstica reduce los ingresos de forma pronunciada: después de controlar el efecto de otros factores en los ingresos, se observa que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica ganan 46% menos que las mujeres que no son agredidas. Este efecto es notable y estadísticamente muy significativo (véase el apéndice 3B).

También pusimos a prueba la simultaneidad entre los ingresos y la violencia doméstica en Managua, y las conclusiones fueron muy similares a las de Santiago: la violencia doméstica es un importante factor determinante de los ingresos, pero los ingresos no son un determinante importante de la violencia doméstica (véanse en el apéndice 3C los resultados pormenorizados de las pruebas). De hecho, también en este caso la ecuación que trata de predecir qué mujeres serán víctimas de violencia doméstica y cuáles no lo serán, no funciona muy bien. De las seis variables exógenas de la ecuación, sólo dos (el hecho de que una mujer haya sido maltratada de niña y la cantidad de veces por mes que su compañero llega a casa ebrio) son estadísticamente significativas en cuanto al riesgo de sufrir agresiones.²⁶

Las variables explicativas de la ecuación de ingresos del sistema de ecuaciones simultáneas deparan pocas sorpresas. Los ingresos aumentan sensiblemente con cada año adicional de escolaridad, y cada año adicional de experiencia en una empresa aumenta los ingresos un 3%. Trabajar más horas por mes aumenta los ingresos, pero el efecto es insignificante. La corrección de selectividad sigue siendo importante, lo cual pone de relieve la necesidad de tomar en cuenta la decisión de trabajar al realizar una ecuación de ingresos. Por último, el coeficiente de violencia doméstica sigue siendo estadísticamente significativo: las mujeres que son víctimas de violencia doméstica ganan 12% menos que las mujeres que no son maltratadas.

Repercusiones de la violencia doméstica en la utilización de servicios de salud

Con nuestra encuesta obtuvimos información detallada sobre la utilización de los servicios de salud por las mujeres durante el año anterior: la cantidad de veces que una mujer se había sometido a un examen médico preventivo, había ido a un hospital o a un consultorio debido a una enfermedad, había consultado a un especialista, había sido hospitalizada y había sido operada. Lo que nos interesaba, por supuesto, es si las mujeres que son víctimas de violencia doméstica utilizan los servicios de salud con mayor frecuencia. En el cuadro 3.4 se resumen los resultados de Managua y Santiago, centran-do la atención en un subconjunto representativo de servicios de salud.

En Santiago, hay pocos indicios de que las mujeres maltratadas usen los servicios de salud de forma más intensiva. Si no se hace ninguna distinción entre los servicios de salud públicos y privados, las mujeres que no son maltratadas tienden a usar

servicios de salud con tanta frecuencia como las mujeres maltratadas. De hecho, en el caso de la hospitalización, las mujeres que no son maltratadas son más propensas a ser hospitalizadas.²⁷ Cuando se trata de servicios de salud pública, los resultados son levemente diferentes. En gran medida, las mujeres que no son maltratadas y las que lo son continúan presentando tasas similares de utilización de servicios de salud, pero las mujeres maltratadas tienden a ir a un consultorio o a un hospital por una enfermedad en mayor proporción que las mujeres que no son maltratadas, y la diferencia en la probabilidad de hospitalización desaparece.

En Managua, las mujeres maltratadas hacen mayor uso de los servicios de salud que las mujeres que no lo son. De éstas, 12% habían sido hospitalizadas el año anterior, porcentaje que, aunque sorprendentemente alto, es menos de la mitad del correspondiente a las mujeres maltratadas, que corresponde al 25% durante el mismo período. De las mujeres maltratadas, 15% tuvieron que ser operadas, mientras que sólo 7% de las mujeres que no fueron maltratadas tuvieron que ser operadas. Las diferencias entre las mujeres que sufrieron violencia física severa y las mujeres que no fueron maltratadas son igualmente sorprendentes: 25%, en comparación con 15%, fueron a un hospital o a un consultorio debido a una enfermedad; 28%, en comparación con 16%, tuvieron que ser hospitalizadas, y 18%, en comparación con 9%, tuvieron que ser operadas. En resumen, las mujeres maltratadas parecen usar los servicios de salud con mayor frecuencia que las mujeres que no son maltratadas. Evidentemente, estos servicios de salud representan un costo real para la sociedad desde el punto de vista de los recursos necesarios para tratar a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica.

Una forma más compleja de analizar el efecto de la violencia doméstica en la utilización de servicios de salud consiste en realizar ecuaciones de regresión para cada tipo de servicio. En cada ecuación, la variable dependiente indica si una mujer usó ese servicio durante el año anterior. La ventaja de este método es que permite controlar el efecto de factores distintos de la violencia doméstica, como embarazo, edad, educación y ciertas enfermedades, que influyen en el uso de los servicios de salud por las mujeres. Por lo tanto, se puede aislar el efecto de la violencia doméstica de una forma que no es posible con los datos presentados en el cuadro 3.4. Con pocas excepciones (procedimientos odontológicos y pruebas de laboratorio), la violencia doméstica no influye en la utilización de servicios de salud en Santiago. En el caso de Nicaragua, las ecuaciones de regresión adolecieron de grandes problemas econométricos, de modo que no se pudieron usar para confirmar los resultados presentados en el cuadro 3.4.

Repercusiones de la violencia doméstica en el rendimiento escolar de los hijos

La violencia doméstica contra la mujer tiene muchos efectos perniciosos en los hijos que presencian incidentes. Una consecuencia grave es que tiende a convertir a los niños

Cuadro 3.4 Probabilidades de que una mujer utilice determinados servicios de salud según su situación en cuanto a la violencia doméstica, 1997

(Porcentaje)

	Santiago		Managua	
	Maltratadas	No maltratadas	Maltratadas	No maltratadas
Todos los proveedores				
<i>Todos los tipos de violencia</i>				
Consulta por enfermedad	21	22	18	17
Hospitalización	6*	13*	26**	12**
Intervención quirúrgica	79	15**	7**	
<i>Violencia física severa</i>				
Consulta por enfermedad	29	35	25**	15**
Hospitalización	6	11	28**	16**
Intervención quirúrgica	6	9	18**	9**
Proveedores públicos				
<i>Todos los tipos de violencia</i>				
Consulta por enfermedad	24*	12*	19	22
Hospitalización	3	7	21**	10**
Intervención quirúrgica	4	4	10*	4*
<i>Violencia física severa</i>				
Consulta por enfermedad	26	16	22	20
Hospitalización	3	6	25*	12*
Intervención quirúrgica	6	4	14*	5*

* Una prueba Z revela una diferencia estadísticamente significativa (al nivel del 5%) entre las mujeres maltratadas y las que no lo eran en cuanto a su utilización de servicios de salud.

** Una prueba Z revela una diferencia estadísticamente significativa (al nivel del 1%).

Fuente: Cálculos de los autores basados en los resultados de la encuesta en Nicaragua y Chile.

en futuros perpetradores y a las niñas en víctimas de violencia doméstica (Heise 1997). Se ha documentado que los niños maltratados y desatendidos corren mayor riesgo de convertirse en delincuentes, criminales o personas violentas (Widom 1989), y es probable que presenciar agresiones tenga consecuencias similares. Este estudio no se propone documentar esta transmisión intergeneracional de la violencia, ya que no contamos con el panel de datos necesarios para hacerlo de forma cuidadosa²⁸, sino que nos centramos en un efecto contemporáneo de la violencia doméstica en los niños: su rendimiento escolar.

Tenemos tres variables para medir el rendimiento escolar de los niños: repetición de grado (y cuántas veces), reporte a los padres de que el niño tiene problemas académicos y reporte a los padres de que el niño tiene problemas de disciplina.²⁹ Una forma de determinar si los hijos de mujeres víctimas de violencia doméstica presentan

Cuadro 3.5 Problemas escolares relacionados con la violencia doméstica, 1997

(Porcentaje de niños que tienen problemas)

Resultados educacionales	Santiago		Managua	
	De hogares donde hay violencia	De hogares donde no hay violencia	De hogares donde hay violencia	De hogares donde no hay violencia
<i>Todos los tipos de violencia</i>				
Repetición de grado	14	18	74	65
Problema académico	28	17	20	22
Problema disciplinario	33 *	13 *	1 *	4 *
<i>Violencia física grave</i>				
Repetición de grado	17	16	69	73
Problema académico	33	20	19	21
Problema disciplinario	33	21	2	3
<i>Violencia psicológica</i>				
Repetición de grado	13	19	74	67
Problema académico	27	18	21	20
Problema disciplinario	33 *	16 *	1	4
<i>Violencia sexual</i>				
Repetición de grado	15	17	60 *	75 *
Problema académico	35	20	22	20
Problema disciplinario	40 *	20 *	4	2

*Una prueba Z revela una diferencia estadísticamente significativa (al nivel del 5%) entre los niños de hogares donde hay violencia doméstica contra la mujer y aquellos de hogares donde no existe este problema.

Fuente: Cálculos de los autores basados en los resultados de la encuesta en Chile y Nicaragua.

mayores dificultades en la escuela consiste en comparar el valor promedio de las tres variables de rendimiento escolar entre los niños de hogares con violencia doméstica y los niños de hogares sin violencia. En el cuadro 3.5 se presentan estas comparaciones.

En Santiago, los padres de hogares donde existe violencia doméstica tienden a ser notificados en mayor proporción de que sus hijos tienen problemas académicos. La mayor diferencia en el rendimiento escolar corresponde a los problemas de disciplina. Para todos los tipos de violencia doméstica, los niños de hogares con violencia tienden, en mucha mayor proporción, a tener problemas de disciplina en la escuela (entre el 33% y el 40% de probabilidad, en comparación con el 13% al 21% para los niños de hogares donde no hay violencia doméstica). Las diferencias en las probabilidades son estadísticamente muy significativas para tres de los cuatro tipos de violencia analizados. Sin embargo, no se ha comprobado que los niños de hogares donde existe violencia doméstica tengan mayor propensión a repetir un grado; de hecho, para todos los

tipos de violencia analizados, un niño de un hogar afectado por la violencia tiene una probabilidad levemente menor de repetir un grado, aunque la diferencia nunca es estadísticamente significativa.³⁰ En Managua hay pocas diferencias significativas en cuanto al rendimiento escolar entre los niños de hogares donde existe violencia doméstica y los niños de hogares donde no hay violencia doméstica. Las diferencias que existen no presentan la dirección prevista: los padres de niños de hogares donde no hay ningún tipo de agresión tienen mayores probabilidades de que los llamen debido a problemas de disciplina, y los niños de hogares sin violencia sexual tienden, en proporción levemente mayor, a repetir un grado que los niños en cuyo hogar hay violencia sexual. En resumen, los datos de Nicaragua no ofrecen pruebas concluyentes.

Otra forma de examinar el impacto de la violencia doméstica consiste en realizar ecuaciones de regresión en las cuales se especifiquen los posibles factores determinantes de la repetición de grado y de los problemas académicos y disciplinarios. Igual que en el caso de las ecuaciones probit para la utilización de servicios de salud, este enfoque nos permite controlar el efecto de factores distintos de la violencia doméstica (como los ingresos familiares, el nivel de educación de los padres y la salud del niño) que podrían influir en el rendimiento escolar, y de esta forma podemos aislar el efecto de la violencia doméstica.

En el caso de Santiago, los resultados de este análisis en general son compatibles con el análisis de los valores promedios presentados en el cuadro 3.5. La principal diferencia es que tanto la violencia física severa como la presencia de cualquier otro tipo de violencia influyen en el rendimiento escolar, efectos que se observan en el cuadro 3.5 pero no son estadísticamente significativos. En el caso de Managua, las regresiones confirman los resultados que se presentan en el cuadro 3.5: la violencia doméstica parece influir poco en el rendimiento escolar de los niños.

Conclusiones

En el presente estudio se ha comprobado que, en las sociedades en desarrollo, el costo de la violencia doméstica contra la mujer es importante. Utilizando diversas técnicas estadísticas para examinar los costos sociales y económicos de la violencia doméstica en Chile y Nicaragua, hemos observado lo siguiente:

- Una encuesta a más de 300 mujeres de Managua y de una cantidad similar de Santiago reveló una alta prevalencia de violencia doméstica. En Santiago, más de 40% de las mujeres habían sufrido algún tipo de violencia doméstica; en Managua, más de 52% habían sido maltratadas.
- Los datos sobre el efecto de la violencia doméstica en la probabilidad de que una mujer trabaje fuera de casa son ambiguos. En Santiago, las muje-

res maltratadas tendían a trabajar fuera de casa en menor proporción; en Managua, era más probable que lo hicieran.

- Los resultados relativos a los ingresos no son ambiguos como los anteriores. La violencia doméstica tiene importantes efectos en los ingresos de las mujeres tanto en Santiago como en Managua. En Santiago, las mujeres que son víctimas de violencia física severa ganan solamente el 39% de lo que ganan las mujeres que no son maltratadas; en Managua, el porcentaje asciende al 57%. El costo para la economía de ambos países es inmenso: la presencia de cualquier tipo de violencia doméstica reduce los ingresos de las mujeres en US\$1.560 millones en Chile (más del 2% del PIB de 1996) y en US\$29,5 millones en Nicaragua (alrededor del 1,6% del PIB de 1996). Estas pérdidas constituyen solamente la primera ronda de efectos, ya que, debido a los efectos multiplicadores, cada dólar de ingresos perdidos da lugar a una disminución mayor del PIB.

- Si bien se observa que la violencia doméstica es muy importante como factor determinante de los ingresos, no se ha comprobado en ninguno de los dos países que los ingresos más altos protejan a las mujeres de la violencia doméstica ni que las mujeres con ingresos más bajos sean necesariamente más vulnerables al maltrato.

- En cuanto al impacto de la violencia doméstica en la utilización de servicios de salud por las mujeres, los datos son ambiguos. En Nicaragua, las mujeres que son víctimas de violencia doméstica hacen uso de los servicios de salud más que el doble que las mujeres que no son maltratadas, pero este efecto no se observó en Chile.

- Por último, parece existir una importante transmisión intergeneracional de los efectos de la violencia doméstica, por lo menos en Santiago. Los niños de hogares donde hay violencia doméstica contra la mujer tienden mucho más a tener problemas de disciplina en la escuela que los niños de hogares donde no hay violencia doméstica. Sin embargo, este efecto no se observó en Managua.

Cabe destacar que este estudio ciertamente no abarca todos los costos sociales y económicos de la violencia doméstica. Por ejemplo, no hemos cuantificado los costos de este fenómeno para los sistemas judicial y policial, los costos del asesoramiento jurídico a las mujeres maltratadas ni los costos de los refugios para mujeres. Aunque hemos calculado la pérdida de ingresos para las mujeres que trabajan, no hemos calculado las pérdidas de ingresos debidas a la muerte prematura de mujeres asesinadas por sus cónyuges.

Aun cuando no se tengan en cuenta todos estos costos, los grandes costos observados en este estudio nos llevan a una conclusión inevitable: los gobiernos nacionales, estatales y municipales, así como los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, deben dar alta prioridad a las medidas y programas encaminados a reducir la prevalencia de la violencia doméstica y a proporcionar tratamiento a las mujeres afectadas.

Apéndice 3A. Modelos econométricos de la participación en la fuerza laboral

La especificación econométrica de la participación en la fuerza laboral se basa en un modelo binario de selección creado por Berndt y otros (1974):

$$W_i^* = B' x_i + \varepsilon_i$$

(1)

$$W_{ri}^* = G' z_i + u_i$$

donde W_i = logaritmo de los ingresos de una mujer (reales y potenciales); x_i = conjunto de variables que son determinantes de los ingresos; B = conjunto de coeficientes que miden el impacto marginal de cada variable en los ingresos; ε_i = término de perturbación aleatoria; W_{ri}^* = salario de reserva (no observado por el investigador); z_i = conjunto de variables que explican el salario de reserva; G = conjunto de coeficientes que miden el impacto marginal de cada variable en los ingresos; y u_i = término de perturbación aleatoria. Ambos términos de error se distribuyen normalmente.

Como ya se dijo, una mujer decide trabajar si sus ingresos potenciales son mayores que su salario de reserva. Por lo tanto, se puede crear una variable binaria (y_i) que tome el valor 1 cuando la mujer está trabajando y de 0 cuando no está trabando. La variable y_i será determinada por el conjunto de ecuaciones en (1) si $w_i > w_{ri}^*$, $y_i = 1$, y $w_i^* = w_i$ (o sea que sólo observamos ingresos en el caso de las mujeres cuyos ingresos reales exceden el salario de reserva); de lo contrario, $y_i = 0$, donde w_i = logaritmo observado de los ingresos de las mujeres que trabajan.

Teoría y cálculos empíricos de Managua y Santiago

Según la especificación anterior, las variables en x_i y z_i afectan a la probabilidad de participación en el mercado laboral. Incluimos mediciones de la violencia doméstica en estos conjuntos de variables para evaluar empíricamente su impacto en la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral. Ni en Managua ni en Santiago la violencia doméstica resultó ser un determinante estadísticamente significativo del hecho de que las mujeres tuvieran un trabajo remunerado fuera de casa. Esta variable, entre otras con coeficientes estadísticamente no significativos, fueron excluidas de las ecuaciones de participación que figuran más adelante.

La ecuación de participación para las mujeres predice correctamente la participación en la fuerza laboral (o la falta de participación) en el 72,2% de los casos en Santiago y en el 70,6% en Managua. La estadística de chi cuadrado correspondiente a la ecuación es estadísticamente muy significativa en ambas ciudades, lo cual indica un

Cuadro 3A Resultados de modelos econométricos de la participación en la fuerza laboral

Variable	Santiago	Managua
Edad	-0,02 (1,51)	-0,11*** (6,14)
Cuadrado de la edad	0,0002 (0,63)	0,003*** (6,39)
Estudios secundarios	0,67** (2,33)	—
Estudios universitarios	0,44* (1,69)	—
Estudios en institutos técnicos	- 0,75*** (2,93)	—
Años de escolaridad	—	0,07*** (3,25)
Esposo que trabaja por cuenta propia	0,31 (1,63)	-0,30 (1,50)
Número de hijos de la mujer menores de 10 años que viven en la casa	- 0,28*** (3,04)	—
Logaritmo de la función de máxima verosimilitud	-169,9	-160,9
Chi cuadrado	61,1***	42,2***
Número de observaciones	306	269

*** Significativo al 1%.

** Significativo al 5%.

* Significativo al 10%.

Nota: Las estadísticas t están entre paréntesis.

buen ajuste en general. En Santiago, los factores más importantes que explican la probabilidad de que una mujer trabaje fuera de casa son el nivel de educación y las características demográficas de la familia. En Managua, la edad y el nivel de escolaridad son los determinantes estadísticamente significativos de la decisión de trabajar fuera de casa. La cantidad de hijos menores de 10 años que viven en la casa no es un determinante significativo (a diferencia de lo que ocurre en Chile) y, por consiguiente, no se incluye en la regresión que se presenta en el cuadro 3A.

Apéndice 3B. Cálculos econométricos de las ecuaciones de ingresos para Managua y Santiago

Como solamente observamos los ingresos (w_i) correspondientes a las mujeres que optan por trabajar, toda ecuación de ingresos que no tome en cuenta la opción de trabajar podría presentar sesgos. En otras palabras, podría haber alguna característica no observable (por lo menos para el analista de los datos) en que las mujeres que trabajan difieran de la población femenina en conjunto. Utilizamos el modelo de selección de Heckman (1979) para los ingresos, que incorpora un término de corrección en la ecuación de ingresos.

La ecuación de ingresos es la siguiente:

$$W_i = B'X_i + \Theta \lambda_i + \varepsilon_i$$

$$\varepsilon_i \sim n(0, \sigma^2)$$

donde W_i = logaritmo de los ingresos de una mujer; X_i = conjunto de variables que son determinantes de los ingresos; B = conjunto de coeficientes que miden el impacto marginal de cada variable en los ingresos; ε_i = término de perturbación aleatoria normalmente distribuido; Θ = parámetro que depende de la varianza de ε_i ; y λ_i = coeficiente inverso de Mills (término de corrección para la selectividad).

Se usó un modelo probit de participación en la fuerza laboral (véase el Apéndice 3A) para calcular λ . En la segunda etapa, λ aparece como variable explicativa en la ecuación de ingresos, que se calcula utilizando mínimos cuadrados ordinarios. La significación de esta corrección de selectividad como variable explicativa de los ingresos es una cuestión empírica.

El término de corrección de selectividad en la ecuación de ingresos no fue significativo en Santiago, lo cual indica que las mujeres que trabajan, por lo menos en términos mensurables, no difieren mucho de la población femenina en general. Como la corrección de selectividad no fue significativa, se omite en la ecuación de ingresos correspondiente a Santiago que figura en el cuadro 3B. En el caso de Managua, la corrección de selectividad fue significativa y se presenta como variable explicativa en el cuadro 3B.

Los coeficientes miden el impacto de cada variable explicativa en el logaritmo de los ingresos. Pueden interpretarse como el aumento porcentual (o la disminución, si el signo es negativo) de los ingresos atribuible al incremento de una unidad de la variable explicativa.

Cuadro 3B Resultados de las ecuaciones de ingresos

Variable	Santiago	Managua
Constante	10,72*** (36,29)	5,19*** (18,22)
Víctima de violencia doméstica	- 0,34** (2,11)	- 0,46*** (3,01)
Corrección de selectividad	—	0,26* (1,75)
Estudios secundarios	1,04*** (3,28)	—
Estudios universitarios	0,46** (2,02)	—
Estudios en escuelas técnicas	0,57** (2,15)	—
Años de escolaridad	—	0,12*** (7,35)
Horas trabajadas por mes	0,004*** (3,86)	0,002** (2,49)
Capacitación en la empresa	0,46** (2,23)	—
Contrato formal	-0,65 (1,64)	—
Trabaja en casa	- 0,51* (1,68)	-0,26 (1,56)
Trabaja por cuenta propia	0,33* (1,73)	—
R ²	0,57	0,44
F	14,0***	15,01***
Número de observaciones	106	121

*** Significativo al 1%.

** Significativo al 5%.

*Significativo al 10%.

Nota: Las estadísticas t están entre paréntesis.

Apéndice 3C. Modelos de ecuaciones simultáneas de ingresos y violencia

A fin de examinar a fondo la relación entre los ingresos de la mujer y la violencia doméstica, determinamos si existe simultaneidad entre ambas variables, o sea si la violencia doméstica influye en los ingresos y si, al mismo tiempo, los ingresos influyen en la violencia doméstica. En otras palabras, el nexo entre ingresos y violencia que encontramos en nuestras ecuaciones de participación e ingresos podría ser solamente una parte del problema. Si los ingresos de las mujeres son un determinante importante de violencia doméstica, los modelos de ingresos y participación en la fuerza laboral pueden subestimar el efecto de la violencia en los ingresos que se manifiesta en una disminución de la productividad. La disminución de los ingresos, a su vez, podría exponer a las mujeres a una mayor violencia doméstica debido a la disminución de su poder de negociación en el hogar, lo cual, a su vez, tendría efectos adicionales en la productividad y los ingresos.

A continuación se presentan los resultados del modelo de ecuaciones simultáneas para ingresos y violencia correspondientes a las dos muestras. Para la ecuación de violencia doméstica utilizamos un modelo probit (véase el Apéndice 3A) porque nuestra medida de la violencia es una variable binaria igual a 0 si la mujer no ha sufrido ningún tipo de violencia e igual a 1 en el caso contrario. Para la ecuación de ingresos se usó una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. El efecto simultáneo de una variable en la otra se calcula con variables instrumentales para los ingresos y la violencia. Estas variables instrumentales son los valores estimados de los ingresos y la violencia calculados en dos ecuaciones separadas, utilizando todas las variables exógenas del sistema como variables explicativas. Para la muestra de Managua se agregó un término de corrección de selectividad basado en los resultados que obtuvimos con la ecuación de ingresos que se presenta en el apéndice 3B.

Cuadro 3C Resultados de modelos de ecuaciones simultáneas de ingresos y violencia

Santiago			
Variables de la ecuación de ingresos		Variables de la ecuación de violencia doméstica	
Constante	10,81*** (26,24)	Constante	-1,83 (0,42)
Estudios secundarios	0,84** (2,06)	Número de veces por mes que el esposo llega a casa ebrio	0,26 (1,49)
Estudios universitarios	0,45* (1,88)	Proporción de los ingresos familiares en manos del compañero	0,09 (1,55)
Estudios en institutos técnicos	-0,50* (1,77)	La mujer fue maltratada durante la niñez	-0,01 (0,49)
Horas trabajadas por mes	0,004*** (3,91)	Las desavenencias domésticas se resuelven por negociación	-0,002 (0,33)
Capacitación en la firma	0,43** (2,02)	El padre de la mujer maltrataba a la madre de ella	0,95** (2,04)
Contrato formal	-0,48 (1,04)	Nivel de ingresos familiares	-0,0004 (1,18)
Trabaja en casa	-0,51 (1,64)	Variable instrumental para los ingresos de la mujer	0,12 (0,34)
Trabaja por cuenta propia	0,30 (1,49)		
Variable instrumental para la violencia doméstica	-0,35 (1,26)		
R ²	0,54	Logaritmo de la función de máxima verosimilitud	-57,35
F	12,02***	Chi cuadrado	19,05***
Número de observaciones	101	Número de observaciones	101

*** Significativo al 1%.

** Significativo al 5%.

* Significativo al 10%.

Nota: Las estadísticas t están entre paréntesis.

Cuadro 3C Resultados de modelos de ecuaciones simultáneas de ingresos y violencia

(continuación)

<i>Managua</i>			
Variables de la ecuación de ingresos		Variables de la ecuación de violencia doméstica	
Constante	5,18*** (20,24)	Constante	-0,38 (1,56)
Años de escolaridad	0,12*** (6,9)	Número de veces por mes que el esposo llega a casa ebrio	0,25** (3,2)
Horas trabajadas por mes	0,0015* (1,97)	Proporción de los ingresos familiares en manos del compañero	0,04 (1,23)
Años de experiencia	0,03** (2,18)	La mujer fue maltratada durante la niñez	-0,04** (1,96)
Trabaja en el hogar	-0,21 (1,21)	Las desavenencias domésticas se resuelven por negociación	-0,002 (0,24)
Corrección de selectividad	0,29* (1,92)	Madre de la mujer objeto de abusos por parte de su cónyuge	0,13 (0,67)
Variable instrumental de violencia doméstica	-0,12*** (6,85)	Nivel de ingresos del hogar	-0,00007 (0,72)
Variable instrumental para la remuneración de la mujer	0,0003 (0,5)		
R ²	0,398	Logaritmo de la función de máxima verosimilitud	-59,64
F	13,14***	Chi cuadrado	28,91***
Número de Observaciones	111	Número de observaciones	111

*** Significativo al 1%.

** Significativo al 5%.

* Significativo al 10%.

Nota: Las estadísticas t están entre paréntesis.

Notas

¹ Los autores desean agradecer a Sonia Agurto, Mary Ellsberg y el equipo de investigadores de FIDEG en Managua, así como a Soledad Larraín y TIME, Inc., de Santiago, que recopilaron los datos en los cuales se basa este estudio y efectuaron una importante contribución a la preparación del cuestionario.

² Heise, Pitanguy, y Germain (1994:18). La salud física y mental de las mujeres maltratadas es significativamente peor que la de las mujeres que no son maltratadas, según estudios realizados en Estados Unidos y Nueva Zelandia (Koss, Koss, y Woodruff (1991) y Mullen et al. (1988), citados en Heise, Pitanguy, y Germain).

³ Todas las cifras en dólares se refieren a dólares de Estados Unidos, salvo que se indique otra cosa.

⁴ Véanse en Laurence y Spalter-Roth (1996) algunos cálculos preliminares de estos costos, entre otros, asociados a la violencia doméstica.

⁵ Las personas que estén interesadas en el cuestionario pueden solicitar una copia.

⁶ El cálculo exacto es $3.772.347$ (mujeres de 15 a 49 años) $\times 0,06$ (diferencia en las tasas de participación) $\times 187.876$ (ingresos mensuales de las mujeres que no son maltratadas) $\times 12$ (meses por año) = $510.288.094.780$. El tipo de cambio a fines de julio era 416,78 pesos por dólar (IMF International Financial Statistics, septiembre de 1997), lo cual da un valor en dólares de US\$1.224.358.402.

⁷ Se realizaron dos tipos de pruebas estadísticas. Con pruebas Z se comprobó la igualdad de los valores promedios de las dos submuestras (o sea, el porcentaje de mujeres maltratadas que trabajan en comparación con el porcentaje de mujeres que no son maltratadas y que trabajan). Para ningún tipo de violencia doméstica pudimos rechazar la hipótesis nula de la igualdad de valores promedio. Las pruebas Z se pueden criticar porque exigen una distribución básica normal. Por lo tanto, hicimos también pruebas no paramétricas de chi cuadrado para determinar si el número de observaciones en cada una de las casillas de las tabulaciones cruzadas (entre tipos de violencia doméstica y situación laboral) se aparta de los valores que cabría esperar si estas dos variables fuesen independientes. Una vez más, para ningún tipo de violencia doméstica pudimos rechazar la hipótesis nula de independencia.

⁸ El hecho de que las mujeres más jóvenes tiendan más a trabajar fuera de casa podría revelar un efecto de cohorte: las mujeres jóvenes tienden más a trabajar fuera de casa en 1997 que en los años sesenta, setenta u ochenta. Las mujeres de mayor edad corresponden a estas cohortes de mayor edad que presentan menores probabilidades de trabajar fuera de casa.

⁹ Las pruebas formales confirman la significación estadística de estas diferencias en los ingresos, rechazando enfáticamente la igualdad de los valores promedios en todos los casos excepto la violencia física moderada. Las mujeres que son víctimas de violencia doméstica tienen ingresos significativamente más bajos que las mujeres que no son maltratadas. Las estadísticas Z que ponen a prueba la igualdad de los valores promedio fueron 2,37 (cualquier tipo de violencia doméstica), 2,70 (violencia física severa), 1,18 (violencia física moderada), 2,16 (violencia psicológica) y 3,21 (violencia sexual).

¹⁰ Esta cantidad se calculó del siguiente modo: el total de las personas empleadas en Chile en abril de 1997 (los datos más recientes de que disponemos) era 5.257.500 (Banco Central de Chile 1997:1440), de las cuales alrededor de 29% eran mujeres (United Nations 1995:143), lo cual da un total de 1.524.675 mujeres empleadas. Según nuestros cálculos, en Santiago 36,9% de las mujeres que trabajan son víctimas de violencia doméstica. Si este porcentaje es el mismo para todo el país (suposición problemática, ya que en Estados Unidos se ha comprobado que la violencia doméstica contra la mujer es más prevalente en zonas urbanas), 562.605 mujeres que trabajan son maltratadas. La diferencia en los ingresos entre las mujeres maltratadas y las que no lo eran es 96.297 pesos por mes, o sea 1.155.564 pesos por año. Por consiguiente, 1.155.564 pesos multiplicado por 562.605 mujeres da una pérdida salarial total de 650.126.084.220 (650.000 millones de pesos).

¹¹ El PIB de Chile en 1996 fue 29,6 billones de pesos (Banco Central de Chile 1997:1370).

¹² Se usa la prueba de chi cuadrado, que rechaza la independencia al 1% de la confiabilidad estadística.

¹³ Ni este enfoque ni las comparaciones de valores promedios antedichas abordan la cuestión de la causalidad. En otras palabras, no nos dicen si las mujeres ganan menos debido a la violencia doméstica o si sufren violencia doméstica porque ganan menos. Hemos presentado en líneas generales las razones por las cuales la primera hipótesis tal vez sea cierta. La segunda hipótesis podría ocurrir porque los ingresos externos aumentan el poder de negociación de la mujer en el hogar y reducen su dependencia económica respecto de su compañero. Con esta posición mejor frente al marido, la mujer puede exigir un trato mejor. Usamos una metodología estadística más adelante que nos permite desenmarañar la relación causal entre la violencia doméstica y los ingresos de las mujeres.

¹⁴ Al hacer una ecuación de ingresos, es importante reconocer que las personas que deciden trabajar podrían tener características diferentes de aquellas que optan por no trabajar. Como estas características podrían influir en el rendimiento de su inversión en capital humano, si no se tienen en cuenta estas características los resultados podrían presentar sesgos graves. (Tener en cuenta estas características se llama "corregir el sesgo de selección".) En todas las ecuaciones de ingresos que figuran más adelante se usó la corrección de selección de Heckman. En las ecuaciones de ingresos correspondientes a Santiago, la corrección de selección nunca fue significativa, y no se menciona en el cuadro correspondiente. En el caso de Managua, la corrección de selección fue estadísticamente significativa y se presenta en los resultados de la ecuación de ingresos.

¹⁵ El coeficiente correspondiente a la variable instrumental de violencia doméstica en la ecuación de ingresos no es estadísticamente tan significativo como en la ecuación de ingresos simple mencionada. Sin embargo, tiene una magnitud casi idéntica.

¹⁶ Se estimaron ecuaciones separadas de ingresos utilizando escalas que miden la gravedad de los distintos tipos de violencia doméstica (violencia física severa, violencia física menos severa, violencia psicológica y violencia sexual). Todos los tipos tuvieron efectos negativos muy significativos en los ingresos.

¹⁷ La variable no es significativa por la gran varianza de los ingresos entre las mujeres de la muestra. Eso, a su vez, es típico de un mercado laboral caracterizado por una gran desigualdad de ingresos.

¹⁸ El cálculo se efectuó del siguiente modo: el total de personas empleadas en Nicaragua en 1995 (datos

más recientes de que se dispone) fue 1.459.000 (IDB 1997). De ese total, aproximadamente 30% eran mujeres (United Nations 1995:143), lo cual da un total de 437.700 mujeres empleadas. Según nuestros cálculos, 62,1% de las mujeres de Managua que trabajan sufren violencia doméstica. Si este porcentaje es el mismo para todo el país, 271.812 mujeres que trabajan en Nicaragua son maltratadas. La diferencia en los ingresos entre las mujeres maltratadas y las que no lo eran es de 82 córdobas por mes, o sea 984 córdobas por año. Esa suma anual multiplicada por 271.812 mujeres da una pérdida salarial de 267.463.000 córdobas en total. El tipo de cambio en febrero de 1997 (datos más recientes de que se dispone) era 9,05 córdobas por dólar, o sea que, en dólares, la pérdida asciende a US\$29.553.922. En 1996, el PIB de Nicaragua fue de 17.126 millones de córdobas (Banco Central de Nicaragua 1997).

¹⁹ La estadística de chi cuadrado es de solamente 1,04, cifra que es significativa solamente al nivel del 31%. Cabe destacar, sin embargo, que las tabulaciones cruzadas entre violencia sexual e ingresos rechazaron la hipótesis de independencia al nivel del 7%, mientras que la independencia de la violencia física severa e ingresos fue rechazada al nivel del 11%. La prueba de chi cuadrado no rechaza la independencia de la violencia psicológica e ingresos.

²⁰ La variable de educación en Nicaragua es mejor que la de Chile. En Nicaragua, la variable es los años de estudios terminados. En Chile, es una serie de variables dicotómicas que indican si una mujer fue a la escuela primaria, la secundaria o la universidad.

²¹ Y la primera tiene un coeficiente con un signo imprevisto.

²² Es importante distinguir entre todos los proveedores de servicios y los del sector público, ya que es probable que las mujeres de ingresos más bajos utilicen exclusivamente servicios del sector público.

²³ El hecho de que la variable (en la ecuación de violencia doméstica) que mide si el padre de una mujer maltrató físicamente a la madre de ella es estadísticamente significativa apoya indirectamente la hipótesis de la transmisión intergeneracional.

²⁴ Tenemos datos sobre el rendimiento escolar de un hijo de cada una de las mujeres de la muestra. Este niño fue seleccionado al azar entre todos los hijos de 7 a 16 años, ya que no había suficiente tiempo ni recursos para preguntar sobre todos los hijos de la familia.

²⁵ Se hicieron también pruebas no paramétricas de chi cuadrado, las cuales confirman en todos y cada uno de los casos los resultados de las pruebas paramétricas referentes a las diferencias en los valores promedio.

²⁶ Véanse Stets y Straw (1990), Stanley (1992) y U.S. Department of Justice (1994) sobre el ausentismo; y Friedman y Cooper (1987) sobre el acoso.

²⁷ Véanse Kornblit (1994:1184) y Strauss (1978) sobre la autoestima.

²⁸ Sen (1990).

²⁹ Fleck (1997) y Manian (1997) han creado modelos formales de este proceso. Estos modelos tienen una implicación importante: aunque una mujer sepa que trabajar fuera de casa podría desencadenar reacciones violentas, tal vez opte por hacerlo para ejercer un mayor control sobre los ingresos familiares y

estar en condiciones de ofrecer una mejor educación y atención médica a sus hijos. Si valora el aumento del bienestar material más que la disminución del bienestar a causa del maltrato, su decisión es eminentemente racional.

³⁰ Se han encontrado indicios preliminares de que estos factores tienden a afectar a la productividad, por lo menos en Estados Unidos. Véanse Shepard y Pence (1988), Stanley (1992) y U.S. Department of Justice (1994).

Referencias

- Banco Central de Chile. 1997. *Boletín Mensual* 831 (Mayo).
- Banco Central de Nicaragua. 1997. *Boletín Mensual* 14 (Mayo).
- Barragán, L., A. Ayala y G. Camacho. 1992. *Proyecto educativo sobre violencia de género en la relación doméstica de pareja*. Quito: Centro de Planificación y Estudios Sociales.
- Berndt, E., B. Hall, y J. Hausman. 1974. Estimation and Inference in Nonlinear Structural Models. *Annals of Economic and Social Measurement* 3/4: 653-66.
- Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice. 1994. *The Cost of Crime to Victims*. Washington, DC.
- CELADE. 1997. *Boletín Demográfico* 30(59).
- Fleck, Susan. 1997. Choice or Bargain? Married Women's Labor Force Participation in Honduras. Tesis doctoral inédita. American University, Washington, DC.
- Friedman, Lucy, y Sarah Couper. 1987. *The Costs of Domestic Violence: A Preliminary Investigation of the Financial Cost of Domestic Violence*. New York: Victims Services Agency.
- Greaves, Lorraine, Olena Hankivsky, y JoAnn Kingston-Riechers. 1995. *Selected Estimates of the Costs of Violence against Women*. London, Ontario: Centre for Research on Violence Against Women and Children.
- Gronau, R. 1986. Home Production: A Survey. En *Handbook of Labor Economics*, compilado por O. Ashenfelter y R. Layard. Amsterdam: North Holland.
- Handwerker, Penn. 1993. Gender Power Differences between Parents and High Risk Sexual Behavior by their Children: AIDS/STD Risk Factors Extend to a Prior Generation. *Journal of Women's Health* 2(3):301.
- Heckman, James 1979. Sample Selection Bias as a Specification Error. *Econometrica* 47:153-61.
- Heise, Lori. 1997. Violence Against Women: An Integrated, Ecological Model. Working paper. Takoma Park, MD: CHANGE.
- Heise, Lori, Jacqueline Pitanguy y Adrienne Germain. 1994. *Violence Against Women: The Hidden Health Burden*. Washington, DC: World Bank. Discussion Paper No. 255.
- Huesmann, L.R. 1987. The Development of Aggressive Behavior from the Perspective of a Developing Behaviorism. *American Psychologist* 42:435-42.

- Inter-American Development Bank. 1997. *Economic and Social Progress in Latin America*. Washington: IADB.
- Katz, Elizabeth. 1997. The Intra-Household Economics of Voice and Exit: Evaluating the Feminist-Institutional Content of Family Resource Allocation Models. New York: Barnard College Economics Department Working Paper #97-05.
- Kornblit, Ana. 1994. Domestic Violence-An Emerging Health Issue. *Social Science and Medicine* 39(9):1181-88.
- Koss, Mary, F. Koss y J. Woodruff. 1991. Deleterious Effects of Criminal Victimization on Women's Health and Medical Utilization. Tempe: University of Arizona, Department of Psychology Working Paper.
- Larraín Heiremans, Soledad. 1994. *Violencia puertas adentro: La mujer golpeada*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Larraín, Soledad, y Teresa Rodríguez. 1993. The Origins and Control of Domestic Violence against Women, en Elsa Gómez (ed.) *Gender, Women and Health in the Americas*. Washington, D.C.: Pan American Health Organization.
- Laurence, Louise, y Roberta Spalter-Roth. 1996. Measuring the Costs of Domestic Violence Against Women and the Cost-Effectiveness of Interventions: An Initial Assessment and Proposals for Further Research. Washington, D.C.: Institute for Women's Policy Research.
- Martian, Sunita. 1997. Intra-Household Distribution of Food in India: A Game-Theoretic Analysis. Tesis doctoral, Tulane University.
- Meyer, Harris. 1992. The Billion Dollar Epidemic. *American Medical News* (January 6).
- Mincer, Jacob. 1962. Labor Force Participation of Married Women, en *Aspects of Labor Economics*. Washington: National Bureau of Economic Research.
- Mullen, P.E., S.E. Romans-Clarkson, V.A. Walton, y P.E. Herbison. 1988. Impact of Sexual and Physical Abuse on Women's Mental Health. *Lancet* (8590):841-5.
- Polochek, S.W., y W.S. Siebert. 1993. *The Economics of Earnings*. New York: Cambridge University Press.
- PROFAMILIA (Asociación pro Bienestar de la Familia). 1992. *La violencia y los derechos de la mujer*. Bogotá: PROFAMILIA.
- Sen, Amartya. 1990. Gender y Cooperative Conflicts, en *Persistent Inequalities: Women and World Development*, compilado por I. Tinker. New York: Oxford University Press.
- Shepard, Melanie, y Ellen Pence. 1988. The Effect of Battering on the Employment Status of Women. *Affilia* 3(2):55-61.

- Stanley, Connie. 1492. Domestic Violence: An Occupational Impact Study. Informe inédito, Domestic Violence Intervention Services, Inc., Tulsa, Oklahoma.
- Stets, Jan, y Murray Straus. 1990. Gender Differences in Reporting Marital Violence and Its Medical and Psychological Consequences, en *Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families*, compilado por M. Straus y R. Gelles. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
- Strauss, Murray. 1978. Wife Beating: How Common and Why? *Victimology: International Journal* 2:433.
- Strauss, Murray, et al. 1996. The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2): Development and Preliminary Psychometric Data. *Journal of Family Issues* 17(3): 283-316.
- United Nations. 1995. *The World's Women 1995: Trends and Statistics*. New York: United Nations.
- Valdez Santiago, Rosario, y Luz Helena Sanín Aguirre. 1996. La violencia doméstica durante el embarazo y su relación con el peso al nacer. *Salud Pública de México* 38(5): 352-62.
- Valladares Cardoz, María Eliette. 1996. Recién nacidos de bajo peso y violencia doméstica: Estudio de caso-referente. Documento de trabajo. Managua: UNAN-León.
- Widom, Cathy Spatz. 1989. The Cycle of Violence. *Science* 244:160-66.

Efectos de la violencia doméstica en la salud: Ciudad de México

Rafael Lozano Ascencio¹

El constante incremento de la delincuencia y la violencia en la sociedad obligan a desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica de las pérdidas de la salud originadas por hechos violentos. Determinar las características demográficas de víctimas y victimarios, los motivos de los perpetradores y, en particular, los factores de riesgo asociados al problema haría más fácil interrumpir el ciclo de violencia y fortalecer las medidas preventivas².

Hasta ahora se han realizado pocas evaluaciones de los efectos de la violencia en la salud, la mayoría de las cuales han recurrido a indicadores simples, como registros de mortalidad, registros de denuncias, registros hospitalarios y encuestas de víctimas de diversos delitos. Desafortunadamente, en casi todas estas evaluaciones o sistemas de registros los daños permanentes, los daños temporales y las muertes asociadas a la violencia se han considerado por separado, ofreciendo así una visión parcial o incompleta de los problemas de salud asociados a la violencia. Recientemente se han desarrollado indicadores para medir los resultados mortales y no mortales de las enfermedades y las lesiones. A diferencia de los indicadores anteriores, estos indicadores compuestos usan la misma unidad para asignar valores a toda una gama de lesiones y enfermedades, tanto temporales como mortales (véase en el recuadro 4.1 un análisis de la violencia contra la mujer y las complicaciones metodológicas de su medición).

En el presente estudio se utiliza un indicador diseñado por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard, que contabiliza los años de vida saludables (AVISA) perdidos como consecuencia de la mortalidad o discapacidad prematuras. El indicador de años de vida perdidos, creado por Murray y López (Murray 1994; Murray y López 1994a,b; y Murray et al. 1994), tiene varios antecedentes: el trabajo pionero de Dempsey (1947), uno de los primeros en proponer que la mortalidad prematura debía medirse en unidades de tiempo perdido; Chiang (1965) y Berg (1973), que propusieron medir de manera combinada la enfermedad y la muerte prematura; y Morrow (1984), el primero en usar un indicador compuesto para determinar las prioridades en materia de salud en un país en desarrollo.

Recuadro 4.1 Violencia contra la mujer: definición del término

La Organización de las Naciones Unidas ha definido la “violencia contra la mujer” como “todo acto de violencia... que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (Naciones Unidas 1993). Sin embargo, en la determinación de la forma en que la violencia afecta a la salud de la mujer y de sus hijos, esta definición plantea algunos problemas metodológicos. Saucedo afirma que el uso de definiciones y la descripción del problema han sido los primeros obstáculos para su estudio adecuado. Agrega que este tema, igual que otros relacionados con determinados aspectos de sus relaciones sociales y sus significados culturales, no puede dilucidarse con los instrumentos tradicionales de la salud pública. Por esa razón, además de las evaluaciones epidemiológicas de la violencia contra la mujer, se necesita un conocimiento específico de las dimensiones culturales y sociales relacionadas con la valoración de género (Saucedo 1997).

Una pesada carga cultural rodea los actos de violencia en el hogar de las víctimas, y como es difícil reconstruir esta importante dimensión del problema, Saucedo afirma que sería mejor separar los actos de violencia contra la mujer que se cometen en la vida pública de los actos de violencia cometidos en el hogar. La violencia contra la mujer en lugares públicos consiste principalmente en actos aislados perpetrados por desconocidos, como delitos sexuales, robos o problemas con la solución de conflictos. La violencia en el hogar tiende a ser recurrente. Consiste en actos cometidos por personas que la víctima conoce, debidos a conflictos familiares o conyugales. Otros autores recomiendan una definición aun más estricta, como la violencia contra la pareja.

En este estudio se usó la definición de la ONU para la violencia contra la mujer, pero también se procura separar los actos de violencia cometidos en lugares públicos de la violencia en la vida privada, como recomienda Saucedo. En la medida de lo posible, en el estudio se prestó especial atención a los efectos de la violencia contra la mujer maltratada por su pareja.

Los AVISA perdidos —expresados en unidades de tiempo— tienen la ventaja de ofrecer una métrica común para las pérdidas de salud por todas las causas y en todas las edades. De esta forma se puede comparar, por ejemplo, un AVISA perdido por un episodio de violencia contra un niño con uno perdido por el homicidio de un adulto mayor o por un trastorno psiquiátrico en una mujer joven. Los AVISA se usan principalmente para medir las necesidades de salud de una población determinada, evaluar la efectividad de las intervenciones en salud y facilitar la determinación de prioridades de investigación y atención médica. Según nuestra experiencia, la estimación de los AVISA también genera beneficios metodológicos, puesto que obliga a maximizar el uso de los datos disponibles (y, de esta forma, corregir el subregistro y los errores de clasificación de las defunciones), favorece la sistematización de información sobre enferme-

dades y lesiones que generalmente está dispersa (como la prevalencia, la letalidad y la duración) y propicia la adopción de técnicas de consenso que mejoran la coherencia interna y externa de las estimaciones entre numerosos grupos de investigadores y encargados de la toma de decisiones (Lozano et al. 1995).

Uno de los primeros estudios en los cuales se usaron los AVISA perdidos para medir los efectos de la violencia contra la mujer se basó en las conclusiones de un estudio publicado por el Banco Mundial y la Universidad Harvard (Heise et al. 1994). En dicho estudio se estimó que las violaciones y la violencia doméstica representan el 5% de los años de vida saludables perdidos por mujeres en edad reproductiva en los países desarrollados y el 14% en los países en desarrollo. Desafortunadamente, los procedimientos empleados para llegar a esta cifra fueron indirectos y se atribuyó una cuota elevada a las enfermedades seleccionadas, que incluyen las lesiones intencionales (homicidios y suicidios), por lo cual se sospecha que se haya sobreestimado el resultado. Tal defecto no resta méritos a este trabajo pionero para evaluar el impacto de la violencia en la salud de las mujeres.

Recientemente se han dado nuevas posibilidades metodológicas para estimar las pérdidas asociadas a la violencia, tanto con procedimientos directos (determinando los AVISA perdidos por enfermedades o lesiones) como con métodos indirectos para evaluar los daños atribuibles a determinados factores de riesgo (de ahí que se deba evaluar más de un trastorno). A partir del estudio financiado por el BID sobre la magnitud y los costos de la violencia en seis países de América Latina se cuenta con mejores técnicas para estimar los AVISA perdidos a causa de la violencia en general (BID 1997). Además, recientemente se publicaron metodologías que permiten estimar con mayor precisión los daños atribuibles a determinados factores de riesgo, entre ellos la violencia contra la mujer (Murray y López 1997).

Antes de describir las consecuencias de la violencia en la salud de la mujer es necesario señalar que las fuentes de información plantean dificultades que afectan a la calidad de los resultados. En primer lugar, la información es escasa y los datos secundarios con que se cuenta están sesgados. No todas las mujeres denuncian los hechos violentos que padecen y sólo se registran datos parciales, ya que posiblemente no se deje constancia alguna de las lesiones menores. Segundo, muchas veces las mujeres acuden a los servicios de salud para atenderse por otros problemas y los problemas asociados a la violencia no se detectan por falta de capacitación de los médicos y enfermeras. Tercero, las consecuencias directas de la violencia o los daños físicos pueden ser una parte menor del problema pues algunas mujeres sufren más por las huellas psicológicas y sexuales del maltrato. Por último, todavía no hay técnicas para medir directamente la pérdida de años de vida saludable atribuible a los resultados del maltrato. En el mejor de los casos, se realizan estimaciones indirectas de una gama de trastornos psicológicos y sexuales, calculando el grado en que se pueden atribuir a la violencia.

Estimación de la carga de morbilidad asociada a la violencia contra la mujer

Inicialmente, la carga de la enfermedad y las lesiones se estima por medio de procedimientos separados para la muerte prematura y la discapacidad. Posteriormente, estos resultados parciales se combinan en una hoja de cálculo para mostrar los resultados finales.

Para estimar los años perdidos por muertes prematuras (APMP) se debe emplear el total de defunciones relacionadas con la violencia. Una vez corregido el subregistro y la mala clasificación, se calcula el tiempo perdido debido a mortalidad prematura en grupos de distintas edades y en relación con cada una de las causas seleccionadas. Para cuantificar las pérdidas asociadas a muertes prematuras debidas a lesiones intencionales se analizaron tres fuentes de datos de la Ciudad de México: las estadísticas vitales de 1990 a 1995, a fin de analizar las variaciones en la tendencia de los homicidios y suicidios; las partidas de defunción de las mujeres que murieron de una lesión intencional en 1995 en el Distrito Federal; y los expedientes de las autopsias de 1.242 mujeres que pasaron por el servicio médico forense del Distrito Federal en 1996.

Para cuantificar las consecuencias físicas, psicológicas y sexuales de las lesiones intencionales no mortales se analizaron dos fuentes de datos. La primera fue el sistema de expedientes médicos del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (460 exámenes médicos realizados de diciembre de 1996 a junio de 1997). Además, se usaron datos de dos encuestas: una de mujeres que acudieron a la sala de urgencia de cuatro hospitales en enero, febrero y marzo de 1997, y otra de mujeres que acudieron a la sala de urgencia de un hospital en junio y julio de 1997. En total se realizaron 274 encuestas.

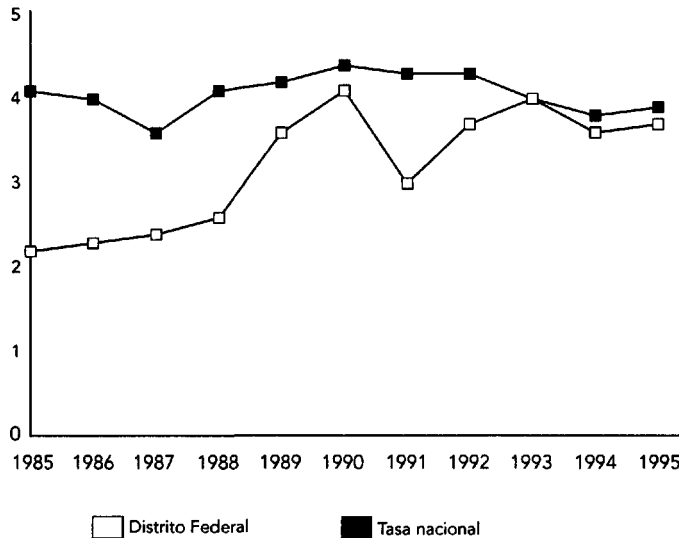
El porcentaje atribuible a la violencia contra las mujeres se reconstruyó a partir de un análisis de publicaciones especializadas. De ahí se obtuvieron los riesgos relativos entre hechos violentos y determinadas enfermedades o daños a la salud asociados a ellos y la prevalencia de la exposición a la violencia. Se tomaron precauciones para que las cifras de prevalencia utilizadas fuesen congruentes con las cifras de incidencia y mortalidad estimadas. Una vez calculados los porcentajes atribuibles a la violencia fue posible obtener los AVISA asociados a problemas reproductivos, psicológicos o sexuales.

Resultados

Homicidios

Según la información disponible, la mortalidad por homicidios en las mujeres de México en el período de 1985 a 1995 se mantuvo estable en cuatro homicidios por 100.000 mujeres. En cambio, en la Ciudad de México la tasa de homicidios de mujeres se dupli-

FIGURA 4.1
Mortalidad de mujeres por homicidio en México, 1985-1995
(Tasa por 100.000)



Fuente: INEGI/SSa, cuadros de mortalidad, corregidos por FUNSAUD (1997).

có, pasando de alrededor de 2 por 100.000 a poco más de 4 por 100.000 (véase la figura 4.1)³. Aunque hay amplios indicios a nivel internacional de que un gran porcentaje de las mujeres asesinadas fueron ultimadas por su compañero, la documentación al respecto es escasa en México. Una forma de corregir esta deficiencia sería tener en cuenta el estado civil de las víctimas. De las mujeres asesinadas en México en 1996, 40% eran solteras, 49% tenían pareja, 3% eran divorciadas y 9% eran viudas. Teniendo en cuenta la cantidad de mujeres en cada categoría, el riesgo de morir por homicidio es menor en las mujeres casadas que en las solteras, las divorciadas y las viudas. En las mujeres con pareja, la tasa de homicidios de mujeres que viven en unión libre es el doble de la tasa observada en mujeres casadas.

En la Ciudad de México, alrededor de 28% de los agresores son los cónyuges, 30% son conocidos o familiares y 42% son desconocidos. Las muertes por asaltos son las más frecuentes. Les siguen en orden de importancia los problemas conyugales, la solución de conflictos no conyugales y los delitos sexuales. Los homicidios por robo son más frecuentes en las viudas. Por su parte, los homicidios que derivan de problemas en la solución de conflictos son más frecuentes en las divorciadas y en las mujeres

Cuadro 4.1 Mortalidad por homicidio de mujeres según su estado civil: México, 1995

(Tasa por 100.000)

Estado civil	Nacional	Distrito Federal (D.F.)	D.F./Nacional
Soltera	4,6	3,7	0,8
Casada	3,0	2,4	0,9
En unión libre	6,1	6,8	1,1
Divorciada y separada	3,0	3,8	1,3
Viuda	5,3	5,2	1,0
TOTAL	4,0	4,1	1,0

con pareja que en las demás categorías (véase el cuadro 4.1). Como se ha demostrado en la mayoría de los estudios, las víctimas de homicidios son jóvenes. En la Ciudad de México, la edad mediana de muerte es de 25 años, aunque si en las estadísticas no se incluyen las recién nacidas que mueren abandonadas a la intemperie ni las muertes fetales debidas a asaltos y conflictos conyugales, la mediana de la edad de muerte sube a 32 años.

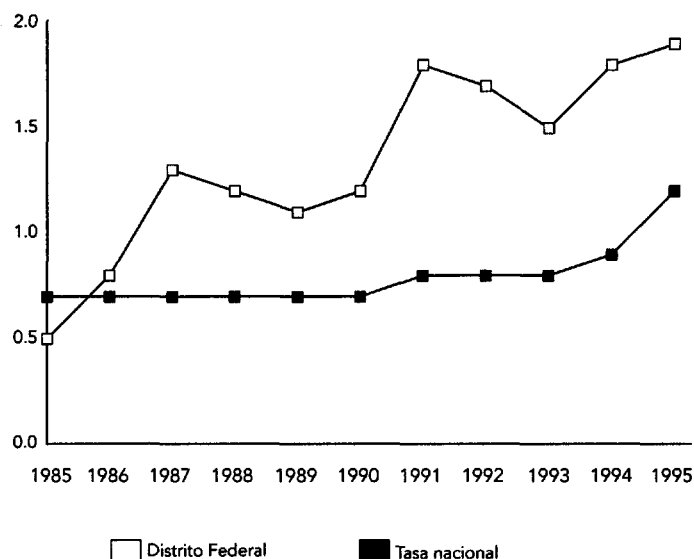
Suicidios

A diferencia de los homicidios, la tasa de suicidios en las mujeres ha venido aumentando desde principios de los años noventa a nivel nacional, con un aumento pronunciado en el Distrito Federal. Mientras que en México en su totalidad la tasa ha aumentado alrededor del 50%, pasando a 1,2 suicidios por 100.000 mujeres, en el Distrito Federal se ha cuadruplicado, pasando a casi 2 por 100.000 (véase la figura 4.2).

En México no se ha documentado la asociación entre la violencia contra la mujer y los suicidios. Sin embargo, al analizar la magnitud de las muertes autoinfligidas según el estado civil, se observa que el riesgo de suicidio es mayor en las mujeres solteras y mucho mayor en las divorciadas que en las casadas, resultado similar al observado en otros lugares. En el Distrito Federal, el riesgo de suicidio es mayor en las mujeres en unión libre y en las divorciadas, en quienes el riesgo de suicidio es tres veces mayor que en el resto de México (véase la figura 4.3).

Los motivos que con más frecuencia conducen al suicidio son las alteraciones nerviosas (incluida la depresión), los problemas familiares (no se hace distinción de los problemas conyugales) y los problemas sentimentales. En el 30 al 40% de los casos se desconoce el motivo del suicidio. La edad promedio de las mujeres que se suicidan en la Ciudad de México es de 34 años.

FIGURA 4.2
Mortalidad de mujeres por suicidio en México, 1985-1995
(Tasa por 100.000)



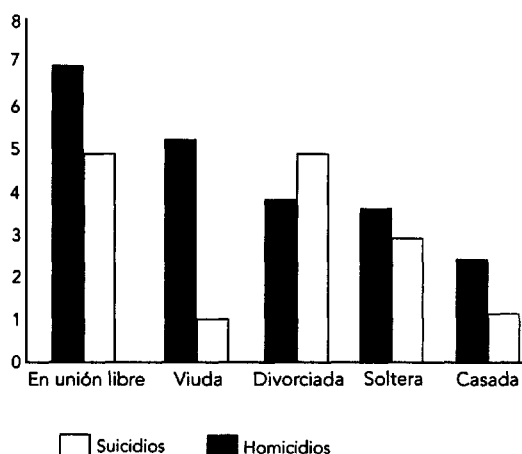
Fuente: INEGI/SSa, cuadros de mortalidad, corregidos por FUNSALUD (1997).

AVISA perdidos por lesiones físicas

En el Distrito Federal, alrededor de 11.000 AVISA perdidos por mujeres en 1995 son atribuibles a homicidios o asaltos. De ellos, 42% corresponden a años perdidos por muerte prematura (APMP), y 57% a años vividos con discapacidad (AVD). La distribución varía según el motivo de la agresión física. Las mujeres que fueron asaltadas o víctimas de un delito sexual presentan más años de discapacidad, mientras que las mujeres que fueron víctimas de maltrato conyugal presentan más años perdidos por muerte prematura. Eso se debe en parte a que la gravedad de las lesiones es mayor cuando las mujeres son asaltadas o lesionadas por un desconocido, y en parte a que las mujeres que mueren como consecuencia de problemas conyugales tienden a ser más jóvenes.

Si se examinan solamente los problemas físicos ocasionados por la violencia contra la mujer, los asaltos son los que tienen consecuencias más graves en su salud. Eso se debe a la gran frecuencia con que se presentan y a la gravedad de sus secuelas. Mientras que en las mujeres que son agredidas por conocidos las consecuencias más

FIGURA 4.3
Homicidios y suicidios de mujeres según el estado civil:
Ciudad de México, 1995
(Tasa por 100.000)



comunes son las contusiones, los traumatismos superficiales y las fracturas de la cara, que tardan poco tiempo en sanar, en las mujeres agredidas por desconocidos las lesiones son más graves. Las más frecuentes son traumatismos craneoencefálicos, fracturas de cráneo, fracturas de huesos de extremidades superiores e inferiores, y heridas de la cara y el cuello, que tardan más en sanar. Por la forma en que se estructuró el estudio, no fue posible distinguir las mujeres que fueron víctimas de ambos tipos de violencia.

El tipo de lesiones físicas que derivan de la violencia contra la mujer está estrechamente relacionado con el motivo de la agresión. De acuerdo con la información analizada, cinco de cada diez mujeres que acudieron a la sala de urgencia de los hospitales estudiados presentaban lesiones resultantes de problemas conyugales, dos presentaban lesiones infligidas por asaltantes o debidas a problemas fuera de la casa, y las demás presentaban lesiones sufridas durante riñas familiares y vecinales⁴. En general, muy pocas mujeres (3-9%) debieron ser hospitalizadas por sus lesiones, pero las hospitalizaciones por lesiones infligidas por desconocidos fuera de la casa ascendieron al 9,3%, en comparación con el 3,3% en el caso de las lesiones infligidas por la pareja.

Las lesiones que derivan de la violencia intrafamiliar son menos graves pero mucho más frecuentes que las lesiones que llevan a la hospitalización. En su mayoría son golpes con puños y pies, y en muy pocos casos son golpes con objetos contundentes o punzocortantes, lesiones provocadas por empujones y mordeduras. Desde el punto de vista jurídico, la mayoría de estas lesiones se consideran leves, pues tardan menos de 15 días en sanar. De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, las

lesiones físicas más frecuentes son contusiones, traumatismos superficiales y equimosis (moretones) en distintas partes del cuerpo. Las más afectadas son la cara (55%), las extremidades superiores (43%) y las extremidades inferiores (37%). Alrededor de 20% de las mujeres presentaban lesiones en tres o más partes del cuerpo (politraumatismos), 36% en dos partes del cuerpo y las demás en una sola parte del cuerpo. Sobre la base de todos los datos sobre lesiones se preparó un cuadro de lesiones para establecer una correlación entre la gravedad de la lesión y el motivo del ataque, a fin de estimar los años vividos con discapacidad después de haber sufrido el acto de violencia.

Se analizaron también los AVISA perdidos por lesiones autoinfligidas o suicidio. Como se había mencionado anteriormente, a pesar del ascenso de la mortalidad por suicidios y posiblemente de la incidencia de los intentos de suicidio, la Ciudad de México presenta una carga asociada a estas causas relativamente baja. Se calcula que, en 1995, se perdieron alrededor de 3.500 AVISA por suicidio o intentos de suicidio en las mujeres, de los cuales 77% corresponden a muertes prematuras y 23% a discapacidad.

A partir de las fuentes de información utilizadas sólo fue posible efectuar una estimación aproximada de la proporción de AVISA perdidos por suicidio asociados a la violencia doméstica. En análisis generales realizados en México se ha observado que los problemas familiares son uno de los motivos principales de los intentos de suicidio y que los problemas de pareja son uno de los motivos principales de los suicidios consumados (Terroba et al. 1986a). Según un estudio, 18% de las mujeres que intentaron suicidarse eran casadas, mientras que 43% de las que consumaron el suicidio eran casadas. En el primer grupo de mujeres se observaron signos de depresión intensa en el 60% de los casos; 20% tenían depresión extrema (Terroba et al. 1986b, 1987).

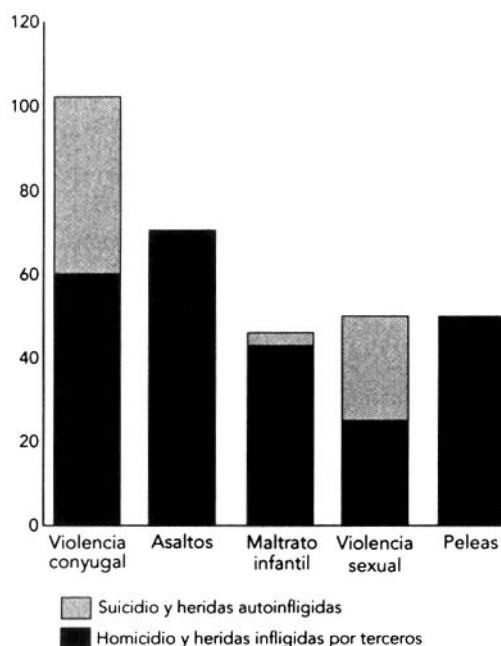
Según los datos correspondientes a la Ciudad de México, 36% de las mujeres que se suicidaron eran casadas, 13% eran divorciadas o separadas y 51% eran solteras. Al examinar las actas judiciales se confirmó que por lo menos dos de cada tres mujeres casadas habían tenido problemas conyugales antes de suicidarse. Por consiguiente, se decidió atribuir 40% de los suicidios a la violencia conyugal, 25% a problemas emanados de riñas y conflictos, 25% a la violencia sexual y 10% al maltrato de adolescentes.

En la figura 4.4 se presentan los AVISA perdidos por lesiones físicas en la Ciudad de México según el tipo de violencia. La violencia conyugal es la causa más importante de AVISA perdidos, debido en gran medida a la contribución del suicidio y las heridas autoinfligidas. Le siguen por orden de importancia los asaltos, el maltrato de las niñas, la violencia sexual y las riñas.

AVISA perdidos por trastornos psicológicos y reproductivos

El análisis de AVISA perdidos por daños no físicos (trastornos psicológicos y reproductivos) causados por actos de violencia contra mujeres es, tal vez, el más tenta-

FIGURA 4.4
AVISA perdidos por lesiones intencionales, por tipo de violencia:
Ciudad de México, 1994
 (Por 100.000 mujeres)



tivo. Aunque parezca ser una pregunta sencilla, en México se ha hecho muy poco para documentar los daños no físicos ocasionados por este tipo de violencia.

Trastornos psicológicos

Trastornos del sueño, ansiedad, episodios de depresión e intentos de suicidio son algunos de los trastornos psicológicos observados en mujeres maltratadas (Walker 1984). Las mujeres violentadas también presentan problemas psicológicos asociados al síndrome de estrés postraumático con más frecuencia que las mujeres sin antecedentes de violencia (Woods y Campbell 1993).

En México se han hecho algunos estudios de la incidencia de trastornos psicológicos ocasionados por la violencia contra la mujer. En una encuesta, 35% de las mujeres maltratadas dijeron que sufrían depresión; 28%, miedo y angustia; y menos del 10%, alcoholismo, drogadicción y tendencias suicidas (Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, CAVI 1996). Según los registros del CAVI, durante 1997,

29% de las mujeres agredidas por su pareja dijeron que tenían problemas digestivos; 54%, insomnio; 25%, reacciones nerviosas; 54%, pérdida del apetito; y 70%, cefalea. Con esta información se preparó un índice de trastornos psicológicos, en el cual se clasifican como graves los casos de mujeres que presentaban por lo menos cuatro de los trastornos mencionados y como leves los casos en que presentaban uno o dos. Los resultados muestran que solamente una de cada cinco mujeres no presentaba trastornos psicológicos; tres de cada cinco tenían trastornos de moderados a graves. Un análisis de las disfunciones mostró que 92% de las mujeres maltratadas presentaban anorgasmia, disminución de la libido o ambas.

Daños a la salud reproductiva

La asociación entre violencia y salud reproductiva es un campo relativamente nuevo. Hasta ahora, los estudios se han centrado en los efectos de la violencia en el embarazo (Campbell et al. 1992). En estos estudios se ha procurado demostrar que la violencia contra las mujeres embarazadas aumenta el riesgo de bajo peso al nacer (Parker et al. 1994), de complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio (McFarlane et al. 1996) y de enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida (Schein y Bakketeig 1989).

En un estudio realizado en México se observó que 33% de 110 mujeres que acudieron al hospital civil de Cuernavaca habían sido víctimas de actos de violencia durante el embarazo. En comparación con las mujeres que no habían tenido este problema, presentaban un riesgo cuatro veces mayor de que el hijo pesara menos de 2.500 gramos al nacer y tres veces mayor de sufrir complicaciones durante el parto y el período inmediato de posparto (Valdez y Sanin 1996). A nivel internacional, la prevalencia de la violencia durante el embarazo varía según el método utilizado para medirla. Cuando la información se obtiene de encuestas autoadministradas, la prevalencia es del 7%; cuando se emplean encuestadores, la prevalencia se eleva al 30%.

Según la información recopilada en la Ciudad de México para este estudio, el porcentaje de mujeres embarazadas con antecedentes de violencia fue del 6%, tanto en las mujeres que acudieron a la sala de urgencia con lesiones como en las que fueron a declarar al CAVI. Aunque ninguna presentaba golpes en la región abdominal, una de cada cinco señaló que había presentado una amenaza de aborto espontáneo.

Estimación de los AVISA perdidos por daños no físicos

Para estimar los AVISA perdidos por trastornos psicológicos y reproductivos atribuibles a la violencia ideamos una fórmula basada en varios supuestos relacionados con el riesgo relativo promedio de que un tipo determinado de violencia tuviera un efecto determinado. Supusimos primero que el riesgo relativo era constante para los grupos

de todas las edades y que cada riesgo debe considerarse después de controlar los demás riesgos. También supusimos que la magnitud de la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad medida en términos de incidencia o mortalidad era la misma para el impacto de la enfermedad medido en términos de AVISA. Por último, supusimos que la prevalencia de la violencia no había cambiado entre el momento en que se obtuvieron los datos y el momento en que se efectuó el cálculo. Esta suposición es sumamente importante en relación con las enfermedades con un largo período de latencia (como la depresión), cuya frecuencia actual es el resultado de la exposición repetida a actos de violencia sufridos por algunas mujeres durante varios años.

Los AVISA perdidos atribuibles a la violencia (AV) se calculan con la siguiente fórmula:

$$AV = \sum_{c=1}^n \sum_{e=15}^{60} AVISA_{ce} ((PF_e(R_{fc}-1)/PF_e(R_{fc}-1)+1))$$

donde c representa una enfermedad asociada a la violencia; e es el grupo de 5 a 14 años, de 15 a 44 años, de 45 a 59 años o de 60 años o más; AVISA_{ce} es la cantidad de AVISA perdidos por la causa c en el grupo e; PF_e es la prevalencia del factor de riesgo en el grupo e; y R_{fc} es el riesgo relativo promedio asociado con el factor f en la causa c.

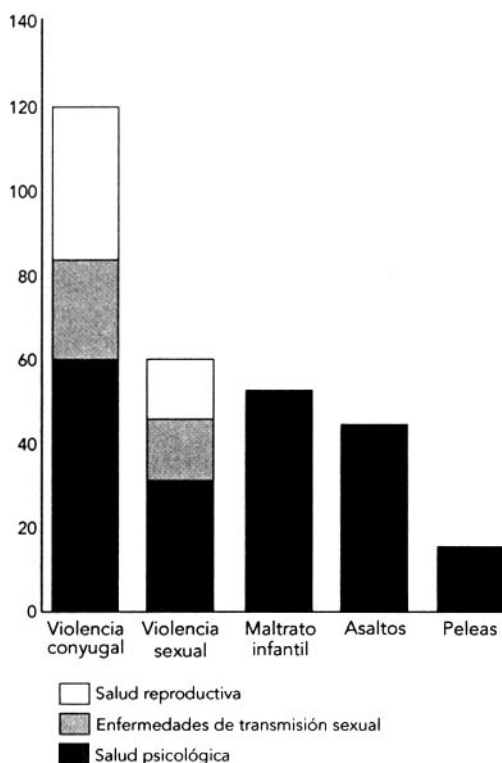
Según este cálculo, se perdieron 12.700 AVISA por daños no físicos atribuibles a la violencia contra la mujer en la Ciudad de México, de los cuales 31% están relacionados con problemas reproductivos y 69% con trastornos psicológicos y neuropsiquiátricos. En ambos casos, la mayoría de los AVISA perdidos atribuibles a la violencia se concentraron en mujeres en edad fértil.

La figura 4.5 muestra los AVISA perdidos por daños no físicos ocasionados por la violencia contra la mujer. Debido a sus múltiples efectos, la violencia conyugal es la causa principal de estos AVISA perdidos. De hecho, el riesgo de perder años de vida saludable debido a efectos relacionados indirectamente con la violencia conyugal es el doble del riesgo asociado a la violencia sexual y casi el triple del riesgo asociado a actos de violencia cometidos durante asaltos, en los cuales se observaron solamente problemas relacionados con el estrés postraumático.

Total de AVISA perdidos como consecuencia de la violencia contra la mujer

En nuestra opinión, la mejor forma de mostrar la verdadera dimensión del impacto de la violencia en la salud de las mujeres es presentar la suma de los AVISA perdidos por daños físicos directos y los AVISA perdidos por otros daños provocados por las diferentes expresiones de violencia.

FIGURA 4.5
AVISA perdidos por causas no físicas, según el tipo de violencia:
Ciudad de México, 1994-1995
(Por 100.000 mujeres)



El total de AVISA perdidos en la Ciudad de México en 1995 como consecuencia de la violencia contra la mujer fue 27.200, de los cuales 53% se debieron a daños físicos y 47% a daños no físicos. La pérdida principal está asociada a la violencia conyugal, con 220 AVISA perdidos por 100.000 mujeres, seguida de los actos de violencia cometidos durante los asaltos, con 121 por 100.000 mujeres (figura 4.6). La diferencia se puede atribuir en su mayor parte a los daños no físicos. En el caso de los asaltos y las peleas por problemas suscitados en la solución de conflictos, la mayor pérdida se debe a riesgos físicos. En cambio, en la violencia sistemática contra la mujer, la carga (la magnitud de la pérdida de AVISA) se expresa principalmente en daños no físicos. El cálculo de la magnitud de la carga asociada a la violencia muestra que el riesgo de perder un año de vida saludable como consecuencia de la violencia conyugal es el doble que el riesgo generado por otras causas.

FIGURA 4.6
AVISA perdidos por las mujeres, por tipo de violencia: Ciudad de México, 1994-1995
(Por 100.000 mujeres)

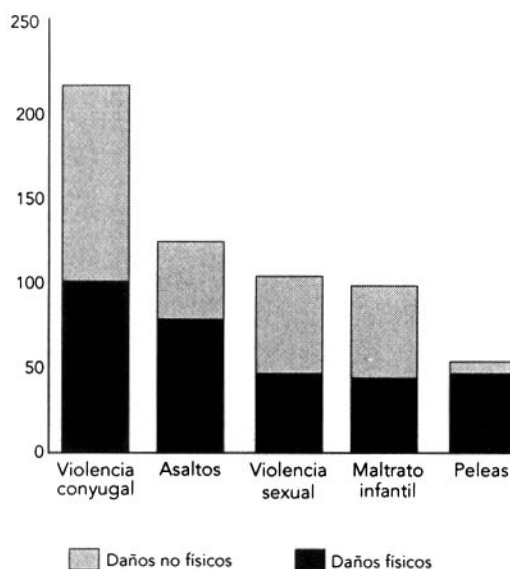
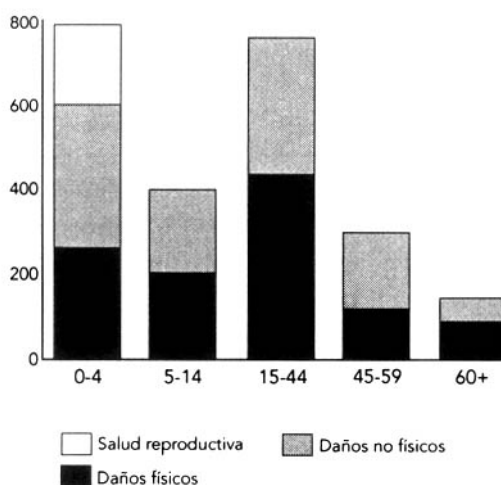


FIGURA 4.7
AVISA perdidos por las mujeres como consecuencia de actos de violencia, por cohorte de mujeres de la misma edad: Ciudad de México, 1994-1995
(Por 100.000 mujeres)



Aún más interesante resulta la comparación del total de años perdidos según la edad y el tipo de daño asociado a la violencia. La figura 4.7 muestra que, según las tasas de AVISA perdidos, las niñas menores de cinco años son las que más sufren. Este resultado puede ser engañoso, porque muchos de los problemas de salud de estas niñas (especialmente los que están relacionados con el peso bajo al nacer) se deben a la violencia perpetrada contra su madre. Si no se incluyeran estos problemas de “salud reproductiva”, las mujeres de 15 a 44 años presentarían la tasa más alta de AVISA perdidos.

Cambios en las prioridades de los servicios de salud

Como los servicios de salud deben establecer prioridades para la atención que proporcionan, determinar las causas principales de enfermedad y lesiones es sumamente útil para los encargados de las decisiones. Sin embargo, a veces no se seleccionan indicadores acertados o la forma de organizar y presentar por orden de importancia las necesidades de salud no es la adecuada. Eso ha ocurrido también con respecto a las mujeres que han sido víctimas de actos de violencia, como se demuestra a continuación.

En el cuadro 4.2 se presentan las causas principales de AVISA perdidos por las mujeres de la Ciudad de México. Las enfermedades y la muerte relacionadas con el parto representan más del 8% de los AVISA perdidos, mientras que la diabetes representa menos del 8%. La violencia contra la mujer ocupa el tercer lugar entre las causas más importantes de AVISA perdidos por las mujeres de la Ciudad de México, ya que representa el 5,6% de todos los AVISA perdidos. De este 5,6%, 2,6% representa daños físicos debidos a homicidios y actos de violencia cometidos por terceros (asaltos, violencia conyugal, maltrato de los niños, violencia sexual y riñas). Se puede atribuir el 3% a daños no físicos (problemas psicológicos tales como síndrome de estrés postraumático, insomnio y cefalea intensa, así como bajo peso al nacer de los hijos de mujeres maltratadas) y suicidio. La violencia contra la mujer es una causa más importante de AVISA perdidos que las anomalías congénitas, la artritis reumatoide, las cardiopatías, las enfermedades cerebrovasculares, la neumonía, la osteoartritis y los accidentes de vehículo de motor.

Conclusiones

Como se ha mostrado a lo largo de este capítulo, el impacto de la violencia en la salud de la mujer va más allá de la simple cuantificación de los daños físicos. Las principales conclusiones son las siguientes:

- La carga asociada a la violencia contra la mujer es importante: uno de cada 18 años de vida saludable perdidos por mujeres en la Ciudad de

Cuadro 4.2 Causas principales de la pérdida de AVISA en las mujeres de la Ciudad de México, 1994-1995

Enfermedades y lesiones		Porcentaje
1	Diabetes mellitus	8,1
2	Problemas del parto	7,9
3	Violencia contra la mujer	5,6
4	Anomalías congénitas	5,5
5	Artritis reumatoide	5,1
6	Cardiopatía isquémica	5,1
7	Enfermedades cerebrovasculares	3,9
8	Neumonía	3,2
9	Osteoartritis	2,6
10	Accidentes de vehículos automotores/ocupantes	2,2

Fuente: Cálculos del autor.

México corresponde a este tipo de violencia. En algunas edades, esta relación es mucho más alta. En las mujeres en edad fértil, en particular, uno de cada siete años de vida ajustados en función de la discapacidad deriva de la violencia. Entre las escolares de 5 a 14 años de edad, uno de cada seis años de vida ajustados en función de la discapacidad que se pierden está relacionado con esta causa.

- La violencia conyugal es la causa principal de AVISA perdidos: 37% de ellos derivan de este tipo de conflicto. Las razones subyacentes de este fenómeno son las múltiples expresiones que tiene la violencia conyugal, entre las cuales cabe señalar homicidios, suicidios, maltrato a la esposa, lesiones autoinfligidas, trastornos neuropsiquiátricos y reproductivos, y enfermedades de transmisión sexual. Por consiguiente, las mujeres en edad fértil constituyen el grupo con la mayor cantidad de AVISA perdidos per cápita asociados a la violencia.

- Otro grupo que registra importantes pérdidas de AVISA es el de las menores de 5 años. En este grupo se observan dos efectos simultáneos: daños directos ocasionados por actos tales como maltrato infantil y violencia sexual, y repercusiones indirectas que comienzan desde la gestación. Las estimaciones de este estudio son muy conservadoras: sólo se tuvieron en cuenta los efectos asociados a la mortalidad perinatal y el bajo peso al nacer, aunque una asociación entre el bajo peso al nacer e infecciones repetidas en los primeros años de vida, que posiblemente esté relacionada con

la violencia durante el embarazo de la madre, también podría tener un efecto indirecto en la salud de las recién nacidas y los niños pequeños.

- La determinación de la magnitud de la violencia contra la mujer utilizando indicadores compuestos revela el verdadero alcance del problema. La violencia contra la mujer ocupa el tercer lugar entre las prioridades para la salud de todas las mujeres de la Ciudad de México y el primero en las mujeres de 5 a 44 años.

Ante este panorama, no hay duda de que la violencia contra la mujer está causando problemas en todos los niveles de la sociedad. Es evidente también que el problema de la violencia en la actualidad es demasiado complejo como para dejarlo únicamente en manos de las autoridades encargadas de desincentivar y castigar a los perpetradores: la sociedad en conjunto debe tomar medidas. Aunque no hay un antídoto único, la educación es fundamental para la cura. No obstante, para que dé resultado, la educación debe ser considerada no sólo como un medio de instrucción, sino también como un factor para inculcar valores y principios. En última instancia, un proceso de educación que forme buenos ciudadanos será el mejor instrumento para garantizar la seguridad colectiva.

Notas

¹ Este estudio fue coordinado por el autor, con la participación de la nutricionista Blanca Estela López, el Dr. José Luis Ortega y las estudiantes de enfermería Olivia Martínez y Estela Castro. Se agradece especialmente al Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al Dr. José Ramón Fernández, Director del Servicio de Medicina Forense del Distrito Federal, y a la Dra. Carolina Salinas y al Dr. Moses Reyes Tapia por su ayuda en la encuesta de hospitales del Distrito Federal. Este estudio fue realizado con la asistencia de la Fundación Mexicana para la Salud y el Centro de Economía y Salud, en memoria de Sergio Campos-Ortega, quien pagó con su propia vida el rescate de su hijo secuestrado.

² Véase el Informe del Taller de Cali (1996).

³ De este modo, la tasa de homicidios de la Ciudad de México es muy similar a la tasa nacional, aunque en las mujeres solteras de la Ciudad de México la tasa de homicidios es más baja que el promedio nacional, mientras que las mujeres divorciadas y separadas de la Ciudad de México presentan una tasa más alta.

⁴ En este caso, la violencia se refiere a la violencia infligida por un hombre a su esposa o a su pareja, o sea que no es necesario que el hombre y la mujer estén casados legalmente para que se hable de violencia conyugal.

Referencias

- Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres. 1996. Encuesta de opinión pública sobre "La incidencia de la violencia en la familia". Fondo de Población de las Naciones Unidas, México D.F.
- Azaola, E. 1996. *El delito de ser mujer*. Plaza y Valdés Editores. México.
- Becker, G. 1993. *Human Capital*. New York: Columbia University Press.
- Berg, R.L. 1973. Weighted Life Expectancy as a Health Status Index. *Health Services Research* 8:153-156.
- Bergman, B. y B. Brismar. 1991. Suicide Attempts by Battered Wives. *Acta Psychiatr Scand* 83(5):380-384.
- BID. 1997. Magnitude and costs of violence in Latin America. Serie de documentos de trabajo dirigida por la Oficina del Economista Jefe, BID, Washington, DC.
- Campbell, J.C., et al. 1992. Correlates of Battering During Pregnancy. *Res Nurs Health* 15(3): 219-226.
- Chiang, C.L. 1965. An Index of Health: Mathematical Models. *Public Health Services Publications* 1000, Series 2, No 5. Washington, DC: National Center for Health Statistics.
- Counts, D.A. 1987. Female Suicide and Wife Abuse: A Cross-cultural Perspective. *Suicide Life Treat Behav* 17(3):194-204.
- Dempsey, M. 1947. Decline in Tuberculosis. The Death Rate Fails to Tell the Entire Story. *American Review of Tuberculosis* 56:157-164.
- Durkheim, E. 1997. *Suicide: A Study in Sociology*. New York: Free Press.
- Farrington, D. 1991. Childhood aggression and adult violence: Early precursors and laterlife outcomes. En D.J. Pepler y K.H. Rubbin (eds.), *The Development and Treatment of Childhood Aggression*. London: Lawrence Earlbaum Associates.
- Genovés, S. 1973. *Expedición a la violencia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Heise, L.L., J. Pitangy y A. Germain. 1994. *Violence Against Women: The Hidden Health Burden*. World Bank Discussion Papers. Washington, DC: World Bank.
- Informe del Taller de Cali. 1996. Vigilancia epidemiológica de homicidios y suicidios. *Bol Oficina Sanit Panam* 120(4):316-324.

- Lozano, R., C. Murray, J. Frenk y J.L. Bobadilla. 1995. Burden of disease assessment and health system reform: Results of a study in Mexico. *Journal of International Development* 7(3):555-563.
- McFarlane, J., B. Parker y K. Soeken. 1996. Abuse During Pregnancy: Associations with Maternal Health and Infant Birth Weight. *Nurs Res* 45(1):37-42.
- Mehta, P. y L.A. Dandrea. 1988. The Battered Woman. *Am Fam Physician* 37(1):193-199.
- Morrow, R.H. 1984. The application of a quantitative approach to the assessment of the relative importance of vector and soil transmitted diseases in Ghana. *Soc Sci Med* 19(10):1039-1049.
- Murray, C. 1994. Quantifying the burden of disease: Technical basis for disability-adjusted life years. *Bulletin of the World Health Organization* 72(3):429-445.
- Murray, C. y A. López. 1994a. Global and regional cause of death patterns in 1990. *Bulletin of the World Health Organization* 72(3):447-480.
- . 1994b. Quantifying disability: Data, methods and results. *Bulletin of the World Health Organization* 72(3):481-494.
- . 1997. Global mortality disability, and the contribution of risk factors: Global burden of disease study. *The Lancet* 349(9063):1436-1442.
- Murray, C., A. López y D. Jamison. 1994. The global burden of disease in 1990: Summary results, sensitivity analysis and future directions. *Bulletin of the World Health Organization* 72(3):495-509.
- Naciones Unidas. 1993. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Documento oficial de la Asamblea General de la ONU, Supl. 38(A/47/38), artículo. 1.
- Pan American Health Organization. 1992. *Health Statistics from the Americas*. Scientific Publication No. 542. Washington, DC: PAHO.
- Parker, B., J. McFarlane y K. Soeken. 1994. Abuse during pregnancy: effects on maternal complications and birth weight in adult and teenage women. *Obstet Gynecol* 84(3):323-328.
- Plichta, S. 1992. The Effects of Woman Abuse on Health Care Utilization and Health Status: a Literature Review. *Womens' Health Issues* 2(3):154-163.
- Poirier, L. 1997 The Importance of Screening for Domestic Violence in All Women. *Nurse Pract* 22(5):105-108.

- Ramírez, J.C. y P. Vargas. 1997. ¿Qué tan serio es el problema de la violencia doméstica contra la mujer? Ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de Investigación en Salud Pública. (Fotocopia).
- Rojas, L. 1996. *Las semillas de la violencia*. Madrid: Espasa Hoy.
- Rosenberg, M.L. y M.A. Fenley (eds). 1991. *Violence in America. A Public Health Approach*. New York: Oxford University Press.
- Saucedo, I. 1997. Violencia doméstica y salud: Avances y limitaciones para la investigación y atención. Monografía presentada en la IV Conferencia Latinoamericana sobre Ciencias Sociales y Medicina. Cocoyoc, México (junio).
- Schein, B. y L. Bakketeig. 1989. Gynecological impact of sexual and physical abuse of spouse: A random sample of Norwegian women. *British Journal of Obstetrics and Gynecology* 96:1379-1383.
- Shaw, C.R. y H.D. McKay. 1942. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Terroba, C., A. Heman y M. Saltijeral. 1986a. Factores clínicos y sociales asociados con el parasuicidio y con el suicidio consumado. *Salud Mental* 9:74-80.
- . 1986b. El intento de suicidio en adolescentes mexicanos. Algunos factores clínicos y sociodemográficos significativos. *Salud Pública de México* 28:48-55.
- . 1987. El consumo de alcohol y su relación con la conducta suicida. *Salud Mental* 5:92-97.
- Valdez, R. y L.H. Sanin. 1996. La violencia doméstica durante el embarazo y su relación con el peso al nacer. *Salud Pública de México* 38(5):352-362.
- Walker, Y. 1981. *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer
- Wolfgang, M.E. y F. Ferracuti. 1967. *The Subculture of Violence*. London: Tavistock Ed.
- Woods S. y J. Campbell. 1993. Post-traumatic Stress in Battered Women: Does the Diagnosis Fit? *Issues in Mental Health Nursing* 14:173-186.
- World Bank. 1993. Investing in Health. *World Development Report 1993*. New York: Oxford University Press.

Página en blanco a propósito

PARTE II

**BUENAS PRACTICAS: SERVICIOS,
RESPUESTA JURIDICO-JUDICIAL
Y EDUCACION**

Página en blanco a propósito

Dos décadas de acción para frenar la violencia doméstica

Soledad Larraín

Si bien puede decirse que la violencia política y social ha sido una constante en la historia de América Latina y el Caribe, recién en la última generación la violencia contra la mujer específicamente se ha convertido en motivo de preocupación para el público. Este tipo de violencia abarca la agresión sexual y las violaciones, el acoso sexual en el trabajo, el maltrato a mujeres de minorías étnicas, la trata de mujeres, la prostitución, la pornografía, la violencia en los medios de comunicación y los abusos físicos, sexuales y psicológicos en el hogar por parte de la pareja o el cónyuge.

En este capítulo se aborda específicamente la violencia de género contra la mujer ejercida por el esposo o el compañero en el contexto de la relación familiar. El objetivo es sistematizar las distintas acciones y estrategias implementadas por diversos agentes sociales en las últimas décadas en América Latina y el Caribe. Por supuesto, no es fácil recopilar una infinidad de actividades emprendidas por diversos agentes en distintos ámbitos de influencia. A esta dificultad se suma la necesidad de medidas urgentes, unida a la falta de recursos, que a menudo obstaculiza la sistematización y difusión de valiosas experiencias.

En la primera parte se muestra la transición del concepto de violencia de un enfoque psicopatológico e individual a un enfoque social y con múltiples causas. En la segunda parte se sintetizan los resultados de los principales estudios cualitativos y cuantitativos que se han realizado en la región. En la tercera parte se describen programas implementados en la región, que abarcan desde cambios en la legislación hasta programas intersectoriales e interinstitucionales. En la cuarta parte se presentan las acciones prioritarias para el futuro.

Definición de violencia doméstica y evolución de las estrategias

En las distintas sociedades y países de América Latina no existe acuerdo sobre la definición de “violencia”. Las divergencias son aún mayores con respecto a la definición de “violencia doméstica”. La principal dificultad es que la tolerancia y aceptación de la

violencia varían de una persona a otra, de un país a otro, de un contexto sociocultural a otro, por lo cual es muy difícil formular una definición común de violencia doméstica que tenga carácter universal.

Las definiciones existentes varían con respecto al comportamiento y las manifestaciones que se consideran violentas. Algunas se refieren sólo a la violencia física, mientras que otras hacen extensivo el concepto a la agresión psicológica y al descuido grave. Para algunos, un solo episodio basta para que exista violencia, mientras que otros creen que este comportamiento debe darse de forma reiterada.

Asimismo, las distintas definiciones enfatizan diversos aspectos de la violencia doméstica. Algunas destacan su impacto¹; otras ponen de relieve los valores culturales que influyen en el comportamiento violento²; otras describen los distintos tipos de agresión que se dan en la violencia doméstica³.

Recientemente se ha ido incorporando la problemática de la violencia contra la mujer en la agenda de muchos gobiernos y de varios organismos internacionales. Los grupos femeninos de la región han sido un motor fundamental de este avance. También han influido los convenios internacionales en los cuales se insta a la eliminación de la violencia contra la mujer. En el cuadro 5.1 se resume el tratamiento de la violencia doméstica en foros internacionales.

La evolución del concepto de violencia doméstica a violencia de género significa un cambio en la conceptualización de la violencia contra la mujer y la comprensión de los factores de riesgo asociados a su ocurrencia. La denominación de la violencia contra la mujer como violencia de género se basa en el supuesto de que las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres son un factor relevante en la gravedad de la violencia hacia la mujer. "La diferencia de este tipo de violencia con otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad lo constituye el hecho de ser mujer⁴." Eso implica repensar las estrategias para combatir la violencia doméstica.

Las investigaciones sobre la violencia doméstica

"La mujer tiene en los países de América Latina y el Caribe...", escribe un destacado investigador, "...una situación de vulnerabilidad independiente de su clase social o inserción laboral. Uno de los aspectos que las igualan es la posibilidad concreta de sufrir algún tipo de violencia en su contra. La violencia contra la mujer, específicamente la violencia que sufre al interior de la familia, ha sido un tema tabú condenado a la invisibilidad social, al silencio de la intimidad del hogar y a la justificación por las costumbres y tradiciones culturales" (Rico 1992).

La investigación sobre la violencia doméstica en América Latina y el Caribe comienza en los años ochenta, aproximadamente una década más tarde que en Estados

Cuadro 5.1 La violencia doméstica en los foros internacionales

Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, Ciudad de México, 1975. Se menciona el tema de los conflictos en el interior de la familia.

Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979. Se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El tema de la violencia contra la mujer se toca solo tangencialmente y no se define la violencia de género.

Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, Copenhague, 1980. Igualdad, desarrollo y paz. Se plantea directamente el problema de las mujeres golpeadas y la violencia familiar, y se aprueba una resolución sobre “la mujer maltratada y la violencia en la familia”. Este tema se plantea con posterioridad en el Consejo Económico y Social, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer y el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia.

Quinta Conferencia Regional de la CEPAL, 1991. Se aprueba una resolución sobre “mujer y violencia”. En diversos documentos se señala la violencia de género como uno de los obstáculos para un desarrollo con equidad.

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993. Se reconoce la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos. En la declaración final se incluye la propuesta de designar una relatoría especial sobre la violencia contra la mujer.

Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia en contra de la mujer, 20 de diciembre de 1993. Se reconoce la urgente necesidad de hacer extensivos a las mujeres los derechos relativos a la igualdad, seguridad, libertad y dignidad de los seres humanos. En el artículo 1 se define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada”. En el artículo 2 se enumeran las categorías de violencia física, sexual y psicológica:

- a) la violencia que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el esposo, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros del hogar y la violencia relacionada con la explotación;
- b) la violencia perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso sexual y la intimidación en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
- c) la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, 9 de junio de 1994. Propuesta por la OEA, considera que el reconocimiento y el pleno respeto de todos los derechos de la mujer es una condición indispensable para su desarrollo individual y para la creación de una sociedad más justa, unida y pacífica. Define la violencia contra la mujer como “cualquier conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”, y señala que “los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia...”

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. Define la expresión “violencia contra la mujer” tal como está definida en la Declaración de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993.

Unidos, Canadá y Europa. Los primeros estudios sobre el tema, realizados principalmente por ONG, tienen como objetivo central sensibilizar a la opinión pública respecto a un fenómeno sobre el cual se mantenía silencio. Posteriormente, a medida que se implementan programas gubernamentales, se inicia una labor de sistematización, principalmente de las denuncias realizadas a la policía, en hospitales o en centros de atención a víctimas.

A partir de los años noventa se realizan estudios de prevalencia de la violencia en muestras representativas de la población. Así también, en estudios recientes se evalúan las políticas públicas, especialmente la aplicación de las nuevas legislaciones. Hasta la fecha se han publicado más de un centenar de estudios, que contienen una gran diversidad de información de distintos países, muchas veces difícil de analizar y comparar. En este capítulo se clasifican las investigaciones en dos categorías: estudios descriptivos con información proveniente de instituciones de salud, justicia o asistencia y estudios de prevalencia.

Estudios descriptivos

En 1989 y 1990, Isis International efectuó un diagnóstico del avance de las investigaciones y la política gubernamental en materia de violencia doméstica en 22 países de América Latina y el Caribe⁵. Se detectaron veinte estudios basados en datos cuantitativos, en su mayoría descriptivos, en los cuales se sistematizaba la información proporcionada por mujeres que habían hecho denuncias a la policía u otras instituciones.

También se han realizado investigaciones cualitativas, basadas en entrevistas en profundidad, historias de vida, análisis de contenido de documentos y grupos de reflexión. Aunque las investigaciones de este tipo no permiten determinar la frecuencia de la violencia en la población, aportan antecedentes útiles sobre las características del problema. Describen las distintas formas de agresión, las respuestas más comunes de la mujer frente a la violencia, las características de los agresores y la cultura imperante en los distintos países. Además de ilustrar aspectos específicos de la relación entre violencia y salud, permiten entender por qué algunas de las mujeres se resisten a denunciar o les cuesta mucho trabajo abandonar la relación violenta.

Las conclusiones principales de estos estudios descriptivos son las siguientes:

- El espacio de mayor riesgo para la mujer es el hogar. Las lesiones, las agresiones, el abuso sexual y los homicidios son perpetrados principalmente por el esposo o conviviente, en el contexto de una relación de pareja.
- Se ha producido un aumento importante de las denuncias, especialmente en los últimos tres años, que en muchos casos ha coincidido con la promulgación de leyes específicas. También se ha detectado un aumento

de los casos denunciados en relación con factores tales como la mayor visibilidad del tema, campañas de organizaciones de mujeres y feministas, y la apertura de centros especializados.

- En estudios realizados en instituciones asistenciales (que no se ocupan específicamente de la violencia) se detecta un porcentaje importante de mujeres maltratadas cuando se pregunta específicamente a las mujeres sobre el tema. Sin embargo, como en muchas instituciones no se hacen estas preguntas a las mujeres, es probable que el subregistro en estos centros sea muy grande, especialmente en los servicios de urgencia.
- La edad de mayor riesgo de la mujer es entre los 24 y los 45 años, especialmente durante el embarazo y el período inmediatamente posterior al parto.
- Las manifestaciones más frecuentes de violencia son agresión psicológica y violencia física leve. En general, cuando hay violencia física grave o abuso sexual, también hay violencia psicológica. En algunos estudios se describe el abuso financiero como un tipo específico de abuso. Entre sus manifestaciones más comunes se encuentran no aportar al mantenimiento de los hijos, controlar el dinero familiar, echar a la mujer de la casa y negarle sus pertenencias.
- Las causas de violencia señaladas por las víctimas generalmente están relacionadas con el control que ejerce su pareja.

Estudios de prevalencia

En los últimos cinco años se han realizado estudios de prevalencia con muestras representativas de la población que dan una idea de las dimensiones reales de la violencia, superando las limitaciones de estudios anteriores que no abarcaban la totalidad de las víctimas sino solamente las que presentaban denuncias.

Hasta la fecha se han publicado estudios de prevalencia en Colombia, Costa Rica, Chile, México, Nicaragua, Perú y Uruguay⁶. En Managua, 52% de las mujeres habían sufrido violencia psicológica, física o sexual en los 12 meses anteriores a la encuesta; en Santiago, la cifra excedía del 40%, y era del 22,7% en Montevideo y Canelones en Uruguay. Treinta y cinco por ciento de las mujeres en Costa Rica señalaron que habían sufrido con frecuencia estos tipos de agresión, mientras que en Lima 88% de las mujeres habían sufrido algún tipo de agresión en su relación de pareja. En Colombia, 20% de las mujeres habían sufrido abuso físico, mientras que 33% habían sido agredidas psicológicamente. La violencia contra la mujer es, evidentemente, un grave problema que afecta a gran parte de las mujeres de todas las clases sociales e incide en el grupo familiar en conjunto.

La mayoría de los estudios se realizaron en capitales o en grandes urbes y no son representativos de todo un país. Asimismo, debido a la diversidad de instrumentos utilizados para evaluar la violencia y de criterios para seleccionar las muestras, los resultados no son estrictamente comparables entre países. A pesar de estas limitaciones, los estudios de prevalencia constituyen una importante contribución a la formulación de la política pública en los distintos países. También han demostrado la factibilidad de obtener datos confiables sobre la magnitud de un fenómeno tan complejo como la violencia doméstica.

Programas para combatir la violencia doméstica en las Américas

A medida que se ha ido reconociendo el impacto de la violencia de género, se han multiplicado las respuestas para combatir el problema. Son muchos los factores que influyen en estas respuestas: el contexto sociopolítico en el cual se aborda el problema, la fuerza y el liderazgo de los movimientos de mujeres en diversos países, sus recursos profesionales y su organización, y la capacidad de diálogo entre el Estado y la sociedad civil.

Los programas que se llevan a cabo en los distintos países de la región son demasiado numerosos como para describirlos en este capítulo. A continuación se presenta una reseña de programas y políticas en cinco campos: la respuesta jurídica, la respuesta policial, los servicios para mujeres que son víctimas de violencia doméstica y para los agresores, capacitación de profesionales especializados en violencia doméstica, y prevención.

La respuesta jurídica

No ha sido fácil llegar al consenso sobre un concepto de violencia de género en general y la violencia doméstica en particular en los países de América Latina y el Caribe. Los derechos del individuo aparecen contrapuestos con la institución familiar, que se define en la mayoría de las legislaciones como la célula básica de la sociedad.

Existen diferencias en la posición adoptada por los distintos países en la legislación en la materia. Algunos han considerado la violencia como un atentado contra los derechos humanos de las personas que integran la organización familiar, mientras que otros estiman que el objetivo último de toda sanción es la preservación de la unidad familiar.

Antes de la promulgación de leyes especiales sobre violencia doméstica, la mayoría de los países latinoamericanos compartían un criterio similar en su tratamiento. En la esfera penal, la violencia doméstica se encuadraba generalmente en el ámbito de las lesiones de carácter físico, fuesen menores, intermedias o graves. Las amenazas se

clasificaban como contravenciones. En la esfera civil, el maltrato de obra o de palabra se convirtió en causal de divorcio o separación.

Por varias razones, este tratamiento resultaba insatisfactorio. Primero, desconocía la índole del problema. Entablar una querella implicaba un procedimiento prolongado y engorroso, así como dificultades probatorias. Asimismo, este enfoque permitía la victimización secundaria en el ámbito policial o judicial, produciendo la indefensión de las víctimas y devolviendo la solución del problema a la familia, muchas veces con un incremento del riesgo para la mujer.

En este contexto, las propuestas legislativas que se fueron desarrollando apuntaron a resolver algunas cuestiones fundamentales. No obstante, para ello es necesario resolver ciertas dificultades de índole conceptual y práctica.

Ante todo, es necesario determinar el bien jurídico protegido: la unidad familiar o la integridad física, psicológica y sexual de la víctima. ¿Debe la ley proteger a la mujer (estadísticamente la víctima más frecuente) o referirse a todas las relaciones familiares, tanto legales como de hecho? Segundo, ¿qué tribunales deben intervenir? ¿Debe encararse el problema como un conflicto intrafamiliar (y, por consiguiente, en los tribunales de familia) o como un delito (relegándolo al fuero penal)?

Tercero, es importante determinar cómo generar instancias de protección para las víctimas que sean rápidas, eficaces y amplias, lo cual es especialmente importante debido al acceso que el agresor tiene a la víctima si vive bajo el mismo techo. Cuarto, hay que determinar de qué manera sancionar al agresor, considerando que, frecuentemente, la víctima desea sólo terminar con la violencia y no con la relación. Por último, es necesario establecer un procedimiento ágil para responder eficazmente a las necesidades de la víctima y evitar la victimización secundaria, o sea el maltrato de la mujer por el sistema supuesto a ayudarla.

Estos temas se abordan de formas diversas en la legislación de las distintas naciones (véase el cuadro 5A del apéndice). Sin embargo, incluso después de la promulgación de leyes, persiste el problema de su aplicación. No siempre se ordenan medidas de protección con suficiente prontitud, debido al criterio de los jueces de oír a la "otra" parte o a que las medidas generalmente tienen duración limitada, dejando a las víctimas sin protección. A estos problemas se suma el desconocimiento de la ley por parte de las víctimas y la reticencia de los jueces a proceder de oficio. Se ha criticado fuertemente la existencia en la mayoría de las leyes de una instancia de conciliación o mediación. Un elemento fundamental de toda negociación es una relación paritaria, pero la relación entre el agresor y la víctima es básicamente desigual y asimétrica, lo cual contraría todo principio de equidad.

En relación a las sanciones, cuando ellas no son privativas de libertad, resulta difícil efectuar las derivaciones a organismos de asistencia o tratamiento debido a su capacidad limitada. No se han encontrado mecanismos apropiados para realizar el ade-

cuando seguimiento de las medidas de protección o de las sanciones alternativas cuando ellas no son privativas de libertad o estrictamente pecuniarias.

A pesar de las críticas señaladas, la existencia de una normativa legal específica sobre la violencia doméstica es un avance, porque ha llevado a las comunidades y a los componentes del sistema de justicia un mensaje de cambio. La situación mejorará a medida que se adquiera más experiencia y se realicen ajustes a fin de que los Estados puedan cumplir su compromiso de eliminar la violencia doméstica y adoptar medidas concretas para proteger los derechos humanos (véase el capítulo 10 sobre la labor legislativa de Costa Rica y la capacitación de su personal judicial).

La respuesta policial: las comisarías de la mujer

Los cambios legislativos no son suficientes si la policía no responde adecuadamente ante las mujeres maltratadas. Los primeros estudios sobre el tema mostraron que las mujeres frecuentemente no eran escuchadas o simplemente no se consideraban sus denuncias. A esto se suma el hecho de que, durante los años ochenta, en varios países de la región había dictaduras en las cuales la policía era parte activa de las fuerzas represivas. La desconfianza de las mujeres en general y de las víctimas de violencia doméstica en particular era común en esos regímenes.

Dado que la policía es la instancia con que la víctima suele hacer el primer contacto, antes de llegar al sistema judicial, la respuesta de la policía es fundamental para que las mujeres continúen con la denuncia y de esta forma se pueda detener la violencia. En vista de la importancia del papel de la policía, el movimiento de mujeres comenzó a promover las comisarías de la mujer, atendidas por personal femenino, considerando que su condición de género podría facilitar la comprensión de las víctimas.

La primera experiencia en este campo, y también la más importante, fue la de Brasil, donde se creó el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer en 1985. El Consejo se plantea la necesidad de apoyo a un programa nacional para combatir la violencia contra la mujer y la creación de centros integrados de asistencia a las mujeres que corren el riesgo de ser víctimas de actos de violencia doméstica y sexual. La primera comisaría especial de la mujer se creó en São Paulo en 1985, y pronto aparecieron comisarías similares en otros lugares del país (véase el capítulo 9 sobre la comisaría especial de Rio).

Las comisarías de la mujer atienden principalmente a mujeres víctimas, orientándolas sobre diversos aspectos del derecho penal, civil y laboral, así como sobre casos de separación legal, división de bienes, tenencia de los hijos, pensión alimenticia, educación sexual y asistencia psicológica. Para cumplir sus funciones, las comisarías especiales tienen secciones de investigación, psicología, guardia y grupo de represión del estupro.

La creación de estas comisarías fue, sin duda, la decisión de mayor importancia para enfrentar el grave problema de la violencia contra la mujer en Brasil. En la implantación de las comisarías en Brasil fue muy importante la acción de las voluntarias de los grupos SOS-Mujer, que comenzaron a asistir a las víctimas de agresiones que no recibían una atención adecuada en las comisarías comunes. La constatación por los grupos SOS de las dificultades que enfrentaban las mujeres para denunciar la violencia fue decisiva para la implantación de las comisarías femeninas especializadas.

La importancia de las comisarías se confirma con datos sobre su uso. En Río de Janeiro, entre 1991 y 1996, por ejemplo, se presentaron 43.929 casos de agresión en las cinco comisarías que existían en esa época⁷. Estos casos representan el 42% de todas las denuncias de agresión física contra mujeres en Río (104.182 casos).

En Perú, en 1998 se abrió en Lima la primera comisaría de mujeres de la Policía Nacional. Entre 1993 y 1996 se crearon delegaciones en Arequipa, Piura, Chiclayo, Tacna, Puno y Moquegua, y secciones especializadas en las delegaciones de Trujillo, Cusco e Iquitos, en los departamentos de Ica y Cajamarca, y en un barrio de Lima, Villa El Salvador. Además de recibir las denuncias, las comisarías proporcionan servicios psicológicos y asistencia legal y social.

En otros países también se han creado comisarías de la mujer. En Argentina y Uruguay se abrieron las primeras en 1988. El año siguiente se creó en Cali la primera Inspección de Policía para la Defensa de la Familia en Colombia. Actualmente hay cerca de 200. La primera comisaría de la mujer de Ecuador se inauguró en 1994. En la actualidad, Ecuador cuenta con dos comisarías especiales en Guayaquil y otras en Quito, Cuenca, Portoviejo y Esmeraldas. En diversas ciudades del país se han realizado campañas a fin de destacar los aspectos jurídicos de la violencia doméstica y exigir la creación de más comisarías especializadas en la mujer.

Frecuentemente, las comisarías trabajan junto con ONG que tienen experiencia en casos de violencia doméstica, así como legitimidad ante las mujeres, y pueden proporcionar asesoramiento jurídico y servicios sociales y psicológicos. Cabe señalar, en este sentido, la experiencia de Brasil, Perú y Ecuador.

A pesar de que las comisarías han tenido cierto éxito, se les ha criticado la falta de personal, la infraestructura inadecuada y la falta de equipos de apoyo social y psicológico. Las comisarías necesitan capacitación y mecanismos de apoyo emocional para el personal a fin de enfrentar el impacto que produce el trabajo con mujeres maltratadas. Se necesitan más investigaciones sobre el impacto de las comisarías especiales en el problema de la violencia doméstica, pero el éxito de las comisarías dependerá en última instancia de la obtención de suficientes recursos y del establecimiento de un sistema adecuado de derivación y seguimiento de los casos.

Servicios para mujeres víctimas de violencia y para los agresores

Incluso antes de la promulgación de una legislación en el tema de violencia doméstica, en varios países de América Latina y el Caribe se habían puesto en marcha numerosos programas de atención y protección a las víctimas, a cargo de ONG feministas. Los centros frecuentemente ofrecían atención en situaciones de crisis, así como orientación jurídica y apoyo psicológico.

En la actualidad existen numerosos enfoques. Dada la gran cantidad de programas y la diversidad de metodologías que se utilizan, se agrupan a continuación según el tipo de servicios que ofrecen: 1) servicios de atención en situaciones de crisis, incluidos los servicios de atención telefónica de urgencia y los refugios, y 2) servicios psicológicos, sociales, médicos y jurídicos, entre ellos trabajo grupal, programas municipales, atención médica y trabajo con hombres violentos.

Servicios de atención en situaciones de crisis

Servicios de atención telefónica de urgencia. Se han creado servicios de este tipo en Argentina, Chile, El Salvador y Uruguay. Además de brindar apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia, frecuentemente son el primer paso para la denuncia de los agresores. En Argentina, el servicio telefónico de la ciudad de Buenos Aires fue un factor importante para demostrar la dimensión que tenía el problema de la violencia doméstica en la Capital. Durante el primer semestre de 1997 se recibieron 15.060 llamadas. En Chile, el Ministerio de Justicia ha establecido un servicio de atención telefónica que proporciona información a las mujeres sobre la asistencia que pueden recibir las víctimas de violencia doméstica. En El Salvador, el servicio telefónico abarca 13 distritos de San Salvador y ha atendido más de 22.000 llamadas en sus dos años de operación (véase el capítulo 7). En Uruguay, el servicio telefónico de la intendencia de Montevideo para víctimas de violencia es un esfuerzo conjunto entre mujeres de ONG y mujeres integrantes de la Comisión de la Mujer de la ciudad. El programa se basa en un convenio entre la Intendencia Municipal de Montevideo y la Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu)⁸. Una limitación de este servicio es que gran parte de la población, especialmente de los sectores rurales, no tiene acceso a teléfonos.

Refugios. La mayoría de los refugios son producto de iniciativas no gubernamentales. La protección que ofrecen, alejando a la mujer y sus hijos del foco de violencia, es crucial, pero su función no se agota en la protección, sino que la mayoría ofrece apoyo y capacitación para que la mujer pueda lograr la autonomía y autosuficiencia a fin de no tener que regresar a la situación de violencia. En la región no ha existido unanimidad en el sentido de considerar los refugios como medida prioritaria para proteger a las víctimas de violencia. Hay países donde el costo relativamente alto de los

refugios, combinado con la falta de recursos económicos, ha llevado a dar mayor prioridad a otros servicios para las víctimas.

Servicios psicológicos, sociales y jurídicos

Los primeros centros de atención a víctimas de la violencia fueron creados por organizaciones de mujeres, que realizaron investigaciones, crearon modelos de atención y demandaron a los gobiernos la adopción de medidas concretas de prevención y tratamiento apropiado. En los últimos veinte años se ha realizado un avance significativo en la elaboración de metodologías de trabajo.

La perspectiva de género con la cual las ONG abordan la problemática de la violencia implica que las intervenciones deben consistir en asistencia para hechos específicos de violencia, en un contexto de apoyo para la transformación de la vida de las víctimas. El trabajo con las mujeres debe consistir fundamentalmente en un proceso de “empoderamiento” para ayudarles a asumir la responsabilidad de su propia vida y su seguridad personal.

Desde esta óptica, el tratamiento de las mujeres maltratadas no se limita a poner fin a la violencia, sino que procura también ayudar a las mujeres a identificar su problema como parte de su condición subordinada en la sociedad. Por esta razón se hace hincapié en su participación en grupos de reflexión que les ayuden a modificar diversos aspectos de su vida, y en particular las relaciones que hayan conducido a la violencia. La mayoría de los programas ofrecen apoyo jurídico, psicológico y social de manera coordinada e integral.

Trabajo grupal. La gran mayoría de los grupos de apoyo a víctimas consideran que el trabajo en grupo es un factor importante para superar situaciones de violencia. El espacio de grupo permite a cada una de las participantes identificarse con pares que están viviendo la misma problemática. El grupo les ayuda a romper el aislamiento producto de la vergüenza, la culpa y el miedo, y les permite ver la existencia de recursos individuales y colectivos en la propia experiencia y en la experiencia de otros. El trabajo de grupo es un elemento importante en el trabajo con mujeres golpeadas, y les ofrece la posibilidad de afianzar sus logros y acelerar el ritmo de las transformaciones personales.

Programas municipales y provinciales. Con la visibilidad creciente del problema de la violencia, los gobiernos han intensificado su búsqueda de una respuesta institucional. En algunos países, los municipios y las provincias han establecido centros de atención, reproduciendo muchas veces el modelo desarrollado por las ONG. Estos centros tienen un enfoque integral: forman parte de una red institucional que facilita la derivación de casos a otros sectores (salud, justicia, policía) y ayudan a resolver la problemática social de las víctimas (vivienda, trabajo y cuidado infantil). Algunos ejemplos de centros municipales y provinciales son el Centro de Asistencia a las Víctimas de

Maltrato, de la ciudad de Buenos Aires; el Centro de Atención y Prevención en Violencia Familiar, de Santiago; y el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, del estado de México.

El gobierno del estado de Rio de Janeiro estableció el programa de “Ciudadanía de la mujer” en 1996. Basándose en este programa, el Consejo Estatal de los Derechos de la Mujer de Rio de Janeiro (CEDIM) elaboró la “Convención por la efectiva ciudadanía de la mujer”, cuyo objetivo es establecer una alianza entre el gobierno del estado y el gobierno municipal para velar por el cumplimiento de las leyes sobre la igualdad entre hombres y mujeres. A fin de combatir la violencia contra la mujer, la Convención pretende crear centros de asistencia que ofrezcan orientación jurídica, psicológica y social a las mujeres sometidas a situaciones de violencia y a su grupo familiar.

En Costa Rica, una de las estrategias para implementar el Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar (Planovi) consiste en la creación de las oficinas municipales de la mujer, que tendrán como objetivo “entregar información, orientación y atención a mujeres, con énfasis en la violencia intrafamiliar y difusión de derechos”⁹.

Las evaluaciones iniciales de los centros municipales son positivas, ya que permiten articular una respuesta integral, posibilitan el trabajo de redes locales y facilitan la prevención (véase el capítulo 6 sobre el establecimiento de una red en Monterrey, México). En algunos países se han establecido convenios entre universidades y el gobierno a fin de crear centros de atención para víctimas de violencia. La ventaja de estos centros es que incorporan la investigación sobre las causas y consecuencias de la violencia y forman futuros profesionales en el tema de la violencia doméstica. La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires realizó una labor pionera en este campo, con la creación del Proyecto de Asistencia a Mujeres Golpeadas en 1985.

En México, la Facultad de Psicología de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP-Acatlán) tiene un programa interdisciplinario para atender a víctimas de agresiones (véase el capítulo 6). La relación con el Estado ha sido buena y se han abierto varios centros de atención en el estado de México. El aspecto más importante de este acercamiento es que el programa incluye componentes de investigación.

Servicios médicos. El sistema de salud ocupa una posición estratégica para detectar las víctimas de violencia y derivarlas a otras instituciones que puedan ayudarlas. Es la única institución que probablemente interactúe con todas las mujeres en algún momento de su vida (Heise 1994). En los últimos cinco años, el sistema de salud de América Latina y el Caribe comenzó a formular respuestas específicas a la violencia doméstica. Sin embargo, la respuesta del sector salud a la violencia doméstica ha sido insuficiente y se ha concentrado casi exclusivamente en la atención inmediata de lesiones. Incluso con este enfoque limitado, la cobertura es incompleta y el acceso a los servicios es insuficiente. En los lugares donde se han implementado programas a nivel

masivo, la asistencia se ha basado en un modelo tradicional que privilegia el trabajo individual o la medicación. La acción preventiva es incipiente y en general se ha limitado a experiencias aisladas. Por último, se ha prestado poca atención al desarrollo teórico y a las propuestas integrales de intervención realizadas en los últimos veinte años por grupos de mujeres y ONG.

Trabajo con hombres violentos. Diversos factores han influido en el surgimiento de programas de tratamiento para hombres violentos, entre ellos: el análisis interaccional de la violencia que implica el trabajar tanto con el agresor como con la víctima; el hecho de que muchas víctimas que participan en procesos terapéuticos individuales o grupales continúan con su pareja, pero exigen que ellos asuman la responsabilidad de frenar su propia violencia; el surgimiento en los últimos años de un nuevo enfoque del papel de los hombres en la sociedad, que cuestiona el machismo imperante en la región, y el hecho de que muchas legislaciones incorporan el requisito de que el hombre participe en un trabajo terapéutico para tener la posibilidad de mediación o como sanción en vez de un proceso penal. El trabajo con hombres violentos procura alcanzar un nuevo equilibrio de poder entre hombres y mujeres “y una revisión profunda de los estereotipos de género que están en la base de los sistemas masculinos de creencias y que legitiman la violencia ejercida hacia las mujeres” (Corsi 1995).

El trabajo con hombres que ejercen violencia hacia la mujer comienza en la región recién en la década del 90. El primer programa se pone en marcha en 1991, en Argentina. En México, el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias (CORIAC) ofrece grupos de reflexión y talleres para hombres que maltratan a las mujeres (véase el capítulo 8). Costa Rica y Jamaica también tienen programas dirigidos a los hombres para combatir la violencia intrafamiliar. En Trinidad y Tobago se ha implantado un programa para enseñar técnicas de resolución de conflictos a hombres violentos con ordenes de restricción.

A menudo se trabaja en grupos a dos niveles: nivel inicial y nivel avanzado. En el nivel inicial el período de tiempo varía. Para pasar al segundo nivel, se requiere que la violencia se haya detenido y que el hombre exprese su necesidad de cambio como decisión propia. En el segundo nivel, los hombres reciben capacitación en relaciones de género, control de impulsos y resolución no violenta de conflictos.

Hay tres estrategias que son especialmente eficaces: 1) paso de un enfoque individual a un enfoque grupal; 2) paso de un trabajo en un espacio privado a un espacio institucional; 3) utilización de modelos teóricos y técnicos específicos para el trabajo en violencia (Corsi 1995). La mayoría de los programas no ofrecen terapia de pareja salvo que ambos integrantes de la pareja hayan recibido anteriormente terapia individual.

Capacitación

En vista de la complejidad de la intervención en violencia doméstica, la preparación y capacitación específicas de los profesionales que trabajan en este campo es fundamental, especialmente porque la enseñanza de esta problemática ha estado ausente en las universidades y, por consiguiente, los pocos profesionales que están trabajando en el campo de la violencia no han tenido una formación sistemática en el tema. Esta falta de formación suele derivar en una nueva victimización, que consiste en “respuestas erróneas y a menudo victimizadoras, que se pueden traducir en asesoramiento inadecuado, un enfoque terapéutico riesgoso o la confección de informes periciales que perjudican a las víctimas” (Corsi 1997).

La capacitación comenzó en la región en la década de los ochenta. Los primeros cursos, orientados a formar líderes de la comunidad, fueron ofrecidos por ONG como parte de su estrategia de dar visibilidad y empoderar a la mujer. Posteriormente, las ONG capacitaron a las instancias gubernamentales, especialmente la policía, que pasaron a ser parte de las comisarías de la mujer. A medida que fueron creándose oficinas de la mujer, estas comenzaron a capacitar a los funcionarios públicos, muchas veces con el apoyo de ONG o de universidades.

En Costa Rica, el Planovi lleva a cabo un proceso de formación teórica y conceptual de las personas e instituciones que se encargan de la implementación del plan. Ha creado un programa de educación permanente como instrumento de aprendizaje para facilitar la reflexión y el abordaje del problema de la violencia familiar y el abuso sexual extrafamiliar.

Hay dos programas de estudios de posgrado en la región. En 1989, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires instituyó un programa interdisciplinario de especialización en violencia familiar. El objetivo general del programa es promover la especialización de investigadores, docentes y profesionales universitarios en el campo de la violencia familiar. El programa está dirigido a psicólogos, asistentes sociales, antropólogos, médicos y abogados. Consiste en 512 horas docentes, equivalentes a 32 créditos académicos. Los estudiantes deben realizar 64 horas de trabajo de campo, 64 horas de pasantía y 64 horas de investigación. Los graduados obtienen el diploma de especialistas en violencia familiar. Hasta la fecha se han graduado alrededor de 300 personas¹⁰.

Desde 1994, el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile ofrece un programa de posgrado en estrategias de intervención en violencia intrafamiliar. Su objetivo es la formación sistemática e integral de profesionales, incorporando una perspectiva antropológica, psicológica, social y jurídica. Está dirigido a psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, antropólogos, periodistas, terapeutas ocupacionales, médicos,

enfermeras, abogados, profesores y educadores de la primera infancia. Abarca 100 horas de formación.

Prevención

A pesar de la incuestionable necesidad de actividades de prevención para reducir los factores de riesgo de violencia, los recursos disponibles son pocos y la acción realizada hasta ahora es relativamente limitada. Se ha recurrido principalmente a campañas en los medios de comunicación, iniciativas de educación y redes de prevención locales.

Existe una gran producción de material, folletos, afiches, programas de radio y cuñas de televisión que tienen por finalidad enseñar al público a reconocer el comportamiento violento, explicar cómo se deben hacer las denuncias y promover cambios en las relaciones de pareja (véase en la tercera parte un análisis del papel de los medios de comunicación). Estos materiales han dado visibilidad al problema, pero se han hecho pocas evaluaciones de su impacto en el cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

En Jamaica, por ejemplo, se usa el teatro popular para la educación sobre prevención de la violencia de género (capítulo 12). Hay tres grupos que llevan a cabo una labor de este tipo. El grupo Sistern usa talleres interactivos y teatro callejero para estimular discusiones sobre la violencia. La organización Women's Media Watch utiliza la dramatización con los jóvenes. Teens in Action también utiliza la dramatización para promover la reflexión crítica en el barrio sobre temas de sexualidad, relaciones entre hombres y mujeres, y la violación (Population Education Research Group 1992, citado por Heise 1994).

Una segunda línea de acción preventiva se centra en el trabajo en el sistema escolar para promover las relaciones igualitarias entre los sexos y la resolución pacífica de conflictos. Por ejemplo, un programa de Canadá que trabaja en los niveles primario y secundario tiene componentes de formación profesional para personal docente y módulos curriculares innovadores para enseñar la no violencia (capítulo 11). Una tercera línea de acción consiste en el establecimiento de redes locales y organizaciones vecinales para prevenir la violencia, aunque por lo general estas redes también ofrecen servicios a las víctimas (capítulo 6).

Conclusiones

Al cabo de más de 20 años de esfuerzos para enfrentar el flagelo de la violencia doméstica, los resultados son contradictorios. Por una parte, el gran esfuerzo, la dedicación y el compromiso han sacado a la luz el problema y han generado respuestas desde todos

los ámbitos. Al mismo tiempo, el tema continúa siendo marginal, los recursos insuficientes y las leyes con frecuencia no se aplican.

Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo seguir avanzando?, ¿cómo lograr que la acción lleve a una disminución real de la violencia?, ¿cómo lograr que el problema deje de ser marginal y forme parte de las prioridades de la política estatal de los países de la región?

Rico (1996b) plantea que las medidas para frenar la violencia doméstica en la región deben situarse en el marco de la política de desarrollo, la política de derechos humanos y la política cultural del país. Deben formar parte de la política de desarrollo del país porque la violencia doméstica tiene consecuencias sociales, económicas y políticas para la sociedad en conjunto. Es necesario insistir en este aspecto y demostrar el impacto de la violencia en el trabajo, la salud y la educación de las víctimas y su grupo familiar. Sin embargo, desde una óptica más general, un modelo de desarrollo que amplía las desigualdades, que aumenta la pobreza, que profundiza las inequidades y que limita el gasto público en medidas sociales tiene un impacto negativo en la vida de las personas y facilita la presencia de respuestas de violencia.

La política para erradicar la violencia debe estar inserta también en la política de derechos humanos del país. Esto significa reconocer que “el ejercicio masivo de la ciudadanía se encuentra en la actualidad severamente restringido al cumplimiento de un conjunto de deberes sociales, por lo que para la conquista de la democracia en la vida cotidiana se hace preciso la consolidación de una firme política estatal de reconocimiento y extensión de derechos a todos y todas los integrantes del conjunto social. No se puede desconocer el contexto político-social de dominación y desigualdad, en el cual tiene lugar la violencia letal de la cotidianidad”¹¹.

Por último, la política de erradicación de la violencia debe ser un elemento importante de la política cultural. Desafortunadamente, se han tomado pocas medidas para promover un cambio cultural que cuestione una forma de estructura familiar jerárquica y autoritaria o instituciones discriminatorias. Sin embargo, no es posible superar la violencia si no se dan cambios profundos en la estructura social y familiar de nuestros países. Una tarea especialmente urgente es cambiar la percepción de la mujer en la sociedad y enseñar soluciones creativas a situaciones conflictivas, que son la génesis de todo acto de agresión.

La acción de la sociedad civil es crucial para combatir la violencia doméstica, especialmente en vista de las vicisitudes de la política pública como consecuencia de los cambios políticos. Sin embargo, dada la prevalencia del fenómeno en varios países, no puede continuar siendo responsabilidad exclusiva de ONG. La normativa del gobierno orientada a un tratamiento integral debe poner de relieve la participación del sector salud, no sólo porque la violencia doméstica es en parte un problema de salud

pública, sino también porque los métodos de prevención e intervención en el ámbito de la salud pública han resultado eficaces para hacer frente al problema.

A medida que los gobiernos comiencen a abordar el tema de la violencia doméstica, deberán tener cuidado de no sobrecargar los servicios de por sí precarios de las ONG derivando víctimas a estas organizaciones sin encauzar al mismo tiempo recursos económicos. Aunque actualmente no hay estrategias gubernamentales para reforzar la dotación de fondos de ONG (Ellsberg 1996), estas medidas pueden ser muy eficaces, especialmente en una época de disminución de la ayuda internacional.

Otro campo problemático de las relaciones entre los gobiernos y las ONG es la competencia creciente por fondos entre ambos tipos de instituciones. Los organismos internacionales que antes financiaban a las ONG en muchos casos ahora dirigen su apoyo al sector público. Se trata de un problema serio, porque se está desmantelando la capacidad construida por personas con mucha experiencia en la materia. Paradójicamente, a medida que se van promulgando leyes en muchos países, las organizaciones que las posibilitaron están desapareciendo y se están reduciendo los recursos necesarios para la asistencia.

Se trate de una labor realizada por gobiernos o por ONG, es necesario atribuir más importancia a la prevención de la violencia doméstica, además del tratamiento de las víctimas. Hasta ahora no se ha realizado un trabajo congruente en el campo de la prevención. La acción ha sido fragmentada y dispersa, con poco efecto. Las medidas preventivas deben tener en cuenta la realidad cultural y socioeconómica en la cual se desenvuelven los seres humanos. La prevención del maltrato de los niños y el cónyuge, de la deserción escolar, de la delincuencia y de la drogadicción tendrá importantes repercusiones en la reducción de la violencia doméstica en el futuro. Además, como parte de las medidas preventivas se debe recurrir a modelos de crianza que redefinan la socialización de género en las generaciones futuras y ofrezcan métodos no violentos de resolución de conflictos, dando cabida al mismo tiempo a las diferencias y valorando la diversidad.

Los programas que ofrecen atención a las víctimas de violencia doméstica continuarán revistiendo importancia y deben formar parte de la política de derechos humanos y de desarrollo. Se necesitan propuestas integradas para ofrecer a las mujeres los instrumentos que necesitan a fin de alcanzar la igualdad y ejercer sus derechos cívicos. Por último, se deberían realizar más investigaciones a fin de tener una idea confiable de la magnitud de la violencia en la región, utilizando instrumentos que permitan obtener datos comparables y medir el progreso de las medidas y su efecto.

Cuadro 5A. Legislación sobre violencia doméstica en América Latina y el Caribe

ARGENTINA

Definición Ley N° 24.417 "De protección contra la violencia familiar" (7 de diciembre de 1994). Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psicológico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos. Grupo familiar es aquel originado en el matrimonio o las uniones de hecho (art. 1).

Competencia Juez de Familia (art. 4).

Medidas cautelares Taxativas: Exclusión del agresor del hogar conyugal. Prohibición de acceder al hogar conyugal o a lugares de trabajo o estudio de la víctima. Establecimiento de pensión alimenticia provisoria. Tenencia y visita para los hijos.

Procedimiento Sumarísimo. Denuncia oral o escrita. Actuación personal de las partes. Audiencia dentro de las 48 horas con las partes y el Ministerio Público. El Juez puede pedir diagnóstico de interacción familiar y efectuarlo por peritos para determinar daños físicos y psíquicos causados a la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental. Decretar medidas cautelares sin procedimiento independiente. Dentro de las 48 horas de decretadas, el juez puede llamar a audiencia de mediación, instando a las partes a asistir a programas educativos o terapéuticos.

BOLIVIA

Definición N° 1.674 "Ley contra la violencia en la familia o doméstica" (15 de diciembre de 1995). Agresión de cualquier tipo que ocurra respecto de relaciones de pareja de cualquier tipo, formal o informal, sea que convivan o hubieran convivido, como también respecto de aquellos que han procreado hijos en común, con el fin de causar daño a la víctima o sus bienes.

Competencia Pueden conocer de las denuncias distintos agentes e imponer medidas de amparo. Policía Nacional, Ministerio Público, autoridades comunitarias, autoridades nacionales de pueblos originarios, poder judicial, brigadas de ayuda familiar.

Medidas cautelares No son taxativas. Prohibición o restricción temporal de la presencia del agresor en el hogar. Autorizar a la víctima al alejamiento del hogar común. Disponer la entrega inmediata de sus efectos personales. Prohibir o limitar la concurrencia del denunciado al lugar de estudio o trabajo de la víctima. Duración: no puede exceder de 60 días y son especialmente provisionales.

Procedimiento Después de la denuncia que se haga ante la autoridad judicial, que puede ser verbal o escrita, se cita dentro de las 24 horas a audiencia. Las partes deben concurrir con todas las pruebas. En la audiencia, el juez puede dictar medidas cautelares y debe dictar sentencia, la cual es apelable.

Sanciones Indemnización por los daños causados a la víctima. Arresto hasta por cuatro días. Trabajos para la comunidad.

CHILE

Definición N° 19.325 "Establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar" (19 de agosto de 1994). Todo maltrato que afecte a la salud física o psíquica de quien, aun siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral sanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o la dependencia de cualquiera de los integrantes del

Cuadro 5A. Legislación sobre violencia doméstica (continuación)

grupo familiar que vive bajo un mismo techo. El que incurra en estos actos, aun cuando no conviva con el grupo familiar, será sancionado en la forma que establece el artículo 4 de esta ley.

Competencia Juez de Letras en lo civil, salvo que los hechos constitutivos de violencia familiar sean delitos, en cuyo caso el Juez del Crimen está facultado para decretar medidas cautelares.

Procedimiento Puede denunciar todo el que tenga conocimiento del hecho violento. Se inicia por denuncia oral o escrita o demanda. Se presenta la demanda ante Carabineros, Policía de Investigaciones o directamente al Tribunal. Se puede comparecer personalmente sin abogado o mandatario judicial. El Juez puede decretar a solicitud de parte medidas cautelares. El Juez cita a las partes a comparendo de conciliación y prueba. Las partes deben concurrir con todos los medios de prueba. En el comparendo el Juez fija las bases de la conciliación. Si hay conciliación se pone término al juicio y se puede convenir cualquier materia que garantice la debida convivencia del núcleo familiar y la integridad física y psíquica de la víctima. Si no hay conciliación se abre la causa a prueba. Se elimina la tacha de los testigos que sean parientes o dependientes de las partes. El Juez cita a las partes a oír sentencia dentro de los tres días hábiles. Puede decretar medidas para mejor resolver; eso incluye peritajes sobre todas las pruebas que estime pertinentes.

Sanciones Asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar por período no mayor de seis meses. Multa a beneficio municipal equivalente a uno o 10 días de ingreso diario. Prisión en cualquiera de sus grados. Al aplicar la pena se debe considerar como circunstancia agravante el incumplimiento de cualquiera de las medidas cautelares decretadas. La ley establece la creación de un registro especial de las personas que han sido condenadas como autoras de violencia intrafamiliar consignando el hecho y la sanción.

COLOMBIA

Definición N° 294 "Normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia familiar" (16 de julio de 1996). El que maltrate física, psíquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo familiar.

Competencia Juez de Familia.

Medidas cautelares No son taxativas. El juez puede decretarlas de inmediato y en forma definitiva. También son causales de sentencia. Desalojo del agresor, prohibición de visitas, tuición y alimentos provisorios, tratamiento educativo y terapéutico, protección especial de la víctima.

Procedimiento Cualquier persona puede pedir medida cautelar o de protección por cualquier medio dentro de los ocho días de ocurrido un hecho de violencia intrafamiliar. Recibida la denuncia el juez, dentro de cuatro horas puede dictar medidas de protección conminando al agresor a que cese la violencia. Cita a audiencia de conciliación y prueba; se invita a llegar a fórmulas de solución del conflicto. La no comparecencia del agresor constituye la aceptación de la denuncia, y de la demandante, desistimiento. Terminada la audiencia, el juez dicta sentencia, la cual es apelable.

Sanciones Las que se indicaron como medidas de protección con carácter definitivo. El incumplimiento de las medidas se sanciona con multa y arresto en caso de repetición. Revocación del beneficio de libertad en caso de que la violencia hubiera sido constitutiva de delito.

Cuadro 5A. Legislación sobre violencia doméstica (continuación)**COSTA RICA**

Definición N° 7.586 “Ley contra la violencia doméstica” (abril de 1996). Se hace referencia a la violencia que atenta contra la integridad corporal (física) o la salud emocional, el desarrollo personal o la autodeterminación (psicológica), a la que se ejerce para obtener contacto sexual para sí o para terceros (sexual) y a la que atenta contra los bienes, documentos personales o valores de la víctima (patrimonial). Protege a la pareja sea por matrimonio o unión de hecho, a quienes estén vinculados por parentesco de consanguinidad, afinidad o tengan relación de guarda, tutela o curaduría.

Competencia Juez de Familia salvo que el hecho constituya delito, en cuyo caso pasa a la jurisdicción criminal.

Medidas cautelares No son taxativas. Incluyen ordenar allanamiento de morada, según el código procesal penal, en los casos de violencia doméstica. Decomisar armas del presunto agresor. Suspender provisionalmente al agresor la guarda, crianza y educación de los hijos. Ordenar el embargo preventivo de los bienes del presunto agresor por un lapso máximo de tres meses. Ordenar la reparación del daño en términos económicos. Emitir una orden de auxilio policial. Pueden durar de uno a seis meses y las puede solicitar la víctima o las instituciones públicas o privadas con programas de protección de los derechos humanos y la familia. Se supervisan con visitas domiciliarias de los trabajadores sociales.

Procedimiento Hecha la denuncia el Juez cita a las partes dentro de las 72 horas siguientes y en ese comparendo se pronuncia sobre las medidas de protección. Si hay apelación, debe resolverse en 15 días, pero no se suspende la ejecución. Si hay reconciliación, se levantan; si hay caución ejecutoria, de que el agresor no reincidirá. No contiene sanciones alternativas a la establecida para los hechos constitutivos de delitos.

ECUADOR

Definición N° 839 “Ley contra la violencia a la mujer y a la familia” (14 de noviembre de 1995). Toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. No hay tipo especial, por lo que se aplica el Código Penal.

Competencia Juez de Familia, Comisarías de la Mujer y la Familia, intendentes, comisarios nacionales, tenientes políticos y jueces o tribunales en lo penal.

Medidas cautelares Son taxativas y se cuenta con auxilio de la fuerza pública. Salida del agresor de la vivienda. Prohibición de acceso al lugar de trabajo o estudio y a la persona. Reintegro de la víctima al domicilio y salida del agresor. Tuición de los hijos. Tratamiento para la familia y boletas de auxilio para la víctima. Evitar los actos de amedrentamiento de parte del agresor o de terceros contra la víctima y su familia.

Procedimiento Puede denunciar cualquier persona. El juez cita a las partes a audiencia de contestación y conciliación en un plazo no superior a ocho días. Si no hay conciliación se abre la causa a un período probatorio de seis días. Cerrado el período de prueba y recibidos todos los informes, el juez dicta sentencia.

Sanciones Indemnización de la víctima. Reposición de bienes si el agresor los destruyó; conmutable por trabajos en la comunidad si el agresor careciere de medios.

EL SALVADOR

Definición “Preventiva de violencia intrafamiliar” (noviembre de 1995). La violencia prevista por la ley puede ser física, psicológica o sexual, pero en este último caso sólo regula conductas

Cuadro 5A. Legislación sobre violencia doméstica (continuación)

que no estén tipificadas como delitos en la legislación penal. Se considera necesario tipificar los actos violentos, ya que mediante esta tipificación se puede identificar la manera de proteger adecuadamente a las víctimas.

Competencia Juez Penal.

Medidas cautelares Las medidas no son taxativas y son las mismas que las de la ley costarricense, salvo en lo relativo a la orden de allanar la morada y el decomiso de armas del presunto agresor, que no están contempladas. Añade la prohibición al infractor de consumir alcohol o drogas, la obligación a infractores y víctimas de acudir a terapia y el pago a la víctima de gastos de mudanza, médico y terapeutas. Medidas temporales; el juez determina la duración.

Procedimiento Contempla la conciliación.

Sanciones Constituye delito el incumplimiento de las medidas de protección. Se sanciona también la reincidencia.

MEXICO

Definición "Ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar" (26 de abril de 1996). Plantea que el objetivo es erradicar la violencia dentro de los miembros de la familia que tengan parentesco por consanguinidad o lo hayan tenido por afinidad civil, por matrimonio, concubinato o que tengan una unión de hecho.

Competencia Se la considera ley administrativa y de amigable composición ya que no plantea sanciones para el agresor.

Medidas cautelares No son taxativas. Prohibición del agresor de acercarse a la víctima. Exclusión del hogar del agresor.

Procedimiento No se ha dictado el reglamento que señale la especialidad del procedimiento, aplicándose las reglas generales a todo procedimiento.

NICARAGUA

Definición N° 230 "Modificatoria del Código Penal" (9 de octubre de 1996). Actos de agresión física o psicológica que se cometan contra los miembros de la familia, entendiendo por tales la cónyuge o compañera en unión de hecho estable con sus hijos e hijas, la mujer u hombre en su papel de padre o madre solo o sola con sus hijos e hijas convivientes y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (art. 237 del Código Penal).

Competencia Juez Penal.

Medidas cautelares No taxativas. Establece medidas de protección tales como prohibir al denunciado el acceso al domicilio y lugar de trabajo de la víctima; reintegrar a la víctima a su domicilio; otorgar atención médica, psicológica o psiquiátrica a la ofendida y/o al denunciado; ordenar el examen biopsico-social de los menores involucrados en hechos de violencia intrafamiliar; solicitar garantías suficientes al denunciado por los daños provocados a la víctima; decomisar armas en poder del denunciado; confiar el cuidado de los menores, en forma provisoria.

Procedimiento Procedimiento penal enriquecido por la facultad del Juez de decretar medidas de protección.

Sanciones No se plantean sanciones alternativas a las propias del sistema penal. Cuadro 5A.

Cuadro 5A. Legislación sobre violencia doméstica (continuación)**PERU**

Definición N° 26.260 “Ley sobre política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar” (12 de diciembre de 1993). Actos de maltrato físico y psicológico entre cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en común y de padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad.

Competencia La ley faculta indistintamente a distintos agentes estatales para conocer de estas causas e imponer medidas. Juez civil (art. 9 y 10): puede adoptar medidas cautelares. Juez penal: interviene en los casos constitutivos de delito. Juez de menores: se sujeta a lo dispuesto por el Código de los Niños y Adolescentes.

Medidas cautelares No taxativas. Algunas: órdenes de salida del agresor de la vivienda. Admisión de inventario para cautelar bienes si la víctima abandona el domicilio.

Procedimiento Las comisarías de mujeres o de menores reciben denuncias y realizan investigaciones. Recomendación de que haya personal especializado para recibir las denuncias. Ministerio Público: debe procesar la conciliación de las parejas y ordenar medidas cautelares cuando estime necesario.

Sanciones Delitos de homicidio, lesiones, contra el honor, coacción, secuestro y violación de libertad sexual, cuando ello involucre a las personas a que se refiere la ley. Tratamiento del agresor cuando las circunstancias lo aconsejen.

PUERTO RICO

Definición N° 54 “Para la prevención e intervención con la violencia doméstica” (15 de agosto de 1989). Un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya cohabitado o una persona con quien se haya procreado una hija o un hijo, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o a la persona de otro para causarle grave daño emocional (art. 1.3k).

Creación de nuevos tipos penales: delitos de maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, maltrato mediante restricción de la libertad y agresión sexual conyugal.

Competencia Juez penal. Para las órdenes de protección, cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, que incluye jueces de distrito y jueces superiores.

Medidas cautelares No tienen carácter taxativo. La ley establece el procedimiento. Puede solicitarla cualquier persona víctima de violencia doméstica o de un delito cometido dentro del contexto de la relación de pareja. Algunas de ellas: custodia provisional de los menores al peticionario. Ordenar abandono forzado del hogar conyugal. Prohibición de hostilizar, perseguir, molestar o intervenir en custodia de menores. Prohibición de penetrar en el lugar donde se encuentra la peticionaria y los menores bajo su custodia. Ordenar pago de pensiones alimenticias. Disponer interdicción de actos de disposición sobre los bienes comunes o propios de la víctima o anular actos de administración. Disponer medidas provisionales sobre uso de la residencia de las partes y sobre bienes muebles comunes.

Procedimiento Para la prosecución de los delitos, el procedimiento es el regular. Para las órdenes de protección, el procedimiento es ágil. Se puede pedir en forma verbal o escrita en formularios establecidos. Recibida la solicitud, el Juez cita a las partes a comparecer dentro del quinto día hábil para pronunciarse sobre ella, pero puede decretar también sin citación ni notificación si se cumplen los requisitos que establece la ley.

Sanciones Los delitos tienen establecidas penas privativas de libertad. Constituye delito la violación de las órdenes de protección y faculta a la policía para el arresto. Limitación para

Cuadro 5A. Legislación sobre violencia doméstica (continuación)

otorgar libertad bajo fianza a quienes hayan violado las órdenes de protección y para conceder permiso para salir del país o en especial bajo palabra a los condenados por esta ley.

URUGUAY.

Definición N° 16.707 “Artículo 18 de la Ley de seguridad ciudadana modifica el Código Penal” (12 de julio de 1995). “Violencia doméstica” (art. 321 del Código Penal). El que, por medio de violencias o amenazas, causare una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco.

Competencia Juez Penal.

Procedimiento Delito perseguible de oficio con el procedimiento ordinario de investigación y sanción de delitos.

Sanciones La pena que fija es de 6 a 24 meses de prisión. Si la víctima es mujer, menor o discapacitado física o psíquicamente disminuido que tenga con el agresor relación de parentesco o cohabite con él, la pena se agrava de un tercio a la mitad.

Fuente: Preparado por Graciela Aracibia.

Notas

¹ Antony y Miller destacan el efecto de la violencia, definiéndola como “acto cometido dentro de la familia por uno de sus miembros, que perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la integridad psicológica o la libertad de otro miembro de la familia”.

² Astelarra enfatiza los valores culturales involucrados en la conducta violenta, y señala que la violencia “es el producto de la existencia de rasgos patriarcales a nivel de la sociedad y la familia que, al entrar en contradicción con los valores de igualdad y libertad, generan una nueva gama de conflictos”.

³ Mayer describe los distintos tipos de agresión que se dan en la violencia familiar como “abuso que ocurre entre miembros de la familia, en la pareja o entre personas que en algún momento de su vida han vivido conjuntamente. Este abuso ocurre casi siempre en la propia casa y consiste en: a) agresión física, tanto golpes menores, como golpes mayores y más fuertes, b) el abuso sexual y c) el abuso emocional, que incluye manifestaciones como la degradación psicológica, la humillación verbal, la continua amenaza de abandono, la amenaza de agresión física, el chantaje económico y la reclusión en el hogar”.

⁴ Rico, N. “Violencia de género: Un problema de derechos humanos”, Serie Mujer y Desarrollo No. 16, CEPAL.

⁵ El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) proporcionó apoyo para este proyecto.

⁶ Fuentes de los datos sobre prevalencia:

Chile: Larraín 1994.

Colombia: Profamilia 1990.

Costa Rica: Quiroz y Barrantes 1994.

México: Granados Shiroma 1996.

Nicaragua: Ellsberg et al. 1996.

Perú: Gonzales y Gavilano (véase el capítulo 2).

Uruguay: Larraín 1997.

⁷ Los datos fueron proporcionados por la Asesoría de Estadística de la Policía Civil del Estado de Rio de Janeiro (véase el capítulo 9).

⁸ “Un teléfono que da que hablar. 414177”, publicación de la Intendencia Municipal de Montevideo y de la Fundación PLEMUU, 1995, contiene información sobre el convenio, las cifras de atención y la metodología de trabajo.

⁹ Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar: Plan Operativo, 1996-1998. San José, Costa Rica.

¹⁰ La distribución de estudiantes por profesión es la siguiente: 50% psicólogos, 35% trabajadores sociales, 10% abogados, 2% médicos y 3% de otras profesiones (antropólogos, sociólogos, psicopedagogos). De los estudiantes que se gradúan, 90% son mujeres y 10% son hombres.

¹¹ Cita directa del documento informativo preparado por Ana María San Juan.

Referencias

- Anthony, C., y G. Miller. 1986. Estudio exploratorio sobre maltrato físico de que es víctima la mujer panameña. Panamá, Ministerio del Trabajo y Bienestar Social e Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.
- Astelarra, J. 1985. Violencia doméstica. *FEM* 8:7-9
- Corsi, J. 1995. Violencia masculina en la pareja. *Paidós* (Buenos Aires).
- . 1997. Acerca de la necesidad de una respuesta institucional al problema de la violencia doméstica. Documento mimeografiado.
- Ellsberg, M., et al. 1996. Confitos en el infierno: Prevalencia y características de la violencia conyugal hacia las mujeres en Nicaragua. Managua: Departamento de Medicina Preventiva (UNAM) y Asociación de Mujeres Profesionales por la Democracia y Desarrollo.
- Granados Shiroma, Marcela. 1996. Salud reproductiva y violencia contra la mujer: Un análisis desde la perspectiva de género. México: Asociación Mexicana de Población, Consejo Estatal de Población de Nuevo León y El Colegio de México.
- Heise, Lori. 1994. Violencia contra la mujer: la carga oculta sobre la salud. En *Mujer, Salud y Desarrollo*. Washington, D.C.: PAHO.
- ISIS Internacional 1990. Violencia en contra de la mujer en América Latina y el Caribe. Información y políticas. Santiago, Chile.
- Larraín, S. 1994. *Violencia puertas adentro*. Santiago, Chile: Ed. Universitaria.
- Larraín, S., et al. 1997. *Relaciones familiares y maltrato infantil*. Chile: Editorial Calicanto.
- Informes nacionales a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing) sobre Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.
- Mayers, S. 1985. *Violencia doméstica: una realidad social y sus mitos*. San José, Costa Rica: CEFIMA.
- Profamilia. 1990. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá: PROFAMILIA.

- Quirós, R.E., y Olga Barrantes R. 1994. ¿...Y vivieron felices para siempre? San José, Costa Rica: Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia and Ministerio de Salud, Departamento de Salud Mental.
- Rico, N. 1992. Violencia doméstica contra la mujer en América Latina y el Caribe. Propuesta para la discusión. *Serie Mujer y Desarrollo* 10. ECLAC.
- . 1996a. Violencia de género: Un problema de derechos humanos. *Serie Mujer y Desarrollo* 16. ECLAC.
- . 1996b. Estrategias regionales para enfrentar la violencia en la familia. En *Desafíos para la paz: un país sin mujeres agredidas*. Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.
- UN-ECLAC. 1995. Achieving Social Justice, Equality, Peace and Development: A Review of the Status of Women of the Caribbean Subregion in Preparation for the Fourth World Conference on Women, 1995. LC/CAR/G.442 (inglés) 31 de enero de 1995.
- . 1996. Poverty Eradication and Female-Headed Households (FHH) in the Caribbean. Pov/96/2 (inglés) 18 de octubre de 1996.

Página en blanco a propósito

La creación de una red para ayudar a las víctimas en Monterrey, México

Marcela Granados Shiroma

Este es un relato de la forma en que varias organizaciones con diferentes objetivos y estructuras aunaron esfuerzos para coordinar una red de servicios integrales para víctimas de violencia doméstica y sus familias. Todo comenzó en 1996 en la zona metropolitana de Monterrey, estado de Nuevo León, México. Un estudio del Consejo Estatal de Población había revelado un grave problema social que exigía atención inmediata. De las 1.064 mujeres seleccionadas al azar entre las mujeres mayores de 15 años, casi la mitad (491, o sea 46,1%) respondieron que sí a por lo menos una pregunta sobre existencia de abuso psicológico, físico y/o sexual de su pareja. Casi cuatro de cada diez encuestadas (193, o sea 39,3%) señalaron que el grado de violencia era alto o muy alto. Las más afectadas eran las mujeres de 30 a 34 años, seguidas de las de 15 a 19 años.

Incluso antes que se publicaran estos datos, el tema de la violencia doméstica había llegado a la agenda pública. Varias instituciones que posteriormente se incorporaron a la red ya estaban organizando actividades para dar a conocer el problema. Algunos grupos ya habían decidido cooperar, con resultados muy alentadores.

La idea de una red formal de instituciones que proporcionara servicios integrales a las víctimas de violencia doméstica y a sus familias surgió de un seminario-taller sobre el maltrato de los niños. El taller fue organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto de Salud Mental, institución nacional dependiente de la Secretaría de Educación. Los representantes de doce instituciones que asistieron al taller reconocieron que un enfoque coordinado podría beneficiar a los usuarios. También entendieron que una red podría aprovechar al máximo sus limitados recursos económicos y humanos, permitiéndole atender a más personas eficazmente. El Consejo Estatal de Población de Nuevo León invitó a varias organizaciones a formar un equipo interinstitucional para prevenir y frenar la violencia doméstica¹. Aunque el Consejo no proporciona asistencia o servicios directamente a las víctimas de la violencia, participa activamente en investigación y planeamiento de estrategias de solución. Por consiguiente, era un foro apropiado para la consolidación de la red.

Si bien el equipo elaboró un modelo para apoyar a las víctimas de violencia doméstica, los participantes formularon la misión y las estrategias y se encargaron de organizar el trabajo de la red.

El establecimiento de la red

Las doce instituciones que integran el grupo de trabajo sobre violencia y salud acordaron en su primera reunión varias normas de procedimiento importantes².

- No era prioritario nombrar una institución que representara o encabezara al grupo.
- El grupo no se alinearía con ninguna ideología política o partido.
- El equipo no sería simplemente la suma de sus miembros, sino más bien el producto de la acción integrada.
- Para formular la misión y forjar valores comunes, cada institución nombraría dos participantes (un delegado y un suplente) a fin de garantizar la continuidad en los acuerdos, las decisiones y los compromisos.
- Se prepararía un plan de trabajo con los objetivos, las estrategias y las líneas de acción. Se señalarían campos de acción sobre la base de los recursos disponibles, y cada institución informaría a las demás sobre sus recursos, programas y métodos de trabajo.

A fin de determinar qué se esperaba de la red, cada institución respondió a un cuestionario. Esa información se usó para formular la misión y los objetivos del equipo y reunir información sobre la estructura, la organización, los servicios, los programas, los recursos, los modelos de asistencia, los tipos de coordinación actuales y las zonas geográficas de influencia.

Después, el equipo se concentró en el trabajo específico que cada institución haría. De hecho, algunas organizaciones estaban trabajando en programas similares y tenían problemas muy similares. En algunas partes de la ciudad había duplicación e incluso triplicación de actividades. Al saber esto fue posible fortalecer algunas actividades en curso e iniciar otras en zonas desatendidas. El grupo examinó también la legislación y documentos jurídicos en la búsqueda de orientación para establecer un marco jurídico de referencia para el equipo. El equipo se dio cuenta de que la Ley básica de la administración pública del estado de Nuevo León, la Ley estatal de salud y la Ley de bienestar social hablaban de atender las necesidades en materia de protección, bienestar y salud de la sociedad en general y de los grupos vulnerables en particular.

Una de las actividades educativas iniciales del grupo consistió en organizar un curso de formación profesional para unificar conceptos teóricos y criterios para la inter-

Las tres etapas de la implantación de una red

Primera etapa

Determinar la situación de las instituciones participantes
 Formular una estrategia para integrar el grupo de trabajo
 Formular la misión, los objetivos generales y específicos, las estrategias y las líneas de acción
 Presentar los distintos programas que lleva a cabo cada institución
 Definir las funciones a desempeñar
 Señalar los recursos disponibles
 Calcular la capacidad de respuesta
 Señalar las instalaciones disponibles y las refacciones necesarias
 Formar comités
 Indicar el personal que participará, según sus funciones, en cada nivel de asistencia
 Trazar una estrategia para informar y sensibilizar al público
 Organizar un programa de orientación y sensibilización para el personal a cargo del contacto inicial
 Capacitar al personal de las instituciones participantes
 Preparar un formulario de información general para uso de las instituciones participantes
 Preparar un directorio de instituciones, con el nombre, la dirección, el número de teléfono, el director y los jefes de los servicios, los servicios que se ofrecen, el horario de atención y el costo
 Preparar una tarjeta de derivación y contraderivación
 Preparar un plan para aprovechar al máximo los recursos

Segunda etapa

Redactar convenios de investigación
 Capacitar al personal de las instituciones que integrarán el equipo
 Presentar proyectos a fin de obtener financiamiento para estudios, trabajo, equipo y servicios
 Indicar otras instituciones que podrían sumarse al equipo
 Proporcionar asistencia a las víctimas de violencia doméstica y a sus familias
 Derivar casos entre integrantes del equipo, utilizando las tarjetas de derivación y contraderivación
 Dar seguimiento a los casos y tomar nota de los resultados
 Analizar la base de datos
 Crear un diplomado para estudios sobre violencia doméstica con una perspectiva de género

Tercera etapa

Continuar capacitando al personal institucional y comunitario
 Capacitar al personal nuevo que ingrese al programa
 Evaluar la cobertura, el costo y el efecto de forma regular y sistemática
 Adaptar las estrategias generales y reformular las estrategias de intervención si es necesario

vención. A fin de entablar un diálogo público sobre la violencia doméstica, se organizaron foros públicos en Nuevo León, centrados en la familia, la situación de la mujer, el desarrollo del niño y la adolescencia. Todos estos foros fueron convocados por el Consejo Estatal de Población, junto con otras instituciones tales como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Salud. Con el propósito de informar al público sobre el problema, los integrantes del equipo participaron en programas de radio y televisión y trabajaron con la prensa para tratar asuntos relacionados con la violencia doméstica.

Igual que cualquier otro grupo en evolución, el equipo ha encontrado desafíos en el proceso de consolidación, que llevaron a una mejor comprensión de sus alcances y limitaciones, permitiéndole responder más eficazmente.

El marco de las actividades

El equipo interinstitucional se definió como grupo de profesionales de distintos campos comprometidos a prevenir la violencia doméstica, asistir y rehabilitar a las víctimas, y estudiar el fenómeno.

Misión

La misión del equipo es trabajar en conjunto a fin de crear un sistema integrado de acción general e individual para prevenir la violencia doméstica y ayudar a las familias en riesgo, así como a las víctimas. Concretamente, el equipo encontró las siguientes necesidades en el grupo destinatario:

- Educación para promover una cultura de no violencia
- Asesoramiento y asistencia jurídica, médica, psicológica y psiquiátrica
- Instalaciones para ofrecer asistencia temporal a las mujeres y su familia, que sean accesibles para las familias desde el punto de vista tanto geográfico como económico
- Normas para evitar la violencia
- Tipificación de la violencia doméstica como delito.

El modelo de asistencia

Una vez establecidas las metas y el marco, la red elaboró un modelo de asistencia que se regía por ciertos criterios: el equipo debía proporcionar asistencia apropiada y oportuna a las víctimas de violencia doméstica y a su familia, según los recursos disponibles y la capacidad de la red para responder; la cobertura debía ser amplia, pero la asistencia

debía adaptarse a la situación particular de cada personal; el programa debía ser fácil de reconocer y debía ser accesible a los usuarios; y el costo de ejecución debía ser bajo.

El modelo de asistencia tenía tres niveles de servicios. En el *primer nivel* se detecta a las víctimas de agresiones y a su familia, se les concientiza sobre la dinámica de la agresión, se les proporciona orientación y diagnóstico médico, si es necesario, y se deriva a las víctimas y a su familia a instituciones apropiadas para que reciban el tratamiento y la asistencia necesarios. Este nivel de atención se basa en el sistema de salud existente y abarca consultorios, centros de salud, centros comunitarios, consultorios hospitalarios externos y de urgencia, y trabajadores de salud de la comunidad (promotores de salud, técnicos y ayudantes). El sistema de atención de salud no sólo ocupa una posición estratégica para detectar y derivar personas que son víctimas de violencia, sino que tal vez constituya el único medio para contactar a las víctimas, especialmente aquellas que no están dispuestas a denunciar las agresiones directamente. El sector educación, mediadores, vecinos y otros también podrían intervenir en esta etapa.

El *segundo nivel* abarca instituciones que ofrecen asesoramiento especializado a las víctimas de violencia y a aquellos que sufren las consecuencias, como los niños. Hay programas para ayudar a los agresores, así como talleres y terapia familiar y de grupo. Después que una persona o los integrantes de una familia pasan por este nivel, son enviados a un centro de salud o de desarrollo comunitario que da seguimiento a la situación.

En el *tercer nivel*, los hospitales e instituciones especializadas proporcionan tratamiento específicamente para lesiones ocasionadas por incidentes de violencia doméstica y realizan intervenciones a nivel familiar. Si es necesario, se puede trabajar en cualquiera de los tres niveles simultáneamente con integrantes de la familia y otros agentes de la comunidad.

Después de recibir tratamiento en el tercer nivel, las víctimas son enviadas nuevamente al segundo nivel para que terminen los planes de tratamiento, y posteriormente se las deriva al primer nivel para el seguimiento.

En los tres niveles se ofrecen programas de sensibilización y capacitación. El equipo interinstitucional también patrocina investigación sobre violencia doméstica y formas de detectar a las personas que son víctimas o corren el riesgo de serlo. El modelo general incluye también programas de educación para promover la no violencia.

Las ventajas de la red y su modelo

Aunque hace poco que existe la red, ya ha demostrado que tiene varias ventajas. En primer lugar, constituye una respuesta coordinada frente a un problema real. La estructura de la red no restringe el establecimiento de prioridades o el crecimiento de las unidades y los servicios, ya que permite la inclusión de otras entidades e intervencio-

nes. Debido a la índole específica de las intervenciones, se pueden prestar servicios con un mínimo de recursos a una gran cantidad de personas. El modelo es dinámico y flexible, y garantiza la acción y el seguimiento en cada nivel. Como la cobertura se coordina por medio de la red, se puede extender, y se pueden combinar recursos a fin de proporcionar servicios específicos con una mayor capacidad de respuesta.

Debido a su éxito inicial, la red está explorando varias opciones para ampliar y fortalecer sus servicios.

El Colegio de México instituirá un programa de asesoramiento permanente. Sus profesores e investigadores ofrecerán a los integrantes del equipo interinstitucional un curso de formación profesional sobre métodos para contrarrestar la violencia doméstica. Asimismo, el Colegio de México patrocinará reuniones trimestrales con representantes de distintos servicios, investigadores e instituciones académicas de nivel nacional.

La Universidad Autónoma de Nuevo León, por medio del Departamento de Psicología, y la Asociación Rotaria Internacional firmarán un convenio en virtud del cual el Colegio construirá un consultorio, equipado por la Asociación Rotaria, para atender a víctimas de violencia doméstica. El Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Colegio de México ofrecerán un diplomado en estudios de violencia doméstica con una perspectiva de género.

Se coordinará la acción con el programa de asistencia a los adolescentes de la Subsecretaría Estatal de Salud. A fin de estudiar los problemas relacionados con la violencia doméstica, se organizarán reuniones con representantes del gobierno estatal. Asimismo, se buscarán oportunidades para dar a conocer la labor de la red contra la violencia doméstica en diversos medios de comunicación.

Enseñanzas

Durante todo el proceso de establecimiento de la red, compartimos experiencias que han ampliado nuestro enfoque del problema y nos han ayudado a ver nuestros puntos fuertes y las oportunidades. Hemos aprendido que la violencia doméstica aflige a todos los sectores de la sociedad y exige la acción conjunta de diferentes protagonistas en distintas situaciones. Cuando los organismos trabajan de forma aislada, ajenos a otros programas y medidas, no se aprovechan al máximo los recursos y se necesita un esfuerzo mucho mayor para atender las necesidades de las víctimas. Sin una red de servicios, las víctimas de violencia doméstica van de una entidad a otra en busca de una respuesta adecuada para sus necesidades. Si las víctimas no encuentran ayuda enseguida, a menudo desisten. Más aún, la búsqueda infructuosa de ayuda podría ocasionar gastos innecesarios y reafirmar el papel de víctima, lo cual tiene consecuencias negativas tanto para la mujer como para su familia.

Notas

¹ Las siguientes organizaciones han formalizado su participación en la red: la Secretaría General del Gobierno por medio del Consejo Estatal de Población y el Centro de Asistencia a Víctimas de la Violencia (CAVIDE), la Secretaría de Salud por medio del Programa de Salud Mental y el Programa de Salud Reproductiva, el Instituto de Salud Mental, la Secretaría de Educación, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por medio de DIF Nuevo León, DIF Monterrey, DIF Santa Catarina, DIF San Nicolás y DIF San Pedro, y la Universidad Autónoma de Nuevo León por medio de la Facultad de Psicología. Las siguientes instituciones también participan activamente en la red: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Juventud y Deportes por medio de su programa Causa Joven, Alternativas Pacíficas, la Universidad de Monterrey por medio de su Centro de Investigaciones sobre la Familia, la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario y la Unidad de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública.

² Como punto de partida, el equipo utilizó una propuesta para la formación de un grupo de trabajo escrita por Irma Saucedo, del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, Colegio de México.

Página en blanco a propósito

Los servicios telefónicos de urgencia para abordar la violencia doméstica: El Salvador

Enrique Valdez

En 1993, con la finalización del conflicto interno, El Salvador inició un plan de reconstrucción nacional que necesita mucho más que la reconstrucción física: urge también la reconstrucción moral de la sociedad. Como parte de ese proceso, el gobierno actual ha dado prioridad al logro de la igualdad de oportunidades para todos los salvadoreños y de manera especial a la igualdad entre hombres y mujeres.

Un ejemplo es la iniciativa del gobierno conocida como Programa de Saneamiento de la Relación Familiar (PSRF), coordinado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. El PSRF adopta un enfoque multidisciplinario de la violencia doméstica, ofreciendo atención integral a las personas que llaman al Teléfono Amigo de la Familia, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año.

El PSRF proporciona atención integral a las familias salvadoreñas, con una gama completa de servicios de atención emocional, psicológica, social, médica y legal, a fin de abordar y prevenir la violencia doméstica en todas sus formas. Al coordinar nuestras estrategias y servicios, hemos dejado atrás las acciones aisladas que en muchas oportunidades no ofrecían soluciones válidas para la problemática de la gente. Nuestra labor abarca una amplia gama de metas, según las necesidades de las víctimas.

Atención emocional. El Teléfono Amigo de la Familia atiende casos de emergencia. Rompiendo con el esquema tradicional, no esperamos que las víctimas vengan a nuestras instalaciones, sino que, cuando recibimos una llamada de auxilio, inmediatamente se desplaza un equipo hasta el lugar de la agresión para dar a la víctima protección inmediata. El equipo llega en no más de cinco minutos, examina la situación utilizando protocolos previamente establecidos y deriva a las víctimas a la institución que corresponda si es necesario.

Atención médica. Una red de establecimientos de salud pública proporciona la atención médica necesaria a la víctima y su familia.

Atención psicológica y social. Incluye asesoramiento y otros servicios para la víctima y el agresor por medio de diversas instituciones.

Atención legal. Se ofrece también asesoramiento jurídico, en virtud de la adopción por El Salvador de convenciones internacionales sobre los derechos del niño, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención de Belém do Pará, así como la aprobación del Código de Familia y la Ley de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Si el episodio se clasifica como falta, el caso se remite a la Procuraduría General de la República y se intenta una reconciliación. Si la mujer decide no buscar la reconciliación, puede recibir asesoramiento jurídico sobre otras opciones. Si el episodio se considera como un delito, el caso se eleva a la Fiscalía General de la República para que se inicie la acción judicial correspondiente.

Coordinación interinstitucional. Se ha firmado un acuerdo interinstitucional que garantiza el apoyo al PSRF de importantes instituciones del sector público. La Corte Suprema de Justicia se ha comprometido a capacitar a los jueces de los tribunales de familia y de los tribunales de paz en violencia doméstica. La Procuraduría General ofrece servicios de solución de controversias y orientación psicológica a víctimas y agresores. La Fiscalía General se compromete a enjuiciar vigorosamente los casos delictivos que se le remitan. La Policía Nacional Civil ha adoptado una doble estrategia. Con su número de emergencia 121, se ha comprometido a garantizar la llegada de la policía a la escena de violencia doméstica en cinco minutos. Al mismo tiempo, la policía, en coordinación con el PSRF, ha capacitado a unidades especiales para responder a casos de violencia doméstica. Estas unidades llegan en 15 minutos y reemplazan al equipo de respuesta rápida en la escena del incidente. Por último, el Instituto Salvadoreño para la Protección al Menor investiga la posibilidad de maltrato al menor en los casos en que la policía sospeche que haya ocurrido.

Durante los dos años en que ha estado en funcionamiento, el Teléfono Amigo de la Familia se ha extendido a los trece municipios de San Salvador, y se planea extenderlo al resto del país. El programa ya ha beneficiado directamente a más de 28.000 personas e indirectamente a más de 98.000 (véase el cuadro 7.1). Dos tercios de los casos atendidos se clasifican como “agresión emocional” y casi un cuarto consisten en “violencia física intrafamiliar”. Los delitos sexuales representan alrededor del 3% de los casos, y el maltrato al menor, el 6% restante.

El programa nos ha enseñado mucho sobre algunos rasgos importantes de la violencia doméstica, permitiéndonos mejorar la respuesta interinstitucional a las llamadas de auxilio y atender mejor a los beneficiarios de ambos sexos. Las víctimas de violencia doméstica son casi siempre mujeres, y los incidentes generalmente ocurren en la casa de la víctima. Poco más de la mitad de las víctimas tienen entre 25 y 40 años, y aproximadamente la mitad son el sostén principal de la familia. En la mayoría de los casos, el agresor es el esposo o el compañero, tiene aproximadamente la misma edad

Cuadro 7.1 Casos tratados por el Programa de Saneamiento de la Relación Familiar, 1995-1997

Año	Violencia intrafamiliar	Agresión sexual	Orientación sobre maltrato al menor	Atención psicológica	Total
1995	1.753	258	449	5.224	7.684
1996	2.172	299	596	6.031	9.098
1997	3.845	479	4.334	3.452	12.110
Total	7.770	1.039	5.379	14.707	28.892

que la mujer y tiene un empleo estable. Menos de la mitad de los agresores están bajo el efecto de drogas o alcohol en el momento del incidente.

El panorama es un poco diferente en lo que atañe a los incidentes de abuso sexual. La mayoría de las víctimas son mujeres menores de 18 años que conocen al agresor, quien generalmente es un familiar cercano. El alcohol y las drogas por lo general no están presentes en los incidentes de abuso sexual. Este panorama contradice la idea preconcebida de que los abusos sexuales se producen en lugares alejados y entre desconocidos.

La disposición creciente del público a denunciar actos de violencia da fe del éxito del Teléfono Amigo de la Familia. A continuación se mencionan algunos de los logros principales del programa.

Se está fortaleciendo el sistema nacional de protección contra la violencia doméstica, caracterizado por el entusiasmo y la dedicación de las diversas instituciones participantes. Las actividades del programa han sensibilizado a funcionarios públicos de todos los niveles, así como a líderes comunales y organizaciones no gubernamentales, con respecto a la problemática de la violencia doméstica.

Se ha movilizado un sólido equipo de trabajo que se ciñe a un conjunto uniforme de principios, aprovechando al máximo los recursos disponibles. Debido a la actuación ejemplar del equipo desde el punto de vista profesional y ético, el programa ha crecido más por recomendaciones de usuarios que por campañas de publicidad. Un sistema de informática nuevo ayuda al personal a procesar casos ágilmente y a analizarlos eficazmente.

El Teléfono Amigo de la Familia está en línea directa con el sistema de emergencia 121 de la Policía Nacional Civil, lo cual significa que la policía y consejeros familiares pueden llegar al sitio de la agresión en tres a cinco minutos. Contamos además con un servicio de ambulancia debidamente equipado. Todo el personal policial que trabaja en el sistema de emergencia 121 recibe capacitación teórica y práctica a fin de que pueda abordar eficazmente situaciones de violencia doméstica.

Se proporciona terapia de grupo a víctimas, agresores y parejas para prevenir la reincidencia de la violencia doméstica. Este servicio incluye visitas domiciliarias, así como visitas a vecindarios y lugares de trabajo para detectar y prevenir la violencia doméstica, las agresiones sexuales y el maltrato al menor y realizar una labor de sensibilización. Finalmente, nos sentimos orgullosos de contribuir al proceso de reconciliación nacional en El Salvador, reafirmando el principio de que “La paz social nace en la familia”.

Cómo ayudar a los hombres a superar el comportamiento violento con las mujeres

Francisco Cervantes Islas

CORIAC (el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias) es una organización civil sin fines de lucro que trabaja en la Ciudad de México con hombres que se reconocen como violentos. Por medio de grupos voluntarios de autoayuda, los hombres toman conciencia de lo que los hace violentos y aprenden estrategias que les ayudan a parar su comportamiento violento.

El personal de CORIAC cree que es posible redefinir las actitudes violentas y autoritarias por medio de un programa de autocrítica guiada, proceso complejo que no resulta fácil para los participantes. Admitir públicamente que uno se ha comportado violentamente con su pareja e hijos y ventilar las propias creencias y emociones sobre el poder, el control y la violencia pueden provocar actitudes defensivas y desafiantes incluso en los hombres más dispuestos a la autocrítica y la reeducación.

Las creencias culturales sobre la superioridad masculina desempeñan un papel importante en las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. Este concepto de superioridad masculina no es simplemente el producto de rasgos inherentes de los machos de nuestra especie, sino que se debe a un complejo proceso de aprendizaje social. La masculinidad está organizada en nuestra cultura en torno al machismo, que se articula con identidades nacionales, regionales, de clase y étnicas.

La base del machismo ha sido una creencia de superioridad frente a las mujeres en general y a otros hombres en particular. Cuando se cuestiona esa superioridad, los hombres podrían sentir el imperioso mandato de usar la violencia para apuntalar su identidad masculina. Por consiguiente, aprender a evitar el comportamiento violento, especialmente hacia la esposa, significa redefinir la masculinidad desde las bases. Cada compañero de CORIAC debe preguntarse qué significa ser un hombre, esposo, padre y "jefe". Este proceso implica cuestionar la competencia y el abuso de poder, superar la falta de contacto con las emociones dando cauce no violento a la expresión emotiva,

fomentar el reconocimiento positivo de la vulnerabilidad, propiciar la flexibilidad de los papeles sexuales y mejorar la habilidad social y para solucionar problemas.

El primer paso para cada compañero que ingresa a un grupo de autoayuda de CORIAC es cuestionarse si cree que tiene mayores privilegios y menos obligaciones que su compañera. Cada compañero debe determinar qué grado de autoridad cree tener sobre quienes le rodean, así como los argumentos que usa para tratar de justificar su violencia, y redefinir sus suposiciones con respecto a su propia valía. En este contexto, es importante que el reconocimiento de las limitaciones y fragilidades personales no se asimile como una pérdida del sentido de valía personal.

Este aprendizaje a partir de la autocrítica constituye la base del programa de reeducación de CORIAC para hombres agresivos. La autocrítica les ayuda a reconocer que son violentos, a responsabilizarse de sus actos y a expresar sus emociones por medio de comportamientos no violentos. A menudo, este proceso implica adoptar aspiraciones diferentes, e incluso opuestas, a las asimiladas a lo largo de toda la vida y reforzadas diariamente por las tradiciones sociales y culturales.

Los hombres tienden a acudir a CORIAC en momentos de crisis; algunos son enviados por grupos de mujeres o por la procuraduría. Los hombres con mayores probabilidades de permanecer en el programa son los que están convencidos de que tienen mucho que ganar cambiando su comportamiento violento. Para los que no están dispuestos a cambiar, en cambio, las probabilidades de que permanezcan en el programa son mucho menores.

El modelo de CORIAC

CORIAC nació en agosto de 1991 en San Francisco, California, en un programa patrocinado por MANALIVE, movimiento internacional de hombres en contra de la violencia masculina. Con la ayuda de educadores de dicha organización, varios hombres comenzaron un período de autocapacitación que culminó en noviembre de 1992 con la constitución del predecesor de CORIAC, el Programa de Reeducación y Compromiso Responsable para el Hombre Violento.

El programa actual, iniciado en febrero de 1993, abarca tres niveles de reeducación o trabajo individual. Cada nivel consiste en 16 sesiones de dos horas semanales. Más de 1.000 hombres han asistido por lo menos a una sesión. CORIAC ha recibido apoyo económico limitado de SEDESOL y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, así como apoyo de UNICEF, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur y el Consejo de Población para determinadas actividades. Además, CORIAC cobra a cada participante cuatro dólares por sesión. No obstante, la situación económica general de CORIAC es precaria, de modo que solamente uno de los cuatro empleados de CORIAC trabaja a tiempo completo.

Primer nivel

En el primer nivel, cada participante descubre cómo ha incorporado valores y prácticas de la cultura patriarcal que lo han llevado al autoritarismo, el dominio, la coerción y la violencia en las relaciones.

En el grupo de reflexión, los participantes exploran los mitos y estereotipos de la masculinidad, las expectativas de autoridad y los servicios que esperan de su pareja. Se exploran seis elementos o constantes de la violencia. Además, se examinan 16 temáticas sobre la masculinidad y la violencia de género, así como la dinámica misma de la violencia intrafamiliar, abordando un tema por sesión.

Cada tema se encara de una forma que facilita el análisis de cada problemática o tema desde una postura más vivencial. Se procura constantemente generar procesos de introspección más que de razonamiento. Por ejemplo, se examina “el no saber relacionarse sin sentirse dominante” o “la falta de habilidad para expresar emociones de todo tipo, de maneras no defensivas ni violentas”.

Segundo nivel

En el segundo nivel, los participantes pasan a una identificación más profunda de sus emociones. Se motiva a los hombres para hacerse responsables de lo que sienten y hacen. Cuando aprenden a expresar con mayor claridad tanto sus emociones como sus necesidades, se propician actitudes que consolidan formas no violentas de comunicación y resolución de conflictos. Por ello, la introspección de los sentimientos es un reaprendizaje vital de la masculinidad tradicional.

En las sesiones, cada participante relata algún hecho de violencia, y el facilitador lo apoya para que vaya identificando lo que le está sucediendo. Una vez aclaradas sus emociones, se le induce a buscar la forma de resolver sus conflictos sobre la base de relaciones más equitativas y respetuosas.

Tercer nivel

En el tercer nivel, los participantes aprenden a tomar decisiones junto con su pareja, a negociar sobre la base de la satisfacción mutua, a desarrollar más su autosensibilidad emocional y a consolidar estrategias que procuren la búsqueda de una mayor equidad con su pareja. CORIAC espera incluir más adelante otro nivel para capacitar a los participantes en la reproducción del programa a fin de crear más grupos de autoayuda.

Resultados

Cuando alguien llega a CORIAC por primera vez, le hacemos una entrevista inicial sobre los problemas que tiene con su pareja y le explicamos en qué consiste nuestro programa. Aunque la mayoría de estos hombres dicen que quieren parar su comportamiento violento y asistir a las sesiones, menos de la mitad permanecen en el programa más de una sesión.

Alrededor de un tercio asiste a más de cinco sesiones. Estos hombres por lo menos han comenzado a comprender lo que los lleva a ser violentos. Dos de cada diez que inician las sesiones concluyen el primer nivel. Los que permanecen cinco meses o más y notifican grandes avances, conforman el segundo nivel. Ocho hombres en promedio asisten regularmente a estas sesiones.

Durante los cinco años y medio que llevamos operando los grupos de autoayuda se han incorporado al programa de ocho a doce hombres nuevos por mes. Actualmente se trabaja en dos niveles, y asiste un promedio de 20 a 25 hombres por semana. Se necesitan más recursos para reproducir el programa con una base más amplia.

Evidentemente, reducir la alta tasa de deserción de CORIAC constituye un gran desafío. Una primera explicación de la elevada tasa de deserción es que el programa es muy contencioso con respecto tanto a los valores como a la conducta violenta. Nuestros clientes notan a veces que el programa les deja un sabor amargo de culpa que les resulta perturbador y penoso y les quita las ganas de volver. Es muy difícil renunciar a los privilegios y los valores que nuestra cultura nos ha inculcado.

Otra explicación es que, para permanecer en el programa, el hombre tiene que estar convencido de la necesidad de cambiar el equilibrio anterior que caracterizaba la relación con su pareja, porque si no lo está no podrá romper los mandamientos culturales para el hombre y la mujer.

Una tercera explicación de la alta tasa de deserción es que el programa de CORIAC no da resultado para aquellos que no pueden cuestionar su propia autoridad. Nuestro enfoque no termina por convencerlos porque continúan creyendo que “se pasaron de la raya” pero que no son “malos”. Aunque estén en crisis, es posible que todavía no estén dispuestos a admitir que su concepto del mundo no les ayuda a resolver los conflictos. La crisis tampoco garantiza que puedan superar sus mecanismos de negación y la ausencia de autocrítica.

CORIAC está evaluando su programa, para lo cual recurre a informes de un grupo de mujeres entre las cuales se encuentran compañeras de participantes en el programa. Según estos informes, si bien los hombres expresan con mayor claridad lo que quieren, a veces no sin cierta manipulación, es preocupante que los hombres todavía no sean capaces de aceptar las decisiones y formas de pensar de las mujeres. Tal violencia sigue siendo motivo de preocupación, aunque la violencia física disminuye.

La experiencia nos muestra que el modelo de CORIAC puede dar resultado para los hombres que permanecen en el programa. Los que llegan al segundo nivel de entrenamiento dicen que se reconocen violentos y que han logrado reducir las explosiones violentas casi a cero.

En algunos casos, la tensión en la relación de pareja no ha mejorado, y en pocos casos las parejas se han separado. Sin embargo, la mayoría de los hombres que permanecen más tiempo con el grupo logran una comunicación más íntima con la pareja e hijos.

Página en blanco a propósito

Cómo encarar los delitos contra las mujeres: el caso de Brasil

Martha Mesquita da Rocha

Un gran paso en la lucha para que se apliquen plenamente las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia doméstica en Brasil fue la creación en 1986 de una unidad policial especial para los casos de abuso. En noviembre de 1985, el estado de Rio de Janeiro creó un organismo en el ámbito de la policía civil donde las mujeres podían denunciar el maltrato por parte de su marido, de su compañero o de desconocidos y recibir ayuda apropiada. En la etapa inicial, la policía regular debía encargarse de las investigaciones penales relacionadas con la agresión.

En julio de 1986, después de que los agentes de policía asignados a este organismo desempeñaron un papel decisivo en la identificación y captura de un conductor de taxi que había cometido varias violaciones, se creó una Comisaría Especial para la Mujer en el centro de Rio. Más tarde se crearon cinco comisarías más en otros lugares del estado para trabajar con unidades de la policía regular en la investigación de casos y en la aplicación de las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia. Estas leyes abarcan protección contra lesiones corporales, abandono de personas discapacitadas, aborto causado por terceros, maltrato, coerción ilegal, amenazas, secuestro y privación ilegal de la libertad, violación, agresión sexual y corrupción de menores.

A pedido del estado de Rio de Janeiro, en 1993 se encargó al Instituto de Estudios de la Religión (ISER) que examinara la actuación de las comisarías especiales. Con este fin, el ISER analizó todos los incidentes de violencia doméstica denunciados a las comisarías especiales en el centro y el oeste de Rio, (Duque de) Caxias y Nova Iguaçu durante 1992.

Los análisis proporcionaron información interesante sobre las características de la población atendida por las comisarías especiales. La víctima típica de violencia doméstica es una mujer maltratada por el esposo o, con menos frecuencia, por su compañero. Por lo general se trata de una pareja pobre y con un bajo nivel de educación. La mujer que acude a la comisaría especial ya ha sido agredida varias veces, pero no desea romper la relación; cree que debe ser leal a su marido. Con frecuencia, la mujer recurre a la comisaría especial como táctica de presión, como defensa o como estrategia de

negociación en la batalla conyugal, tras el fracaso de la mediación de familiares, vecinos o el vecindario. Está buscando una herramienta útil para renegociar el pacto social doméstico. El hombre, en cambio, cree que la violencia doméstica es una forma de proteger su honor.

Otras características de las víctimas y los agresores son las siguientes:

- La edad predominante de las víctimas es de 26 a 35 años.
- Los agresores tienen entre 26 y 45 años.
- Entre las víctimas, 48,6% son blancas, 38,5% son mestizas y 12,9% son negras. De los agresores, 40% son mestizos, 40% son blancos y 20% son negros.
- Una cantidad considerable de mujeres dicen que son amas de casa.
- Solamente 2% de los agresores se clasifican como trabajadores no remunerados, y sólo 5,5% están desempleados.
- Casi dos tercios de las víctimas han cursado algunos años de la escuela primaria; 17% han llegado a la secundaria o la han terminado.

En el estudio del ISER se definió una fuerte relación entre la ebriedad o el alcoholismo y la incidencia del abuso. En el 30% de los casos, las víctimas informan que el agresor es alcohólico o estaba ebrio en el momento de la agresión. Había problemas de alcoholismo o ebriedad en el 85% de los casos en los cuales se habían denunciado incidentes anteriores de agresión.

Por último, en el estudio del ISER se observó que la mayoría de los incidentes se producen los lunes, seguidos de los sábados y domingos. Poco más de 40% de los incidentes denunciados se habían producido durante el día, entre las 8:00 y 18:00 horas; 40%, entre las 18:00 horas y la medianoche; y el resto, después de medianoche.

Desde que se formaron las comisarías especiales, la cantidad de incidentes denunciados ha aumentado constantemente, pasando de 3.631 en 1991 a 9.121 en 1996. De estos casos, la gran mayoría (6.264) consistieron en lesiones corporales; 2.211 fueron amenazas a la mujer (véase el cuadro 9.1). El aumento de las denuncias no es una señal de incremento en los casos de violencia, sino de una mayor atención del público al problema. Una cantidad creciente de mujeres están denunciando las agresiones porque confían en que las comisarías especiales les brindarán el apoyo y la protección que necesitan.

En 1995, el Jefe de la Policía Civil de Rio de Janeiro formó una Comisión Permanente encargada del estudio y la implantación de mejoras en las comisarías especiales, incluido el establecimiento de procedimientos normalizados para las operaciones. Esta Comisión, con amplia participación popular, examinó la labor de las comisarías especiales y señaló que los agentes de policía estaban atendiendo principalmente a amas

Cuadro 9.1 Incidentes denunciados a comisarías especiales, 1991 y 1996

Delito	1991	1996
Lesiones corporales	2.685	6.264
Violación	82	228
Amenazas	—	2.211
Otros delitos	864	418
Total	3.631	9.121

Fuentes: Comisarías Especiales para la Mujer-DGPE/SERC, Rio de Janeiro, Brasil.

de casa pobres y niños. Por lo tanto, las comisarías especiales estaban ayudando a las mujeres con pocas opciones a superar la vergüenza y el temor de hacer valer un elemento básico de su ciudadanía: el derecho a la seguridad, a la vida y a la integridad física y psicológica.

Página en blanco a propósito

Reforma legislativa y judicial sobre violencia doméstica: Costa Rica

Zarela Villanueva

Un deber primordial de todo sistema judicial es responder a las necesidades de los ciudadanos en materia de justicia social. Ningún sistema judicial debería perpetuar los desequilibrios sociales. Cuando otras instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales promueven cambios, el sistema judicial no puede convertirse en obstáculo de las transformaciones. Por el contrario, está obligado a dar un trato igualitario a los que acuden en busca de protección de sus derechos. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y los niños es un paso en esa dirección.

Desde los años setenta, Costa Rica ha adoptado normas internacionales sobre los derechos de la mujer y las ha plasmado en leyes. No obstante, al principio las actitudes tradicionales con respecto al papel del hombre y la mujer y el carácter privado de la vida familiar impedían su aplicación adecuada. La policía no estaba dispuesta a intervenir en conflictos familiares y el sistema judicial no estaba dispuesto a enjuiciar a hombres que maltrataban a su esposa e hijos. Con el fin de superar estas dificultades se promulgaron diversas leyes. Más importante aún fue la iniciativa de la Corte Suprema de organizar un ciclo de programas y talleres para capacitar al personal del sistema judicial. Desde los magistrados y jueces hasta el personal auxiliar aprendieron distintos aspectos de la violencia doméstica y tomaron conciencia de los prejuicios de género en su propia actitud y creencias.

Las mujeres y el sistema judicial

Hasta 1990, la única protección legal contra la violencia familiar residía en el Código Penal, en un artículo en el cual se establecen penas para las personas que lesionan a otras o las dejan incapacitadas. Los intentos de las mujeres de protegerse de un compañero agresor eran frustrantes. A menudo, la policía se mostraba reacia a intervenir dado que tradicionalmente se consideraba que los conflictos familiares eran asuntos privados que debían solucionarse sin intervención externa. En el caso improbable de que un hombre fuese enjuiciado por agredir a su esposa y hallado culpable, generalmente se

La situación de la mujer en Costa Rica

Desde 1950, las características vitales de las mujeres costarricenses se han transformado notablemente. Su perfil demográfico ha cambiado, en especial con la drástica reducción de la tasa de natalidad. A principios de los años noventa, las mujeres tenían tres hijos en promedio, en comparación con 6,7 en 1950. Pese a la disminución de la tasa de natalidad, 35% de la población tiene menos de 15 años.

La nupcialidad se ha mantenido estable durante más de dos décadas, en tanto que los divorcios han crecido considerablemente en los últimos años. Más de la mitad de las mujeres mayores de 14 años tienen algún tipo de relación de pareja. No hay datos exactos sobre las uniones consensuales, pero se cree que la cantidad es elevada. Cuarenta por ciento de los niños nacen fuera del matrimonio. Una de cada cinco familias está encabezada por una mujer.

En los últimos veinte años, la participación laboral de las costarricenses ha crecido fuertemente. Treinta por ciento de todas las mujeres en edad de trabajar lo hacen, y de ellas el 40% corresponde al servicio doméstico. Aunque las costarricenses tienen un nivel de educación elevado, siguen teniendo menos oportunidades laborales que los hombres y ganan menos. El cuidado de los hijos y otros servicios que necesitan las mujeres que trabajan han quedado a la zaga del aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral.

imponía una multa pequeña y, si correspondía pena de prisión, era corta o se suspendía. En ambos casos, el hombre regresaba rápidamente al hogar, tal vez más agresivo que antes.

En un intento por corregir esta situación, en 1990 la legislatura aprobó la primera ley de Costa Rica que se refirió explícitamente a la violencia contra la mujer: la Ley de promoción de la igualdad social de la mujer. Esta ley autorizaba a los tribunales a ordenar a un marido agresor que abandonara el domicilio de inmediato y pagara los gastos de sustento de la familia mientras se intentaba una reconciliación. Esta ley no tuvo la efectividad pretendida, principalmente porque muchos jueces y funcionarios policiales no estaban convencidos de que se debiera ordenar al propietario de un inmueble que saliera del domicilio.

Finalmente, el 25 de marzo de 1996 se promulga en Costa Rica la Ley contra la violencia doméstica, en virtud de la cual se pueden ordenar medidas de protección sin necesidad de que exista un proceso penal o civil. Conforme a esta ley, cualquiera que agrede psicológica, física o sexualmente a un familiar o dilapide los bienes familiares de dicho familiar puede sufrir varias consecuencias:

- Se puede ordenar al agresor que salga del domicilio común y prohibirle el acceso al domicilio y al lugar de trabajo de la víctima.
- Se le puede suspender provisionalmente la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad. Cuando se está en presencia de agre-

sión sexual contra menores, se le puede suspender el derecho de visitar a sus hijos e hijas.

- Se le pueden decomisar las armas en su posesión.
- Se le puede ordenar que pague los alimentos de la familia, la atención médica de la víctima y todo daño a los bienes que haya ocasionado como consecuencia del incidente.

La ley fue impugnada de inmediato, aduciéndose que violaba los derechos del agresor, pero la Sala Constitucional la reafirmó. En su decisión, la Sala señaló lo siguiente:

“También están de por medio los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física de los miembros del núcleo familiar —todos garantizados por la Carta Fundamental y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos— cuya vigencia se ve seriamente comprometida cuando uno de sus miembros, abusando de su fuerza física o de su posición de autoridad, le inflige vejámenes físicos, sexuales, psicológicos o patrimoniales a uno o varios de sus integrantes. En aras del mantenimiento de la unidad familiar y de la integridad de los miembros de la familia es que el legislador consideró oportuno dotar a las personas víctimas de violencia doméstica de un procedimiento ágil y oportuno, que les garantice en forma inmediata el cumplimiento de los postulados constitucionales mencionados... aun sin que... otorgue audiencia al supuesto agresor... pues... debe prevalecer el interés superior de proteger, sin demora, la integridad de la persona agredida.”

Durante el primer año de vigencia de la ley se entablaron 7.219 acciones judiciales por violencia doméstica.

El Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar

Otro avance importante en la forma en que la sociedad costarricense enfrenta el problema de la violencia doméstica se produjo en 1994 con la creación del Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. El plan fue coordinado por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia e impulsado por el Despacho de la Primera Dama de Costa Rica. Su objetivo es desarrollar un sistema integrado de servicios y acciones para prevenir la violencia doméstica y atender a ofendidos y ofensores. Este plan multidisciplinario involucra a varios ministerios: de Justicia, Seguridad Pública, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda, Información y Cultura, Juventud y Deportes, así como otras instituciones y dependencias públicas, entre ellas universidades estatales, la Defensoría de los Habitantes y organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo.

Aunque este programa tiene menos de cuatro años, ya ha acumulado numerosos logros, entre los cuales cabe señalar los siguientes:

- una mayor sensibilización social sobre el problema de la violencia intrafamiliar mediante la campaña publicitaria “Por una vida sin violencia”;
- fortalecimiento de la legislación y los mecanismos de protección en materia de violencia familiar;
- creación y fortalecimiento de servicios y programas para las personas afectadas por la violencia, entre ellos un modelo de atención integral que se implantó en dos localidades, la apertura de seis oficinas municipales de la mujer, la ampliación de la red de albergues temporales y el establecimiento de una línea telefónica de atención de urgencia; y
- la publicación de material educativo e informativo, la capacitación de más de 1.000 personas de diversas instituciones para que puedan reconocer y abordar problemas de violencia familiar y la promoción de iniciativas de investigación.

Sensibilización del poder judicial

El poder judicial de Costa Rica también ha estado a la vanguardia de los programas de capacitación para sensibilizar al personal judicial, desde los jueces de la Corte Suprema hasta los defensores públicos, los fiscales, los trabajadores sociales y el personal auxiliar. Estos programas de capacitación y talleres se centran en la teoría y la dinámica de la violencia doméstica, y abarcan temas tales como teoría sexo-género, relaciones de poder, análisis del patriarcado, dinámica de tipos determinados de violencia como incesto, violación y otras formas de agresión física y psicológica, análisis de leyes pertinentes, recursos legales y servicios jurídicos disponibles para las víctimas de violencia doméstica, y estrategias para ayudar tanto a las víctimas como a sus agresores.

El poder judicial de Costa Rica ha tomado varias medidas innovadoras para reconocer los derechos de la mujer y hacer frente al problema de la violencia doméstica. De un análisis de estos programas surgen varias conclusiones importantes:

- Es imprescindible lidiar con la problemática presentada por la violencia doméstica para mejorar la calidad de los servicios que ofrece el poder judicial y promover su modernización.
- La conciencia y participación de los altos funcionarios del poder judicial son necesarias para el éxito de la promoción, la ejecución y el seguimiento de los planes y acciones con respecto a la violencia doméstica. Asimismo,

la única forma de garantizar la eficacia de estos programas es que todos los integrantes del poder judicial estén al tanto de ellos.

- La capacitación para sensibilizar a los funcionarios judiciales sobre la problemática de género es fundamental para mejorar el servicio y proporcionar atención integral. El personal de apoyo y los auxiliares pueden intervenir de manera adecuada y aportar soluciones únicamente si conocen el problema. Los jueces y las juezas emitirán fallos equitativos si comprenden la dinámica de la violencia familiar.
- Las facultades de derecho deben incorporar en sus programas cursos de sensibilización de género, los cuales deberían ser obligatorios para cualquiera que siga la carrera judicial. Los instructores deben ser idóneos y se les debe atribuir el prestigio que les corresponde.
- En los programas judiciales relativos a la violencia doméstica debe participar la totalidad del sector judicial, incluidos la policía, los médicos forenses, los defensores públicos y las fiscalías. Estos programas deben ser objeto de evaluación y seguimiento permanentes, a fin de mantener la calidad y detectar rápidamente las oportunidades para mejorar el sistema.
- La información sobre los trámites necesarios para tener acceso a los servicios judiciales debe estar centralizada, y todos los proveedores de servicios del sector público deben proporcionarla al público. Es necesario compilar estadísticas minuciosas para evaluar la calidad del sistema de justicia y facilitar la búsqueda de soluciones para determinados problemas.
- Los sistemas judiciales deben coordinar con otras instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajen en otros aspectos del problema de la violencia doméstica.
- Los sistemas judiciales deben captar recursos externos e invertir recursos propios en programas de sensibilización y prevención en materia de violencia doméstica. Las organizaciones financieras internacionales también deben contribuir a esta tarea sin demora.

Es claro que las personas encargadas de administrar justicia en Costa Rica todavía no han logrado dejar de lado todos sus prejuicios y creencias erróneas sobre la violencia doméstica. Algunos años de trabajo comprometido no pueden resolver siglos de mitos que fomentan y legitiman la violencia de género y la impunidad de los ofensores. Sin embargo, la continuación del trabajo iniciado llevará a una mayor comprensión de la realidad y brindará a quienes imparten justicia elementos que les permitan alcanzar su meta: resolver los problemas de género de manera equitativa e imparcial; en otras palabras, hacer justicia.

Página en blanco a propósito

Programa escolar contra la violencia: Canadá

Peter Jaffe, Marlies Suderman y Elaine Schieck

Entre 1991 y 1993, los integrantes del Panel Canadiense sobre la Violencia contra la Mujer viajaron por todo Canadá. Estuvieron en 139 localidades y escucharon casi 4.000 relatos sobre la realidad cotidiana de la violencia contra la mujer en el hogar, en el trabajo y en la calle. Vieron que la índole y el alcance del horror se equiparan únicamente con el alto grado de tolerancia de la violencia. Muchas personas reportaron que sus vecindarios responden con el silencio y la negación de la realidad.

Los integrantes del panel buscaban soluciones para el problema de la violencia y un plan de acción nacional válido. Un 75% de los informes presentados al Panel señalaron que la esperanza de un futuro no violento radica en el sistema de educación y en programas de prevención de la violencia. El desafío para el sistema escolar consiste en responder a esta recomendación. ¿Podemos darnos el lujo de decir que estamos demasiado ocupados, que no tenemos suficientes recursos y que estamos abrumados por los temas sociales ya existentes de un currículum sobrecargado? Creemos que las escuelas necesitan superar este desafío y unirse a la comunidad para poner fin a la violencia.

En vista de que entre tres y cinco niños en cada clase ya presencian situaciones de violencia en el hogar, la necesidad es urgente (Kincaid 1982)¹. En una localidad representativa (London, Ontario), 21% de las alumnas de dos escuelas secundarias que tenían novio dijeron que habían sido maltratadas físicamente por el novio, 23% dijeron que habían sufrido abusos sexuales y 57% reportaron haber sufrido agresiones verbales (Suderman y Jaffe 1993)². Asimismo, 45% de las mujeres mayores de 18 años han experimentado por lo menos un incidente de agresión por un compañero, según una encuesta de mujeres canadienses realizada en 1993 por Estadísticas de Canadá con las definiciones de agresión que figuran en el Código Penal de Canadá (Johnson 1996).

Las escuelas podrían tomar las siguientes medidas para contribuir a la solución de este problema:

- Dar al personal y a los alumnos libertad para conversar sobre la violencia en diversos foros. Las asambleas escolares especiales, grupos de teatro,

películas y el testimonio de personas que han sobrevivido actos de agresión son muy importantes para romper el silencio.

- Reconocer el papel decisivo de la educación y el aprendizaje para examinar la violencia en nuestra sociedad. La violencia es un comportamiento aprendido que se tolera en la sociedad e incluso se glorifica en los medios de comunicación.
- Formar alianzas con la comunidad, en vez de que las escuelas aborden los problemas por sí solas. No es un problema social que se pueda delegar a las escuelas: se requiere la colaboración con la policía, abogados, médicos familiares, enfermeras, asistentes sociales, proveedores de servicios de salud mental, y víctimas y sobrevivientes de la violencia.
- Comprender que la violencia es un problema que está directamente relacionado con el poder y el control en las relaciones y en la sociedad. ¿Por qué las mujeres, los niños, las minorías visibles, los discapacitados, los ancianos, los homosexuales y las lesbianas suelen ser víctimas de violencia en mayor proporción? ¿Por qué los hombres cometen más del 90% de los actos de violencia? La violencia no es un tema neutro desde el punto de vista de género. Se necesita la participación activa de los hombres a fin de examinar su papel y su responsabilidad para poner fin a la violencia.
- Instituir normas y protocolos escolares que respondan eficazmente a la violencia: que no culpen a las víctimas, sino que imputen a los perpetradores la responsabilidad de sus actos. Capacitar a los maestros para trabajar con alumnos que presencian situaciones de violencia en casa.
- Cerciorarse de que los programas de asistencia al personal respondan a las necesidades de los maestros y otros empleados de la escuela que son víctimas o sobrevivientes de actos de violencia.
- Fomentar la participación de padres y alumnos en todos los programas escolares.

Para prevenir la violencia hay que pasar de charlas de concientización a la integración del tema en el programa de estudios desde los primeros grados hasta el final de la escuela secundaria. En todo Canadá, los maestros ya han encontrado formas de integrar este tema en los planes de lecciones de todo el programa. El problema radica en la falta de compromiso y de uniformidad de enfoques en los consejos escolares.

Este capítulo se centra en un programa ejemplar de prevención de la violencia basado en una iniciativa de la ciudad de London, en la provincia canadiense de Ontario, llamado “A.S.A.P.: A School-based Anti-violence Program” (Programa Escolar contra la Violencia, cuyas siglas en inglés, en un ingenioso juego de palabras, significan también “cuanto antes”).

Una solución activa contra la violencia

Durante los últimos diez años, la Clínica del Tribunal de Familia de London y los consejos escolares de la zona han elaborado conjuntamente enfoques preventivos para abordar las causas del comportamiento violento. Hace poco, la División de Prevención de la Violencia Familiar del Ministerio de Salud de Canadá pidió a la Clínica del Tribunal de Familia de London que preparara material para facilitar la difusión de estos programas a otros lugares de Canadá. Así surgió el programa A.S.A.P. en diciembre de 1993. Consiste en un manual de 277 páginas y un video que dan a todos los consejos escolares los instrumentos y conceptos necesarios para implantar programas prácticos de prevención de la violencia en todos los grados. Se abordan problemas tales como la violencia en las relaciones íntimas, los niños que presencian situaciones de violencia en el hogar, la intimidación, la violencia en las salidas en pareja, la violencia en los medios de comunicación, la relación entre la violencia, el sexismo y el racismo, y formas de crear un clima no violento en las escuelas.

El propósito del programa es ayudar a consejos escolares, escuelas y maestros a abordar estos problemas en distintos niveles. Un consejo escolar puede usar el programa para planear un enfoque integral de la prevención de la violencia en todo el sistema. Las escuelas pueden usarlo como guía para crear un clima más seguro, organizar capacitación profesional interna, organizar actividades escolares de concientización con respecto al problema de la violencia y formar alianzas con la comunidad. Los maestros pueden usarlo individualmente para integrar material sobre la prevención de la violencia en sus clases. Por último, el manual ofrece a los maestros una guía para trabajar con los alumnos que reportan haber presenciado situaciones de violencia.

El video que acompaña al manual es un instrumento de motivación que los administradores y maestros pueden usar al presentar el tema de la prevención de la violencia al personal de la escuela. Muestra los aspectos sobresalientes de intervenciones eficaces y entrevistas con maestros, alumnos, padres, integrantes del consejo escolar y administradores. Asimismo, propone formas de hacer frente a posibles barreras, entre ellas la resistencia al trabajo de prevención de la violencia.

El proyecto A.S.A.P. recibió fondos del Ministerio de Salud de Canadá. El apoyo recibido anteriormente del Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales de Ontario, el Ministerio de Educación de Ontario y la Fundación Canadiense Donner facilitó el desarrollo inicial y la implantación de los programas escolares. Con apoyo de la Fundación Richard Ivey se preparó un documento acompañante para consultas curriculares titulado *65 Friendly Lessons for Violence Prevention* (McLean 1993).

¿Por qué centrarse en la violencia contra la mujer y los niños?

Como muchos educadores saben, la violencia contra la mujer y los niños es un problema social de prolongada existencia, pero antes permanecía oculto. Esta falta de reconocimiento público de la violencia contra la mujer en el hogar ha sido denominada “la realidad omitida” (Kincaid 1982).

Incluso menos conocido es el grave efecto en los niños que presencian incidentes de violencia de ese tipo. En la mayoría de los casos, los niños presencian actos de violencia cometidos contra su madre, que a su vez tienen efectos negativos en ellos mismos. De hecho, los niños que presencian situaciones de violencia tienen perturbaciones emocionales y del comportamiento similares a las de los niños que son maltratados físicamente. Estos trastornos se manifiestan de distintas formas en la escuela. Algunos niños se vuelven muy retraídos y tienen dificultades para concentrarse en el trabajo escolar. Otros tienen síntomas de estrés postraumático y reviven escenas retrospectivas que interfieren en las actividades escolares. Algunos niños se culpan a sí mismos por la violencia y tienen muy poca autoestima. Otros se vuelven muy agresivos con los compañeros y los maestros, y demuestran una falta extrema de respeto por las maestras, especialmente los niños un poco mayores, que se identifican con el padre agresor. El rendimiento escolar de los niños que presencian incidentes de violencia en casa está en riesgo, y los demás niños y los maestros deben lidiar con la carga que estas dificultades de adaptación implican (Jaffe et al. 1990).

Hace poco se difundió en los medios de comunicación un ejemplo interesante de un muchacho de 13 años que fue expulsado de la escuela por un consejo escolar de Toronto tras haber llevado un puñal a la cara de otro alumno. El y su madre se habían mudado doce veces en los últimos años para escapar de un padre y marido agresivo. En nuestra práctica clínica con jóvenes que llegan a los tribunales vemos numerosos casos de este tipo. Es muy probable que los niños y jóvenes agresivos hayan presenciado situaciones de violencia o hayan sido víctimas de violencia en casa, o que hayan vivido ambos problemas a la vez. Eso indica claramente la necesidad de prevenir la violencia abordando el problema del maltrato de las mujeres y los niños.

¿Quiénes deben intervenir en la prevención de la violencia?

Para implementar un programa fructífero de prevención de la violencia en un sistema escolar, deben participar maestros, alumnos, administradores, integrantes del consejo escolar, padres, la comunidad y sobrevivientes de agresiones. En el manual A.S.A.P. se presentan estrategias para fomentar la participación de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, al planificar actividades especiales de concientización de los alumnos con respecto a la violencia, los comités de maestros y alumnos son útiles no sólo para adaptar

la actividad a las necesidades de la escuela, sino también para fomentar la participación de maestros y alumnos y su educación sobre el tema. A fin de lograr que los padres participen, se incluye información útil para reuniones entre las familias y la escuela sobre la necesidad de prevenir la violencia en la escuela y un ejemplo de resolución especial de una asociación de grupos de familias y la escuela. Estas estrategias prácticas para cada grupo y muchas otras muestran la forma de concientizar y fomentar el compromiso con programas integrales.

El papel de la capacitación profesional

Un instrumento importante para implementar programas de prevención de la violencia es la capacitación de maestros y administradores sobre el problema de la violencia en las relaciones. En el manual A.S.A.P. se describe con detalles la forma de organizar sesiones de capacitación profesional sobre temas tales como los niños que presencian situaciones de violencia, la agresión a la esposa, qué hacer cuando un niño le cuenta al maestro que ha presenciado o sufrido actos de violencia, la intimidación y la violencia en las salidas en pareja. Hay una extensa sección de consulta con listas y reseñas de videos recomendados para estas sesiones. Se describen formas de aprovechar recursos comunitarios, como representantes de refugios de mujeres y otros organismos sociales, y se proponen temarios para una sola sesión o ciclos de sesiones de capacitación profesional. Nos parece importante ofrecer múltiples oportunidades para la capacitación profesional, incluidas charlas para el personal escolar antes de actividades orientadas a la concientización de los alumnos sobre la violencia y sesiones más intensivas en jornadas de capacitación profesional para docentes.

Actividades especiales de concientización sobre la violencia orientadas a los alumnos

Las jornadas o semanas de “concientización sobre la violencia” sirven para que los alumnos nombren y definan la violencia e inicien el proceso de prevención. Las actividades de concientización pueden sensibilizar a los alumnos con respecto a distintas formas de violencia y darles poder de decisión para actuar en su vida personal en la escuela a fin de ayudar a poner fin a la violencia. Se abordan los problemas de presenciar situaciones de violencia en el hogar y la violencia entre compañeros en la escuela primaria y secundaria. Se define la violencia verbal y emocional y se exploran los efectos negativos de la violencia. En la escuela primaria se examinan preocupaciones adicionales tales como la intimidación y la violencia en los juguetes y la televisión. Se presentan alternativas frente a la violencia, como estrategias de resolución de conflictos y actitudes positivas para la socialización.

Evaluación del programa A.S.A.P.

Actualmente, las actividades de concientización sobre la violencia en la escuela secundaria son el único tipo de iniciativa de prevención cuya eficacia se ha comprobado en estudios empíricos (Jaffe et al. 1992; Suderman y Jaffe 1993). En estos estudios se ha observado que los conocimientos, las actitudes y las intenciones del comportamiento de los alumnos mejoran mensurablemente después de actividades de concientización sobre la violencia como las que se describen en el manual A.S.A.P.

En dos evaluaciones en gran escala de programas de concientización realizados en escuelas de London, Ontario, se han obtenido resultados muy alentadores. En el primer estudio (Jaffe et al. 1992) se evaluó un programa de prevención primaria de las agresiones a la esposa y la violencia en el noviazgo llevado a cabo conjuntamente por el Consejo de Educación de la Ciudad de London, la Clínica del Tribunal de Familia de London y numerosos voluntarios de entidades vecinales. Las presentaciones en los auditorios variaron de una escuela a otra, según el aporte de los comités de planificación escolares. Se recurrió a oradores de entidades vecinales, videos sobre agresiones a la esposa y los efectos en los adolescentes que presencian agresiones conyugales, obras de teatro a cargo de grupos de teatro profesionales y estudiantiles, y charlas de un sobreviviente de actos de violencia.

Se seleccionó una muestra aleatoria de cuatro escuelas secundarias, y 737 alumnos respondieron a un cuestionario de 48 preguntas sobre la violencia en las relaciones íntimas, cuyo propósito era determinar los conocimientos sobre las agresiones a la esposa, las creencias y actitudes con respecto a la violencia en las relaciones maritales y en el noviazgo, y la intención de intervenir en situaciones de violencia en el noviazgo. Se administraron los cuestionarios una semana antes de la intervención, una semana después y, en dos escuelas, también seis semanas después de la intervención.

Los resultados indican cambios importantes en la dirección deseada en las alumnas en relación con once temas y ninguno en la dirección indeseada, con estabilidad de los cambios

Entre los temas más importantes que se abordan en la escuela secundaria se encuentra la violencia en el noviazgo, tema de sumo interés para la mayoría de los alumnos de la secundaria (y de séptimo y octavo grados). Otros temas importantes son los estereotipos del papel del hombre y la mujer, el acoso sexual y la violencia en la música, los deportes, el cine, los videos y otras formas de cultura popular. Se proporcionan guías completas para planificar actividades, conseguir recursos para la producción de videos y obras de teatro, así como oradores, y capacitar a facilitadores de grupos de debates (Suderman et al. 1995).

El fomento de un clima escolar orientado a la prevención de la violencia

La prevención integral de la violencia continúa después de las actividades especiales. Tanto en la escuela primaria como en la secundaria, la elaboración de un código escolar de conducta y filosofía no violenta fomentan la participación de alumnos y maestros y

positivos en el momento del seguimiento. Los conocimientos, las actitudes y las intenciones del comportamiento mostraron áreas de cambios positivos en las mujeres. Los varones presentaron cambios importantes en la dirección positiva en relación con ocho temas, entre ellos cambios en los conocimientos, las actitudes y las intenciones del comportamiento. Sin embargo, los varones mostraron cambios en la dirección indeseada en la actitud con respecto a siete temas y en las intenciones del comportamiento con respecto a un tema. La mayoría de esos cambios negativos correspondieron a actitudes con respecto a la violencia en el noviazgo.

Se comprobó también que más mujeres que varones estaban al tanto de actos de violencia en sus propias relaciones o en los noviazgos de alguna compañera (60,5% de las mujeres en comparación con 47,5% de los varones). Estos resultados indican que las mujeres tal vez sean más sensibles al problema de la violencia en las relaciones y apoyen más la igualdad de las mujeres en las relaciones íntimas. Los resultados indican también que las mujeres se beneficiaron más que los varones de la intervención y, en particular, mostraron un cambio más positivo en la actitud tras la intervención. Este estudio, junto con los informes de los facilitadores de las clases, indica que, en el futuro, las intervenciones podrían incluir adaptaciones para reducir la actitud defensiva y la reacción de los varones. El estudio mostró también que una intervención relativamente breve puede tener una influencia positiva en los conocimientos y las actitudes de los alumnos.

En dos escuelas secundarias de Ontario se hizo otra evaluación de un programa de concientización sobre la violencia en las relaciones íntimas (Suderman y Jaffe 1993). En conjunto, los resultados de los 1.547 alumnos que participaron en este estudio fueron positivos en lo que atañe a la intervención con los alumnos y las alumnas de los primeros años de la secundaria (novenio y décimo grados) y en las alumnas de los últimos años de la secundaria (undécimo a decimotercer grado). Los alumnos de los últimos años de la secundaria no presentaron una respuesta tan positiva. Eso tal vez se deba a que algunos alumnos de mayor edad ya se comportaban con violencia en sus relaciones de pareja y el programa los puso a la defensiva e indujo una actitud de resistencia. Otra explicación podría ser que el formato utilizado para los alumnos más jóvenes fue más eficaz para los varones que el formato utilizado con los alumnos más grandes.

ponen de relieve la necesidad de prevenir la violencia. A.S.A.P. presenta un ejemplo de un código de conducta que incluye referencias específicas al acoso sexual y el racismo.

Otro componente del clima escolar es el manejo de incidentes violentos en la escuela. Es necesario manejar eficazmente los incidentes de violencia física y verbal. Los programas de compañeros mediadores en los cuales los niños más grandes de la escuela primaria aprenden a utilizar técnicas de resolución pacífica de conflictos en el patio contribuyen a prevenir incidentes violentos en la escuela y ayudan a alumnos y consejeros a aprender técnicas de resolución de conflictos. Algunas escuelas secundarias también recurren a compañeros mediadores.

En el clima escolar también influyen los enfoques de la escuela con respecto al sexismo, la equidad de género, el racismo y el manejo de la clase. El sexismo, el racismo y otras formas de desequilibrio de poder en los grupos de la sociedad son la base que permite que la violencia se arraigue y se propague. No puede haber un clima no violento en la escuela en una atmósfera de sexismo y racismo.

En este sentido es importante examinar prácticas escolares tales como el distinto grado de apoyo a los deportes masculinos y femeninos, la falta de igualdad en los cargos directivos escolares, la falta de universalidad de las pruebas escolares y la calidad de la biblioteca. Además, los educadores deben considerar estrategias no violentas para el manejo de la clase. A medida que los educadores toman conciencia de los efectos negativos de las expresiones verbales de desprecio y otras formas de abuso verbal, algunos podrían necesitar ayuda para adoptar estrategias nuevas de manejo de la clase. A muchos maestros, la capacitación en mediación de conflictos, concebida originalmente para formar compañeros mediadores, les ha resultado útil para mejorar su forma de conducirse y de conducir las clases.

Elaboración de programas de enseñanza

La prevención de la violencia puede integrarse fácilmente en los programas y materias actuales sin restar tiempo al aprendizaje académico esencial. El manual A.S.A.P. da amplios ejemplos y fuentes de consulta para la integración del tema en programas de enseñanza. Un ejemplo excelente es el documento curricular 65 Friendly Lessons for Violence Prevention, que abarca temas tales como estereotipos, aptitudes para las relaciones sociales, solución de conflictos y la violencia en la sociedad. Las distintas lecciones pueden incluirse en clases de idiomas, salud, estudios familiares y muchas otras materias. Un recurso curricular popular para la escuela primaria es "Second Step", que trata específicamente de la solución de conflictos y métodos para manejar el enojo (Committee for Children 1990).

Conclusiones

Los programas escolares de prevención de la violencia constituyen una respuesta fundamental a la violencia que tendrá un efecto positivo y duradero no sólo en el medio escolar, sino también en la sociedad en conjunto. Con la publicación del programa A.S.A.P., los consejos escolares ahora cuentan con un medio para prevenir la violencia de forma integrada y eficaz. No hay una solución rápida para poner fin a la violencia contra la mujer y los niños y crear un clima que no tolere la violencia. Los consejos escolares deben asumir un compromiso a largo plazo para abordar el problema de una forma sistemática que incluya la capacitación profesional y la elaboración de programas de enseñanza. Los alumnos, los padres y las entidades vecinales están más que dispuestos a participar activamente. A la larga, cabe esperar que vayan surgiendo con respecto a la violencia las mismas actitudes que tenemos actualmente frente a la conducción de vehículos en estado de ebriedad, la contaminación del medio ambiente y el hábito de fumar. Nuestros hijos y nietos merecen el sueño de una sociedad libre de violencia.

Notas

¹ Las clases tienen 30 alumnos en promedio. La violencia se define como presenciar incidentes de agresión física entre los padres o sufrir directamente malos tratos físicos, sexuales o emocionales en el hogar.

² London es una ciudad de 320.000 habitantes situada en el extremo sudoccidental de la provincia de Ontario, a unos 200 kilómetros al oeste de Toronto y a 200 kilómetros al este de Detroit, Michigan. Las tres fuentes principales de trabajo son el consejo escolar de la localidad, un hospital importante y una universidad. En London tienen su sede varias empresas grandes. La cantidad de familias y niños que viven en la pobreza se aproxima al promedio nacional. Según la experiencia de los investigadores, los resultados de las encuestas de alumnos sobre la violencia en las relaciones son representativos de los estudios realizados en todo el Canadá.

Referencias

- Committee for Children. 1990. *Second Step: A Violence Prevention Curriculum*. Seattle, WA.
- Jaffe, P.G., D.A. Wolfe y S.K. Wilson. 1990. *Children of Battered Women*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Jaffe, R.G., M. Suderman, D. Reitzel y S. Killip. 1992. An Evaluation of a Secondary School Primary Prevention Program on Violence in Intimate Relationships. *Violence and Victims* 7(2):129-16.
- Johnson, Holly. 1996. *Dangerous Domains: Violence Against Women in Canada*. Toronto: Nelson Canada.
- Kincaid, P.J. 1982. *The Omitted Reality: Husband-Wife Violence in Ontario and Policy Implications for Education*. Concord, ON: Belsten Press.
- McLean, A. 1993. 65 Friendly Lessons for Violence Prevention. London, ON: Board of Education for the City of London.
- Statistics Canada. 1993. Violence against Women Survey Ottawa: Statistical Reference Centre.
- Suderman, M.L. y P.G. Jaffe. 1993. Violence in teen dating relationships: Evaluation of a large-scale primary prevention program. Monografía presentada en la American Psychological Association, Toronto.
- Suderman M., P.G. Jaffe y E. Hastings (Schieck). 1995. Violence Prevention Programs in Secondary (High) Schools. En Peled, E., P.G. Jaffe y J. L. Edleson, eds. *Ending the Cycle of Violence: Community Responses to Children of Battered Women*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- . 1996. A.S.A.P.: A School-based Anti-violence Program. London, ON: London Family Court Clinic.

Programa de educación informal para prevenir la violencia doméstica: Jamaica

Margarette May Macauley

En 1996, la Asociación de Organizaciones de mujeres de Jamaica (AWOJA) examinó el aumento creciente de la violencia doméstica y decidió que era hora de que hubiera un cambio. Hasta ese momento, los programas de educación del público promovidos por AWOJA habían consistido en talleres y seminarios sobre la incidencia y las causas de la violencia doméstica y las reformas de la legislación para ofrecer más protección a las mujeres. Los programas consistían en conferencias seguidas de preguntas y respuestas. La asociación se dio cuenta de que una exposición aburrida puede oscurecer hasta la información más interesante, de modo que cambió por completo su enfoque. En colaboración con algunas de las organizaciones que la integran, AWOJA preparó una exposición con videos y escenificaciones para ayudar al público a reconocer relaciones agresivas, asociarlas a su experiencia personal y reflexionar sobre los tipos de comportamiento que pueden precipitar la violencia, así como formas de disipar tensiones que podrían conducir a episodios de violencia.

El programa

El Comité Jurídico de AWOJA se ocupó del contenido y la presentación de los nuevos talleres, junto con otros tres grupos de mujeres: Sistren Theatre Collective, Woman Inc. y Women's Media Watch (véase el recuadro). El formato y el contenido de los talleres son fijos, pero el lenguaje y el estilo se adaptan al público específico.

Las actividades de cada taller son como sigue: Primero, el/la facilitador(a) presenta a los oradores y expone sucintamente el problema de la violencia doméstica en Jamaica. Después se muestra un video titulado *Behind the Images* (detrás de las imágenes). Este video, creado por Women's Media Watch, muestra la influencia sutil de los medios de comunicación en las actitudes y valores, y la forma en que eso puede llevar a la violencia en el hogar. Los personajes centrales del video son una mujer y su esposo, quienes comparan el aspecto y valor propio de ella con las imágenes de la mujer ideal que aparecen en los medios de comunicación. Como la mujer no puede alcanzar esa

Las organizaciones que integran AWOJA

La Asociación de Organizaciones de Mujeres de Jamaica (AWOJA) es una organización paraguas que une a diversos grupos que ayudan a las mujeres, entre ellos varios que se dedican específicamente al problema de la violencia doméstica. Las tres organizaciones que participaron en la producción de los talleres sobre violencia doméstica son Women's Media Watch, Sistren Theatre Collective y Woman Inc.

Women's Media Watch fue fundada en 1987 para contrarrestar los estereotipos dañinos de la mujer en los medios de comunicación. Cree que las escenas de violencia y agresión sexual en las películas y en los medios de comunicación llevan a ataques sexuales violentos de los hombres contra la esposa y otras mujeres. Este grupo organiza talleres y publica folletos educativos para concientizar al público sobre las causas de la violencia sexual y procura mejorar la imagen de la mujer en los medios de comunicación.

Sistren Theatre Collective es una organización de mujeres de base que trabajan en la industria textil. Sus integrantes presentan obras de teatro y escenas en producciones teatrales y talleres en las cuales muestran diversas formas de discriminación contra la mujer y de violencia doméstica.

Woman Inc., fundada en 1984, proporciona orientación a mujeres maltratadas, sus hijos y el agresor (en los casos en que se le puede convencer de que participe). Es la única organización de Jamaica que ofrece refugio a las víctimas de violencia doméstica, y también ofrece talleres educativos sobre violencia doméstica para agentes de policía.

AWOJA está presionando para que se adopten leyes nuevas y se enmiende la legislación vigente a fin de garantizar la equidad de género. Sus integrantes consultan con ministerios y departamentos pertinentes del gobierno y prestan declaración sobre legislación ante comisiones del Parlamento. AWOJA también vigila la aplicación de leyes relativas a los derechos de la mujer, y las organizaciones que la integran escriben y hablan con frecuencia sobre la situación de la mujer en la sociedad.

imagen "ideal", pierde su autoestima y el marido la maltrata. El video no tiene un final. En cambio, el facilitador invita al público a analizar las distintas escenas del video y a señalar lo que les parece aceptable, inaceptable y comprensible. De esta forma, se los lleva a la reflexión sobre las causas de la violencia, sus efectos en la víctima y el agresor, y las medidas correctivas que se podrían tomar.

Después, Sistren Theatre Collective presenta una obra de teatro sobre una mujer atrapada en una relación abusiva. En la obra, el marido llega a casa del trabajo cuando ella está preparando la cena. La actitud servil de la esposa no logra aplacar al marido, y sus abusos verbales pronto se convierten en agresiones físicas y sexuales. Al final de la escena, se invita al público a que haga preguntas a los actores y a que sugiera formas en que podrían haber actuado y reaccionado para llegar a un desenlace sin violencia. Se hace hincapié en identificar los signos de violencia inminente y en las formas de reforzar el poder de decisión de la mujer para dejar una relación abusiva.

Para concluir el taller, un integrante del Comité Jurídico de AWOJA presenta una reseña de las disposiciones de la ley sobre violencia doméstica y explica la forma de solicitar protección en virtud de esta ley. Para esta parte del taller no hay guión. Un expositor podría limitarse a explicar la ley y la protección que ofrece. Otro podría utilizar las situaciones presentadas en el video y la obra de teatro como ejemplo de las repercusiones legales de determinados tipos de agresiones y los recursos correspondientes. Otro podría explicar la ley, dar ejemplos de malos tratos y preguntar al público si se puede aplicar la ley a esos ejemplos. Cualquiera que sea el estilo del expositor, todas las explicaciones jurídicas se presentan en el lenguaje más sencillo posible a fin de que el público las comprenda y acuda con confianza a pedir la protección de las leyes.

Alcance de los talleres

AWOJA ha organizado talleres para una amplia gama de audiencias en Kingston, Montego Bay, Mandeville y dos localidades rurales. Una audiencia incluyó integrantes de AWOJA, sindicalistas, integrantes de organizaciones profesionales y entidades que trabajan con el problema de la violencia doméstica. En otros casos, el público se ha caracterizado por el alto grado de desempleo, pobreza y violencia doméstica. Han asistido a los talleres costureras, empleados de zonas de libre comercio, alumnos y alumnas de la escuela secundaria y mujeres de clase media que trabajan como voluntarias.

Después de cada taller, los participantes responden a un cuestionario. Se les pregunta, entre otras cosas, si comprenden mejor la violencia doméstica, si el taller les ha dado elementos para tomar decisiones, si ahora están al tanto de los servicios sociales y jurídicos disponibles para las víctimas de la violencia doméstica y si consideran que el taller es un medio eficaz para transmitir información sobre la violencia doméstica. Los encuestados han señalado que el taller es sumamente eficaz desde todo punto de vista.

La Asociación desearía ofrecer los talleres en todas las localidades de Jamaica, pero igual que muchas organizaciones no gubernamentales se ve limitada por la falta de fondos. Asimismo, muchos integrantes de AWOJA son voluntarios y tienen poco tiempo para dedicar al programa. Sin embargo, AWOJA se ha comprometido a integrar como colaboradora la organización Fathers Inc., a fin de que los talleres lleguen eficazmente tanto a hombres como a mujeres.

AWOJA logró también la colaboración de Miss Jamaica World, Michelle Moody, para que sea su portavoz sobre la violencia doméstica en las escuelas de todos los niveles. Michelle Moody es famosa en toda Jamaica, y AWOJA cree que será una mensajera eficaz para los jóvenes. Se espera que los niños desempeñen un papel en la educación de sus padres y otros familiares sobre la destructividad de la violencia doméstica y los recursos de que disponen las víctimas.

Página en blanco a propósito

PARTE III

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

Página en blanco a propósito

La comunicación como instrumento para el cambio social

Elena M. Suárez y Charo Quesada

La lucha contra la violencia doméstica podría hacer uso de la actual revolución en las comunicaciones. La radio, la televisión, la Internet y las computadoras están integrando a más y más gente a la red mundial de comunicaciones. Los adelantos tecnológicos están aumentando el poder de la información y las ideas para modificar el comportamiento cotidiano. La comunicación influye en lo que la gente compra, en la forma en que vota, en sus deseos y aspiraciones, y en su vida cotidiana.

En las últimas décadas se ha comprobado científicamente que existe un nexo causal entre la comunicación y los cambios del comportamiento. La cuestión ya no es si la comunicación puede influir en el comportamiento, sino cómo comprender y utilizar las comunicaciones eficazmente para hacer un mejor trabajo (Tilson et al. 1997, prefacio).

La comunicación estratégica

¿Cómo puede la comunicación abordar el complejo problema social de frenar la violencia doméstica, que exige cambios en las actitudes, el comportamiento y las normas sociales? Se necesita un enfoque especial de las comunicaciones: un enfoque estratégico, sostenido e integrado. La comunicación tiene éxito como proceso sistemático de planificación y ejecución. La comunicación estratégica es comunicación con visión de futuro. Abarca el análisis, la conceptualización estratégica, las pruebas de mercado, la producción, el seguimiento, la evaluación del impacto y la planificación de la continuidad y sostenibilidad (Tilson et al. 1997, 27). Se basa en metas claramente definidas, estrategias y resultados medibles. La comunicación rara vez tiene éxito por casualidad.

La comunicación eficaz con el aporte del público

En el capítulo 14 de este libro, Patricia Poppe explica que una estrategia eficaz de comunicación para combatir la violencia doméstica requiere intervenciones que respondan a las necesidades del público destinatario y tengan en cuenta la situación local.

En la actualidad, la comunicación eficaz requiere un enfoque amplio. “La comunicación fue conceptualizada originalmente como la simple transmisión unidireccional de mensajes de una fuente a un receptor con la intención de producir algún efecto” (Rogers 1973, citado en Tilson et al. 1997, 17). El efecto previsto generalmente se limitaba a que el receptor tomara conciencia de algún punto de vista, un producto nuevo o una orientación determinada. En el nuevo marco conceptual de la comunicación, “el énfasis pasa del proceso de distribución de la información en el tiempo, a las formas en que los participantes interpretan y comprenden la información, y el proceso dinámico de retroalimentación y adaptación. En este proceso se produce una convergencia de las ideas y el comportamiento de los participantes... la comunicación eficaz comienza con el público, el cliente o el consumidor, y continúa con el tiempo como proceso de adaptación mutua y convergencia” (Tilson et al. 1997, 17-18).

¿Cuáles son los canales de comunicación más eficaces?

Para abordar un problema tan complejo como la violencia doméstica, una buena estrategia de comunicación debe recurrir a múltiples canales de comunicación. Poppe explica que la comunicación puede clasificarse en tres canales generales: interpersonales, que abarcan la familia, los amigos y los proveedores de servicios; grupales, que consisten en organizaciones comunitarias; y masivos, que abarcan la prensa y los medios de difusión (capítulo 14). En los estudios de la comunicación se ha comprobado que ningún medio o canal por sí solo es suficiente, especialmente en el campo de la planificación familiar, donde en los últimos veinte años se ha concentrado gran parte del análisis de la comunicación como instrumento de cambio social. Una combinación de medios apropiados y otras actividades comunitarias puede llevar a la sinergia y lograr más que cada medio por sí solo (Tilson et al. 1997, 73).

La Campaña de Salud Reproductiva de Bolivia es un buen ejemplo. Con el lema “La salud reproductiva está en tus manos”, la campaña ha usado los tres canales. Como canales interpersonales, se recurrió a videos que se pasaban en los consultorios sobre la comunicación entre las mujeres, los maridos y los proveedores de servicios de salud, material impreso y afiches con el nombre de los consultorios, y casetes que se pasaban en autobuses. Como canales grupales, se grabaron casetes para que los afiliados al sindicato del transporte pasaran en sus vehículos y se proveyó material promocional a dirigentes juveniles para que lo usaran en programas de educación en las escuelas y los vecindarios. Como canales masivos, se usaron cuñas en la televisión y la radio. Todos los canales estaban relacionados por el logotipo de Las Manitos, que resultó muy eficaz. Según las encuestas realizadas después de la campaña, los nuevos usuarios de métodos de planificación familiar aumentaron en un 8,7% durante los ocho

meses de la campaña (Tilson et al. 1997, 74). Cuando concluyó la campaña, alrededor del 98% de la población reconocía el logotipo y su mensaje; un porcentaje mayor que el que identificaba la propia bandera.

El entretenimiento también puede ser una fuerza eficaz para inducir cambios sociales. Se ha usado con fines educativos desde el comienzo de la historia humana. Los medios de comunicación modernos pueden llegar a millones de personas con programas populares de radio y televisión que entretienen y educan al mismo tiempo.

Las canciones, el teatro, las series, los programas de variedades y los teleteatros captan la atención del público. Los personajes populares se convierten en modelos de hombres y mujeres, informándoles sobre temas sociales y relacionados con la salud y ayudándoles a tomar mejores decisiones. Las celebridades despiertan más interés en estas producciones, mientras que los medios de difusión las llevan a audiencias de todas las edades y de ambos sexos. A medida que la revolución de la comunicación vaya avanzando, el alcance y la influencia de la televisión, el video y la radio continuarán extendiéndose (Johns Hopkins University 1997).

Una experiencia reciente de México ilustra el potencial de los programas de entretenimiento. La compañía de producción de programas Televisa introdujo el problema del analfabetismo en uno de sus teleteatros. Doce meses más tarde, la Secretaría de Educación de México calculó que, durante ese período, 99.000 personas se habían inscrito en cursos para aprender a leer.

“En una escala más pequeña, los espectáculos de pueblo que llegan solamente a unos cientos de personas pueden transmitir mensajes importantes. El teatro de títeres, el teatro callejero, el teatro escolar y las furgonetas de video que viajan a zonas rurales pueden llevar información útil a personas que tal vez no presten atención o no comprenden una conferencia formal” (Tilson et al. 1997, 80).

Los medios de comunicación como agente de socialización

Los medios de comunicación pueden difundir información y conocimientos, y ciertamente pueden influir en el comportamiento. En América Latina, la radio es el medio masivo que llega a la mayor cantidad de gente, especialmente en zonas alejadas y en los países más pobres. La televisión, en los lugares donde existe, puede tener una gran influencia con sus imágenes visuales instantáneas y repetitivas. Sin embargo, la cobertura de la televisión, aunque está extendiéndose con rapidez, es limitada: los programas son costosos y complicados de producir, y no todos en América Latina y el Caribe tienen televisor. La prensa, en cambio, tiene una cualidad física que no tienen la televisión y la radio. Un artículo se puede leer, pasar a otros o recortar para usar más adelante, pero los lectores de los periódicos y revistas tienden a limitarse principalmente a las capitales y las ciudades más importantes.

El papel de los medios de comunicación como instrumento de cambio social es más problemático cuando los mensajes son negativos, confusos e incluso peligrosos. Un ejemplo del problema es la violencia social, tal como se presenta en programas de entretenimiento y en los noticieros. Los medios de comunicación recurren al sensacionalismo, que es más fácil de fabricar y se vende mucho más, alegando que eso es lo que el público pide. Eso influye mucho en la forma en que el público percibe y conceptualiza ciertos temas sociales, como la familia, las relaciones sexuales y la violencia.

Jacquín Strouss de Samper aborda este problema en el capítulo 15, con un estudio pormenorizado del impacto de la televisión en los colombianos. Según el estudio, los colombianos rechazan la presencia excesiva de la violencia en la televisión y quieren que la televisión asuma un papel preventivo y fomente la armonía. La Sra. Samper afirma que los encargados de la programación y la producción tienen la responsabilidad de convertir la televisión en un instrumento que enseñe y promueva valores por medio del entretenimiento.

Los medios de comunicación pueden ser un aliado poderoso en una campaña nacional de comunicación para promover cambios en el comportamiento. Con el entrenamiento y la guía apropiados de los organizadores de la campaña, los medios de comunicación pueden constituir un instrumento singular para educar al público sobre los problemas más complejos, pero el primer público que debe estar correctamente informado es el medio de comunicación en sí.

Un ejemplo exitoso de exposición en los medios

Un ejemplo del papel decisivo que los medios de comunicación pueden desempeñar comenzó con un artículo publicado en un periódico. El 12 de marzo de 1997, *The New York Times* publicó en primera plana un artículo titulado: "Justicia en Perú. Presionan a mujer violada para que se case con el agresor". Este titular, que para los lectores estadounidenses era escandaloso, reflejaba la realidad de quince países de América Latina cuyo código penal exonera al violador si ofrece casarse con la víctima, incluso si ella rechaza el ofrecimiento o si el matrimonio no se realiza. De hecho, el titular no reflejaba plenamente el verdadero alcance de la discriminación en el código penal de Perú contra las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales. La enmienda de 1991 de la ley sobre violaciones absolvía a todos los coacusados en un caso de violación cometida por una pandilla siempre que por lo menos uno de ellos se ofreciera a casarse con la víctima.

Durante meses, varias organizaciones de mujeres y una diputada peruana habían estado realizando una campaña para cambiar la ley, a fin de eliminar por completo las disposiciones relacionadas con el casamiento en los casos de violaciones. Apenas el artículo de *The New York Times* llegó a Perú, causó sensación en los medios de comuni-

cación, y en foros públicos de Perú y en los pasillos de la legislatura nacional se comenzó a hablar de la situación de muchas mujeres que habían sido presionadas por la sociedad o por la familia para que se casaran con su violador. Los periódicos locales publicaron artículos de fondo exigiendo justicia, en los programas de televisión se comenzó a debatir el tema abiertamente y las organizaciones de mujeres conversaban sobre la situación en programas de radio matutinos.

La diputada peruana Beatriz Merino y otros legisladores que querían cambiar la ley también aprovecharon este ímpetu. Merino fue invitada a aparecer en programas de televisión para presentar su punto de vista. Virginia Vargas, presidenta de la organización de mujeres Centro Flora Tristán, explicó el papel de los medios de comunicación: "Se difundieron reportes especiales sobre mujeres que habían sido violadas, y eso ha ayudado mucho, porque la opinión pública estaba impulsando a la prensa y también estaba siendo dirigida por la prensa. Una fortaleció a la otra" (IDB 1997, 4). De las palabras se pasó a la acción, y finalmente se derogaron las disposiciones que exoneraban automáticamente a los violadores que se casaban con su víctima.

Este caso es un ejemplo excelente del poder de los medios de comunicación para inducir cambios. Los medios de comunicación pueden influir en un tema, someterlo al escrutinio del público y dar a conocer soluciones para abordar el problema. Puede llevar un problema del ámbito privado al dominio público.

Siguiendo esos lineamientos, el BID, al organizar la conferencia en que se basa este libro, invitó a un grupo de locutores de radio a difundir sus programas desde la conferencia. En consecuencia, el mensaje de la conferencia llegó a unos 25 millones de oyentes en Estados Unidos y México.

Costo-efectividad de la comunicación estratégica

Los gobiernos, las instituciones y los profesionales utilizarán la comunicación estratégica en medida creciente cuando se reconozca el pleno potencial de los medios de comunicación como agente de cambios sociales y como inversión necesaria y rentable para abordar un importante problema social. Los medios de comunicación, a pesar del costo inicial de producción y de la complejidad creciente de la cobertura, el contenido y el control, generalmente llegan a un público numeroso a un costo relativamente bajo por persona cuando se usan estratégicamente.

La campaña de multimedios realizada en Turquía para promover la planificación familiar es un buen ejemplo. En esta campaña se recurrió mucho a la televisión y se realizaron gastos directos de casi US\$232.000. La televisión y la radio de Turquía donaron US\$2 millones adicionales en tiempo de emisión en las horas de más audiencia. Sobre la base de los resultados de una encuesta de una muestra representativa se calcu-

la que, en el plazo de seis meses, la campaña llegó a más de 6.500.000 mujeres casadas en edad de tener hijos. El costo directo del proyecto fue de cuatro centavos por cada mujer que recibió el mensaje (Tilson et al. 1997, 75-76).

Los programas de entretenimiento pueden ser incluso más costo-efectivos. El tiempo de emisión y la publicidad gratuitos pueden ascender a varias veces el costo original del proyecto, mientras que la demanda popular puede mantener canciones y teleteatros en el aire durante años. Con una planificación cuidadosa, otras actividades también pueden sufragar algunos de los costos por medio de regalías y la producción de afiches, camisetas y otros materiales colaterales, como la venta de entradas y mercancías (Johns Hopkins University 1997).

Un buen ejemplo de un programa de entretenimiento rentable que indujo cambios de comportamiento es *Twende na Wakati*, radioteatro para promover la planificación familiar y la prevención de la infección por el VIH y el sida en Tanzania. El argumento se basaba en la experiencia de conductores de camiones que contrajeron la infección por el VIH por tener relaciones sexuales con varias personas. Este programa influyó mucho en los oyentes: 82% dijeron que utilizaban algún método para prevenir la infección por el VIH y el sida; de ellos, 77% redujeron el número de compañeras sexuales, 16% comenzaron a usar condón y 6% dejaron de compartir afeitadoras y agujas. El costo total de la producción de 204 episodios del radioteatro fue US\$346.333. Como más de cuatro millones de oyentes adoptaron estrategias para prevenir el VIH y el Sida como consecuencia del programa, el costo por usuario ascendió a sólo ocho centavos (Rogers 1998).

Según el Centro Johns Hopkins de Programas de Comunicación, la tecnología moderna de la comunicación permite reducir el costo de los programas de salud y sociales. Los proyectos bien planeados pueden cobrar vida propia, manteniéndose gracias a la demanda popular y patrocinadores comerciales.

Conclusiones

En resumen, las campañas y los medios de comunicación pueden inducir cambios sociales, pero para lograr cambios importantes en las actitudes, el comportamiento y las normas sociales se necesitan enfoques estratégicos, sostenidos e integrados. Las campañas nacionales de comunicación orientadas a metas y procesos, dirigidas a un público determinado, costo-efectivas, que utilizan múltiples canales de comunicación, pueden abordar eficazmente problemas sociales. Los profesionales de los medios de comunicación pueden colaborar con el gobierno y otros protagonistas sociales para prevenir la violencia en el hogar y en la sociedad. En los capítulos siguientes se proponen algunos caminos para lograrlo.

Referencias

- Inter-American Development Bank. 1997. A Role for the Press. *IDB Extra*. Washington, DC (septiembre).
- Johns Hopkins University. 1997. Center for Communication Programs. School of Hygiene and Public Health (folleto). Baltimore: Johns Hopkins University,
- Rogers, Everett M. 1973. *Communication Strategies for Family Planning*. New York: Free Press.
- Rogers, Everett A et al. 1998. "Effects of an Entertainment-Education Radio Soap Opera on Family Planning and HIV/AIDS Prevention Behavior in Tanzania". Versión mimeográfica. Albuquerque, New Mexico: University of New Mexico, Department of Communications and Journalism.
- Tilson Piotron, Phyllis, D. Lawrence Kincaid, Jose D. Rimón II, y Ward Rinehart. 1997. *Health Communication: Lessons from Family Planning and Reproductive Health*. Westport: Praeger.

Página en blanco a propósito

Uso de los medios de comunicación para prevenir la violencia doméstica

Patricia Poppe

Lo que vemos, oímos y leemos en los medios de comunicación influye en lo que pensamos, decimos y hacemos. En particular, los medios de comunicación pueden ser un instrumento eficaz para transmitir a la sociedad el progreso alcanzado en el cambio en las relaciones entre las parejas y la sociedad en conjunto. En el área de la violencia doméstica, los programas de comunicación pueden contribuir en la construcción de nuevas normas sociales que reviertan la creencia de que esta forma de violencia es natural y debe ser tolerada por las familias y la sociedad en conjunto.

En estudios y análisis sobre la violencia doméstica se observa con mucha frecuencia que una de las formas de hacer visible este problema es hacerlo trascender del ámbito privado al público, revelando así una realidad que ha pasado desapercibida. La comunicación puede desempeñar un papel en este esfuerzo, contribuyendo además a posicionar la violencia doméstica como problema social que merece la atención de líderes políticos y de aquellos que viven en violencia.

El trabajo en colaboración con los medios de comunicación, sobre todo el uso de programas de género dramático, como las telenovelas, es indispensable. Los medios de comunicación tienen la capacidad de “modelar” normas y conductas específicas entre los miembros de un grupo objetivo, como las mujeres que viven en violencia o los agresores que necesitan aprender a negociar para resolver conflictos con su pareja. Asimismo, la comunicación invita a la acción e informa a mujeres y hombres dónde buscar orientación, dónde relacionarse con grupos de autoayuda o dónde llamar en caso de emergencia. Puede empoderar tanto a hombres como mujeres para revertir la situación crónica de violencia que viven muchas familias.

Para alcanzar estas metas, debemos abrir nuevos espacios de colaboración y establecer lazos más estrechos con los medios de comunicación. Lo que se necesita es coherencia estratégica, solidez de contenidos y continuidad. Eso es lo que las instituciones y organismos especializados en violencia doméstica deben generar en colaboración con los medios de comunicación.

A lo largo de 15 años hemos aprendido el importante papel que los medios de

Las campañas de salud del Centro de Programas de Comunicación de la Universidad Johns Hopkins

A lo largo de 15 años de experiencia con programas de salud reproductiva, prevención del VIH/ SIDA y asuntos de la mujer, el Centro de Programas de Comunicación de la Universidad Johns Hopkins ha aprendido mucho de campañas en los medios de comunicación. En colaboración con medios de comunicación públicos y privados, el Centro ha colaborado en varios programas de América Latina y el Caribe. En Perú durante 1998 se transmitió una miniserie de televisión de diez capítulos, "Tiempo de amar", en horario estelar, a las ocho de la noche. En Bolivia, el programa de opinión y debate "Diálogo al desnudo" terminó su segunda temporada a fines de 1997 y principios de 1998. En México, el Consejo Nacional de Población difundió una cuña, mientras que el Consejo Nacional de la Publicidad patrocinó una iniciativa totalmente del sector privado.

comunicación pueden desempeñar en la promoción y adopción de comportamientos nuevos relacionados con la salud reproductiva en diferentes regiones del mundo, especialmente en América Latina. Estas enseñanzas podrían ser aplicables al tema de la violencia doméstica.

Lecciones aprendidas de programas de comunicación

Lección 1: El cambio de conducta es un proceso lento

El cambio de actitudes y prácticas, y en especial las conductas relacionadas con la esfera de la sexualidad y la planificación familiar, no es un proceso sencillo, de resultados lineales y logros inmediatos. La adopción de nuevas conductas es un proceso lento, caracterizado por un componente racional pero cargado fuertemente de emociones, subjetividades y valores que influyen directamente en las decisiones del individuo. Quienes trabajamos en programas de comunicación palpamos diariamente que el interlocutor de nuestros esfuerzos no cambia necesariamente sus hábitos o conductas de salud porque se lo dice un familiar o un especialista. Por el contrario, la adopción de una nueva práctica, como el uso del condón para protegerse del sida y las enfermedades de transmisión sexual o hacerse regularmente el examen de Papanicolaou, requiere la confluencia de numerosos ingredientes a lo largo del tiempo para que se practique de manera sistemática.

El individuo pasa por una serie de fases antes de adoptar una conducta definitiva. Este proceso de cambio de conducta se da en cinco etapas. La primera es la toma de conocimiento, conciencia o comprensión crítica de la nueva propuesta de salud. El estar expuesto a un mensaje, y más aún, recordarlo y entenderlo, no es un proceso fácil.

Es necesario romper ciertas defensas selectivas del individuo y tocar un problema vivido o una necesidad sentida.

La segunda etapa es la formación de una actitud favorable a la nueva práctica que termina en su aprobación. Esta fase se caracteriza por la búsqueda de la opinión subjetiva de aquellos a quienes respetamos. La intención de adoptar una conducta está mediada por varios factores: actitudes hacia la conducta en cuestión, la presión social o normas originadas en nuestros referentes, y la percepción de la capacidad personal para desempeñar eficazmente el comportamiento en cuestión. Las normas sociales desempeñan un papel especialmente importante. En muchas ocasiones, las actividades de comunicación deben poner un énfasis especial para llegar a aquellos que pueden influir en las actitudes de los individuos de un grupo objetivo.

En la tercera etapa se decide adoptar una nueva conducta, como ir al médico o hacerse un control prenatal. La cuarta es la adopción real de las nuevas prácticas: no solo el haber decidido o tener la intención, sino actuar sobre tal determinación. La última etapa es la reafirmación y consolidación, con la cual reconocemos y valoramos las ventajas de la práctica adoptada y nos convertimos en promotores de su adopción.

Es importante entender dónde se encuentra nuestro grupo objetivo en este proceso, puesto que cada etapa exige acciones de comunicación diferentes. Debemos trazar estrategias de intervención eficaces que respondan a las necesidades de la población objetivo. Por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, un alto porcentaje de mujeres probablemente se encuentre en la primera etapa, de conocimiento, si desconocen la existencia de una legislación que las proteja contra abusos o agresiones por parte de su pareja. Otro grupo de mujeres tal vez sienta que el maltrato físico es un derecho de su pareja o que “las mujeres merecen los golpes que reciben”. Estas actitudes tienden a perpetuar este abuso y bloquean el avance hacia la modificación de sus actitudes o la acción contra el abuso. Un grupo reducido de mujeres tal vez ya conozca sus derechos, rechace el abuso y sienta el apoyo de sus referentes en el rechazo del comportamiento agresivo de su pareja. Este último grupo ha avanzado hacia la etapa del cambio definitivo y está a punto de modificar su situación.

Lección 2: Un programa eficaz de comunicación puede cambiar conductas

Cuando los programas de comunicación integran la teoría con la investigación de audiencias y la evaluación, y en base a este resultado se construyen mensajes/contenido de buena calidad, se logra una estrategia efectiva de comunicación que puede dar inicio a un cambio, acelerar cambios que ya estén en proceso o reforzar cambios que ya hayan ocurrido. La evaluación de programas dirigidos por la Universidad Johns Hopkins ha demostrado que la comunicación en salud reproductiva es el *proceso central* que subyace a los cambios en los niveles de conocimiento acerca de métodos anticonceptivos,

de actitudes hacia la planificación familiar y uso de anticonceptivos, y de normas con respecto al tamaño ideal de la familia, así como en la apertura a nuevas ideas, aspiraciones y hábitos de salud. Igualmente, la evaluación ha demostrado que el proceso de comunicación es uno de los principales vehículos para diseminar nuevos conocimientos y valores, consolidando así nuevas normas sociales. (En la sección siguiente se presentan ejemplos de evaluación.)

Lección 3: Es indispensable comprender a la audiencia para trazar estrategias de comunicación

La intervención en comunicación es eficaz cuando parte de lo que los individuos y sus grupos de referencia piensan, sienten y necesitan. Conocer esta motivación es la piedra angular de una estrategia de comunicación bien concebida. Las actividades de comunicación deben reflejar y entender a plenitud los valores, percepciones, actitudes y conductas del grupo objetivo a fin de orientar a los integrantes del grupo hacia el comportamiento deseado. Eso se logra por medio de estudios de audiencia, con muy diversas técnicas. Definir adecuadamente los perfiles de los diversos grupos asegurará que la acción comunicativa “toque” realmente al sujeto y a su entorno. La investigación debe aspirar a convertirse en un diálogo sistemático con el grupo objetivo.

Lección 4: El uso de multimedios incrementa las posibilidades de cambio

Una de las estrategias más eficaces para transmitir un contenido educativo es el uso de diferentes canales, fuentes de información, géneros y formatos innovadores, como los programas de entretenimiento. El eje fundamental que guía el conjunto de acciones es el objetivo del programa de comunicación o campaña, la unidad conceptual, la repetición y la congruencia del mensaje en sus diversas formas.

La comunicación por los medios masivos debe reforzarse con la comunicación interpersonal o la movilización comunitaria. Cuando la interacción es positiva y eficaz, el cambio de conducta es el resultado de un “efecto sinérgico”: la acción conjunta de los diferentes canales, y no la acción aislada de cada uno de ellos.

Lección 5: Forjar alianzas con los medios de comunicación asegura la cobertura del mensaje

La experiencia de colaboración con los medios masivos ha sido un factor determinante del éxito en diversas producciones, entre ellas grandes éxitos musicales con mensajes sociales, telenovelas, miniseries televisivas, programas de entrevistas y variedades para la televisión, la radio, y noticieros.

Esta colaboración con los medios ha tomado diversas formas: coproducciones con empresas productoras o estaciones televisivas, producciones con el auspicio de empresas con fines publicitarios, producción propia con difusión del producto por televisión, radio o la prensa, producción de cuñas o segmentos para su colocación en otros programas, etc. Estas producciones conjuntas reflejan la riqueza y variedad del sistema de comunicación en cada país.

Para lograr una relación de colaboración con los medios de comunicación, hay varios elementos críticos. Hay que conocer a fondo la forma en que los medios operan en los países, sus necesidades y formatos de operación. El producto de comunicación que se ofrece debe ser posicionado como un instrumento para elevar el rating, lograr un éxito y, sobre todo, convocar grandes audiencias. Se debe aspirar a colocar el producto en las horas de mayor audiencia, por lo cual es necesario preservar la calidad. Hay que negociar desde el punto de vista de un inversionista y, si es posible, contribuir con un fondo económico. Por último, hay que lograr la participación del sector privado para coauspiciar el programa de comunicación. Muchas compañías están interesadas en relacionarse con temas de la juventud y ampliar su posicionamiento en el mercado. Por ejemplo, Fuentes y Fomento Intercontinentales, compañía discográfica privada comercial, proporcionó un apoyo decisivo al proyecto de Tatiana y Johnny, campaña de prevención del embarazo que recurrió a la música. El programa llegó al primer lugar en el índice de audiencia en México y Perú.

Evaluación de programas de salud reproductiva en los medios de comunicación

La comunicación influye en la conducta individual de forma directa e indirecta, según distintas evaluaciones de programas en los medios de comunicación realizadas por el Centro de Programas de Comunicación de la Universidad Johns Hopkins. Las evaluaciones se centraron en programas de salud reproductiva en África, América del Sur y América Central. Hay tres aspectos importantes que se deben destacar: 1) la comunicación tiene un efecto, 2) los procesos de comunicación deben ser sostenidos en el tiempo y 3) la estrategia de comunicación, las características de su intervención y la calidad de sus productos influyen en el impacto.

En Kenya, la evaluación de una campaña realizada en 1994 demostró que la exposición a distintos canales de comunicación (radio, radionovelas, material impreso y charlas de promotores de salud) presentaba una relación positiva con el porcentaje de hombres y mujeres usuarios de métodos modernos de planificación familiar. Cuanto mayor es la exposición a los diferentes canales de comunicación, mayor es el uso de métodos modernos. En Honduras, los resultados fueron similares: cuanto más mensajes se recordaban, mayor era el uso de métodos.

Las evaluaciones de Kenya y Honduras mostraron también que había un ma-

por uso de anticonceptivos con un mayor número de factores asociados a las etapas del proceso de cambio de conducta (definidos como actitudes favorables hacia la planificación familiar, conocimiento de métodos, comunicación con la pareja y amigos, aprobación por la pareja y promoción de la planificación familiar). El porcentaje de usuarios de métodos modernos fue de solo el 2% en los casos en que no había ningún factor asociado a las etapas de cambio de conducta. La cifra se elevó al 60% en los casos en que hubo seis factores presentes.

Por último, la evaluación de los programas de Kenya y Honduras mostró la capacidad de la comunicación para actuar sobre los factores que determinan el cambio de conducta. Mientras que solamente 12% de las personas que no estuvieron expuestas a ningún canal de comunicación en Kenya presentaban entre cuatro y seis factores en el proceso de cambio de conducta, 72% de aquellas expuestas a cuatro canales de comunicación tenían de cuatro a seis factores. En resumen, la experiencia de Kenya y Honduras muestra que la comunicación actúa de forma tanto directa como indirecta en el comportamiento, haciendo que la persona progrese hacia la adopción del comportamiento deseado.

La experiencia de la primera campaña nacional de salud reproductiva en Bolivia en 1994 demostró nuevamente la asociación entre comunicación y cambio de conducta. Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Salud, la campaña llevó a un aumento del 147% en el número de consultas en servicios de salud reproductiva, que pasaron de 11.836 en 1993 a 29.226 en 1994. Cuanto mayor fue la exposición a la campaña, mayor fue el conocimiento de las medidas preventivas en distintas áreas de la salud reproductiva y mayor fue el número de nuevos usuarios de métodos de planificación familiar.

La campaña de promoción de la vasectomía en Brasil lanzada por ProPater en 1989 mostró una vez más que la comunicación influye en el comportamiento individual. La campaña elevó el número de vasectomías en un 81%, y 51% de las personas que fueron por primera vez a los consultorios de ProPater mencionaron la televisión como fuente de referencia.

Con campañas anteriores había aumentado la demanda de vasectomías, pero en menor grado. El aumento de las vasectomías en 1983 se debió tan solo a la presentación de un reportaje en la televisión. En 1986 se llevó a cabo una campaña de comunicación que consistió en avisos pagados en los diarios y revistas de mayor circulación. La intervención de 1989 utilizó un enfoque de multimedios: cuñas de radio y televisión, avisos en diarios y vallas electrónicas en São Paulo. El mayor aumento en el número de vasectomías respondió a esta tercera intervención.

Finalmente, un análisis más complejo muestra que la comunicación tiene el mayor efecto en el uso de métodos de planificación familiar, controlando por variables tales como edad, educación, número de hijos, situación socioeconómica y uso previo de anticonceptivos.

Los próximos desafíos para los programas de prevención de la violencia doméstica

Primer desafío: forjar una estrategia de largo alcance basada en el consenso

Se necesita una estrategia de largo alcance en el campo de la comunicación: un planteamiento estratégico que sepa dónde quiere llegar, en qué plazos, cómo y a quién dirigir sus acciones intermedias y cómo incorporar a diferentes fuerzas de la sociedad y opiniones a lo largo de su travesía. Es difícil pensar que alguna institución por sí sola cuente con los recursos económicos y técnicos para implementar estrategias de comunicación de carácter nacional. Hay que combinar los recursos y la acción de diferentes instituciones.

Esta colaboración puede ser rentable. Aunando recursos para actividades específicas y campañas de interés similar, las instituciones estarán en mejores condiciones de producir más y mejores acciones de comunicación. El trabajo en colaboración evita la duplicación de esfuerzos y acciones; sobre todo, disminuye costos. Un esfuerzo aislado en comunicación puede tener poco impacto o incluso tener un efecto negativo. Las intervenciones de comunicación débilmente coordinadas desgastan la efectividad de cualquier programa nacional.

Una gran experiencia que merece ser citada es la del Programa Nacional de Salud Reproductiva de Bolivia. Hace menos de siete años, las instituciones y acciones de planificación familiar no tenían coordinación alguna, se carecía de un plan estratégico y los servicios tenían muy poca visibilidad para evitar el enfrentamiento con los oponentes. Hoy en día se cuenta con un programa nacional de salud reproductiva organizado en diferentes comités. El más fuerte es el de Información, Educación y Comunicación (IEC), que congrega a más de 40 organizaciones públicas y privadas bajo el liderazgo del Ministerio de Salud. Hasta la fecha tienen en su haber por lo menos tres campañas en el aire con un impacto demostrable. La coalición de fuerzas entre el sector público y organizaciones no gubernamentales ha llevado a la implantación de uno de los programas más innovadores en América Latina y ha logrado incluso que la salud reproductiva esté en la plataforma de los partidos políticos, que en las últimas elecciones presidenciales hicieron públicos sus planteamientos sobre salud reproductiva en la televisión y la radio.

Los esfuerzos para erradicar la violencia doméstica pueden inspirarse en estos caminos recorridos. Se necesitan estrategias para presionar a parlamentarios, políticos y formadores de opinión, a fin de posicionar la violencia doméstica como problema social que precisa ser resuelto y requiere recursos, programas y cambios en la conciencia y la conducta de la población.

Hay una gran ventaja en los programas de prevención de violencia doméstica:

el consenso que despiertan entre diferentes grupos. A diferencia de la planificación familiar, por ejemplo, no hay ninguna controversia en torno a la violencia doméstica. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, la violencia doméstica fue el tema que menos debate ocasionó. Esto de por sí representa un gran paso para forjar un programa de comunicación a largo plazo. Sin embargo, los obstáculos a sortear son tal vez de índole diferente. La tarea será igualmente ardua por los factores socioculturales, las relaciones de género y poder, y las conductas individuales que subyacen a la existencia de este fenómeno que no respeta clases sociales, etnias ni educación.

Segundo desafío: avanzar en la investigación para establecer indicadores de cambio

Una tarea impostergable es obtener información sobre los diversos perfiles de mujeres y hombres como resultado de su ubicación en las etapas del proceso de cambio de conducta. ¿Qué hace diferentes o similares a las mujeres en las distintas etapas? ¿Qué factores inciden en el proceso de cambio de conducta? ¿Cómo opera la norma social en la dinámica familiar? ¿Cómo dismantelar una actitud que tolera la violencia familiar? ¿Qué podemos aprender de las mujeres que cruzan la barrera y denuncian a su marido con el ánimo de cambiar su vida? ¿Pueden ser modelos de conducta para aquellas que padecen diariamente en silencio? ¿Quiénes son los hombres que se atreven a buscar orientación?

Necesitamos conocer el contexto sociocultural que origina y sostiene la violencia doméstica del hombre hacia la mujer. Igualmente necesitamos conocer los mitos y las normas subjetivas que alimentan la violencia doméstica y determinar cuáles de éstos son los que gravitan en el origen y el ejercicio de la violencia. En resumen, debemos identificar los indicadores en el comportamiento individual y grupal y en el entorno inmediato para planear intervenciones y programas efectivos y evaluar su progreso e impacto.

Tercer desafío: dirigir intervenciones a audiencias específicas

Uno de los principios fundamentales para la creación de programas de comunicación es la segmentación de la audiencia objetivo, que ayuda a orientar intervenciones específicas a cada segmento. En el área de la violencia doméstica, es importante señalar que no todas las víctimas de violencia doméstica y no todos los agresores pertenecen a grupos similares. Por lo tanto, no basta con dirigirse a los hombres agresivos como grupo genérico, sino que el objetivo debería ser un perfil muy específico de agresores que necesiten aprender a negociar para resolver conflictos con su pareja.

Esta propuesta combina la ciencia con el arte y demuestra que es posible cambiar conductas y normas sociales, incluso en contextos donde pareciera imposible de lograr. El reto está en que la relación con los medios de comunicación debe ser recreada y ampliada constantemente. La labor de diferentes organismos públicos, ONG y activistas en el campo de la violencia doméstica consistirá en participar, con los medios de comunicación, en la construcción de una nueva aproximación hacia la violencia doméstica que la cuestione, busque erradicarla y, sobre todo, la prevenga.

Página en blanco a propósito

La televisión como medio para reducir la violencia

Jacquin Strouss de Samper

¿Se puede usar la televisión para promover la paz? Esta pregunta despierta mucho interés en todo el mundo, y especialmente en Colombia, que se enfrenta a una ola de violencia desatada por el narcotráfico y otras formas de delincuencia y terrorismo. Existe una clara necesidad de realizar estudios que nos ayuden a comprender el papel y la responsabilidad de aquellos que generan y perpetúan la violencia en la sociedad, y buscar formas de promover la paz.

En este capítulo se describe un estudio realizado en Colombia sobre el problema de la violencia intrafamiliar, en el cual se procura determinar su relación con los medios de comunicación. El estudio se centra en la televisión por el papel tan importante que tiene este medio en la vida diaria de la gente.

La televisión tiene una ventaja sobre otras formas de expresión por su estrecha relación con el televidente y la sociedad. Su enorme poder como transmisora de normas, valores y patrones de conducta la convierte en agente socializador, en un nivel similar al de los padres y la escuela (Yussen y Santrock 1978). Este papel privilegiado se fundamenta por un lado en la atracción que ejerce sobre el televidente gracias a la combinación de sonido e imagen y a su capacidad para simular la vida real o crear situaciones fantásticas, y por otro, en el porcentaje tan alto del tiempo libre que las personas le dedican, llegando a modificar muchos de sus hábitos diarios en función de ella (Lievert, Sprafkin, y Davidson 1982).

La violencia en televisión se constituye en problema en la medida en que tenga efectos nocivos en el comportamiento, las actitudes y la formación de valores y normas del televidente. El riesgo de perjuicio es especialmente grande en América Latina, donde se tiende a creer a los medios de comunicación y a desconfiar de las instituciones, convirtiendo a los primeros en fuertes formadores de opinión. En Europa y Estados Unidos, en cambio, los televidentes confían más en la policía, la justicia y las fuerzas armadas, y ven con más escepticismo a los medios de comunicación.

En América Latina todos los gobiernos han hecho campañas institucionales para prevenir la violencia intrafamiliar. Sin embargo, no resulta claro si este esfuerzo

compensa el impacto de la televisión. Fue esta inquietud lo que motivó el estudio de la televisión como formadora de valores y conductas en Colombia.

El proyecto de investigación

El propósito del proyecto de investigación fue sondear la actitud de los televidentes frente a los mensajes a los cuales están expuestos cotidianamente y ayudar a los lectores e investigadores a comprender el impacto de la televisión. ¿Somos acaso observadores pasivos frente al contenido de la televisión? ¿Conocemos las implicaciones de la televisión en nuestro comportamiento, nuestras actitudes y pensamientos? ¿Podríamos, por medio de la televisión, formar una conciencia para construir la paz?

El estudio, realizado por el Centro Nacional de Consultoría en septiembre de 1997, se centró en el desempeño percibido de la televisión frente al problema de la violencia intrafamiliar. El estudio se dividió en tres partes. Primero se preparó un registro de los actos violentos que presentó la televisión colombiana en las dos principales cadenas durante la semana del 7 al 14 de septiembre de 1997. Después se hizo una encuesta de 700 personas sobre una muestra aleatoria de padres, madres e hijos¹, distribuida en forma proporcional a la población de las grandes ciudades, ciudades intermedias, ciudades pequeñas y áreas rurales². Por último, se formaron tres grupos focales para examinar más a fondo los resultados de la encuesta.

Primera parte: registro de actos violentos

En la primera parte de la investigación se llevó a cabo un conteo de escenas violentas en la programación que se transmite en las dos cadenas principales de la televisión colombiana de lunes a viernes entre las 10:00 y las 22:00 horas (cuadro 15.1).

Las escenas violentas detectadas por los observadores fueron agrupadas en dos categorías: agresiones físicas y agresiones psicológicas. Las agresiones físicas abarcan golpes, asesinatos, abuso sexual, privación de la libertad, disturbios y escenas de guerra. Las agresiones psicológicas comprenden tortura psicológica y emocional, chantaje emocional, agresión verbal y mentira.

A fin de tabular los resultados, se catalogaron los programas según su finalidad y modalidad, sobre la base de la clasificación de la programación de televisión de la Comisión Nacional de Televisión de Colombia³. Se agruparon los programas con similitudes, como documentales, noticieros, novelas, dramatizados, variedades, concursos, musicales, magazines, deportivos y recreativos. Este ejercicio permitió cuantificar las escenas de violencia y proyectar la cantidad de escenas de violencia a las cuales están expuestos los televidentes por día, por semana, por mes y por año.

Las telenovelas contenían la mayor cantidad de escenas de violencia: 315 por

Cuadro 15.1 Número de escenas de violencia física y psicológica en televisión^a

Tipo de programa	Horas por día	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Total	
		Física	Psicol.	Física	Psicol.	Física	Psicol.	Física	Psicol.	Física	Psicol.	Física	Psicol.
Telenovelas	6,0	59	91	155	290	29	126	107	250	51	416	401	1173
Recreativos ^b	2,5	119	91	69	44	63	60	175	43	99	118	525	356
Dramatizados ^c	2,5	11	54	34	35	23	10	43	69	29	129	140	277
Noticieros	3,0	47	12	79	34	26	14	108	52	18	19	278	131
Total	14,0	236	248	337	403	141	210	433	414	197	682	1344	1957

^a Datos sobre las escenas violentas presentadas en las dos cadenas principales de televisión de Colombia del 7 al 14 de septiembre de 1997.

^b Programas de variedades, dibujos animados, etc.

^c Dramatización de experiencias de la vida real.

día, en promedio. Los programas recreativos, incluidos los dibujos animados y cuentos infantiles, contenían aproximadamente la mitad de la cantidad de escenas de violencia: 176 por día. Les seguían los noticieros, con 83 escenas violentas por día.

Todos los días de la semana se observa un mayor número de escenas de violencia psicológica que de violencia física. El día que presenta mayor cantidad de escenas violentas es el viernes (879), seguido por el jueves (847). Se difunde por televisión un promedio de 27 agresiones por hora, aunque hay programas sin violencia y de gran audiencia, como los musicales y los deportivos.

Telenovelas

Las telenovelas tienen un impacto especialmente importante. Además de ser los programas que más escenas de violencia contienen, son los más difundidos. Asimismo, la violencia de los personajes de las telenovelas es más sutil y más cercana, casi hogareña, y por eso mismo penetra más fácilmente en la conciencia del televidente. Es importante resaltar los siguientes datos acerca de las telenovelas. La principal audiencia son las amas de casa, que desean romper la monotonía de lo cotidiano con dramas humanos. Se crea una especie de adicción o dependencia hacia la telenovela. Si la historia interesa, se siguen todos los capítulos. Los conflictos y enredos de la trama mantienen el interés y el suspenso, conservando así la audiencia. Los personajes, con los que se identifica la audiencia, se convierten en modelos de comportamiento que se tiende a imitar en situaciones reales similares, reforzando así estereotipos de estratos sociales e ideas tales como que la salud y el dinero se logran de un día para otro. Por último, la excitación producida por el melodrama o la identificación con los personajes facilita el cambio de conducta y refuerza ciertos valores humanos y sociales.

Programas recreativos

Más de 80% de los programas recreativos y los dibujos animados que se difunden en Colombia son producidos en el extranjero. Con el pretexto de "entretener" a los niños se ha generado una de las industrias más lucrativas de la actualidad: los dibujos animados. Se fabrican para que los niños consuman una ideología, un modo de ser, una manera de relacionarse con la naturaleza y con los demás. El tipo de familia que nos presentan en los dibujos animados es estereotipado. Los padres no son verdaderamente padres y a veces tienen que hacer el papel de tontos. La madre generalmente está ausente. La realidad familiar de los dibujos animados es destructora de una relación normal entre padres e hijos. No se da importancia a los verdaderos valores humanos. Lo que realmente importa es la fuerza física, el poder del dinero, la astucia, la eficacia de las armas y las victorias, por más inverosímiles que parezcan.

En varios estudios sobre el comportamiento se ha puesto de manifiesto que los niños imitan la violencia observada, aunque se puede inhibir el comportamiento violento si se muestran las consecuencias de dicha violencia, especialmente si los personajes que los niños tienen como modelo son quienes sufren las consecuencias. Desafortunadamente, la desaprobación o las consecuencias negativas de la violencia casi nunca aparecen en la pantalla.

Segunda parte: la encuesta y los grupos focales

La mayoría de los encuestados creen que la violencia intrafamiliar es frecuente, y han observado u oído la violencia intrafamiliar entre vecinos. Otros resultados de la encuesta están tabulados en el cuadro 13.2.

Las respuestas a la encuesta pueden resumirse como sigue. Los encuestados han observado incidentes de violencia entre cónyuges con más frecuencia que de padres a hijos (2,3). Un 75% considera que la televisión influye en la violencia intrafamiliar (4). Los encuestados creen que en la televisión se exagera el papel de la violencia en general (5).

Por medio de los grupos focales se confirmó la percepción de que la televisión estimula la violencia intrafamiliar, aunque los encuestados consideran que en su familia no incrementa el comportamiento violento. Vale la pena subrayar que, en las investigaciones sobre el uso de drogas, las familias que no habían tenido este problema consideraban que estaban preparadas para enfrentarlo, en tanto que las que lo tenían se hallaban desconcertadas. De manera similar, la percepción de que la violencia en la televisión afecta al comportamiento de otros pero no el propio parece estar entre los mecanismos de defensa que niegan que a la persona le puedan ocurrir las mismas desgracias que a otros.

Para todos los encuestados es muy importante la familia y en especial la armonía familiar. No sólo se rechaza la presencia excesiva de violencia, sino que se pide un papel proactivo de la televisión que promueva la convivencia. Hay, pues, para los medios de comunicación, y especialmente para la televisión, una oportunidad de ampliar el espacio para el hogar y la promoción de la armonía familiar, algo que la gente necesita y agradece (6). En este sentido, se presentó a los encuestados una lista de comportamientos para que señalaran los tres que consideraban como los más importantes para la armonía familiar (7). El resultado es interesante, aunque no inesperado: el pilar de la armonía familiar es la armonía de la pareja. En vista de la cantidad de personas que quieren que la televisión mejore su contribución a la armonía familiar, resulta prioritario para la televisión enseñar la comunicación de la pareja y de los hijos con los padres, especialmente con el papá.

Los encuestados clasificaron el respeto, la comprensión y el afecto como los

Cuadro 15.2 Preguntas y respuestas seleccionadas de la encuesta*(Porcentaje de encuestados que dieron cada respuesta)*

Pregunta 1. De lo que ha oído y lo que sabe, ¿usted diría que la violencia dentro de una familia es un problema muy frecuente en el país, más bien frecuente, poco frecuente o que no es frecuente?

Muy frecuente 52; más bien frecuente 33; poco frecuente 12; no es frecuente 3.

Pregunta 2. Entre familiares, amigos o vecinos, ¿conoce usted casos de violencia entre los cónyuges?

No 57; sí 43.

Pregunta 3. Entre familiares, amigos o vecinos, ¿conoce usted casos de violencia de los padres hacia los hijos?

No 63; sí 37.

Pregunta 4. ¿Usted considera que la televisión estimula la violencia familiar?

No 25; sí 75.

Pregunta 5. Comparando la violencia que se da en su barrio con la que se ve en la televisión, ¿usted diría que se ve más violencia en la televisión o en el barrio?

En la televisión 84; en el barrio 8; es igual 9.

Pregunta 6. ¿Cree usted que la televisión hace todo lo que debiera para ayudar a las familias a llevar una vida armónica?

No 82; sí 16; no sabe/no respondió 2.

Pregunta 7. De los siguientes, ¿cuáles son los tres elementos que usted considera más importantes para la armonía familiar?

La comunicación en la pareja 59; la comunicación de los padres hacia los hijos 38; ayudarse mutuamente 32; hablar sobre los problemas que surgen 31; la comunicación de los hijos hacia el padre 30; la comunicación de los hijos hacia la madre 26; la comunicación entre hermanos 26; el respeto del espacio y las pertenencias de los demás 22; vivir experiencias que fomenten la unidad familiar 15; el elogio de los miembros de la familia cuando hacen algo positivo 9; la motivación de los miembros de la familia para que aprovechen su potencial 7.

Pregunta 8. ¿Qué sentimientos considera más importantes para la armonía familiar?

El respeto 72; la comprensión 33; el afecto 33; el perdón 29; la amistad 25; la confianza 25; la paz 25; la felicidad 23; la tolerancia 17; la fe 17; la aceptación 4; la compasión 2; la intuición 2.

Pregunta 9. De los siguientes, ¿cuáles son los tres sentimientos negativos que usted considera más destructivos para la familia?

La desconfianza 46; el egoísmo 45; la envidia 44; la rabia 43; el odio 39; los celos 29; la avaricia 25; la crueldad 14; la culpa 10.

Pregunta 10. De las siguientes instituciones o espacios, ¿cuáles considera usted que fomentan la armonía familiar, en vez de la violencia? [Se presenta el porcentaje que cree que la institución tiene un efecto positivo menos el porcentaje que cree que la institución tiene un efecto negativo.]

El ambiente en la casa +66; el ambiente escolar +46; los profesores del colegio +39; la radio +16; los periódicos -14; las noticias de televisión -24; el cine -32; la televisión -42; el ambiente de la calle -46.

sentimientos más importantes para la armonía familiar (8). Sin embargo, el público cree que el desempeño de la televisión es negativo en cuanto a la enseñanza del respeto, el perdón, la confianza, la paz, la tolerancia, la aceptación y la compasión. Si se quisiera impulsar la educación afectiva por medio de la televisión, las prioridades percibidas por el público serían el respeto, el perdón y la confianza.

Por su capacidad de destrucción de la familia, los encuestados ordenaron así los sentimientos negativos: desconfianza, egoísmo, envidia, rabia, odio, celos, avaricia, crueldad y sentimiento de culpa (9). En opinión de la gente, la televisión fomenta estos sentimientos, más que frenarlos, especialmente la crueldad, el odio, la avaricia, los celos y el egoísmo.

Mientras que la familia y la escuela tienen un desempeño positivo (más personas consideran que estimulan la armonía, y menos personas, que estimulan la violencia), en el caso de la televisión más personas consideran que estimula la violencia (10).

La mayoría de los encuestados consideran que hay más violencia en la televisión que en su propia vida (5) y que ni el Estado ni las empresas y los empresarios de televisión están haciendo lo que pueden para que la televisión contribuya a la armonía familiar. El mensaje es claro: el público desea que la televisión enseñe la armonía, y no el odio.

Hay algunas diferencias de perspectiva en los datos. Los estratos altos son más críticos del gobierno y de las empresas de televisión que los estratos bajos. Los estratos altos son menos críticos de los productores de televisión que el resto de la población.

Aunque las respuestas a la mayoría de las preguntas de la encuesta fueron homogéneas en ciudades de distintos tamaños, es en las ciudades intermedias donde menos se conoce de casos de violencia de los padres hacia los hijos y entre los cónyuges. Deducimos, entonces, que la ciudad intermedia presenta un ocultamiento de la realidad o que su trama social es más fuerte.

Aunque los encuestados en todas las ciudades consideran que se ve mayor violencia en la televisión que en la vida real, el porcentaje es menor en las ciudades grandes. Una posible explicación de esta diferencia es que la trama social de las ciudades pequeñas permite un mayor control sobre el comportamiento de los habitantes, mientras que los habitantes de las ciudades grandes manifiestan una gran indiferencia debido al rompimiento de la trama social.

Conclusiones

Para la población es de superlativa importancia la familia y la armonía dentro de ella, y está convencida de que esa armonía se puede construir con la buena comunicación. La mujer tiene un papel decisivo en el mantenimiento de la armonía familiar.

La gente atribuye a la televisión una gran capacidad pedagógica y quiere verla

orientada a ayudarlo a forjar su progreso y el de su familia. Las familias comprenden claramente la importancia del respeto, la confianza, el afecto, el perdón y la tolerancia, y reconocen que fallan especialmente en las dos últimas cualidades. En muchas familias, el exceso de televisión es una muestra de carencia en las relaciones interpersonales, de ausencia de sentido crítico en los padres y de falta de alternativas y espacios para la recreación, la formación y la socialización.

A la televisión le piden que enseñe respeto, el sentimiento que más aprecian, y tolerancia, en el que más fallan. Quieren que no estimule la desconfianza, la crueldad y el odio. La gente ve en la televisión, respecto de la pedagogía de los sentimientos, un doble mensaje según el cual se dice enseñar unos pero se promueven otros.

Los programadores y productores tienen su cuota de responsabilidad para convertir la televisión en un instrumento que, por medio de la recreación, enseñe y promueva valores. Para la población, ni los productores y las empresas de televisión ni el Estado están haciendo lo que deben para dar a la televisión el contenido que se espera en cuanto a la promoción de la armonía familiar.

Propuestas

Las estadísticas de Colombia señalan la importancia de generar un cambio de actitud frente al uso de la televisión en nuestra vida cotidiana. La escuela está llamada a realizar esa labor con los padres y con los niños. Los padres deben ser formados en la responsabilidad de la crianza de los hijos y el análisis crítico del contenido de los programas de televisión. Los niños necesitan aprender a ver la televisión como un aliado de la escuela y de su propia formación. Hay que enseñarles qué es la televisión, cómo se hace y para qué sirve. La construcción del sentido crítico en los jóvenes televidentes es fundamental e implica impartirles información sobre los avances tecnológicos, el lenguaje y el discurso de la televisión.

Ahondar el abismo entre la escuela y la televisión no debe ser bandera de los educadores: se trata de que la escuela brinde herramientas para digerir y aprovechar la televisión en favor de la educación integral y pacífica del niño. Este objetivo implica una conciencia que trascienda los intereses económicos de las emisoras y sepa ver las ganancias que genera un pueblo sin violencia.

El Estado, al pronunciarse sobre el uso y el manejo de la televisión, deberá observar que la legislación contemple no sólo la prohibición, sino también la organización de todos los aspectos de la televisión como medio de comunicación, educación, socialización y recreación. La televisión debe convertirse en un medio de apoyo firme para la paz, pues su participación ayudará a formar un país donde primen la tolerancia, el respeto y la armonía. Sensibilizarnos sobre la influencia de la televisión en el comportamiento violento de nuestras familias puede darnos salud mental y paz en el próximo siglo.

Notas

¹ Los padres y las madres eran mayores de 24 años; los niños tenían entre 12 y 24 años.

² Las ciudades grandes tienen más de 500.000 habitantes; las intermedias, entre 50.000 y 500.000; las pequeñas, menos de 50.000.

³ Artículos 15 y 16 de la Comisión Nacional de Televisión, 1987.

Referencias

Libert, R., J. Sprafkin, y D. Davidson 1982. *The Early Window: Effects of Television on Children and Youth*. New York; Pergamon Press.

Yussen, S.R., y M.W. Santrock. 1978. *Child Development*. Dubuque, Iowa: W.C. Brown and Company.

Lista de autores

María Loreto Biehl es consultora de la Unidad de la Mujer en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Originaria de Chile, tiene un título en psicología de la Universidad de Costa Rica y ha trabajado en el campo de la violencia doméstica desde 1996, antes de lo cual coordinaba programas de prevención y educación sobre violencia, prevención del consumo de drogas y el rendimiento escolar.

Mayra Buvinić es jefa de la División de Desarrollo Social y la Unidad de la Mujer en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo, y asesora especial del BID sobre la violencia. Antes fue presidenta y cofundadora del Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer, de Washington, DC (1977-1996), e investigadora de la Oficina de Ciencias Internacionales de la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia (1976-1996). Mayra Buvinić es autora y compiladora de numerosas publicaciones sobre la mujer y el desarrollo e hizo un doctorado en psicología social en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde cursó estudios y publicó monografías sobre el tema de la agresión.

Francisco Cervantes Islas, psicólogo, es director del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias en la Ciudad de México. Integra también el Colectivo para luchar contra la violencia hacia la mujer y el equipo coordinador del proyecto de promotores de la salud reproductiva. Tiene un título en psicología de la Universidad Nacional de México y otro en estudios de la mujer de la UAM-Xochimilco.

Pilar Gavilano Llosa, psicoterapeuta que se dedica a la práctica privada en Lima, es profesora de psicología y psicoanálisis de la Escuela de Estudios Avanzados de Filosofía, Educación y Arte "Antonio Ruiz de Montoya", de Lima.

Efraín Gonzales de Olarte, economista peruano, es profesor de economía en la Universidad Católica de Perú. Se doctoró en economía en la Universidad de París I (Pantheon-Sorbonne). Es consultor sobre desarrollo económico y autor de 11 libros y numerosos artículos sobre problemas del desarrollo de América Latina y Perú.

Marcela Granados Shiroma es la responsable del programa de investigaciones sobre salud reproductiva y violencia contra la mujer en Nuevo León, México. En coordinación con varias instituciones, ha creado cursos innovadores y un programa de posgrado en violencia doméstica. Asimismo, colaboró en la formación del Equipo Interinstitucional

contra la Violencia Familiar, integrado por instituciones que trabajan en los sectores de la salud, la asistencia social y la enseñanza superior.

Enrique V. Iglesias es el tercer presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue reelegido para un tercer mandato de cinco años que comenzó en abril de 1998. Fue Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988 y presidió la conferencia en la cual se inició la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales en Punta del Este, Uruguay, en 1986. Es autor de numerosos libros y recibió varios premios internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias, la Gran Cruz de la Orden de Rio Branco (Brasil), la Gran Cruz Placa de Plata (Costa Rica), la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa y la Gran Cruz de Isabel la Católica (España). Ha recibido las máximas condecoraciones nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Peter Jaffe es director del Consultorio del Tribunal de Familia de London, centro de salud mental infantil de London, Ontario, que se especializa en los problemas que llevan a niños y a sus familias al sistema judicial. Forma parte del cuerpo de profesores clínicos adjuntos de los departamentos de psicología y psiquiatría de la Universidad del Oeste de Ontario, Canadá. La mayor parte de su trabajo clínico y de sus investigaciones se centra en niños y adolescentes que llegan a la policía o a los tribunales como delincuentes, como víctimas de violencia familiar o a raíz de conflictos en relación con su custodia.

Fue presidente fundador del Comité Coordinador de London para poner fin al maltrato de la mujer, cofundador y presidente del Consultorio para Mujeres Maltratadas y miembro del Panel Canadiense sobre la Violencia contra la Mujer. En 1995 fue nombrado presidente de la Junta Directiva del Centro de Investigaciones sobre la Violencia contra la Mujer y los Niños.

Soledad Larraín es profesora de psicología en la Universidad de Chile y coordinadora del programa de estudios de posgrado sobre violencia familiar. Recientemente publicó "Violencia Familiar y la transmisión de pautas de comportamiento social" (versión mimeografiada, IDB, 1996) y *Relaciones familiares y maltrato infantil* (en imprenta). Ha realizado extensos estudios sobre la violencia contra la mujer en el hogar (UNESCO 1995) y sobre la prevención del maltrato de los niños y el abuso sexual (Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Justicia 1997). Actualmente es la investigadora principal de un programa de rehabilitación patrocinado por Fondecyt para contrarrestar el maltrato de los niños.

Rafael Lozano Ascencio es coordinador de análisis de las necesidades en materia de salud en el Centro de Economía y Salud de la Fundación Mexicana para la Salud. El Dr. Lozano, cirujano graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de México, fue jefe del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de México. De 1987 a 1996 fue profesor e investigador principal del Instituto Nacional de Salud Pública de México.

El Dr. Lozano fue investigador del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard de 1994 a 1996. Fue asesor en estudios sobre la reforma del sector salud en México, Colombia, Uruguay, Chile y Ecuador. Sus principales campos de investigación son la evaluación estadística de las necesidades en materia de salud y el análisis de la desigualdad y la salud.

Margarette May Macauley, abogada jamaíquina, dirige la Asociación de Organizaciones de mujeres de Jamaica (AWOJA), es copresidenta del Comité de Derecho Familiar del Colegio de Abogados de Jamaica y asesora por Jamaica de la Comisión de las Naciones Unidas de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Fue coautora del proyecto de ley de Jamaica sobre violencia doméstica. Ha dado varias conferencias y publicado artículos sobre ética jurídica y acoso sexual, entre otros temas.

Firme defensora de los derechos de la mujer, ha llevado casos ante varias cortes supremas, entre ellas la de los Estados Asociados de las Indias Occidentales. Ha asistido a numerosos congresos internacionales en calidad de delegada del gobierno de Jamaica y es columnista del periódico *Sunday Herald* de Jamaica.

Andrew R. Morrison es especialista en desarrollo social en la División de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabaja en los campos de la violencia doméstica y social y la participación de la mujer en la fuerza laboral. Antes de integrarse al BID, era profesor adjunto de economía y estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane y la Universidad de Nuevo México. Ha escrito numerosos artículos periodísticos sobre mercados laborales, la migración y la urbanización en América Latina. Ha recibido apoyo para sus investigaciones de la Fundación Nacional de Ciencias, la Fundación Tinker y el programa de Becas Fulbright. Se doctoró en economía en la Universidad Vanderbilt en 1988.

María Beatriz Orlando es profesora de economía en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Sus principales campos de investigación son el desarrollo económico y economía del trabajo. En este último campo, las áreas que le interesan especialmente son la participación de la mujer en el mercado laboral y la oferta de mano de obra doméstica en América Latina. Se doctoró en economía en la Universidad de Tulane en

1998. En 1992 recibió una beca nacional en economía patrocinada por el gobierno de Venezuela.

Patricia Poppe es jefa de la División de América Latina en el Centro de Programas de Comunicación de la Universidad Johns Hopkins. Tiene más de 15 años de experiencia en la planificación y conducción de campañas de salud reproductiva en América Latina. Oriunda de Perú, ha trabajado extensamente en Bolivia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, India y Corea del Sur. Ha sido consultora de varias organizaciones internacionales, entre ellas la UNESCO, el FNUAP y la FAO.

Charo Quesada es oficial de comunicaciones para programas especiales en la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo. Cursó la licenciatura en historia moderna en la Universidad de Valencia y estudios de periodismo en la Universidad de Madrid. De 1994 a 1997 fue productora para América Latina en la oficina de Washington de Reuters TV. De 1988 a 1993 fue corresponsal en Washington de *Diario 16* y *Cambio 16* (Madrid).

Martha Mesquita da Rocha, abogada brasileña, es coordinadora de la Delegación Especial para Asuntos de la Mujer y la División de Protección de Adolescentes y Niños del estado de São Paulo. Formó parte del Consejo Estatal de Derechos Humanos y es representante de la Policía Civil en la Comisión Permanente para la Aplicación de las Leyes Dirigidas a los Medios de Comunicación y la Violencia. Ha desempeñado un papel decisivo en la planificación de la política de seguridad de Rio de Janeiro. En la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer participó en la elaboración de una plataforma para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Brasil con respecto a los derechos de la mujer.

Jacquin Strouss de Samper, ex primera dama de Colombia, es economista y ha trabajado 17 años en el sector de las finanzas. Tiene amplia experiencia en la planificación, la ejecución y el seguimiento de proyectos relacionados con asuntos culturales y de la niñez. En calidad de presidenta de la junta directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha promovido programas relacionados con la mujer, los niños y la familia para mejorar las prestaciones y los servicios estatales. La Sra. Samper ha organizado seminarios para tratar problemas que preocupan a la sociedad colombiana, en particular la reconstrucción de los valores, la integración familiar y el respeto del prójimo.

Elaine Schieck es coordinadora de Servicios Clínicos e Investigaciones del Consultorio del Tribunal de Familia de London, centro de salud mental infantil de London, Ontario. Brinda servicios de mediación para padres separados en lo que atañe a la custodia de

los hijos, y se encarga de la evaluación de niños y familias que comparecen ante el tribunal en actuaciones relacionadas con el bienestar de los niños y en casos de delinquentes juveniles. Ha facilitado servicios de asesoramiento grupal e individual para mujeres maltratadas y sus hijos. Entre otras funciones, integra el Comité Coordinador de London para Poner Fin al Maltrato de la Mujer y participa activamente en el Proyecto de Custodia y Acceso de London.

Michael Shifter es miembro de alto nivel y director de programas del Diálogo Interamericano, donde se dedica a los temas del buen gobierno democrático y los derechos humanos. Desde 1993 enseña política latinoamericana en la Escuela de Servicio Diplomático de la Universidad de Georgetown y publica artículos sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, así como sobre asuntos hemisféricos.

Fue director del programa de América Latina y el Caribe en la Fundación Nacional para la Democracia. Con anterioridad también fue director del programa de gobernabilidad y derechos humanos de la Fundación Ford en la región andina y el Cono Sur, primero en Lima y después en Santiago. Se licenció en sociología en la Universidad de Harvard, donde enseñó desarrollo y política de América Latina durante cuatro años.

Elena M. Suárez es jefa de la Sección de Programas Especiales (SPE) de la Oficina de Relaciones Externas del Banco Interamericano de Desarrollo. Por medio de un programa integrado que abarca proyectos de comunicación, programas de promoción y divulgación, producción de programas de televisión, mercadotecnia social y eventos especiales, la Sección promueve los nuevos campos prioritarios del Banco y obtiene apoyo para los programas y las directrices del BID. Fue directora de política comercial y servicios financieros de la organización sin fines de lucro Caribbean/Latin American Action. Se graduó de Vassar College en 1983 y se licenció en desarrollo económico en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia como parte de un programa combinado con la Escuela Kennedy de Estudios Gubernamentales de la Universidad de Harvard. Recibió capacitación sobre comercio internacional e inversiones en el GATT (Ginebra), la ONUDI (Nueva York) y JICA (Tokio).

Marlies Suderman, psicóloga clínica, es investigadora en el Consejo Escolar del Distrito del Valle del Thames en London, Ontario. De 1987 a 1998 trabajó para el Consultorio del Tribunal de Familia de London, donde fue directora de investigaciones y servicios de prevención de la violencia. También es psicóloga clínica consultora de Harmony House, centro para mujeres delinquentes jóvenes, y enseña psicología clínica en la Universidad del Oeste de Ontario. Se doctoró en psicología en Queen's University, Kingston.

Enrique Valdez es director del Programa de Saneamiento Familiar en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Es jefe del Departamento de Diagnóstico Físico y profesor del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, y encabeza la división que trata a víctimas de violencia. Es miembro fundador del Instituto de Medicina Forense Roberto Masferrer y miembro del Consejo Superior de Salud Pública. Organizó un seminario-taller para formular propuestas sobre la reforma de la legislación relativa a asuntos familiares.

Zarela Villanueva, jueza y abogada costarricense, es magistrada del Segundo Tribunal de la Corte Suprema desde 1989. Durante toda su carrera ha participado en diversas organizaciones que procuran mejorar la administración de la justicia y las condiciones de trabajo de sus colegas. En 1991 colaboró en la fundación de la Asociación de Juezas de Costa Rica, que presidió durante cinco años consecutivos. Fue secretaria de la Asociación Internacional de Juezas y actualmente es la vicepresidenta. Recientemente publicó artículos sobre la posición de las administradoras judiciales (1991) y los principios de la igualdad y la jurisprudencia constitucional (1996).

América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, con un índice de homicidios que duplica la media mundial. La violencia doméstica también se ha propagado y está estrechamente vinculada a la violencia social: los niños que experimentan o son testigos de abuso crónico tienen mayores probabilidades de comportarse violentamente de adultos. En *El costo del silencio*, especialistas internacionales ofrecen sus conocimientos y estrategias sobre esta preocupante materia de política pública.

“La violencia doméstica no sólo constituye una agresión contra un ciudadano, sino que socava la democracia misma. La democracia prospera cuando ni la ley, ni las tradiciones, ni las intimidaciones, ni la simple ignorancia, ni el miedo al dolor físico ocasionado por alguien en el hogar impide que las mujeres hablen públicamente o en privado con toda sinceridad sobre su realidad. Este libro, de lectura impostergable, pone en evidencia que la violencia doméstica es un obstáculo fundamental para el desarrollo económico y democrático en las Américas.”

Hillary Rodham Clinton, Primera Dama de Estados Unidos

“No podemos considerarnos ‘desarrollados’ mientras siga existiendo violencia doméstica en América Latina, un flagelo que, aunque oculto, está ampliamente diseminado en muchos de nuestros países. La violencia doméstica quiebra la dignidad de la familia y transgrede derechos humanos fundamentales, sobre todo los de las mujeres y los niños. Los resultados de los estudios que se presentan en este libro ilustran las características y causas del fenómeno, las diversas maneras de enfrentarlo y el papel de los medios de comunicación.”

Patricio Aylwin, Ex-presidente de Chile



Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

www.iadb.org

ISBN: 1-886938-55-5